



CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL

BIBLIOTECA CORTE	Fichado analítico
Nº. 1	2861
USUO	J. 95
FICHA MATERIA	

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

EN MATERIA PENAL

Para el fuero federal, tribunales ordinarios de la Capital
y de los Territorios Nacionales

CON LAS LEYES QUE LO HAN MODIFICADO

CONCORDADO

POR EL DR.

TOMAS JOFRÉ



BUENOS AIRES

VALERIO ABELEDO, EDITOR — LIBRERIA JURIDICA

CALLE LAVALLE 1368-74

1920





PROLOGO

El estudio del derecho procesal argentino ofrece dificultades no solamente por el desconocimiento general de las fuentes que lo han inspirado, sino por motivos especiales que luego expondremos. Es indudable que el conocimiento de las fuentes de la ley contribuye a su mejor inteligencia; es por ello que en la edición del código de procedimiento criminal que hoy publicamos, las hemos consignado al pie de cada artículo; pero como la ley recibe nueva vida por la aplicación diaria de los tribunales, hemos agregado la jurisprudencia de los mismos. No transcribimos sin embargo, el sumario de los fallos, que abultaría excesivamente este trabajo y nos limitamos a citar el tomo y la página donde se encuentra la solución respectiva.

Los que se interesen por conocer el alcance de los artículos del código de procedimiento criminal, se encontrarán con tales antecedentes en condiciones de investigar cómodamente. En efecto: se indica las obras que tratan el punto, la ley de donde la disposición ha sido tomada y la jurisprudencia de los tribunales.

No son pocos los obstáculos que hemos debido vencer, si se tiene en cuenta que los códigos de procedimiento europeos difieren sustancialmente de los nuestros. La legislación extranjera, desde hace más de un siglo, ha adoptado el jurado, el juicio oral, las pruebas morales y la instancia única; mientras que nosotros continuamos con la justicia permanente, el procedimiento escrito, las



pruebas legales y la doble instancia. El primer sistema lo siguen, Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Rusia y la mayoría de los pueblos de América; y el segundo lo practican, Turquía, Bolivia, Perú, Chile y la República Argentina.

La comparación de nuestro procedimiento con el procedimiento europeo, resulta, entonces, análoga a la comparación de una lengua viva con una lengua muerta, a lo que se agrega, que en Europa nadie escribe en la actualidad sobre los principios que forman la contextura de nuestro código, por ser disciplinas que pertenecen al pasado y ajenas al estado moderno.

No solamente hemos dado las fuentes de la ley — en cuanto ello ha sido posible — y las aplicaciones de la jurisprudencia, sino que hemos corregido los errores que se habían deslizado en las ediciones privadas y en la edición oficial del código, haciendo las anotaciones del caso para poner en claro la diferencia de textos.

Los antecedentes legislativos del código, contribuyen también a su mejor inteligencia y a ello obedece su inserción en este libro.

La historia del código puede resumirse en pocas líneas: en septiembre 30 de 1871, el congreso autorizó al poder ejecutivo para que nombrase una comisión que proyectase la ley del jurado y la de enjuiciamiento en las causas criminales y, en uso de esa autorización, se designó a los doctores Florentino González y Victorino de la Plaza, quiénes presentaron un trabajo — (que aún es de actualidad por su ciencia y espíritu democrático) — en abril de 1873, sin que el congreso le haya prestado su sanción.

Durante la primera presidencia del general Roca, se nombró a los doctores Manuel Obarrio y Emilio R. Co-



ni, para que redactaran un proyecto de código de procedimiento en materia penal, marzo 6 de 1882. El segundo de los nombrados renunció el cargo y el primero presentó su trabajo — improvisación de tres meses — en junio 30 del mismo año, con un informe que se leerá más adelante. En abril de 1883, el poder ejecutivo designó a los doctores Filemón Posse, Juan E. Barra y Onésimo Leguizamón para que estudiaran el proyecto Obarrío, los que se expidieron en julio del año siguiente, siendo enviado el proyecto por el poder ejecutivo a la cámara de diputados.

Después de algunos aplazamientos fué tratado en la cámara citada, el 10 de septiembre de 1888 y recibió sanción, sin informe oral de la comisión. En el senado, también fué sancionado el proyecto sin discusión y, por fin, se convirtió en ley el 27 de octubre de 1888. El nuevo código entró a regir el 1º de enero del año 1889.

Los errores de copia o tipografía de la edición oficial, se hacen notar en cada caso. En cuanto a las modificaciones introducidas por el congreso al proyecto véase el informe de la comisión respectiva, en la pág. 49.

Al final del código publicamos las leyes que lo han modificado, sin perjuicio de hacer las referencias al pie del artículo respectivo.

TOMAS JOFRE

Buenos Aires, abril de 1920.



ANTECEDENTES LEGISLATIVOS



1º — Decreto del P. E. encargando la redacción de un proyecto de código de procedimiento criminal; 2º — Ampliación del decreto anterior; 3º—Resolución comunicándolo al doctor Obarrio; 4º — Nota del doctor Obarrio elevando el proyecto; 5º — Decreto del P. E. relativo a la nota anterior; 6º — Nota del doctor Obarrio explicando las bases del proyecto; 7º — Resolución referente a la nota anterior; 8º — Decreto del P. E. nombrando una comisión encargada de revisar el proyecto de código; 9º — Nota elevada por la comisión anteriormente nombrada; 10. — Decreto del P. E. ordenando elevar al congreso el proyecto de código revisado; 11.—Nota elevando al congreso el proyecto de código revisado; 12. — Proyecto de ley poniendo en vigor el proyecto de código; 13. — Despacho de la comisión de códigos de la cámara de diputados; 14. — Discusión en el congreso; 15. — Ley núm. 2372 sancionando el código de procedimientos en lo criminal; 16. — Decreto del P. E. sobre la edición oficial.

1. —Decreto del P. E. encargando la redacción de un proyecto de código de procedimiento criminal.

Buenos Aires, marzo 6 de 1882. — Habiendo manifestado la comisión encargada de la redacción de los proyectos de ley orgánica de justicia de la capital, y ley de enjuiciamiento para los tribunales de la misma, la imposibilidad en que se encontró para dar cumplimiento a lo que le fué encomendado en lo relativo a los procedimientos y *Considerando*: Que los tribunales de la capital funcionan actualmente haciendo uso de leyes de procedimientos del orden provincial.



Que el gobierno debe procurar que a la posible brevedad desaparezca esta irregularidad, justificada solo por la falta de una ley nacional sobre la materia; y finalmente,

Que hallándose el Dr. Plaza, miembro de la comisión nombrada, en la imposibilidad de continuar desempeñando su encargo, como lo ha manifestado; y siendo necesario disponer lo conveniente para que las miras del P. E. sean llenadas, a fin de poder presentar al honorable congreso en sus primeras sesiones los proyectos de ley de procedimientos mencionados;

El presidente de la república decreta: Art. 2º Encárgase igualmente a los Dres. D. Manuel Obarrio y D. Emilio R. Coni, de la redacción del proyecto de código de procedimientos en materia penal, debiendo conformar sus disposiciones con las del proyecto de código penal que se halla sometido a la consideración del honorable congreso.

Art. 3º Los señores nombrados presentarán sus trabajos en el término de *tres meses* a contar desde la fecha en que acepten el nombramiento, y considerarán terminado su cometido al espirar dicho plazo.

Art. 4º Comuníquese, publíquese y dése al registro nacional. — ROCA—E. WILDE.

2º—Ampliación del decreto anterior

Buenos Aires, marzo 28 de 1882. — *Señores encargados de la redacción del código de procedimientos en lo criminal, Dres. D. Manuel Obarrio y D. Emilio R. Coni* — Siendo natural que tanto los jueces de sección como los tribunales y jueces de la capital se rijan por un sólo código de procedimientos, creo conveniente manifestar a Vdes. que el P. E. entiende que la ley sobre justicia nacional debe ser comprendida en el estudio que hagan y refundida convenientemente en el proyecto de código que redacten. Por consiguiente, deberán Vds. considerar como comprendida en la tarea que les ha sido encomendada la revisión de esa ley para la formación del código que ha de regir en las funciones de los jueces y tribunales de la nación. Dios guarde a Vds. — E. WILDE.



3.º—Resolución comunicando un decreto del P. E. al doctor Obarrio

Buenos Aires, marzo 27 de 1882. — *Al Sr. Dr. D. Manuel Obarrio* — Habiendo renunciado el Dr. D. Emilio R. Coni a formar parte de la comisión encargada de proyectar el código de procedimientos en materia penal para los tribunales de la nación, el señor presidente de la república ha dispuesto quede encomendado a V. únicamente ese trabajo.

Saludo atentamente al señor Dr. Obarrio. — E WILDE.

4.º—Nota del doctor Obarrio elevando el proyecto.

Buenos Aires, junio 30 de 1882. — *Al señor ministro de justicia, culto e instrucción pública.* En esta fecha vence el término de tres meses que V. E. se sirvió acordarme para redactar el proyecto de código de procedimientos en materia criminal para los tribunales federales y de la capital de la república; y tengo la satisfacción de poner en conocimiento de V. E. que ese proyecto está ya terminado.

Correspondería acompañarlo con la presente nota, pero como la brevedad del tiempo de que me ha sido posible disponer, no me ha permitido darle una última lectura, que considero indispensable para apreciarlo en conjunto y salvar las deficiencias en que pudiera haber incurrido, he creído deber retenerlo a este objeto por unos días más, para remitirlo luego precedido de una nota explicativa de sus principales disposiciones y de las reformas que introduce en el procedimiento actual.

Pienso que sería conveniente empezar la impresión inmediatamente después de hecha aquella lectura, lo que permitiría tal vez al honorable congreso tomarlo en consideración en el presente período legislativo.

Si V. E. opinase de la misma manera, estaría dispuesto a dirigir esa impresión, interviniendo en la corrección de las pruebas, tarea que me la impondría en obsequio a la más pronta y esmerada terminación del trabajo.

Con este motivo me es grato reiterar a V. E. las seguridades de mi consideración distinguida. — MANUEL OBARRIO.



5.º—Decreto del P. E. relativo a la nota anterior

Buenos Aires, julio 3 de 1882. — Acútese recibo, agradeciendo de una manera especial al señor Dr. Obarrio, el importante servicio que con tanta dedicación acaba de prestar; imprímase el proyecto de código de procedimientos en materia penal, bajo la dirección del mismo autor, y en número de ejemplares suficientes para ser distribuido entre los miembros del congreso y de la magistratura y personas de estudio y competencia profesional: elévese oportunamente dicho proyecto al honorable congreso con el mensaje correspondiente: publíquese la precedente nota y archívese. — ROCA—E. WILDE.

6.º—Nota del doctor Obarrio explicando las bases del proyecto

Buenos Aires, julio 15 de 1882. — *Al señor ministro de justicia, culto e instrucción pública, Dr. D. Eduardo Wilde.* — Cumpliendo con el deber que me impuse al participar a V. E. la terminación del proyecto de código de procedimientos en materia penal, vengo a presentar la nota explicativa de los principios sobre que ese proyecto descansa, del plan a que obedece y de las soluciones que dá a ciertos problemas del procedimiento criminal, y sobre los que, ni la legislación ni la doctrina se han pronunciado hasta el presente de una manera general y uniforme.

El primer escollo que habría tenido indudablemente que tocar en el desempeño de la honrosa comisión que me fué confiada, habría consistido en la elección del sistema de enjuiciamiento sobre el cual deberían reposar las disposiciones del proyecto de código. En estos trabajos la mayor de las dificultades consiste en la determinación de sus bases fundamentales, porque siendo distintas esas bases en su naturaleza, en sus propósitos y en sus medios, tienen que producir un cuerpo de legislación en el conjunto y detalles radicalmente diversos.

V. E. sabe bien que las leyes de forma en materia criminal responden a uno de estos dos sistemas *el juicio por jurados*, que deja la apreciación de los hechos criminosos a las pruebas de convicción moral, a la conciencia de ciudadanos que sin tener carácter público permanente, forman en cada caso el tribunal que juzga respecto de la existencia de esos hechos: y el juicio li-



brado a los *tribunales de derecho* que reposa sobre las pruebas legales, que aprecia cada circunstancia del proceso, de acuerdo con la ley escrita, y que declara la culpabilidad o inculpabilidad de los encausados, según el mérito jurídico de los antecedentes obrados en el juicio.

El jurado, como todas las grandes instituciones que afectan de una manera directa e inmediata el interés social, porque compromete el interés de todos y de cada uno de los individuos que forman parte de la asociación política, garantiendo o hiriendo sus derechos más preciosos, ha sido discutido en el terreno de la filosofía y de la historia, y bajo el punto de vista de los beneficios que en realidad han reportado y reportan los pueblos regidos por esta clase de instituciones judiciales.

Entre nosotros el jurado, en principio, no puede ser observado. Un precepto constitucional ha establecido que los juicios criminales ordinarios que no se derivan del derecho de acusación concedido a la cámara de diputados, se terminarán por jurados. Pero el mismo artículo, con sabia previsión, ha dejado al criterio de los legisladores, la determinación de la época en que deba ser establecido. Es esto lo que resulta de los términos literales del artículo 102 de la constitución.

Desde la sanción de la carta fundamental de la república hasta el presente, ha tenido lugar una serie de acontecimientos que han modificado profundamente la situación del país. Sus progresos en el orden material y moral son notorios, y la sociedad argentina, separada por las distancias y por los medios de comunicación, se ha ido acercando poco a poco para estrechar sus vínculos de unión, en sus relaciones políticas, en sus relaciones privadas, y en la esfera de sus intereses mercantiles e industriales. Durante ese largo lapso de tiempo han gobernado la república los hombres más espectables del país, que han figurado en los diversos partidos en que ha estado y está todavía dividido. Los períodos legislativos se han sucedido, y sin embargo, ninguno de los poderes públicos ha creído que hubiere llegado el momento de sancionar el establecimiento del jurado para los juicios criminales.

Este hecho que no puede considerarse como el resultado de una inacción culpable, importa la manifestación de una opinión uniforme y consciente, respecto de la inoportunidad de radicar



todavía entre nosotros una institución de este género. Y si me fuera permitido demostrar el acierto con que se ha procedido, yo diría, exmo. señor, que las instituciones no se implantan súbitamente en un país, si de ellas ha de esperarse los resultados benéficos que se les atribuye y que pueden producir en otros. La bondad de una institución no debe mirarse bajo un punto de vista abstracto, o examinarse a la luz de teorías que más o menos seducen, pero que no bastan para formar la convicción profunda que debe siempre presidir a las grandes reformas de organización social en cualquiera de sus manifestaciones.

La institución del jurado, para que pueda llenar sus propósitos, supone no sólo un alto grado de educación en el pueblo, sino sobre todo, hábitos formados en el ejercicio del gobierno propio y que hagan de cada ciudadano un elemento que en su esfera de acción contribuya al movimiento armónico y fecundo del mecanismo social. Es necesario para que la institución del jurado sea fructífera, que los individuos se penetren de su misión social y que el sentimiento del interés general predomine respecto de los pequeños intereses o afecciones que en muchos casos pueden hacer olvidar el cumplimiento del deber.

Se explica por qué el jurado en Inglaterra sea una gran institución. El carácter de este pueblo, sus costumbres, su educación, sus tradiciones, sus tendencias, lo colocan en condiciones especiales para hacer del jurado una verdadera garantía del recto discernimiento de la justicia. Pero en un país como el nuestro, que recién entra, puede decirse, en la práctica de las instituciones libres; que no tiene todavía el hábito, aunque sea doloroso confesarlo, del propio gobierno; en que los ciudadanos lejos de abrigar inclinaciones por el desempeño de esta clase de cargos, los miran no sólo con indiferencia, sino con aversión, por los deberes que imponen y las responsabilidades que entrañan; en un país, en que el jurado, aún para los simples delitos de imprenta, no ha pasado de un ensayo sin resultados satisfactorios, no sería posible dar a esta institución una vida estable, conveniente y eficaz.

Un solo rasgo distintivo entre el carácter del pueblo inglés y el carácter del nuestro, bastaría a demostrar que si el jurado en Inglaterra, y especialmente en Londres, ha dado grandes re-



sultados, no habría razón para esperar que estos resultados se produjeran entre nosotros.

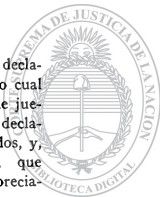
Una de las bases del procedimiento criminal en Inglaterra, es la acusación. Es necesario el ejercicio de la acción penal que nace de un delito, para que la justicia proceda. Allí no existe el ministerio público, encargado por la ley de promover la investigación criminal y el castigo de los culpables; y sin embargo, ningún delito se perpetra sin que se forme causa a sus autores, porque cada súbdito se considera en el deber de acusar los delitos, velando no sólo por su interés privado, sino por el interés social del cual todos y cada uno se consideran fieles representantes. El sentimiento de la justicia y la solidaridad de todos los intereses, se encuentran profundamente arraigados en los miembros de la nación inglesa.

Entre nosotros existe también la acción popular, excepto en los delitos que afectan inmediatamente el interés privado. Y ahí están nuestros anales judiciales para hacernos ver con la elocuencia de la estadística, que esa acción nunca se ejercita. Más todavía, no solo la acción popular no se ejercita, sino que las personas damnificadas por un delito, salvo rarisimas excepciones, se escusan de mostrarse como parte querellante en los juicios a que ese delito dá lugar.

Es que está en nuestro modo de ser, el cual solo paulatinamente podrá ir modificándose, dejar a la acción de las leyes y de los funcionarios públicos, la investigación de los hechos culpables y la aplicación del castigo que corresponda a sus autores y cómplices.

Otra consideración además, ha detenido talvez a nuestros hombres públicos a establecer el jurado en los juicios criminales.

Las pasiones políticas que nos han agitado por tan largos años, si bien por el adelanto del país, por las transformaciones de su sociabilidad y por los nuevos intereses que se van creando, no tienen ya la vehemencia que antes las caracterizaban, no se hallan, sin embargo, extinguidas por completo, y alguna vez estallan en movimientos que, aunque poco duraderos, producen trastornos y conmociones que agitan la tranquilidad pública. Estos hechos tiene un nombre legal: *rebelión*; y la rebelión es un delito previsto y castigado por las leyes nacionales.



Establecer el jurado para conocer de este delito, para declarar, aún cuando no sea sinó estimando los hechos, si tal o cual encausado lo ha cometido o no, sería dejar, no en manos de jueces, sino de adversarios o de correligionarios políticos, la declaración de la inocencia o de la culpabilidad de los procesados, y, por consiguiente, la impunidad o el castigo de un hecho, que examinado bajo el punto de vista legal, merecería una apreciación diversa.

He dicho al comenzar esta nota, que no había sentido la dificultad en que me habría colocado la elección del sistema de enjuiciamiento sobre el cual debían descansar las disposiciones del proyecto; y agregaré ahora, que no he tocado esa dificultad, porque el camino que debían seguir a este respecto, lo encontraba trazado por un antecedente de que no podía prescindir.

En 1871 el congreso dictó una ley ordenando el nombramiento de una comisión de dos personas para proyectar las leyes de organización del jurado y enjuiciamiento en las causas criminales ordinarias de jurisdicción federal. Este es el único acto legislativo que haga referencia entre nosotros al jurado. El proyecto fué preparado por los doctores D. Florentino González y D. Victorino de la Plaza, y presentado en abril de 1873, sin que el congreso haya creído conveniente u oportuno tomarlo en consideración.

Al encomendárseme la redacción del proyecto de código de procedimientos criminales, era indudable, pues, que ímplicitamente se me señalaba la base del enjuiciamiento por tribunales de derecho. De otra manera mi encargo habría carecido de razón de ser, puesto que en el proyecto de que he hecho referencia, se legisla en toda su extensión sobre los juicios criminales sometidos a los jueces y tribunales de la nación, bajo la base del jurado.

El trabajo, por lo tanto, que tengo el honor de presentar, responde, a la organización de los tribunales de derecho. Para prepararlo, he tenido a la vista las legislaciones más adelantadas en la materia y he consultado las obras de los tratadistas que tienen conquistada la mayor reputación entre los hombres de la ciencia, sin descuidar, como no podía hacerlo, nuestra legislación actual y las necesidades sentidas diariamente en su aplicación práctica.

He dividido el código en cuatro libros precedidos de un título preliminar, dividido, a su vez en dos capítulos.



En el primero se encuentran reunidos los principios fundamentales del procedimiento, que figuran en la actualidad entre las grandes conquistas que el derecho moderno ha establecido en favor de las garantías individuales. Estos principios, en parte se hallan consagrados en la constitución de la nación, en parte existían ya en leyes o disposiciones dispersas dictadas en distintas épocas después de nuestra emancipación política, y en parte, han sido reconocidos por una jurisprudencia constante en nuestros tribunales.

He creído conveniente reunirlos, desarrollarlos en cuanto era necesario para precisar su inteligencia o completar su alcance, y agregar algunos que no puede menos de considerarse indispensables, al legislar sobre una materia tan delicada y trascendental.

Así, ningún juicio criminal podrá iniciarse sino por actos u omisiones calificados de delitos por leyes preexistentes. Nadie podrá ser juzgado, sino por los tribunales ordinarios en quienes reside la potestad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado. Ningún juez o tribunal podrá aplicar penas no establecidas en las leyes, debiendo siempre imponer las más benignas al caso ocuriente, aún cuando estas sean posteriores a la ejecución del delito. La pena debe en todos los casos ser el resultado de un juicio seguido con toda la regularidad legal, y sólo podrá hacerse efectiva en virtud de sentencia expedida por juez competente y pasada en autoridad de cosa juzgada. Nadie podrá ser aprehendido sino en caso de *infraganti* delito, o fuera de él, cuando exista semiplena prueba de la existencia de este y de su culpabilidad. Ningún acusado será obligado a declarar contra sí mismo, quedando en consecuencia abolido el acto que en nuestros procedimientos actuales se denomina *la confesión con cargos*. La defensa es inviolable en juicio: todo procesado no sólo tiene el derecho de hacerse defender por el letrado de su elección, sino que en caso de no ejercitarlo, los jueces deben designar una persona idónea que se encargue de esa defensa, porque la sociedad no tiene interés en castigar sino a los verdaderos delinquentes. Las presunciones, por vehementes que sean, no bastan para condenar a la pena de muerte, ni esta puede ser aplicada, sino en virtud de sentencia dictada por unanimidad de votos y por el tribunal íntegro que conozca de la causa en última instancia, en los



casos, por otra parte, en que el inferior la hubiere impuesto. Por último, los jueces jamás podrán aplicar por analogía las leyes penales, ni interpretarlas extensivamente, y en caso de duda, deberán estar siempre por lo más favorable al acusado.

El capítulo segundo está destinado a la reglamentación del ejercicio de las acciones que nacen de los delitos. No correspondería a la naturaleza de esta nota entrar al examen detallado de todas y cada una de las disposiciones comprendidas en ese capítulo. Me limitaré a señalar los puntos capitales que ellas abrazan.

La acción penal en nuestra actual legislación, tratándose de delitos públicos, puede ser ejercitada por cualquiera persona. Este sistema que nuestro derecho aceptó de la legislación romana, rige todavía en algunos países. En otros no sólo no se acuerda a cualquiera del pueblo el derecho de acusar, sino que se niega a los mismos particulares damnificados, reservándose sólo su ejercicio a los funcionarios del ministerio público.

He creído deber adoptar un sistema ecléctico que algunos códigos establecen. En las disposiciones del proyecto queda proscripta la acción popular, pero se reconoce en la parte ofendida o en sus representantes legales, el derecho de querellarse contra los delincuentes, o de constituirse parte en el juicio criminal iniciado por el ministerio público. No es posible, en mi concepto, desconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable, y tanto más, cuanto que el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto de la existencia de las acciones civiles que nacen del delito.

Pero este derecho debe limitarse a las personas directamente ofendidas.

Cuando estas han dejado de ejercitarlo, pudiendo hacerlo, debe suponerse que lo han renunciado, condonando la ofensa recibida, y es por esto que una disposición especial establece, que la acción penal, salvo los casos de excepción que la misma consigna, no pasa a los herederos o sucesores del ofendido.

En cuanto al ejercicio de la acción para la reparación del daño e indemnización de perjuicios, el proyecto si bien se adapta, en general, a los principios consignados en el código civil, sin embargo, se separa de esos principios en algunas particularidades.



Por grande que sea el respeto que a todos nos inspira esta obra monumental de nuestra legislación, no es posible dejar de comprender que ella adolece de ciertas imperfecciones, y que algunas veces ha extralimitado la esfera de su acción, consagrando disposiciones que corresponden a la legislación mercantil, a la legislación penal y a las leyes de procedimientos.

Limitándome a estas últimas, en lo que se relaciona con el ejercicio de la acción civil procedente de los delitos, recordaré que ha establecido que esa acción debe ejercitarse siempre independientemente de la acción criminal, impidiendo la acumulación de las dos acciones, aun cuando así convenga a los intereses del damnificado.

Esta prescripción del código civil, que no se encuentra de acuerdo con lo que establecen en la actualidad los códigos de procedimientos criminales, no corresponde al orden y naturaleza de sus disposiciones. En este concepto, el proyecto establece que la acción civil puede ser ejercitada ante el mismo juez y al mismo tiempo que la acción penal. Más aún: que la deducción de la acción penal entraña la de la acción civil, con excepción del caso en que se reserve expresamente para ser ejercitada ante otra jurisdicción.

El proyecto salva ciertas oscuridades o dudas a que se prestan algunas disposiciones del código civil, y complementa su legislación adaptándola a la de los códigos más adelantados sobre la materia.

El libro primero comprende las reglas o disposiciones generales sobre la justicia en lo criminal. Legisla sobre la jurisdicción de los jueces y tribunales encargados de administrarla, sobre las cuestiones de competencia, las recusaciones, el ministerio público, las notificaciones, citaciones y emplazamientos, los términos judiciales, las costas del juicio, y sobre la rebeldía o contumacia de los procesados.

Fácilmente se comprenderá que la parte de este libro que exigía una mayor atención era la que se refiere a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, ya porque la materia en sí misma ofrece complicaciones, que la ley debe siempre salvar, ya porque dado nuestro sistema de organización política, existen jurisdicciones diversas en su naturaleza, y es necesario deslindarlas con toda claridad.



Esta tarea en parte había sido llenada en la ley orgánica de los tribunales de la capital, pero era indispensable complementarla.

En el proyecto se determina la competencia de la suprema corte de justicia federal respecto de las causas criminales, de los jueces de sección, de la cámara de apelaciones del distrito de la capital, de los jueces del crimen, de los jueces correccionales, de los jueces de paz y de un juez municipal o de policía, a cuya jurisdicción se atribuye el conocimiento de los juicios sobre contravenciones o faltas.

Pero no bastaba de cierto fijar las reglas sobre la competencia: era necesario igualmente determinar el tribunal o juez que en caso de producirse un conflicto de jurisdicción, pudiera resolverlo. El proyecto lo ha hecho, señalando el tribunal o juez que debe dirimir las cuestiones de competencia, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia de las jurisdicciones respectivas.

La conveniencia de separar las funciones del juez que debe instruir el proceso y del que debe terminarlo por la sentencia definitiva absolutoria o condenatoria, está arriba de toda discusión. El juez que dirige la marcha del sumario, que practica todas las diligencias que en su concepto han de conducir a la investigación del delito y de sus autores y cómplices, está expuesto a dejar nacer en su espíritu preocupaciones que pueden impedirle discernir con recto criterio la justicia, y por lo tanto, la culpabilidad o inculpabilidad de los procesados.

Este peligro no existe cuando la instrucción está a cargo de un juez que cesa en sus funciones luego de terminada, para pasar la causa a otro que se encargue de su fallo, previas las pruebas y discusiones del plenario.

En el libro primero, de acuerdo con una de las disposiciones del título preliminar, se establece que el juez sumariante, siendo de los del crimen de la capital, en ningún caso podrá dictar sentencia definitiva en la causa.

Como se notará, la reforma a este respecto en la organización actual de nuestros tribunales, se limita a los jueces del crimen del fuero común en el distrito de la capital.

- Habría deseado hacerla extensiva a la jurisdicción seccional; pero me ha detenido una consideración de la cual no podía



prescindir. Las causas criminales cuyo conocimiento compete a los jueces federales, son muy reducidas en su número. Crear un juez en cada sección para atribuirle simplemente la formación de los sumarios, sería gravar al estado con una erogación considerable, sin responder a necesidades ineludibles o premiosas.

En cuanto a la jurisdicción correccional, en la que se comprende la de los juzgados de paz, y a la del juez municipal y de policía, no era posible hacer la misma división en los juicios, por la naturaleza especial de esas jurisdicciones y por la forma de sus procedimientos que deben consultar ante todo la brevedad.

La competencia que se atribuye a los jueces de paz es diversa de la que les acuerda la ley orgánica de los tribunales de la capital y el proyecto sobre reformas de la misma, sometido últimamente a la consideración del congreso. He creído deber apartarme de una y otra, porque pienso que dada la legislación penal de fondo, la jurisdicción correccional de los juzgados de paz no podría ejercitarse.

La ley de que he hecho referencia confiere a los jueces de paz el conocimiento de toda causa *correccional* en que la pena no exceda de ocho pesos de multa o cuatro días de arresto. Esta disposición solo puede reconocer su origen en un olvido de la legislación vigente, fácil de explicar si se tiene en cuenta el apremio con que fué preparada aquella ley. La pena de arresto, según el código penal que rige en la capital de la república, no puede ser menor de quince días. Es cierto que, tratándose de faltas o contravenciones a reglamentos de policía o municipales, la detención de los infractores puede ser por un término menor; pero, en nuestra tecnología jurídica, esta no es una pena *correccional*, ni se pronuncia en causa que lleve este nombre.

En el proyecto de ley se amplía la jurisdicción a causas que merezcan hasta la pena de tres meses de arresto. Pero esta reforma tiene otro inconveniente. El proyecto de código penal ha establecido, respecto de todas las penas privativas o limitativas de la libertad, diversos grados, estableciendo a su vez, dentro de esos mismos grados, un máximo y un mínimo de duración. Así, el arresto, siguiendo a los códigos de España y Chile, lo ha dividido en *mayor*, *medio* y *menor*, y ha establecido la duración de este último de uno a seis meses.



Se comprende, que tratándose de penas que no tienen designado en la ley un período fijo o determinado, no es posible conocer, *prima facie*, si la que corresponderá al delito cometido, durará tal o cual tiempo, porque el arbitrio judicial dentro del *minimum* y *máximum*, tiene que ejercitarse tomando en cuenta todos los antecedentes de la causa y con especialidad las circunstancias que agravan o atenúan la culpabilidad de los procesados. Establecer, pues, que los jueces de paz serán competentes para conocer en causas que no excedan de tres meses de arresto, es hacer no solo difícil, sino tal vez imposible, el ejercicio de su jurisdicción.

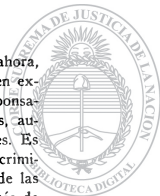
Si los jueces de paz han de tener jurisdicción correccional, esa jurisdicción debe reducirse de cierto, a la pena que ocupa un grado inferior en la escala de la penalidad, y esa pena, como acabo de indicarlo, en el proyecto de código penal para la república, que probablemente será aceptado en esta parte, es la de uno a seis meses de arresto.

Es esto lo que he creído deber establecer en el trabajo que presento, habiendo pensado, además que ninguna dificultad podría ofrecer su aplicación en la práctica, porque tenía a la vista el proyecto de ley sometido por V. E. al congreso nacional, complementario de la ley orgánica de los tribunales, en el que se requiere para desempeñar las funciones de los jueces de paz, la calidad de letrados.

En la organización de los tribunales he agregado un nuevo funcionario: el juez municipal y de policía. Hasta el presente las infracciones a los reglamentos u ordenanzas de la municipalidad y del departamento de policía, han sido castigadas sin forma alguna de juicio por las mismas autoridades que las dictan.

Esto no es regular, aún cuando se trate de represiones relativamente ligeras. Nadie debe ser penado, sin que intervenga un juez, que, aunque proceda breve y sumariamente, pueda amparar la inculpabilidad o limitar las penas a la importancia misma de las faltas.

El juez municipal y de policía creado por el proyecto, tendrá el encargo de conocer en todos los juicios sobre este género de faltas, que según el mismo proyecto, pueden ser reprimidos hasta con un mes de arresto o cien pesos de multa.



El libro primero, como lo he manifestado antes de ahora, se ocupa también de los términos dentro de los cuales deben expedir los jueces sus resoluciones, determinándose las responsabilidades en que incurrir siempre que dicten providencias, autos o sentencias fuera de los términos fijados en las leyes. Es necesario evitar la prolongación indefinida de las causas criminales, señalando términos perentorios para la verificación de las diligencias en los juicios, e impedir que una persona después de largo tiempo de hallarse privada de su libertad, pueda ser declarada inocente, como más de una vez ha sucedido entre nosotros, según lo comprueban los anales judiciales del país.

El libro segundo se ocupa del sumario. Nadie puede desconocer que es esta la parte del juicio criminal que requiere una atención más detenida, más escrupulosa y previsor de parte de la legislación. En el sumario todo tiene importancia. Ningún detalle debe descuidarse, ningún indicio por insignificante que aparezca, debe ser mirado con indiferencia por el magistrado encargado de la instrucción, porque ese detalle o este indicio puede llevarlo directamente a la investigación del delito o de los culpables.

Las disposiciones que tratan de la formación del sumario, deben abrazarlo todo, desde los funcionarios que pueden practicar las primeras diligencias de la instrucción, hasta la determinación de cada una de esas diligencias, señalando la órbita de acción y la manera de proceder de los primeros, y reglamentando con toda la minuciosidad posible estas últimas.

Y digo con toda la minuciosidad posible, porque si bien para la investigación criminal tiene que entrar en mucho la perspicacia y el criterio del juez, la ley, sin embargo, debe trazarle el camino que le es permitido observar, para que se mantenga el equilibrio necesario entre el interés social y las garantías individuales, sobre el cual debe descansar el procedimiento en materia penal.

El libro segundo empieza determinando los medios por los cuales el sumario puede iniciarse. La denuncia, la querella, la prevención de los funcionarios de policía y el propio oficio del juez, constituyen esos medios. El proyecto legisla detenidamente sobre cada uno de ellos.



La parte que destina a la prevención de la policía era de cierto delicada y difícil.

Dejar a la acción exclusiva de los funcionarios de esta repartición, la iniciación del sumario, tal como ahora se practica generalmente entre nosotros, sería desnaturalizar su misión, y hacer perder en muchos casos elementos preciosos para la investigación criminal, que solo pueden ser apreciados por personas que reúnan la competencia de un juez de derecho. Privarles a su vez de toda intervención en la verificación de los primeros pasos del juicio, sería hacer imposible asimismo en muchos casos el descubrimiento del delito y de los delincuentes, porque la policía se encuentra en aptitud de ocurrir indemediatamente, sin la menor pérdida de tiempo, al lugar en que el delito se perpetra y verificar antecedentes y diligencias que más tarde tal vez sería imposible realizar.

Era necesario evitar ambos extremos, acordando a la policía la facultad de practicar todas las diligencias urgentes del sumario, inmediatamente después de cometida la infracción criminal, debiendo dar cuenta acto continuo de tener conocimiento del hecho, al juez competente para la instrucción, e imponiendo a este la obligación de llevar adelante esa instrucción, después de recibir la comunicación expresada.

En cuanto a la iniciación del sumario *ex-officio*, he creído deber mantenerla, dando, sin embargo, intervención al ministerio público desde los primeros momentos del juicio, y limitando la acción del juez a las diligencias de la instrucción, sin que pueda elevar la causa al estado de plenario en contra de las conclusiones del mismo ministerio.

Pero el punto que ha dado lugar a mayores controversias, dividiendo a la legislación y a la doctrina, y al cual debía prestar por lo tanto una atención preferente, es, sin duda alguna, el de la publicidad o el secreto del sumario. En favor de la primera se invocan las garantías individuales y se señalan los peligros que pueden ocurrir dejando al juez obrar libremente en el siglo de una investigación inquisitorial. En favor del segundo se aducen razones de conveniencia general. La publicidad de las diligencias del sumario, poniendo al procesado en conocimiento de los antecedentes que se van acumulando en su contra, lo coloca en condiciones de distraer la investigación, burlando sus



propósitos, y de impedir la realización de diligencias que practicadas, pudieran no solo comprometer su inocencia, sino dejar plenamente establecida su participación en la ejecución del hecho criminoso.

En este punto he adoptado también un sistema mixto, un término conciliatorio, que evitando los inconvenientes de uno y otro, ofrezca, sin embargo, todas las ventajas que la instrucción reporta del sumario secreto.

Durante el sumario no hay debates ni discusiones: el juez obra con entera libertad, siguiendo sus propias inspiraciones o decretando las diligencias que le fueren pedidas por el ministerio público o acusador particular. Pero el acusado puede intervenir también por intermedio de su defensor en todas las actuaciones de la instrucción, salvo en la recepción de las declaraciones de testigos, por las ulteriores a que puedan dar nacimiento estas declaraciones.

El defensor estará obligado a guardar estricta reserva sobre los hechos y antecedentes que su intervención le diera a conocer, y su misión se dirigirá a velar por que las diligencias que pasan a su presencia se consignen con toda exactitud, y por que sean observadas estrictamente las reglas legales del procedimiento. El defensor podrá asimismo hacer las indicaciones y proponer las diligencias que juzgue convenientes, y el juez siempre que las reputé conducentes al esclarecimiento de los hechos, deberá decretarlas. La negativa del juez no dará lugar a recurso alguno, pero deberá hacerse constar en el proceso, a los efectos que ulteriormente correspondan.

La base del procedimiento en materia penal es la comprobación de la existencia de un hecho o de una omisión que la ley reputa delito o falta. De aquí la necesidad de legislar con minucioso cuidado sobre todo lo que pueda conducir a la justificación del cuerpo del delito. El proyecto en esta parte ha trazado reglas y entrado en detalles para arribar a ese resultado, ocupándose de todo lo que debe ser objeto de la investigación, y de la manera de realizarse, respecto de los delitos que revisten mayor gravedad en el orden de la criminalidad o que son de ejecución más frecuente.

Así, en los casos de muerte por heridas, el juez deberá ordenar que se determine su naturaleza, situación y número, ha-



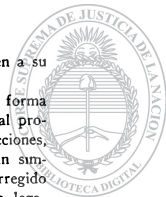
ciendo constar además la posición en que se hubiere encontrado el cadáver y la dirección de los rastros de sangre. En los casos de lesiones corporales deberá hacerse constar por los informes periciales, la importancia de esas lesiones, la posibilidad de su curación y en qué tiempo, los órganos afectados o mutilados, las consecuencias que producirán en la salud del ofendido, en su capacidad para el trabajo, es decir, todas las circunstancias que contribuyen a determinar la mayor o menor gravedad del delito.

De la misma manera para los casos de envenenamiento, infanticidio, aborto, incendio, robo, hurto, estafas, etc., se determinan prolijamente todas las circunstancias que deben hacerse constatar para que no solo quede establecida la prueba de los hechos, sino su calificación legal.

La intervención directa del procesado en el sumario como elemento de la investigación, es de una trascendental importancia; pero esa intervención en la forma que actualmente reviste en nuestros procedimientos criminales, puede considerarse aún en cierta manera contraria a los preceptos de la constitución de la república, que ha establecido que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Poner al procesado en presencia del juez a contestar a las preguntas que le dirija, aunque indirectas sobre la existencia del delito y de sus autores, buscando su confesión, es ejercer cierta coacción moral, de la que es muy difícil que el espíritu del encausado pueda libertarse. Pero dejarlo en todos los casos sin interrogar, sería prescindir de indicaciones y datos que pueden ser de suma importancia para las ulteriores del juicio.

Combinar estos dos extremos: conciliar la libertad individual con el interés social, debía ser entonces la tendencia de las disposiciones del proyecto sobre este punto, de manifiesta importancia en el procedimiento.

Y he creído llenar este propósito conservando la declaración indagatoria, pero imponiendo al juez la obligación, antes de interrogar al procesado, de advertirle de una manera clara y precisa, que puede libremente responder o no a las preguntas que le van a ser dirigidas, y que en el caso de estar conforme en contestarlas, podrá dar todas las explicaciones y antecedentes que



repute necesarios o útiles respecto del hecho que da origen a su declaración.

En el caso de prestarse, la indagatoria se tomará en la forma que el proyecto determina, sin que jamás pueda hacerse al procesado preguntas capciosas o sugestivas, ni emplearse coacciones, amenazas o falsas promesas, ni exigirle juramento ni aún simple promesa de decir verdad, bajo el concepto de ser corregido disciplinariamente el juez que violara estas prohibiciones legales, si no hubiere lugar de su parte a una responsabilidad mayor.

En este libro del proyecto se comprenden todas las disposiciones relativas a la manera de constatar las circunstancias personales del procesado que puedan tener influencia para determinar la calificación legal o la mayor o menor gravedad del hecho que se le imputa, y las que tienen por objeto establecer su identidad, en los casos en que el denunciante, querellante o algún testigo, imputase la perpetración de un hecho punible a persona cuyo nombre ignorara y cuya designación hiciera solo por sus señas personales.

En seguida se ocupa de todos los medios de prueba que pueden conducir a la constatación del delito y al descubrimiento de sus autores y participantes.

El título consagrado a la prueba de testigos está dividido en cuatro capítulos.

El primero determina las reglas generales sobre la materia, estableciendo la obligación que tienen todos los habitantes del país, nacionales o extranjeros, que no estén inhabilitados o impedidos, de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuera preguntado respecto del hecho criminoso. Fija las condiciones de capacidad necesaria para deponer en las causas criminales, y prescribe quiénes no pueden ser admitidos como testigos sino para simples indicaciones y al solo objeto de la indagación sumaria, y quiénes no pueden ser llamados a testificar.

El capítulo segundo legisla sobre la citación de los testigos, determinando las reglas especiales a que esa citación debe ajustarse, según que el testigo se encuentre presente o ausente, con domicilio conocido, o con domicilio incierto o ignorado.

El tercero se destina a la forma en que debe practicarse el examen de los testigos, y el cuarto al mérito legal de este géne-



ro de prueba, tan importante en el juicio criminal, desde que por lo común es el único que existe para averiguar los delitos y sus perpetradores.

Como un corolario preciso de la misma materia, en el título siguiente el proyecto ha fijado el procedimiento que debe observarse en los careos, cuando los testigos discordasen acerca de algún hecho o circunstancia que interese en el sumario. Pero pudiendo tener lugar esa disconformidad, no solo respecto de las declaraciones de los testigos entre sí, sino también de las de los testigos y las del procesado, o respecto de las que prestasen los mismos encausados, ha sido necesario legislar de una manera especial y propia sobre estos casos, manteniendo una perfecta armonía con los principios a que obedece el proyecto en lo relativo a la declaración indagatoria y a la confesión del procesado. En su consecuencia, ha establecido que los careos de procesados con testigos no podrán tener lugar sino a petición de los primeros o de algunos de ellos, limitándose en este último caso la diligencia al procesado que la hubiere solicitado.

El careo entre los presuntos delinquentes solo podrá decretarse en los casos en que haciéndose éstos cargos recíprocos, todos o alguno de ellos lo solicitase como medio de defensa.

La prueba por confesión, que en el orden de colocación de las disposiciones del proyecto, sigue a la prueba de testigos, ha sido reglamentada de una manera prolija, enumerándose las condiciones que conjuntamente deben concurrir para que haga plena fe en juicio.

En esta parte el proyecto resuelve la debatida cuestión de la indivisibilidad de la confesión, estatuyendo que ésta no puede dividirse en perjuicio del confesante y que los distintos hechos o circunstancias que ella contenga no importan excepciones cuya prueba incumba al acusado.

Esta solución es diversa de la que ha consagrado el art. 159 del código penal actualmente en vigencia en la capital de la república, el cual establece que no se presume que el acusado obra en estado de irresponsabilidad o de legítima defensa, siendo de su obligación acreditar con pruebas bastantes la certidumbre o probabilidad de las circunstancias que la justifican. De manera que la persona que reconociéndose autor o partícipe de un hecho, manifiesta a la vez los motivos que la han impulsado



a ejecutarlo y que importan desconocer la criminalidad de ese hecho o atenuar su importancia, está en el deber, según estas ideas, de justificar sus acertos, bajo el concepto de quedar sometido, en caso contrario, a la acción de las leyes represivas. No es esta la doctrina más comunmente aceptada por los criminalistas.

No es posible trasladar al proceso criminal, como dice Mittermaier, el sistema de las excepciones del procedimiento civil. La confesión tiene que aceptarse en la forma en que se presta. Las circunstancias que la califican, forman con ella un solo todo, y no es justo, ni equitativo, ni humano, aceptar la parte que daña al que la hace, y rechazar la que le es favorable.

De acuerdo con las doctrinas del derecho moderno, se ha fijado una excepción a la importancia de la fuerza probatoria de la confesión, cuando el delito sobre que recae merece pena de muerte, y solo se ha acreditado su existencia por el propio reconocimiento del procesado. En estos casos el proyecto establece, que sólo podrá condenarse al reo a la pena inmediata.

El título relativo a la prueba pericial es absolutamente nuevo en nuestra legislación criminal. Sus disposiciones han sido, en general, tomadas de la actual legislación española, modificadas o complementadas, en cuanto ha sido pertinente, con las del título respectivo del código de procedimientos civiles, que rige en los tribunales de la capital.

En cuanto a la prueba instrumental, se ha señalado la importancia de los instrumentos públicos y de los documentos privados reconocidos en su firma y en su contenido, estableciéndose respecto de estos últimos, que la persona sometida a juicio criminal, no podrá ser interrogada bajo juramento o promesa de decir verdad.

Este título consigna una disposición que merece explicarse brevemente. Me refiero a la que establece que la negativa de parte del presunto delincuente a declarar sobre la autenticidad o reconocimiento de firma de un documento privado, después de dos apercibimientos de tenerse por reconocida, dará mérito para que así se declare. Podría creerse que esta disposición es contradictoria con la que ha establecido que los procesados no están obligados a declarar contra sí mismos. Pero habría error en pensar de esta manera. Cuando existe un documento que se



atribuye al encausado, hay en cierta manera una declaración preexistente, una prueba preconstituida, sobre cuya autenticidad debe pronunciarse el mismo. La negativa no puede favorecerlo. Por el contrario, ella arroja naturalmente una vehemente presunción en su contra, desde que si la firma no es suya o si el contenido es falso, puede manifestarlo al juez, y arrojar en tal caso la prueba de los hechos sobre el acusador público o particular que se los imputa.

El título termina con dos disposiciones que reconocen su origen en la moral, en la justicia y en las conveniencias sociales. La primera establece que las cartas privadas substraídas del correo, o de cualquier portador particular, no serán admitidas en juicio. La segunda, que aquellas que no fueran substraídas, solo podrán figurar en el proceso con el consentimiento de sus autores, o en virtud de mandato judicial, cuando así lo exija la averiguación del delito.

La parte del proyecto relativa a los medios probatorios termina con un título sobre presunciones o indicios, en el cual se determinan todas las condiciones que deben éstas reunir para que revistan la fuerza de una prueba completa.

El libro II legisla asimismo sobre la interceptación de la correspondencia escrita y telegráfica, determinando el procedimiento que debe observarse en tales casos y la forma en que debe verificarse su apertura o examen; destina un título a la detención y prisión preventiva del encausado, estableciendo la línea de separación entre una y otra, y abrazando en sus preceptos todo lo que el interés público y las garantías particulares exigen en una materia que afecta ese interés y estas garantías de una manera directa e inmediata.

Pero como no siempre es necesario que el procesado se encuentre privado de su libertad durante la secuela del juicio, por la naturaleza de la causa y por las responsabilidades legales a que pudiera quedar sometido, era indispensable también determinar los casos en que puede decretarse la libertad provisoria del presunto culpable y las garantías bajo las cuales ese acto deberá realizarse. Un título especial comprende todas las disposiciones relativas a este punto.

La investigación criminal exige frecuentemente practicar pesquisas o visitas en el domicilio de los particulares, en luga-



res cerrados, o en edificios o lugares públicos. Los jueces encargados de esa investigación, tienen que estar facultados para practicar esas visitas o inspecciones, so pena de quedar entorpecida en su acción la justicia represiva y en muchos casos consagrada la impunidad de los delitos. No es posible poner en duda, el derecho del poder social para penetrar en ciertos casos en el domicilio de los particulares o en otros lugares análogos. Pero ese poder no es omnímodo: es necesario reducirlo a ciertos límites, porque si bien el interés general debe tenerse siempre en cuenta, no deben olvidarse, sin embargo, los derechos que las leyes fundamentales garanten a todos los habitantes del país.

El proyecto, al conferir a los jueces la facultad de allanar domicilios y de penetrar en otros lugares públicos o particulares, ha reglamentado el ejercicio de esa facultad, consignando entre otras disposiciones que importan una novedad en nuestra legislación, la de que no se podrán hacer visitas, pesquisas o inspecciones domiciliarias, salvo los casos especiales de excepción que determina expresamente, desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre, antes de las siete de la mañana ni después de las seis de la tarde, y desde el 1º de octubre hasta el 31 de marzo, antes de las seis de la mañana ni después de las seis de la noche.

Señala a la vez la forma en que deben practicarse todas las diligencias relativas a las inspecciones o visitas, consultando los derechos y el interés de los particulares a quienes puede perjudicar su ejecución.

Las leyes de procedimientos en materia penal no solo atienden al interés general afectado por el delito, para aplicar el castigo señalado al mismo por las leyes de fondo, sino que deben velar también por el interés de las personas directamente damnificadas a causa de su perpetración.

Dejar al presunto delincuente en libertad de disponer de sus bienes, sería colocarlo en condiciones de burlar el ejercicio de la acción civil que nace de los hechos criminosos.

Para impedir este resultado y garantizar debidamente esa acción, es necesario el embargo de bienes suficientes, de propiedad del procesado, luego que del sumario resulten presunciones o indicios de su criminalidad.



Pero esta medida de garantía, que en muchos casos podría producir considerables perjuicios al encausado, puede ser reemplazada por una caución personal o real. De esta manera se concilian todos los intereses privados comprometidos por el hecho punible.

El título 20 del libro II ha reglamentado detalladamente la materia de que me ocupo, y el título siguiente la complementa, haciendo extensivas sus disposiciones respecto de las personas extrañas a la ejecución del delito, cuando ellas se encuentran, sin embargo, sometidas a la responsabilidad civil que el mismo delito entraña, de acuerdo con las prescripciones del código penal.

En el orden de nuestros actuales procedimientos, el sumario termina con el acto de la confesión con cargos. No era posible dejar subsistente un trámite, cuyo objeto es arrancar al procesado el reconocimiento de la culpabilidad que se le atribuye. El acto de la confesión con cargos desnaturaliza, por otra parte, la misión del juez, haciéndolo descender del rol elevado e imparcial que debe siempre observar, para convertirlo en acusador y obligarlo a manifestar opiniones sobre el mérito de los antecedentes del proceso, antes de la oportunidad en que debe hacer el estudio de esos antecedentes y en que puede recién estar habilitado para formar a su respecto un juicio meditado y concienzudo.

Pero abolido el acto de la confesión, era necesario reemplazarlo por otro, que viniera a operar de una manera natural el tránsito del juicio inquisitivo o sumario, al juicio plenario.

Y digo de una manera natural, porque suprimido ese acto, de acuerdo con las reglas que rigen el enjuiciamiento vigente, habría que pasar inmediatamente a la acusación y defensa, lo que no solo sería a todas luces violento, sino inconveniente e inoportuno. La acusación y la defensa no pueden ni deben presentarse, sino después de conocerse todos los antecedentes y de reunidas todas las pruebas que haya sido posible acumular, en pro o en contra del procesado. La acusación y la defensa en el procedimiento criminal, deben ocupar el lugar que está señalado a los alegatos en el enjuiciamiento civil.

En la actual legislación española existe un trámite que llena cumplidamente este propósito. Después de practicadas todas las diligencias de la instrucción, se da vista al ministerio público o acu-



sador particular, quienes al expedirse deben apreciar el mérito de los antecedentes y pruebas producidas y abrir juicio sobre la procedencia del sobreseimiento o de la prosecución de la causa. Presentado este escrito, el juez dicta una resolución que da entrada al plenario, cuando en su concepto hay mérito bastante para llevar adelante los procedimientos.

He creído deber aceptar esta tramitación, si bien limitando las facultades del juez en cuanto a la resolución de que hago referencia.

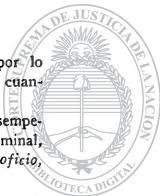
Una de las dificultades que se han señalado por los tratadistas respecto del enjuiciamiento criminal, es la determinación del alcance del poder de los jueces para la continuación del juicio, cuando el ministerio público o la parte querellante manifiestan que no hay mérito para la acusación, y que, en consecuencia, procede sobreseer en la causa.

Tres sistemas se presentan: El primero desconoce al juez la facultad de avanzar en el juicio contra las conclusiones de la parte acusadora; sistema que se funda en que la facultad de acusar y la de juzgar no pueden amalgamarse y que el ejercicio de la acción pública solo compete al ministerio fiscal y al acusador particular, cuando éste interviene en el proceso.

El segundo establece que las leyes no han podido conferir solo al ministerio público la representación del interés social afectado por los delitos; que esa representación compete igualmente a los encargados de administrar la justicia represiva, y que subordinar la continuación del juicio a las opiniones del funcionario que desempeña ese ministerio, sería atribuir a los jueces un rol hasta cierto punto pasivo. De acuerdo con este sistema el juez, cuando el fiscal no acusa, dicta un auto que se llama de *culpa y cargo*, porque en él se manda tener como acusación los cargos resultantes del proceso. Este es el sistema seguido en nuestro procedimiento actual.

El tercer sistema consiste en el nombramiento de un fiscal especial, cuando el titular ha abierto juicio en contra de la prosecución de los procedimientos, dejando sin embargo, al juez en libertad de apartarse de las opiniones de este último y continuar de oficio la tramitación, si así lo considerara arreglado.

En la legislación española, de que he hablado hace un momento, se confiere al juez la facultad de apartarse de la vista



del ministerio público y acusador particular, pudiendo por lo tanto mandar que la causa pase al estado de plenario, aún cuando aquellas hayan manifestado una opinión contraria.

Pienso que sin olvidar el verdadero rol que deben desempeñar los jueces encargados de administrar la justicia criminal, no es posible conferirles el derecho de llevar la causa *ex-officio*, hasta sus últimos trámites.

Terminada la instrucción, reunidos los elementos que las partes han procurado acumular en el proceso y que el juez mismo ha preparado, el acusador, cualquiera que sea su carácter, se encuentra habilitado para apreciar la situación de la causa y resolver en consecuencia si ella puede continuarse, o si por el contrario, debe considerarse concluida, ya por no hallarse debidamente comprobado el cuerpo del delito, ya por estar acreditada la inocencia de los procesados, ya *por no existir prueba suficiente respecto de su culpabilidad*.

Cuando el acusador arriba a estas conclusiones, no es posible entrar al plenario, porque el plenario es un juicio en materia criminal, que participa de la naturaleza del juicio ordinario en materia civil, es decir, es un juicio seguido entre partes, un juicio contradictorio. Entrar al plenario sin acusador, sería lo mismo que abrir la tramitación de un juicio ordinario civil, sin existir demandante. Solo alterando radicalmente el orden natural de los juicios puede sancionarse, en mi concepto, un hecho que importa una positiva irregularidad en la marcha de los procedimientos.

Por lo demás, la imparcialidad es una de las condiciones de que debe el juez estar siempre revestido, y esa imparcialidad es inconciliable con las funciones de la acusación, funciones que viene en rigor a desempeñar, cuando, a pesar de las opiniones del ministerio público o querellante particular, manda llevar adelante los procedimientos y pasar la causa al estado de plenario.

El proyecto se ha inspirado en estas ideas; pero considerando que era peligroso en cierta manera para el interés social, dejar el derecho de acusar, librado a la exclusiva apreciación de los agentes o procuradores fiscales, ha adoptado un sistema que garante el acierto y la prudencia en el ejercicio de ese derecho.

Así, ha establecido que cuando el ministerio público y el acusador particular opinaren que la causa no debe elevarse a plena-



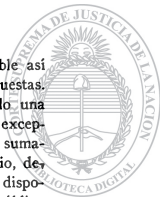
rio, el juez si estuviere de acuerdo con sus conclusiones, decretará el sobreseimiento en la forma que corresponda. Pero si por el contrario, creyere que hay mérito bastante para llevar adelante los procedimientos, mandará pasar la causa al procurador general de la corte, si fuere el juez de sección de la capital, o al fiscal de la cámara de apelaciones, si fuere de los del crimen o de lo correccional del mismo distrito, a fin de que dictaminen sobre la procedencia o improcedencia de la elevación de la causa al estado de plenario. Los jueces de las otras secciones federales, en los mismos casos, pasarán la causa a un fiscal especial que nombrarán al efecto.

Cuando el procurador general de la corte, el fiscal de la cámara o el fiscal especial, se manifestaran de acuerdo con la opinión del funcionario del ministerio público que emitió primero su juicio, el sobreseimiento será obligatorio para el juez. En el caso contrario, éste dictará un auto mandando pasar la causa a plenario.

El dictamen de los funcionarios expresados se considerará como la base del juicio plenario, y el juez de la causa deberá hacer reemplazar al agente fiscal o fiscal especial que hubiere intervenido en el sumario, en la forma establecida para los casos de inhabilidad o impedimento de los representantes del ministerio público.

Determinada la forma de la conclusión del sumario, que, como se ha dicho, puede tener lugar por el sobreseimiento, correspondía legislar sobre esta materia, estableciendo la época en que el sobreseimiento puede decretarse, sus diversas especies, y los efectos legales que de cada una de ellas se desprenden. Esta legislación viene a llenar un verdadero vacío que en el procedimiento vigente se hacía sentir de una manera imperiosa.

El libro II termina con el título destinado a las excepciones que pueden oponerse en forma de artículo de previo pronunciamiento. La falta de jurisdicción, de personalidad en el acusador o en sus procuradores o apoderados, y de acción de parte del mismo acusador: la cosa juzgada, la amnistía o indulto, el alibi o coartada, la condonación del ofendido en los delitos que no dan lugar a la acción pública, y la prescripción de la acción o de la pena, constituyen esas excepciones.



No bastaba, sin embargo, enumerarlas: era indispensable así mismo señalar la estación del juicio en que pueden ser opuestas. El proyecto ha establecido a este propósito, introduciendo una modificación capital en el procedimiento vigente, que las excepciones expresadas pueden deducirse en cualquier estado del sumario, o dentro del tercero día después de iniciado el plenario, debiendo contarse el término desde que se ponga la causa a disposición del procesado para contestar la vista del ministerio público o escrito del acusador particular con que termina el juicio inquisitivo.

El incidente a que da lugar la oposición de excepciones, se sustanciará y fallará en pieza separada, y sin perjuicio de continuarse las diligencias del sumario. Cuando las excepciones se opusiesen después de concluido este último, se suspenderá la sustanciación de la causa principal.

El libro III comprende todas las disposiciones a que está sometido el procedimiento del juicio plenario.

Determina su primer trámite, que lo constituye la vista del defensor de los procesados y de las terceras personas que aparezcan civilmente responsables del delito, ocupándose luego de la recepción a prueba de la causa, de la ratificación de las declaraciones prestadas en el sumario, de la discusión de la misma, o sea de la acusación y la defensa, y de la sentencia que le pone término. En seguida legisla sobre todos los recursos de que son susceptibles los autos y resoluciones de los jueces, fijando reglas especiales sobre cada uno de ellos y señalando el modo de proceder ante los tribunales superiores. En su último título consigna las reglas relativas a la ejecución de las sentencias.

El libro IV está dividido en dos secciones. La primera se ocupa de los juicios correccionales y sobre faltas, y la segunda sobre algunos procedimientos especiales.

El procedimiento ante los jueces correccionales es verbal o escrito, según la naturaleza e importancia de los delitos: Es verbal, cuando la pena corporal del delito no exceda de un año de arresto, cuando sea simplemente pecuniaria, o cuando concurriendo una y otra, la pena corporal no exceda del lapso de tiempo expresado. Es escrito en todos los demás delitos de carácter correccional, que merezcan una pena superior a las que dejo mencionadas.



Creo innecesario examinar detalladamente las disposiciones del proyecto respecto de uno y otro procedimiento: bastará solo manifestar, teniendo en cuenta los propósitos y carácter de esta nota, que ellas consultan la brevedad de la tramitación que tiene que ser la base de esta clase de juicios, sin descuidar, sin embargo, todas las garantías necesarias para la amplia defensa de los procesados.

El procedimiento ante los jueces de paz es también verbal y actuado. Obedece a la misma tendencia que los juicios correccionales, simplificado todavía más en su tramitación, aunque sin apartarse de la base primordial de todo proceso que tiene por objeto la investigación de un hecho ilícito y su represión legal. Así, aún cuando el procedimiento es breve, presenta todos los medios de averiguar la verdad, y los presuntos culpables pueden acreditar cumplidamente su inocencia.

Otro tanto diré de los juicios sobre faltas, cuyo procedimiento es sumarisimo, por la naturaleza de las infracciones que le sirven de objeto y de las penas que en ellas pueden imponerse.

Las apelaciones de las sentencias o fallos de los jueces de paz deben ser interpuestas para ante el juez correccional, cuando la pena no exceda de tres meses de arresto, de doscientos pesos de multa, o cuando sea la de simple sujeción a la de la vigilancia de la autoridad, y para ante la cámara de apelaciones en todos los demás casos.

Las resoluciones en los juicios sobre faltas son apelables para ante los jueces correccionales, declarándose, sin embargo, irrecurribles en las faltas que impusieren una pena menor de tres días de arresto o de ocho pesos de multa.

La segunda sección del libro IV está consagrada, como lo he dicho antes de ahora, a ciertos procedimientos especiales, sobre los cuales debe ocuparse un código de este género, ya por las particularidades que presentan, ya por la importancia de las materias que los determinan, bajo el punto de vista del interés social y de las garantías o derechos individuales.

En primer término aparece el procedimiento que debe observarse en los delitos de calumnia e injuria. Estos delitos, de carácter privado que por el mismo hecho no dan lugar a la acción penal pública, afectando solo de una manera mediata el interés general, exigen reglas y disposiciones propias, fuera de las comu-



nes a todo juicio criminal. Es posible que el ofendido perdone al ofensor, o que mediante ciertas explicaciones quede satisfecho su honor, su reputación o crédito, o que a su vez el mismo ofensor estuviera dispuesto a hacer una retractación pública. En todos estos casos no hay objeto para la prosecución del juicio, porque el propósito del querellante que es obtener la reparación de la calumnia o de la injuria queda perfectamente llenado. El proyecto dispone en consecuencia, de acuerdo con la actual legislación española, que no se dará curso a querrela alguna por esta clase de delitos, sin convocar previamente al acusado y acusador a un comparendo de conciliación.

La misma especialidad de estas infracciones, me ha movido a establecer que en los juicios a que dieren lugar, no se decretará nunca la detención o prisión preventiva del procesado, salvo el caso en que hubiere motivos fundados para presumir que trata de ausentarse del país.

La falsificación de documentos públicos o privados, exigía también una tramitación especial que respondiera a las particularidades del delito.

Era necesario fijar reglas tendentes a garantizar la existencia de los documentos argüidos de falsos, en el mismo estado en que esos documentos se presentan para la investigación criminal; era indispensable asimismo, determinar la manera en que debe procederse para obtener los documentos que han de servir en el coitejo, si esto fuere necesario, indicando el procedimiento respectivo, según que ellos se encuentren en poder de particulares, o en oficinas o archivos públicos. A este propósito responde la reglamentación que establecen las disposiciones del título segundo de la sección de que hago referencia.

El título siguiente se ocupa de la evasión de los condenados o procesados, estableciendo la tramitación necesaria para la captura de los prófugos, la averiguación de los medios empleados en la evasión y sobre todo para que las personas que hayan concurrido a favorecerla o realizarla, sean sometidas al juicio correspondiente.

El proyecto legisla asimismo sobre la manera de proceder en los casos de arresto, detención, prisión o secuestro ilegal de personas, consignando todas las disposiciones concernientes al



auto de *habeas corpus*, justamente considerado como una de las más grandes garantías de la libertad personal.

{ Esas disposiciones han sido tomadas, con ligeras variantes, del proyecto formulado por Livingstone para el estado de Luisiana y de la ley respectiva del estado de Nueva York.

Sería extraño a los límites y propósitos de esta nota entrar a la exposición de los fundamentos del auto de *habeas corpus*, recordando su origen histórico, sus elevados fines y su acción benéfica para la efectividad de las libertades individuales. Livingstone lo ha hecho con perfecta precisión al explicar el proyecto mencionado y reclamar su sanción de los poderes públicos del estado para el cual lo había redactado. Es conocida esa brillante exposición; y creo deber solo referirme a ella, para fundar la tendencia y el espíritu que domina las disposiciones que encierra el título de que hago mención.

El título relativo a la extradición de criminales, no es sino la reproducción de las disposiciones del proyecto de ley sancionado últimamente en la cámara de diputados, completado con un capítulo especial sobre el procedimiento para la extradición de criminales refugiados en país extranjero, cuya falta se notaba en el mencionado proyecto.

Las visitas de prisiones y cárceles han sido reglamentadas de una manera prolija, procurando en esa reglamentación, evitar la demora en la marcha de los procesos, ocurrir a las necesidades de los detenidos o condenados, e impedir que se usen a su respecto rigores o violencias no permitidas por los reglamentos dictados para el régimen de los mismos establecimientos.

El procedimiento para la rehabilitación de los condenados, ha sido objeto de un título especial, en el cual se determina la época en que puede ser solicitada, según que la pena haya sido cumplida, conmutada o prescripta, el juez ante quien debe presentarse la solicitud de rehabilitación y los efectos legales que la misma produce.

El título final comprende ciertas disposiciones complementarias, de carácter permanente las unas, y las otras meramente transitorias.

He terminado, excmo. señor, la breve reseña que me ha sido posible hacer en los estrechos límites de una nota, de las disposiciones del proyecto que tengo el honor de presentar. Habría de-



seado consignar al pie de cada artículo las explicaciones que pudieran servir para facilitar su inteligencia y determinar la índole y el alcance de sus preceptos. Pero el corto período de tiempo de que he podido disponer, me ha colocado en la imposibilidad de realizar este propósito.

Dejando así cumplido el honroso encargo que me fué confiado, me es grato reiterar a V. E. las seguridades de mi consideración distinguida. — *Manuel Obarrio*.

7.—Resolución referente a la nota anterior

Buenos Aires, julio 16 de 1882. — Acúseme recibo y publíquese la precedente nota al frente de la edición del proyecto de código de procedimientos en materia penal. — *E. Wilde*.

8.—Decreto del P. E. nombrando una comisión encargada de revisar el proyecto de código

Buenos Aires, abril 10 de 1883. — *Considerando*: Que hay verdadera conveniencia en que, antes de ser sometido a la aprobación legislativa el proyecto de código de procedimientos en materia penal, redactado por el Dr. D. Manuel Obarrio, sea estudiado por personas que a su ilustración reconocida, reúnan la práctica en el ejercicio de la magistratura, las reformas propuestas en él, a fin de dejar establecida la bondad de ellas, haciendo por este medio más fácil y más breve la discusión del proyecto por las honorables cámaras, que podrían prestarle su sanción en el menor tiempo posible, respondiendo así a la urgencia con que esa ley es reclamada para la buena administración de justicia.

Teniendo en cuenta que, no obstante la indiscutible competencia con que el señor Dr. Obarrio ha llevado a cabo el trabajo que el poder ejecutivo le encomendó, es tanto más conveniente y necesario el estudio de sus disposiciones, cuanto que éstas reforman en algunos puntos el código civil vigente y proyecto de código penal ya presentado al honorable congreso por el poder ejecutivo, lo que hace indispensable la coordinación de aquellas con las de estos, a fin de que todos formen un cuerpo de legislación uniforme: *El presidente de la república decreta*: Art. 1º Nómbrase una comisión compuesta de los señores Dres. Filemon Posse, miembro de la exma. cámara de apelaciones en lo civil



de la capital, Dr. D. Juan E. Barra, miembro de la cámara de apelaciones en lo criminal de la capital, y Dr. D. Onésimo Leguizamón, ex ministro de la corte suprema de justicia de la nación, encargada de estudiar el proyecto de código de procedimientos en materia penal redactado por el Dr. Obarrio y proponer las reformas que considere indispensables, teniendo en vista la legislación vigente, los proyectos presentados al congreso y el papel que con relación a la justicia desempeña la policía según su actual organización.

Art. 2º La comisión nombrada deberá expedirse antes del 1º de julio próximo, a fin de que su dictamen pueda ser tomado en consideración por el poder ejecutivo, y el proyecto de código remitido al honorable congreso en el presente año.

Art. 3º Comuníquese a quienes corresponde, pùbliques e insértese en el registro nacional. — *Roca.* — *E. Wilde.*

9.º—Nota elevada por la comisión anteriormente nombrada

Buenos Aires, julio 28 de 1884. — *Sr. ministro de justicia, culto e instrucción pública, Dr. D. Eduardo Wilde.* — La comisión encargada de revisar el proyecto de código de procedimientos en materia penal, redactado por el Dr. D. Manuel Obarrio, cumple el deber de elevar a V. E. su trabajo, relacionando brevemente las principales reformas que ha introducido en él, según el orden de sus disposiciones.

Destinado el código de procedimientos en materia penal, principalmente, a regir en la capital de la república y en los territorios federales, compuestos de una población heterogénea y movable, la comisión ha creído que era necesario dar a la autoridad policial, facultades tan amplias, cuanto fuesen compatibles con el interés social y con la libertad de los habitantes. Los funcionarios de policía, y aún cualquier persona del pueblo, han sido munidos, en consecuencia, de facultades especiales para contribuir en circunstancias determinadas a la detención de los culpables, al solo objeto de presentarlos al juez competente o a la autoridad más próxima, en un término breve de horas, y siempre bajo la responsabilidad personal de los autores y ejecutores de las medidas de detención. En relación con este punto, la comisión ha modificado el proyecto revisado en lo que se refiere a la clasi-



ficación del delito *infraganti*, concretándolo al caso de ser éste presenciado por el autor de la detención; consultando mejor, de esta suerte, las garantías individuales.

La libertad de la defensa ha sido especialmente ampliada y favorecida. La comisión ha creído que no debía privar al acusado del derecho que tiene en todos los casos de defenderse personalmente, si lo desea, a menos que, el ejercicio de tal derecho, obstase a la tramitación regular de la causa o a la buena administración de la justicia, a juicio del magistrado. La defensa personal del acusado ha sido, por consiguiente, establecida como principio.

Para evitar en lo posible la multiplicidad de juicios que tanto dificulta y enardece la discusión de las causas criminales, la comisión ha creído conveniente hacer obligatorio para el acusador, el ejercicio conjunto de la acción penal y civil, si quiere gozar de sus ventajas; de modo que, si ejercita una sola se tiene por renunciada la otra.

Naciendo ambas acciones del mismo delito, la restricción impuesta a la acusación, no viola ningún derecho legítimo y consulta la brevedad y la sencillez del juicio.

Por el proyecto revisado, los delitos llamados de *imprenta* quedaban expresamente excluidos del conocimiento de la justicia penal.

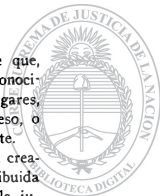
La comisión no ha aceptado una exclusión tan absoluta que conduciría a la impunidad en ausencia de disposiciones especiales.

La imprenta, como cualquier otro agente mecánico de publicidad puede ser, en algunos casos, el medio preparatorio y aún el instrumento del delito, pero conviene reaccionar contra la idea generalmente abandonada hoy, de que el empleo de la imprenta con fines criminales, constituya un delito de categoría especial.

Tan reprobados hechos no pueden quedar en caso alguno, como resultaría de la disposición reformada, exentos de la acción represiva de la justicia social.

Los tribunales ordinarios conocen actualmente de esos delitos en la capital de la república, y el establecimiento del jurado para el juicio criminal, vendría a poner de acuerdo todas las opiniones.

En el título relativo a la jurisdicción, la comisión ha creído que debía hacer extensiva la federal y ordinaria, según los casos,



a los territorios nacionales, estableciendo provisoriamente que, mientras no se creen en ellos juzgados permanentes, el conocimiento de las causas por delitos perpetrados en dichos lugares, corresponda al juez federal más próximo al lugar del suceso, o a aquel en cuya jurisdicción se hallase asilado el delincuente.

La comisión ha suprimido el juez municipal y de policía creado por el proyecto revisado, y la jurisdicción criminal atribuida a los jueces de paz. Cuanto más se divida el ejercicio de la jurisdicción, se hacen más frecuentes las competencias, retardándose la terminación de las causas. Puede asegurarse, por otra parte, que las contravenciones a las ordenanzas municipales y reglamentos de policía, sólo son penadas generalmente cuando los infractores son tomados *infraganti*. La notoriedad de la contravención aleja entonces todo temor de injusticia.

Con todo, a fin de garantir los derechos de los habitantes sometidos a tales disposiciones, la comisión ha limitado la jurisdicción de las reparticiones mencionadas, a las faltas cuyo castigo exceda de un mes de arresto o cien pesos de multa, con apelación para ante el juez correccional, cuando la pena excediese de cinco días de arresto o quince pesos de multa.

La comisión ha conservado, en lo relativo a la justicia ordinaria, la división establecida en el proyecto revisado, en jueces de instrucción para la organización del sumario y jueces del plenario y sentencia; pero, las atribuciones de estos últimos, lo mismo que las disposiciones relativas a la confesión, mérito de la prueba y otras análogas, resultarán modificadas sustancialmente, si se acepta el proyecto de juicio por jurados que presentaremos a V. E. dentro de breves días.

En el título de las recusaciones hemos introducido la de los fiscales, por las mismas causas que permiten recusar a los jueces.

Los fiscales, considerados comunmente como representantes y abogados de la causa pública, son, sin embargo, funcionarios de carácter permanente, cuya incapacidad para el ejercicio de sus funciones puede ser, en muchos casos, notoria.

Cuando la sociedad pide el castigo de un delincuente, la imparcialidad de sus agentes debe estar a cubierto de toda sospecha de pasión, de interés o de malicia.

La libertad bajo fianza ha sido definida con toda precisión en sus alcances legales, para evitar la confusión existente en el



día y mantenida en el proyecto revisado. El derecho a ser excarcelado bajo caución, ha sido considerablemente ampliado dentro de ciertos límites, y consagrado como un privilegio inherente a la condición del procesado absuelto en primera instancia. En el seno de la comisión se sostuvo, con razones muy atendibles, que el reo absuelto debía ser, en todos los casos, puesto inmediatamente en libertad, sin más reato que el de la vigilancia policial, pero la comisión en mayoría creyó deber exigir la fianza siempre que la sentencia fuese apelada, en consideración a la eventualidad de un fallo superior adverso y a la consiguiente eficacia de su ejecución.

La comisión ha restablecido, en gran parte, el procedimiento actual, en la manera de tramitar el juicio plenario, comenzando por la acusación y la defensa, o sea por la demanda y contestación, raíz de todo juicio, como en el procedimiento civil; continuando luego con la prueba de los cargos y descargos, y terminando el juicio con la discusión sobre el mérito de estos. Hacer la discusión de la causa, recién después de la prueba, que sin aquella sería producida necesariamente con falta de precisión y de objetivos señalados, es invertir, sin ventaja alguna para las partes, ni para el objeto del juicio, el orden regular y conocido de los debates judiciales.

La libertad de la prueba ha sido establecida con toda amplitud, con tal que ella sea producida durante el término fijado con ese objeto, dejando al juez la facultad de apreciar en la sentencia, según las reglas de la sana crítica, su pertinencia e importancia.

Con esta medida se evita la serie de articulaciones sobre pertinencia de la prueba, que solo sirven para entorpecer la marcha regular del juicio.

La publicidad de la prueba testimonial sucesiva, según los propósitos de las partes, tiene graves inconvenientes.

Los interesados buscan testigos *ad hoc* con grave peligro de cohecho, y no pueden ser tachados cuando son presentados al vencerse el término de prueba. Para salvar estos inconvenientes y otros que sería largo enumerar, la comisión ha dividido el término de prueba en dos partes, destinando la primera, exclusivamente, para la presentación de los testigos, y la segunda para su recepción y procedimiento de tachas.



En el título de la prueba instrumental, la comisión ha suprimido la disposición que establece que, la negativa del procesado a reconocer la firma de un documento privado, da mérito a que se le dé por reconocido.

No pesando sobre el procesado, con arreglo a nuestra constitución, la obligación de declarar contra sí mismo, vendría a derogarse, al amparo de la prueba instrumental, uno de los principios que mejor señalan los progresos de la jurisprudencia penal.

Los términos necesarios para la tramitación de las causas, han sido considerablemente abreviados y precisados en cuanto es compatible con el derecho de las partes.

Obedeciendo a esta exigencia, la comisión ha establecido para hacer mérito de la prueba, los informes orales que nos aproximan a las benéficas y universales prácticas del jurado, sin perjuicio de la libertad del debate y con ventaja positiva para la brevedad de los juicios.

Las formas externas de la sentencia, tan minuciosamente reglamentadas en el proyecto revisado, han sufrido reducciones necesarias. No es posible encerrar el juicio del magistrado, inmovilizándolo, dentro del molde en que debe necesariamente vaciar su fallo; pero es indispensable prescribirle lo que la sentencia debe contener sustancialmente y lo que ella no debe omitir, para que responda cumplidamente a los fines de todo juicio. Obedeciendo a esta exigencia, la comisión ha creído que debía establecer, entre otros puntos, que todo fallo condenatorio de la privación de la libertad por tiempo indeterminado, deba incluir necesariamente todo el tiempo de la prisión preventiva sufrida por el condenado.

La comisión ha suprimido en las apelaciones el antiguo y dilatorio trámite de la *mejora del recurso*, sin objeto real ni para la regularidad del procedimiento ni para la averiguación de la verdad, objeto final de todo proceso.

La *relación de autos* ante los tribunales superiores, como un procedimiento necesario, queda también sin objeto con la reforma introducida en esta parte del juicio. En su lugar, sólo habrá la audiencia pública para oír a las partes, y en seguida el acuerdo motivado de los jueces, previo a la sentencia, forma que exige a cada uno de ellos mayor estudio y atención a la causa, cuan-



to mayor es su responsabilidad ante el juicio de la opinión pública por el voto que emiten.

En el título relativo a los juicios correccionales, la comisión ha establecido exclusivamente la forma del procedimiento verbal y actuado. Es la que se observa actualmente en la capital; y una experiencia satisfactoria acredita su indiscutible ventaja para la regularidad y brevedad de los juicios.

El título sobre extradición ha sufrido modificaciones importantes, ya suprimiendo disposiciones inútiles, cuando existen tratados especiales, ya incorporando, en ausencia de estos, los principios más adelantados de la legislación internacional atento el carácter de la soberanía nacional, el régimen de nuestras instituciones políticas y los sentimientos humanitarios de la época.

La comisión ha agregado en esta parte del trabajo un capítulo especial, estableciendo las reglas que deben observarse para obtener la extradición de procesados o condenados que, dentro de la república, se hallen asilados en extraña jurisdicción a la del juez competente.

En el título final, la comisión ha introducido especialmente aquellas disposiciones que ha creído indispensables para garantizar los derechos de las partes en el caso de retardo injustificable en el despacho de las causas. Dada la inamovilidad permanente de los magistrados y las excepciones establecidas por la comisión en este punto, ella ha creído que contra los perjuicios provenientes de la demora inmotivada de despacho, no había más remedio que dejar abierto a las partes el camino de las acciones civiles por indemnización. Es un principio consignado ya en otras legislaciones, y de grande eficacia moral por lo menos.

Además de las reformas mencionadas, que a juicio de la comisión merecían un recuerdo especial, son numerosas las de redacción, aclaración de sentido, cambio de colocación en las disposiciones, etc.

No son pocas también las disposiciones suprimidas, ya por hallarse consignadas en la constitución nacional o por ser más propias de la legislación de fondo.

No obstante las diversas agregaciones que la comisión ha hecho al proyecto redactado por el Dr. Obarrio, el nuevo proyec-



to que se presenta a V. E. en sustitución de aquel, tiene cerca de doscientos artículos menos, y podía ser, sin inconveniente alguno, más compendiado aún, si se declaran aplicables al procedimiento en materia penal, las disposiciones del procedimiento civil sobre puntos idénticos, como recusaciones, contiendas de competencia y otras análogas.

El vocal Dr. Posse propuso a la comisión acometer desde luego esta reforma en el proyecto presentado, pero la mayoría de sus miembros pensó que, no habiendo sido sancionado todavía el código nacional de enjuiciamiento civil, faltaba propiamente la base de tan importante reforma, disintiendo únicamente en cuanto a la oportunidad de realizarla.

Al terminar esta comunicación, la comisión debe cumplir un doble deber: tributar el merecido aplauso a la ilustración y laboriosidad del Dr. D. Manuel Obarrio autor del proyecto revisado, y presentar sus respetuosos agradecimientos al exmo. Sr. presidente y a V. E., por el honroso encargo de que hoy ella dá cuenta. Dios guarde a V. E. — *O. Leguizamón — Juan E. Barra — Filemón Posse.*

10.—Decreto del P. E. ordenando elevar al congreso el proyecto de código revisado

Buenos Aires, agosto 12 de 1884.—Agradézcase debidamente a los Sres. de la comisión revisora del proyecto de código de procedimientos en materia criminal redactado por el doctor D. Manuel Obarrio, la elaboración del trabajo que acaban de presentar y remítase al honorable congreso con el mensaje acordado. — *Roca. — E. Wilde.*

11.—Nota elevando al congreso el proyecto del código revisado

Buenos Aires, agosto 20 de 1884. — *Al honorable congreso de la nación.* — El establecimiento de los tribunales de la capital bajo el régimen nacional, permaneciendo sujetos a la observancia de las leyes de la provincia de Buenos Aires sobre procedimientos judiciales, dió margen necesariamente a una irregularidad que el poder ejecutivo ha procurado salvar desde el primer momento.



En efecto, la administración de justicia de esta ciudad funciona haciendo uso de leyes provinciales de procedimientos, a pesar del cambio de jurisdicción de los tribunales que la componen y de la nueva organización que ellos han recibido al ser declarado federal este municipio.

Esta circunstancia, por sí sola, hace resaltar la necesidad, de emprender una reforma sustancial en los procedimientos, desde que ellos se relacionan tan directamente con la forma en que se encuentren establecidas las instituciones que hayan de observarlos.

No es esta, sin embargo, la única consideración que ha inducido al poder ejecutivo a encomendar a comisiones especiales la redacción de los códigos de procedimientos.

Las deficiencias de la legislación vigente en esta materia, por una parte, y por otra la conveniencia de que los procedimientos ante los juzgados de sección y los de la capital se rijan por leyes emanadas de una misma fuente y no por las nacionales y provinciales que actualmente rijen, explican también el empeño que de su parte ha demostrado en el sentido de que fueran elaborados, a la posible brevedad, los proyectos destinados a hacer desaparecer numerosos defectos y a dar al país una legislación uniforme en la materia de que se trata.

Al inaugurar vuestras sesiones del corriente año, tuve el honor de anunciaros la presentación del trabajo que hoy cumplo en someter a vuestro estudio.

Hubiera deseado en esta misma oportunidad remitir a V. H. el proyecto de código de procedimientos en materia civil y comercial, pero la comisión que lo redacta cree indispensable tomarse algunos meses más para la terminación del trabajo, fundándose en razones que el poder ejecutivo encuentra atendibles, pues se refieren a la extensión de la materia, a la proligidad con que ella es tratada y a las innovaciones radicales que la comisión medita con detención. — Dios guarde a V. E. — JULIO A. ROCA —*Eduardo Wilde.*



12.—Proyecto de ley poniendo en vigor el proyecto de código

Art. 1º—Desde el 1º de julio de 1885 se observará como ley de la nación el proyecto de código de procedimientos en materia penal presentado por la comisión revisora del proyecto redactado por el Dr. D. Manuel Obarrio.

Art. 2º—Solo se tendrán por auténticas las ediciones oficiales.

Art. 3º—Autorízase al poder ejecutivo para hacer, de rentas generales, los gastos necesarios en la impresión de dos mil ejemplares de dicho código.

Art. 4º—Comuníquese, etc. — *E. Wilde.*

13.—Despacho de la comisión de códigos de la cámara de diputados

A la honorable cámara de diputados. (a).

Vuestra comisión de códigos ha tomado en consideración el proyecto de código de procedimientos criminales, redactado por el doctor don Manuel Obarrio y reformado por la comisión nombrada por el poder ejecutivo con fecha 10 de abril de 1883 y por las razones que expondrá a V. H. el miembro informante, tiene el honor de aconsejaros le prestéis vuestra aprobación, con las modificaciones que se expresan en seguida:

En el art. 4 suprimir la palabra: “caracterizados”.

Añadir los siguientes párrafos al art. 9º: “Cuando los procesados prefieran defenderse por sí mismos su intervención en el sumario se limitará a pedir las diligencias que crean conducentes al esclarecimiento de los hechos; sin que les sea comunicado su resultado, ni el de las demás que se practiquen. A los efectos de la disposición del presente artículo, el juez hará saber a los procesados, en el acto de la declaración indagatoria el derecho que tienen a nombrar defensor, a fin de que éste pueda intervenir desde las diligencias del sumario en la forma que este código lo permite”.

(a) Los artículos del proyecto de código de la comisión formada por los doctores Posse, Barra y Legulzamón (véase p. 41), que fueron suprimidos por la comisión de códigos de la cámara de diputados de la nación, los insertamos en tipo menor y entre paréntesis, para que el lector pueda darse cuenta del pensamiento del legislador en las reformas introducidas.



El artículo 11 redactarlo así:

"La pena de muerte no podrá imponerse sino por unanimidad de votos del tribunal íntegro que conozca de la causa en última instancia, siempre que su fallo fuese revocatorio del de primera instancia.

Esta unanimidad no será requerida, cuando el fallo del tribunal fuere confirmatorio y hubiese un solo voto disidente".

(Art. 11.—La pena de muerte no podrá imponerse en última instancia, sino confirmando la sentencia de primera instancia en tribunal íntegro o por unanimidad de votos.)

Cambiar la redacción del artículo 14 por la siguiente:

"De todo delito nacen acciones, las que son públicas cuando debe ejercitarlas el ministerio fiscal, sin perjuicio del derecho de acusar o de intervenir como parte querellante en el juicio, que incumbe a la persona ofendida o damnificada por el delito o a sus representantes legales; y privadas, cuando su ejercicio incumbe solamente a ésta".

(Art. 14.—De todo delito nacen acciones penales y civiles.)

Suprimir los artículos 15 y 16.

(Art. 15.—La acción penal es pública cuando procede de un delito cuya represión interesa directamente a la sociedad; y privada, cuando procede de un delito que afecta principalmente al individuo.)

(Art. 16.—La acción pública debe ser ejercitada por el ministerio fiscal, y puede serlo también por el damnificado o sus representantes legales contra todos los culpables. La acción privada, sea penal o civil, sólo puede ser ejercitada por la parte agraviada o sus representantes.)

Borrar del artículo 17 las palabras: "sea civil o penal".

Suprimir los artículos 18 y 19.

(Art. 18.—La acción penal privada no pasa a los herederos del ofendido, sino en los casos siguientes:

1.º Cuando hubiera sido intentada por el causante.

2.º Cuando por razón del mismo delito, el ofendido se hubiese encontrado en la imposibilidad de ejercitarla.

3.º Cuando en los delitos de calumnia o injuria, las ofensas sean (casendentes a los herederos.

Quedan, sin embargo, fuera de la acción de los herederos, los juicios históricos sobre los hombres públicos.)

Art. 19.—La acción civil puede ser ejercida por el damnificado o sus herederos, contra todos los culpables y sus herederos.

Del artículo 20 eliminar la expresión: "ya penal, ya civil".

Suprimir los artículos 21, 22 y 23.

(Art. 21.—La acción civil y la penal deben entablarse conjuntamente. Si se entabla una sola, la otra se entiende renunciada. Esta disposición comprende también al ministerio público).



(Art. 22.—La acción civil deberá interponerse o continuarse ante el juez civil, en los casos siguientes:

1.º Cuando no se ejercita la acción penal.

2.º Cuando el juicio criminal se suspendiese por ausencia o rebeldía o locura del procesado.

3.º Cuando el juicio criminal hubiere terminado por la muerte del procesado).

(Art. 23.—Cuando la parte agraviada, antes o pendiente el ejercicio de la acción pública por el ministerio público, hubiere intentado solo la acción civil, se paralizará el juicio civil hasta que haya sentencia ejecutoriada en el juicio criminal.)

En el artículo 29, inciso 3, agregar, después de “jueces de sección”, “y de los territorios nacionales”.

En el artículo 30, inciso 2, en lugar de: “en los ríos, islas y puertos argentinos”, poner: “en aguas, islas o puertos argentinos”.

En el artículo 32, suprimir las palabras: “los que se establezcan en”.

En el inciso 1 del mismo artículo 32, después de “salvo” agregar: “respecto de los tribunales de la capital”.

En el inciso 2 del mismo artículo suprimir las palabras: por “tratados” y “especiales”.

En el artículo 33, en vez de la “jurisdicción militar que corresponde según las leyes existentes a los consejos de guerra”, poner: “la jurisdicción que corresponda a los tribunales militares”.

(Art. 33.—La jurisdicción criminal atribuida por esta ley a la justicia federal o nacional en nada altera la jurisdicción militar que corresponde según las leyes existentes a los consejos de guerra.)

Suprimir el artículo 34.

(Art. 34.—Tampoco se considerarán sometidos a la acción de la justicia ordinaria o común las multas que establezcan las leyes por falta de pago de impuestos o contribuciones, las que se harán efectivas en la forma determinada por las mismas leyes.)

En el artículo 41, añadir al inciso 1 las palabras: “y en su caso, por los jueces de los territorios nacionales” y en el inciso 2 del mismo artículo, en lugar de: “por los jueces del crimen o por los jueces correccionales”, poner: “por los mismos”.

(2.º De los recursos de queja por justicia retardada o denegada por los jueces del crimen o por los jueces correccionales.)

Redactar así el artículo 49: “Cuando se trate de una persona a quien se atribuyen dos o más delitos unos de la competencia federal u ordinaria de la capital o territorios nacionales, y los otros de competencia especial, cada juez procederá a juzgar los



delitos de su competencia, siguiendo el orden de prioridad de los diferentes juicios establecidos por leyes especiales, y en su defecto, por lo que resuelva la suprema corte o la cámara de apelaciones en su caso”.

(Art. 49.—Cuando se trate de una persona a quien se atribuya dos o más delitos, unos de la competencia federal u ordinaria de la capital o territorios nacionales, y los otros de competencia especial, cada juez procederá separadamente a juzgar los delitos de su competencia respectiva. Si el orden de prioridad de los diferentes juicios no se hallare establecido en las leyes especiales, será determinado por la suprema corte o por la cámara de apelaciones, según corresponda, previa audiencia del ministerio público.)

Sustituir los artículos 50 y 51 por el siguiente: “Las disposiciones precedentes se aplicarán también a los delitos conexos”.

(Art. 50.—Considéranse delitos conexos:

1.º Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas.

2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado concierto para ello.

3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.

4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.)

(Art. 51.—Cuando se trate de delitos conexos, se observarán las reglas siguientes:

1.º Si uno de los delitos corresponde a la jurisdicción federal y el otro u otros a la jurisdicción ordinaria o común de la capital o territorios nacionales, será competente la primera de estas jurisdicciones.

2.º Si los delitos correspondieran a una misma jurisdicción, será competente el juez que deba aplicar la pena mayor. Si los delitos tuviesen señalada la misma pena, el que primero comenzare la causa. Si teniendo la misma pena no constare debidamente cuál de los jueces comenzó primero a conocer, la suprema corte nacional o la cámara de apelaciones de la capital, según la naturaleza de los delitos, resolverá la competencia, atendiendo sólo a la mejor y más pronta administración de justicia.

3.º Si uno de los delitos correspondiese a la jurisdicción federal o a la ordinaria de la capital o territorios nacionales y otro u otros a la jurisdicción provincial, corresponderá su juzgamiento a la jurisdicción federal o nacional ordinaria, según los casos.

4.º Si se trata de delitos conexos cometidos por varias personas, de las cuales unas deberían ser juzgadas por la jurisdicción federal y otras por la jurisdicción ordinaria de la capital o territorios nacionales, si se atendiera sólo a los hechos ejecutados particularmente por cada una de ellas, será competente para el juzgamiento la primera de estas jurisdicciones.

5.º Si las personas que cometieren el delito estuvieran unas sujetas a la jurisdicción federal o a la ordinaria de la capital y otras a jurisdicciones especiales de carácter nacional, la jurisdicción federal u ordinaria, según corresponda, será competente para juzgar a todas ellas en los casos en que el castigo no esté reservado por leyes especiales al conocimiento de otra jurisdicción.

6.º Cuando varias personas hayan concurrido a la ejecución de un delito, estando unas sujetas a la jurisdicción nacional y otras a la jurisdicción provincial, serán todas juzgadas por la primera de estas jurisdicciones.)



En el artículo 53, inciso 1, suprimir las palabras “del crimen” y el inciso 2 del mismo artículo.

(2.º Entre los juzgados del crimen y los correccionales.)

Suprimir el artículo 54.

(Art. 54.—Las cuestiones de competencia entre la municipalidad y la policía serán resueltas por los jueces correccionales.)

En el artículo 63 suprimir las palabras: “en materia criminal” y modificar el final del mismo, poniendo: “para ante el superior inmediato”, en vez de: “para ante el tribunal, etc.”.

(Art. 63.—Los autos en que los jueces inferiores denegaren el requerimiento de inhibición en materia criminal, serán recurribles para ante los jueces o tribunales, a quienes compete por este código la resolución de la competencia.)

Suprimir el artículo 75.

(Art. 75.—El tribunal que resuelva la cuestión de competencia, podrá condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria al juez y a las partes que la hubiesen sostenido o impugnado con notorio desconocimiento de las leyes, determinando, en su caso, la proporción en que deban pagarlas.)

En el artículo 76, después de la palabra: “remitirán”, añadir: “dentro de tercero día” y suprimir desde: “y cuidarán, etc.” hasta el fin.

Suprimir el artículo 78.

(Art. 78.—Las cuestiones de jurisdicción promovidas por jueces seculares contra jueces eclesiásticos, se sustanciarán y decidirán con sujeción a las reglas establecidas para los recursos de fuerza en conocer.)

En el artículo 81, segundo párrafo, después de “practicará” poner: “de oficio a instancia de parte”; y suprimir desde: “ya sea de oficio, etc.” hasta el fin.

En el artículo 82 después de: “capital”, agregar: “o territorios nacionales”.

Suprimir el párrafo segundo del artículo 86.

(También podrán ser recusados los fiscales por las mismas causas.)

Poner después del artículo 87, en artículo separado, lo siguiente:

“Los fiscales podrán ser recusados por las causas determinadas en los incisos 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 del artículo anterior, y además por los siguientes:

1º Parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primera de afinidad con alguna de las partes.



- 2º Ser o haber sido acusador privado del que lo recusa.
- 3º Tener interés directo en la causa.
- 4º Haber recibido, después de iniciado el proceso, presentes o dádivas aunque sean de poco valor”.

Al artículo 88 redactarlo así:

“Los jueces que se encuentren en alguno de los casos del artículo 87, se inhibirán de oficio del conocimiento de la causa, y la remitirán al juez a quien corresponda”.

(Art. 88.—Los jueces comprendidos en el artículo anterior, podrán inhibirse del conocimiento de la causa, sometiendo el caso al tribunal a quien correspondería resolver la recusación.)

En el artículo 91, suprimir desde: “a menos, etc.”, hasta el final.

Poner como artículo final del título: “De las recusaciones”, cap. I, el siguiente:

“Art.... Las recusaciones se sustanciarán siempre por cuerda separada, sin que paralícen la causa que será proseguida por el juez o tribunal que entienda sobre la recusación”.

Modificar la redacción del artículo 97 en la siguiente forma:

“Si la causa fuese legal y la recusación deducida en tiempo hábil, se comunicará por oficio al recusado. Si éste reconociere ser ciertos los hechos, se le dará por separado sin más ulterioridad. Si no se reconociese impedido, se recibirá la causa a prueba con todos los cargos, por el término improrrogable de diez días, si ésta hubiera de producirse en la capital, aumentando un día más por cada siete leguas, si los testigos o los documentos de que haya de valerse el recusado existieran fuera del territorio de ésta”.

(Art. 97.—Si la causa fuese legal y la recusación deducida en tiempo hábil, se comunicará por oficio al recusado, y si éste no se reconociese impedido, se recibirá aquella a prueba con todos cargos, por el término improrrogable de diez días, si ésta hubiera de hacerse dentro de la capital, aumentando un día más por cada siete leguas, si los testigos o los documentos de que haya de valerse el recusante existieran fuera del territorio de ésta.)

Al artículo 98 redactarlo así:

“Vencido el término probatorio, el secretario pondrá en el día los autos al despacho y la suprema corte decidirá dentro de tercero día, siendo su resolución inapelable”.

(Art. 98.—Vencido el término probatorio, el secretario hará relación del artículo, y la resolución que pronuncie la suprema corte hará cosa juzgada.)



Redactar el artículo 100 del modo siguiente:

"Toda vez que fuesen recusados o resultaren impedidos, todos o la mayoría de los miembros de la cámara de apelaciones, se integrará el tribunal insaculando a la suerte el número de conjuces que se necesiten, de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica de los tribunales".

(Art. 100.—Cuando se recuse a uno o más miembros de la cámara de apelaciones, conocerán los que quedan hábiles, integrada la cámara con el que resulte o los que resulten del sorteo, de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica de los tribunales.)

Sustituir por el siguiente, el artículo 101: "La recusación se sustanciará conforme a lo establecido en el capítulo anterior".

(Art. 101.—Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, se comunicará al recusado, a fin de que manifieste categóricamente si son ciertos o no los hechos alegados.)

Suprimir los artículos 102, 103, 104 y 105.

(Art. 102.—Si reconociere ser ciertos los hechos, se le dará por separado de la causa sin más ulterioridad.

Si los negase, con lo que exponga se procederá a sustanciar el incidente.)

(Art. 103.—La cámara de apelaciones debidamente integrada, recibirá el incidente a prueba, en la forma y por el término señalado en el art. 97.)

(Art. 104.—Vencido el término de prueba, se agregarán las producidos, y llamando autos, se resolverá el artículo dentro de ocho días.)

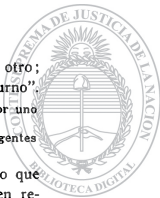
(Art. 105.—Admitida la recusación, seguirá conociendo en la causa el conjuce que hubiese sustituido al recusado para resolver el incidente de la misma recusación.)

En el artículo 107, al principio, después de "jueces de sección", agregar: "en el caso que éstos no reconozcan la verdad de la causa alegada"; y en el inciso 1° del mismo artículo en lugar de: "el juez de sección en lo comercial", poner: "el otro".

En el artículo 108, en vez de: "pues su resolución, etc.", poner: "sin recurso alguno".

Añadir el siguiente artículo al final del capítulo IV, De la recusación de los jueces de sección: "Art.... De la recusación de los jueces de territorios nacionales conocerá el juez de sección más próximo al asiento del juzgado, procediéndose conforme a las disposiciones del presente capítulo".

En el artículo 115, suprimir las palabras: "en las causas de procedimiento escrito" y agregar, después de "juez correccional" "en turno"; y el resto del artículo redactarlo así: "Si el recu-



sado fuese uno de éstos últimos, será reemplazado por el otro; y si fuesen los dos, lo reemplazará el juez del crimen en turno”.

(Si el recusado fuere uno de estos últimos será reemplazado por uno de los jueces del crimen.)

Si la recusación fuese hecha al fiscal de las cámaras o a los agentes fiscales, conocerá del incidente el juez de la causa.)

Redactar el artículo 118, del siguiente modo: “Del auto que dictaren los jueces denegando la prueba, podrá apelarse en relación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación”.

(Art. 118.—Contra el auto que dictaren los jueces inferiores admitiendo o denegando la prueba, podrá pedirse reposición.

Esta petición sólo podrá hacerse dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la notificación del auto.)

En el artículo 119 suprimir desde donde dice: “o no se hubiese accedido”, hasta “art. 118”.

Suprimir los artículos 122, 123, 124 y 125.

(Art. 122.—En vista de la recusación del juez correccional, si la causa alegada fuere legítima y cierta, se dará por recusado, pasando el conocimiento de la causa a quien deba reemplazarle con arreglo al art. 115.)

(Art. 123.—Cuando el recusado considerase infundada la recusación, pasará el conocimiento del incidente al mismo funcionario, haciéndolo constar por medio de acta.

Contra este auto no habrá ulterior recurso.)

(Art. 124.—El reemplazante del juez recusado en el caso del artículo anterior, hará comparecer a las partes, y en el mismo acto recibirá las pruebas que haya ofrecido el recusante y las que ofrezcan los demás interesados, cuando la cuestión sea de hecho.)

(Art. 125.—Recibida la prueba o cuando por tratarse de cuestión de derecho no fuera necesaria, el juez reemplazante resolverá sobre si ha o no lugar a la recusación, en el mismo acto si fuere posible. En ningún caso dejará de hacerlo dentro del segundo día.

De lo actuado y del auto se hará mención en el acta que deberá extenderse.)

En el artículo 126, en vez de: “por alguna de las causas enumeradas en el artículo 87”, poner: “por las mismas causas que pueden serlo los fiscales”.

En el artículo 128, párrafo final, suprimir la palabra: “escribano”.

En el artículo 131, después de: “tribunales federales”, añadir: “o de territorios nacionales”; y en el inciso 2º del mismo agregar, después de “jueces de sección”, “o de los territorios nacionales”.



En el artículo 133, suprimir las palabras: “y al fiscal de la cámara”, puestas en el encabezamiento, y añadir, como inciso 1º, el siguiente:

“Intervenir en todas las causas de jurisdicción originaria de la suprema corte”.

Agregar, después del artículo 133, como artículo separado lo que sigue: “Corresponden al fiscal de la cámara de apelaciones las funciones establecidas en el artículo anterior, con excepción de las determinadas en el inciso 1º”.

En el art. 141, suprimir las palabras: “o escribanos actuarios”.

En vez del art. 143, poner el siguiente: “La notificación será firmada por el funcionario que la practicare y por el interesado. Si éste no supiere, no pudiese o no quisiese firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el actuario, no pudiendo servirse nunca para ello de los dependientes de su oficina”.

(Art. 143.—La notificación será firmada por el juez o por el secretario o actuario y por el interesado. Si éste no supiese o no pudiese firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiese firmar lo harán dos testigos requeridos al efecto por el juez o actuario, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de su oficina.)

Al art. 147, redactarlo así: “Ninguna cédula podrá entregarse en día feriado, y en los días hábiles, antes de salir ni después de puesto el sol, salvo los casos de habilitación de días u horas”.

(Art. 147.—Ninguna cédula podrá entregarse en día feriado que no se halle habilitado previamente, o en días hábiles, antes de salir ni después de puesto el sol.)

En el art. 148, agregar después de la palabra: “diligencia” lo siguiente: “que no hubiere practicado personalmente, etc.”.

Suprimir el art. 151.

(Art. 151.—Cuando se ignore la residencia de las personas que han de ser solicitadas o fueren ellas inciertas, el emplazamiento o la citación se hará por edictos fijados en los lugares más públicos, y por los periódicos, agregando al expediente uno de sus números e insertando en él una copia textual de aquélla.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el juez que conociere de la causa, impartirá las órdenes necesarias a las autoridades policiales de la localidad para que se les busque dentro del término que considere prudente señalar.)

Poner como artículo final del Título “De las notificaciones, citaciones y emplazamiento”, el siguiente: “El que practicare las notificaciones, citaciones y emplazamientos contra las disposiciones de este código, a más de responder de los perjuicios que



cause a las partes, incurrirá en una multa de cincuenta a cien pesos la primera vez, perdiendo el empleo en caso de reincidencia”.

Agregar al art. 160 las palabras: “sin que ello paralice la prosecución de la causa”.

Transponer los artículos 162, 163 y 164 al Título “De las notificaciones, citaciones y emplazamientos”, sin otro cambio que éste: en el artículo 162, primer párrafo, donde dice: “y se fijarán”, poner: “y si no, se fijarán, etc.”.

Poner como artículo final de Título “De la rebeldía o contumacia del procesado”, el siguiente: “En cualquiera de los casos de suspensión de la causa por rebeldía, se mandarán devolver los efectos del delito a los terceros irresponsables que justifiquen ser sus dueños”.

Suprimir en el inciso 3º del art. 171, las palabras: “criminal y civilmente”.

Agregar en la primera parte del art. 179, las palabras: “y territorios federales”.

En el art. 187, borrar la expresión: “efecto o”.

Suprimir el art. 193.

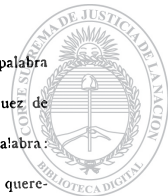
(Art. 193.—En los delitos de que sólo proviene acción privada, el actor podrá seguir en su querrela el procedimiento prescripto en este título, o el civil ordinario, no pudiendo adoptar el uno con posterioridad al otro.)

Redactar el art. 196 en la siguiente forma:

“El sumario es secreto y durante él no hay debates ni defensas. Durante su formación el defensor del procesado podrá hacer las indicaciones y proponer las diligencias que juzgue convenientes, y el juez deberá decretarlas siempre que las reputé conducentes al esclarecimiento de los hechos. La negativa del juez no dará lugar a recurso alguno, debiendo, sin embargo, hacerse constar en el proceso a los efectos que ulteriormente corresponda”.

(Art. 196.—Durante el sumario no se permitirán debates ni defensas. La intervención del defensor del procesado, durante el sumario, sólo podrá permitirse bajo juramento de reserva y a los objetos del artículo siguiente.)

En el art. 201, inc. 1º en lugar de “en el distrito de la capital”, poner: “en el distrito de jurisdicción”; en el inciso 6º del mismo artículo, en vez de... “sin la menor tardanza”, poner:



“dentro de veinticuatro horas”, y en el 12, suprimir la palabra “pública”.

En el art. 207, suprimir la frase: “interviniendo el juez de instrucción”.

En el art. 209 agregar, después de “diligencias”, la palabra: “urgentes”.

Redactar así el art. 219: “El juez podrá permitir al querellante intervenir en todas las diligencias del sumario en que le sea permitido al procesado o su defensor”.

(Art. 219.—El querellante podrá intervenir en todas las diligencias del sumario en que lo sea permitido al defensor del procesado.)

Si el delito fuere público, podrá el juez, sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, declarar a propuesta fiscal o de oficio, secreto el sumario para el querellante.)

Suprimir el art. 220.

(Art. 220.—Los funcionarios de la policía tendrán las mismas facultades que los jueces a quienes competiese la instrucción, para no comunicar al querellante particular las actuaciones que practicaren.)

Redactar el art. 221 del modo siguiente: “En los casos de delitos contra la propiedad, el damnificado que no quiera entablar la acción criminal, tendrá intervención en el sumario, al solo objeto de hacer constar la propiedad de la cosa que reclama”.

(Art. 221.—El actor civil tendrá en el sumario solamente la intervención necesaria para hacer constar la propiedad de la cosa que reclamase y los daños o perjuicios que hubiese sufrido para asegurar la restitución, la reparación o la indemnización correspondiente.)

En el art. 223, en vez de “semana”, poner: “ocho días”.

En el art. 231, en vez de: “art. 310”, poner: “título respectivo”.

En el art. 232, donde dice: “acordándose, etc.”, poner: “ordenándose, etc.”.

Añadir después del art. 248, los siguientes: “Art.... Si durante el viaje de un tren se cometiere algún delito, el conductor deberá tomar las medidas necesarias para asegurar la persona del delincuente, el que será puesto a disposición del juez respectivo en la primera estación que se tocara, acompañándole un parte detallado del hecho criminal, con la expresión de las personas que lo presenciaron. Para el cumplimiento de este deber, el conductor tendrá las facultades y autoridad, que son inherentes a los agentes de policía”.



“Art. Cuando por algún accidente en las vías férreas se produjere la muerte o lesión de cualquier persona, el conductor hará detener el tren a objeto de hacer constar la situación y estado del muerto o herido, debiendo procederse en cuanto a la denuncia del hecho, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior”.

Suprimir los artículos 249 y 250.

(Art. 249.—En los juzgados de la capital habrán dos o más facultativos encargados de auxiliar a la administración de justicia.)

(Art. 250.—En los juzgados en que no hubiere un médico con nombramiento permanente para el desempeño de las funciones de que habla el artículo precedente, se hará en cada caso por el juez, la designación del que deba ejercerlas.)

Añadir al art. 256, en párrafo separado, lo siguiente:

“El silencio del interrogado o su negativa a declarar no hará presunción alguna en su contra”.

Agregar al inc. 1º del art. 258, la frase: “y residencia”; y en el inciso 5º del mismo artículo, después de “afirmativo”, añadir, “que exprese quienes son, y” etc. etc.

En el art. 259, primer párrafo, sustituir la palabra “directa”, por estas otras: “claras y precisas”.

En el art. 261 donde dice: “se suspenderá el examen, etc. etc.” poner: “el juez podrá suspender el examen, etc. etc.”

Suprimir el párrafo final del art. 262.

En el art. 268, en vez de: “sin salvarlas, etc.”, poner “debiendo salvarse las faltas o errores que se hubieran cometido”, etc. etc.

Agregar al art. 275, lo siguiente: “Se le permitirá igualmente la ejecución de aquellos actos civiles urgentes, que no admitan dilación, y que no perjudiquen la responsabilidad civil ni los propósitos del sumario. El juez apreciará en cada caso, sin recurso alguno, si ha de conceder o no la autorización que se le pida”.

En el art. 278, en vez de “catorce” poner: “diez y ocho”, agregando en seguida la expresión: “o mayor de setenta”; y en lugar de “menor”, poner “procesado”.

Añadir, además, en párrafo separado, lo siguiente: “Si el procesado fuere sordo mudo, se practicarán igualmente las diligencias establecidas en los párrafos precedentes”.

Suprimir el art. 279.

(Art. 279.—La edad del procesado se acreditará por los medios que para ello prescribe el código civil.)



Al art. 281, redactarlo así: "En los casos del artículo anterior, el juez podrá suspender la declaración del procesado, mientras se hacen las investigaciones requeridas, sin que esto obste a su detención o incomunicación".

(Art. 281.—A los efectos del artículo anterior, se suspenderá toda declaración del procesado, mientras se hacen las investigaciones requeridas.)

Esto no obstará a su detención, si correspondiere legalmente y aun no hubiese sido decretada o practicada.)

Redactar el art. 288 en la siguiente forma: "Si el presunto reo, al recibirle su declaración, negare su nombre y apellido, su nacionalidad o domicilio, o lo fingiere, se procederá a identificar su persona por medio de testigos de conocimiento, y en su defecto por los medios que parezcan oportunos".

(Art. 288.—Si el presunto reo al recibirle su declaración se negare a dar su nombre o tener el nombre y apellido que se le atribuye, nacionalidad o domicilio, se procederá a identificar su persona por medio de testigos de conocimiento, y en su defecto por los medios que parezcan oportunos.)

En el inciso 7º del art. 294, donde dice: "sus dependientes asalariados", poner "sus dependientes o sirvientes".

Cambiar la redacción del art. 296, por la que sigue: "No podrán ser llamados como testigos":

- 1º El cónyuge del acusado, aun cuando estén legalmente separados.
- 2º Sus ascendientes y descendientes, legítimos o naturales, legalmente reconocidos.
- 3º Sus hermanos legítimos o naturales, igualmente reconocidos.
- 4º Sus afines hasta el segundo grado.
- 5º Los tutores y pupilos, recíprocamente".

(Art. 296.—No podrán ser llamados como testigos:

1.º Los cónyuges, aun cuando estén legalmente separados.

2.º Los ascendientes y descendientes.

3.º Los hermanos y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado civil.

4.º Los afines hasta el segundo grado.

5.º Los tutores y pupilos.)

Suprimir el art. 298.

(Art. 298.—En el caso del artículo anterior, las personas allí indicadas deberán ser advertidas antes de la declaración o en el momento en que el juez conociera su situación, bajo pena de nulidad, que la ley les da el derecho de abstenerse de declarar; y de esto se hará mención expresa.)



Redactar así el art. 308: "Toda persona debidamente citada, está obligada a concurrir a prestar declaración ante el juez de la causa".

(Art. 308.—Toda persona debidamente citada concurrirá a prestar declaración ante su juez.)

En el inc. 2º del art. 309, después de: "gobernadores", agregar: "y vice gobernadores"; y al final del mismo inciso: "y los gobernadores de los territorios federales".

Al inc. 3º del art. 315, redactarlo así: "Si le afecta alguno de los impedimentos o inhabilidades legales que lo incapacite para declarar, las que le serán previamente explicadas".

(En caso de ignorar esas inhabilidades le serán explicadas.)

En el art. 325, en lugar de: "será invocado" poner: "podrá ser invocado".

En el art. 326, después de "que merezca", añadir: "entera" etc.

Redactar el art. 327 en la siguiente forma: "La inhabilidad de los testigos será apreciada:

Por el juez de instrucción, a la época de pronunciarse respecto del sobreseimiento o de la elevación de la causa a plenario.

Por el juez de sentencia, al tiempo de dictarla".

(Art. 327.—La inhabilidad probada de los testigos, produce el efecto de que sus declaraciones se considerarán sin valor ni consecuencia alguna.

Esa inhabilidad será apreciada:

Por el juez de instrucción, al pronunciarse respecto del sobreseimiento.

Por el juez de sentencia, al tiempo de dictarla.)

Refundir en uno solo los artículos 330 y 331.

Al art. 335 redactarlo así: "Los careos de procesados con testigos, podrán tener lugar de oficio o a petición de los primeros o de alguno de ellos".

(Art. 335.—Los careos de procesados con testigos, no podrán tener lugar sino de oficio o a petición de los primeros o de alguno de ellos.)

En el art. 336, después de: "encubridor de un delito", agregar: "o de una tentativa punible".

En el inc. 3º del mismo artículo después de: "intimidación" agregar "dádivas"; y en el inc. 7º del mismo artículo, en vez de "Que el cuerpo del delito, etc." poner: "Que la existencia del delito, etc".



Refundir en uno solo los artículos 337, 338 y 339.

En el art. 339, suprimir desde donde dice: "como por ejemplo, etc. etc." hasta el final.

Añadir al final del art. 340 lo siguiente: "salvo cuando por la calidad de las personas, sus antecedentes u otras circunstancias del hecho resultan presunciones graves en contra del confesante".

En el art. 341, después de "amenazas", añadir "dádivas".

Refundir en uno solo los artículos 342 y 343.

Redactar el art. 346 en la siguiente forma: "Por regla general, los peritos deberán ser dos o más; pero bastará uno:

- 1º Cuando solo éste pueda ser habido.
- 2º Cuando haya peligro en el retardo.
- 3º Cuando el caso sea de poca importancia".

(Art. 346.—Los peritos deberán constituir número impar. Cuando los nombrados por las partes resultasen pares, el juez nombrará otro de oficio.)

En el art. 352, después de: "inhabilidades", poner "para ser testigos" y suprimir desde: "que producen", hasta el final.

Al art. 356 redactarlo así: "Los peritos podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces, bajo las reglas siguientes:

1º Deducida la recusación durante el sumario, si la diligencia pericial fuera urgente, se practicará no obstante dicha recusación, nombrándose, siempre que fuese posible, otro perito acompañante que deberá expedirse por separado.

La recusación se resolverá en pieza separada, y si fuese admitida, se considerará sin valor alguno el informe del recusado.

2º En el plenario, el incidente de recusación suspenderá, mientras no sea resuelta, la diligencia o informe pericial".

(Art. 356.—Los peritos podrán ser recusados cuando mediare alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 351.)

En el art. 358, en vez de párrafo final, poner lo siguiente: "Si no la admitiese, se procederá, como si no se hubiese usado de la facultad de recusar.

De la resolución que se dicte no habrá recurso, pero esta circunstancia puede considerarse por el superior al resolver sobre lo principal".

(El auto que recayere en cualquiera de estos casos será inapelable.)

Substituir el art. 359 por el siguiente: "Decretado el reconocimiento pericial durante el sumario, podrán las partes nombrar



peritos a su costa, que acompañarán a los que el juez haya designado, siempre que dicha diligencia no pueda reproducirse en el plenario.

Durante el plenario, las partes podrán usar libremente del mismo derecho, y aun solicitar cualquier prueba pericial en los casos en que ella fuera procedente”.

(Art. 359.—En el caso del art. 354, el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial.

El mismo derecho tendrá el procesado.

Si los querellantes o procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente de acuerdo entre sí para hacer el nombramiento, si fuere posible. Si no hubiere acuerdo, cada procesado nombrará un perito por su parte.)

Agregar, entre los artículos 361 y 362, el siguiente: “Los peritos practicarán unidos la diligencia, y las partes podrán asistir a ella y hacerles cuantas observaciones quieran, debiendo retirarse cuando aquéllos pasen a discutir y a deliberar”.

Eliminar el párrafo final del art. 364.

(Para esto prescindirán de hipótesis científicas y de teorías no demostradas, concretándose a consignar sus conclusiones con arreglo a las verdades incontrovertidas o a lo menos generalmente aceptadas.)

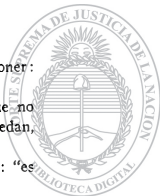
Substituir el art. 368 por el siguiente: “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o desconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica; y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca”.

(Art. 368. — Siempre que los peritos nombrados tuviesen título, y sus conclusiones fuesen terminantemente asertivas y precisas, tendrán éstas fuerza de prueba legal. En los demás casos, podrá el juez separarse del dictamen pericial toda vez que tenga convicción contraria, expresando los fundamentos de esta convicción).

Añadir lo siguiente al art. 369: “sin que esto paralice la prosecución de la causa”.

En el art. 370, en lugar de: “y que de cualquier manera, etc.”, poner: “o que de cualquier manera”, y en vez de “citación”, poner la palabra: “notificación”.

Al art. 371 redactarlo así: “Los instrumentos públicos constituyen plena prueba a menos que sean enervados por otras pruebas”.



En el art. 372, en lugar de “reconocidos legalmente”, poner: “reconocidos en su firma y en su contenido”.

En el inciso 4º del art. 380, donde dice: “es decir, que no puedan, etc”, poner: “es decir, que todos reunidos no puedan, etc”.

En el art. 381, en vez de: “tuviere indicios de”, poner: “es timare”.

Al art. 382 redactarlo así: “La detención y remisión de la correspondencia se ordenará a la oficina de correos o telégrafos respectiva”.

(Art. 382. — Para detener la correspondencia, se solicitará por oficio del administrador de correos o jefe de telégrafos que corresponda.)

Suprimir la palabra “público” en el inciso 1º del art. 388.

Modificar la redacción del art. 390, en su encabezamiento, en la forma siguiente: “Ninguno podrá ser aprehendido, sino por los agentes a quienes la ley da la facultad de hacerlo, y en conformidad a las disposiciones de este código. Sin embargo, cualquiera persona puede aprehender”.

En el inciso 1º del mismo artículo en vez de: “en el momento de ir, etc.”, poner: “en el momento de empezar”, etc.

En el artículo 394, segundo párrafo donde dice: “y si ésta no supiese firmar lo harán dos testigos”, poner: “y si ésta no supiese o no quisiese firmar, se hará constar en el acta”.

En el art. 404, tercer párrafo, después de: “juzgados seccionales”, añadir: “y de los territorios nacionales”.

Al art. 413, segundo párrafo, agregarle, después de las palabras: “al inculpado” “o su defensor”.

Añadir al primer párrafo del art. 414 lo que sigue: “y fijará un término al fiador para que lo presente, bajo apercebimiento de hacerse efectiva la garantía”.

En el segundo párrafo del mismo artículo, borrar las palabras: “si hubiese sentencia ejecutoriada contra el procesado”.

Redactar el art. 415 en la siguiente forma: “Si el procesado compareciese o fuese presentado por el fiador antes de hacerse efectiva la garantía, quedará revocado el auto que ordenó su efectividad, siendo los costos y costas a cargo del fiador”.

(Art. 415. — El auto que ordene la efectividad de la responsabilidad del fiador, deberá revocarse, sin embargo, si el inculpado se presentare en el término de cinco días, después de notificado, y probare



haber estado legalmente impedido de comparecer y obedecer a orden o intimación judicial.

El juez ordenará las diligencias o la información que considere necesarias a los efectos de esta justificación, procediendo breve y sumariamente y oyendo antes de resolver al ministerio fiscal).

En el art. 421, donde dice: "o en cualquier otro, etc., etc.," poner: "o en cualquier otro lugar, etc., etc."

Refundir en uno solo los artículos 422 y 423, haciendo la reforma correspondiente al principio del último.

Añadir al inciso 2º del art. 424, las palabras: "fuesen o no licitas".

Redactar el art. 430, en la forma siguiente: "El registro se hará a presencia del interesado o de la persona a quien encomendare sus veces.

Si aquel no fuese habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia, mayor de edad.

Si no lo hubiere, se hará a presencia de dos testigos vecinos".

(Art. 430. — El interesado o su representante tienen derecho a presenciar la pesquisa).

En el art. 432, párrafo segundo, modificar desde donde dice: "por el juez, secretario, etc.", en la siguiente forma: "por el juez secretario y el interesado o sus representantes".

Al art. 433, refundirlo en el anterior, haciéndose el correspondiente cambio en la redacción.

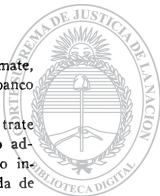
En el art. 435, primer párrafo, después de la palabra: "garantir", añadir: "la pena pecuniaria y etc.,".

Substituir el art. 436 por el siguiente: "La fijación de la cantidad por la cual deberá trabarse el embargo, será hecha por el juez en el mismo auto en que lo decrete".

(Art. 436. — La determinación de la cantidad por la cual deberá trabarse el embargo u ofrecerse la caución, deberá ser hecha, en todos los casos, por el juez en el mismo auto en que decrete una u otra garantía.)

En el art. 439, en lugar de: "para cuyo afianzamiento se hubiese hecho el embargo, etc., etc.", poner: "que corresponda, etc., etc."

Redactar el art. 440, del siguiente modo: "Verificado el embargo, se requerirá al procesado para que manifieste si opta porque se enajenen los bienes embargados o porque se conserven en depósito y administración.



Si optase por la enajenación, procederá a la venta en remate, hasta cubrir la cantidad señalada, que se depositará en el banco nacional.

Si optase por el depósito y administración, cuando se trate de bienes muebles, se nombrará por el juez un depositario administrador de responsabilidad, que recibirá los bienes bajo inventario, y se obligará a rendir al juzgado cuenta justificada de sus gastos y productos, cuando se le mande”.

(Art. 440 — Si los bienes embargados fuesen semovientes, se requerirá al procesado para que manifieste si opta porque se enajenen, o porque se conserven en depósito y administración. Si optare por la enajenación, que se depositará en el banco nacional.

Si optare por el depósito y administración, se nombrará por el juez un depositario administrador, que recibirá los bienes bajo inventario, y se obligará a rendir al juzgado cuenta justificada de sus gastos y productos, cuando se le mande).

En el art. 442, segundo párrafo, en lugar de: “el registro de hipotecas”, poner: “los registros respectivos”.

Art. 447, añadirle, al final, lo siguiente: “no admitiéndose las apelaciones que se interpongan sino en el efecto devolutivo”.

En el art. 448, en vez de: “del código penal”, poner “legales”.

Poner al final del título: “De los embargos”, en artículo separado, lo que sigue: “Las tercerías que se deduzcan, serán sustentadas en la forma que establece el código de procedimientos civiles”.

Agregar al art. 451 lo siguiente: “y los autos que en él se dicten, serán solo apelables en el efecto devolutivo”.

En el art. 452, en seguida de: “y la elevará”, añadir: “bajo recibo”, etc.

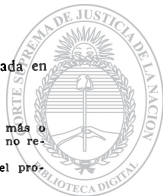
Agregar al art. 454, párrafo separado, lo que sigue:

“El recurso será admitido en ambos efectos, pero solo en relación”.

Suprimir el art. 455.

(Art. 455. — El juez de sentencia que recibiere el proceso y piezas de convicción, hará constar en una acta los pliegos y piezas que le hubiere remitido el juez de instrucción).

Trasponer los arts. 456, 457, 458, 459, 460 y 461, al principio del título: “De la elevación de la causa a plenario”, sin más modificación que el cambio de redacción en el principio del art. 456, poniéndose: “Recibido el proceso, el juez de sentencia correrá



vista, etc., etc.", y substituir la palabra "federales" empleada en el segundo párrafo del art. 459, por: "judiciales".

En el art. 465, suprimir el inc. 3º.

(Art. 465. — 3º: Cuando sólo hubiera sospechas o indicios más o menos fundados contra alguna o algunas personas, siempre que no revistiere la importancia de una prueba legal.

En ningún caso podrá ser decretado sin la conformidad del procesado).

En el art. 469, en lugar de: "libremente" poner: "definitivamente".

Poner como primer párrafo del art. 471, lo siguiente: "Antes de decretarse el sobreseimiento serán oídos el acusador particular y el ministerio fiscal quienes deberán expedirse dentro de tercero día".

Poner como artículo final del título: "De la conclusión del sumario", el siguiente:

"Art. ... El sumario no deberá durar más de treinta días en la capital y sesenta en las demás secciones, no computándose en dichos términos las demoras por articulaciones maliciosas del procesado o por diligenciamiento de oficios o exhortos, cuando el retardo fuese independiente de la voluntad del juzgado.

Transcurridos dichos términos, el juez sobreseerá o elevará la causa a p'enario, conforme a las disposiciones de este código".

Suprimir los dos párrafos finales del art. 472.

(La prescripción de la acción comienza a correr desde el día en que se ha cometido la infracción criminal; pero, si se hubieran practicado actuaciones judiciales, el término empezará a correr desde la última diligencia.

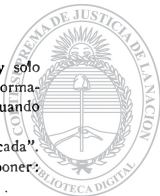
El término para la prescripción de la pena empezará a correr, desde el día en que la sentencia queda ejecutoriada, o si la sentencia ha empezado a cumplirse, desde el día en que la ejecución se interrumpa).

En el art. 482, entre el primero y segundo párrafo, poner el siguiente: "En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones dilatorias".

Suprimir el art. 484.

(Art. 484. — Si el juez no estimare suficientemente justificada la declinatoria, no hará lugar a ella, pronunciándose sobre las demás excepciones opuestas).

Añadir lo siguiente, como párrafo separado, al art. 486: "En el caso en que las excepciones se opusiesen después de concluido el sumario, se suspenderá la sustanciación de la causa principal.



Exceptuase el caso en que fuesen varios los procesados y solo alguno o algunos dedujesen excepciones, en cuyo caso se formará pieza separada en que se discutirán y resolverán, continuando la causa principal con los demás procesados”.

En el art. 489, suprimir las palabras: “sin causa justificada”.

En el art. 496, en lugar de: “las comunicaciones” poner: “la viabilidad”.

En el art. 512, suprimir las palabras: “con arreglo al art. 323”.

Al art. 516, redactarlo así:

“El juez dictará la providencia de autos y señalará un día, con el intervalo de cinco, cuando menos, para que informen ante él in voce, el acusador particular, el fiscal y el defensor del procesado los que podrán hacer entrega al juez en el mismo acto, de los escritos o apuntes que juzgasen convenientes”.

(Art. 516. — El juez dictará la providencia de autos y señalará un día, con el intervalo de cinco cuando menos, para que informen ante él in voce, el acusador y el defensor. A esta audiencia podrá asistir el procesado y ser oído en su defensa si lo solicitare).

Suprimir el párrafo segundo del art. 518.

(En este término no se contarán los días empleados en el cumplimiento de las diligencias que ordenare el juez para mejor proveer).

En el art. 549, regla primera, borrar la frase: “en su defecto”; y añadir entre la primera y la segunda, separadamente, ésta otra: “Se consignarán los hechos que se consideren probados y que estuviesen relacionados con el punto o puntos que debe abrazar el fallo”.

Suprimir el art. 521.

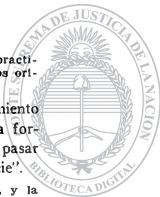
(Art. 521. — En las sentencias condenatorias a penas privativas de la libertad por tiempo determinado, la pena empezará a contarse desde el día en que el procesado hubiere sido constituido en prisión preventiva).

En el art. 525, después de: “ejecutoria”, añadir: “para el recurrente”.

En el art. 526, suprimir las palabras finales: “por aquéllas”.

Modificar el principio del art. 528 en la siguiente forma: “La apelación podrá deducirse por diligencia o por escrito. En este último caso, el escrito, etc., etc.”.

En el art. 532, agregar al final del primer párrafo las palabras: “dentro de tercero día” y suprimir el párrafo segundo.



(Pero si estuviere ejecutado el auto apelado o no hubiese que practicar diligencia alguna para su cumplimiento, se remitirán los autos originales).

Poner en vez del art 536 el siguiente: "Si el procedimiento estuviere arreglado a derecho y la nulidad consistiese en la forma de la sentencia, el tribunal así lo declarará, y mandará pasar la causa a otro juez de primera instancia para que sentencie".

(Art. 536. — Si el procedimiento fuere arreglado a derecho, y la nulidad consistiere en la forma de la sentencia, el tribunal declarando ésta por nula, proveerá también sobre el fondo de la causa).

Trasponer el capítulo V. "Recursos contra las providencias, y fallos de la corte suprema y de la cámara de apelaciones", al final del título VII "Del modo de proceder en segunda instancia", como capítulo II de este título.

Añadir al capítulo "Recursos contra las providencias y fallos de la corte suprema y de la cámara de apelaciones", los siguientes artículos:

"Art. . . Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, aunque hayan sido pronunciadas por la suprema corte de justicia, en los casos siguientes:

- 1º Cuando consta de un modo indudable que el delito fué cometido por una sola persona, y habiendo sido juzgado por dos o más jueces, aparecen como reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas.
- 2º Cuando se haya condenado a alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de otro cuya existencia se acredite después de la sentencia.
- 3º Cuando se haya condenado a alguno por resolución cuyo fundamento haya sido un documento, que después se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal; o cuando el condenado hallase o cobrase documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte acusada.
- 4º Cuando una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal o haya disminuido su penalidad.



Art... El recurso de revisión podrá promoverse por el condenado o por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos y por el ministerio fiscal.

La muerte del condenado no impide que se deduzca para rehabilitar su memoria, o procurar el castigo del verdadero culpable.

Art... La suprema corte o la cámara de apelaciones, según los casos, conocerán de este recurso, oyendo al ministerio fiscal y procediendo en lo demás como queda establecido para los casos de apelación libre .

Art... En el caso del inciso 1º del art.... anulará las sentencias, si existiese efectivamente contradicción en la designación de las personas que han sido declaradas delincuentes, y dispondrá que se instruya de nuevo la causa por el juez a quien corresponda el conocimiento del delito.

En el caso del inciso 2º, anulará la sentencia y ordenará que se ponga inmediatamente en libertad al condenado, si resultase acreditada la identidad de la persona, por cuya muerte se hizo cargo.

En los casos del inciso 3º, anulará también la sentencia, y resolverá que se instruya de nuevo la causa por el juez competente.

Y en el caso del inciso 4º, decidirá que se ponga en libertad al condenado o que se le disminuya la pena, según corresponda.

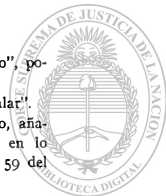
Art... El tribunal podrá, para mejor proveer, decretar las diligencias que juzgue necesarias.

Art... Para que sea admisible el recurso deberá acompañarse, al deducirse, testimonios de la sentencia, los documentos y pruebas correspondientes. En caso contrario, será desechado de plano".

Al art. 551, redactarlo así:

"Si el apelante no expresare agravios en el término competente, acusada la rebeldía, se despachará ésta en el término de veinticuatro horas, y pasadas éstas, se declarará decaído su derecho para expresar agravios, siguiendo su curso la instancia".

(Art. 551. — Si el apelante no expresare agravios en el término competente, acusada la rebeldía, se despachará ésta con el término de veinte y cuatro horas, y pasadas éstas, se declarará desierto el recurso y se devolverán los autos).



En el art. 557, donde dice: “el defensor del procesado”, poner: “el procesado o su defensor”.

En el art. 564, en vez de señales, poner: “debe señalar”.

En el art. 578, suprimir los párrafos tercero y cuarto, añadiendo al párrafo segundo lo siguiente: “procediéndose en lo demás de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 56 a 59 del código penal.

(En todos los casos se ofrecerá al reo la asistencia de un sacerdote o ministro de la religión a que pertenezca. Todo condenado a muerte será fusilado. La pena se ejecutará en el día y hora designados.)

Poner en seguida, como artículo separado, lo siguiente: “Todo condenado a muerte será fusilado”. Y suprimir los artículos 579, 580 y 581.

(Art. 579. — El juez que hubiere conocido de la causa, presidirá la ejecución acompañado del secretario, y no pudiendo hacerlo personalmente, por el lugar en que ésta se practique, procederá en la forma establecida en el art. 577).

(Art. 580. — El juez de la ejecución requerirá de quien corresponda, la fuerza militar necesaria para acompañar al reo al lugar de la ejecución y dar cumplimiento a la sentencia).

(Art. 581. — Concluida la ejecución, se extenderá en los autos diligencia por el secretario que hubiere asistido a ella, dándose conocimiento inmediatamente al tribunal).

Suprimir el art. 584.

(Art. 584. — En la pena de confinamiento, el juez de la causa dará aviso a la autoridad del lugar en que se ha de cumplir, remitiéndole al efecto un testimonio literal de la sentencia).

Añadir al primer párrafo del art. 585, las palabras “y en la capital de la república”.

Agregar al art. 589, las palabras: “para la ejecución de las sentencias”.

En el libro cuarto, título I “De los juicios correccionales”, modificar la leyenda del cap. I, poniendo: “Procedimiento en materia correccional”.

Añadir al art. 592, en párrafo separado, lo que sigue: “El juicio verbal a que se refiere este artículo, se celebrará dentro del término de tres días, pudiendo solo prorrogarse por causa bastante, que se hará constar en el expediente”.

Añadir después del art. 593, en artículo separado lo que sigue: “Dentro de veinticuatro horas contadas desde que el procesado se encuentre a disposición del juez, se le tomará la declaración indagatoria, a la que podrá asistir el defensor”.



En el art. 594, agregar, después de la palabra: “celebración” “o continuación”.

En el art. 597, donde dice: “en cuyo caso se observará etc.”, poner: “debiendo entonces observarse”, etc.

En el art. 598, en vez de: “no formulare acusación”, poner: “no hallare causa bastante para acusar”.

En el art. 602, suprimir desde: “previo el otorgamiento, etc.”, hasta el final, poniendo en reemplazo “sometiéndolo a la vigilancia de la autoridad”.

Agregar al art. 604, estas palabras: “dentro de un término que no exceda de quince días”.

Modificar el rubro del tit. II, Libro cuarto, poniendo simplemente: “Del procedimiento en los juicios sobre faltas” y añadir como artículos primeros del mismo título los siguientes:

“Art... El procedimiento ante el jefe de policía, y las autoridades municipales, será verbal y actuado. Su carácter es breve y sumario”.

“Art... Concluida la investigación, el jefe o la autoridad municipal, en su caso, dictará la resolución que corresponda dentro del término de veinticuatro horas”.

Añadir después del art. 608 el siguiente:

“Art... El tiempo que dure el procedimiento se descontará siempre de la pena”.

En el art. 613, en lugar de: “querellado” poner: “acusado”.

Substituir el primer párrafo del art. 623 por el siguiente: “Cuando, sea necesario extraer del lugar en que se encuentre un instrumento auténtico, el secretario del juzgado dejará al depositario una copia exacta, que será concertada y firmada por ambos, dándole el recibo correspondiente para la constancia del hecho. En el proceso se consignará la anotación respectiva que deberá ser firmada por el juez, por el secretario y por la persona que hace la entrega. Si ésta se hallase fuera del lugar de la residencia del juzgado, el documento se pedirá por medio de exhorto u oficio al juez territorial, quien concertará o hará concertar por un escribano subalterno suyo, la copia que debe dejarse en poder del depositario. La anotación que en este caso se haga en el proceso, se firmará únicamente por el juez y el secretario de la causa”.



(Cuando sea necesario extraer del lugar en que se encuentre, un instrumento auténtico, se dejará al depositario una copia exacta, dándose el recibo correspondiente para la constancia del hecho y consignándose en el proceso la anotación respectiva que deberá ser firmada por el juez, por el secretario y por la persona que hace la entrega. Si ésta se hallare fuera del lugar de la residencia del juzgado, la anotación será firmada únicamente por el juez y el secretario.)

En el art. 624, en seguida de: “fuesen” añadir: “éstos”.

En el art. 625, en lugar de: “el título XIII del libro II”, poner: “éste código”.

Al art. 629 agregarle lo que sigue, en párrafo separado:

“Si estuviese protocolizado, se anotará la declaración hecha en la misma sentencia, al margen de su matriz en los testimonios que se hubiesen presentado, y en el registro respectivo”.

Redactar en la forma siguiente el art. 631: “Los instrumentos que hayan servido para el cotejo serán devueltos a quien corresponda dentro de los tres días siguientes a la fecha de la sentencia ejecutoriada”.

(Art. 631. — Las escrituras que hayan servido para el cotejo, serán devueltas a quien corresponda)

Modificar el encabezamiento del art. 637 en esta forma: “A los efectos del artículo precedente, los jueces federales, del crimen de la capital y los de los territorios nacionales, conocerán del mencionado recurso en todos los casos, con excepción de los siguientes:”

En el art. 639, donde dice: “prisión” en el segundo párrafo poner “arresto”.

En el art. 642, donde dice: “territorio de la república”, poner: “territorio de su jurisdicción”.

En el art. 645, donde dice: “que la fianza puede ser admitida”, poner: “que la ley permita”.

En el art. 649, inc. 4º suprimir la expresión: “anterior a la fecha del auto”.

En el art. 650, añadir al final del segundo párrafo las palabras siguientes: “sin perjuicio de la responsabilidad en que el funcionario hubiese incurrido por su desobediencia”.

Al art. 661 redactarlo así: “Es pasible de una multa de quinientos a mil pesos o de arresto por cuatro a ocho meses, o de una y otra, todo el que teniendo en custodia algún individuo que con arreglo a las disposiciones de este código sea acreedor a un auto de “habeas corpus” para averiguar la causa de su deten-



ción, transfiera el preso a la custodia de otra persona, o lo ponga bajo el poder o autoridad de otro o lo oculte, o cambie el lugar de su detención, con el designio o propósito de eludir la expedición, notificación o efectos del auto”.

(Art. 661. — Son pasibles de una multa de quinientos a mil pesos nacionales o de prisión por cuatro a ocho meses, o de una y otra:

1.º — Todo funcionario de los que habla el art. 642 que teniendo en custodia algún individuo que con arreglo a las disposiciones de este código sea acreedor a un auto de habeas corpus para averiguar la causa de su detención, transfiera el preso a la custodia de otra persona, o la ponga bajo el poder de otro, o la oculte, o cambie el lugar de su detención, con el designio o propósito de eludir la expedición o efectos del auto.

2.º — Procede igual disposición, cuando teniendo el funcionario en su poder alguna persona en cuyo favor se haya expedido un auto de habeas corpus, transfiera dicha persona a la custodia de otra, la coloque bajo el poder de otro, o la oculte o cambie el lugar de su prisión, con el propósito de eludir la notificación de dicho auto o evitar su efecto).

Suprimir el art. 622.

(Art. 662. — Si algún funcionario de los que habla el art. 642 sea por sí solo o como miembro de un tribunal o corporación, o en ejecución de alguna orden, sentencia o procedimiento de éstos constituyere de nuevo a sabiendas en prisión o aprehendiese por la misma causa, y en idénticas circunstancias a alguna persona puesta en libertad por auto de habeas corpus, o a sabiendas cooperase a nueva prisión, incurrirá en una multa de mil pesos nacionales a favor de la parte detenida.

Cuando el funcionario autor de la nueva orden de prisión fuere de los que habla el art. 648, el juez procederá con arreglo a lo que prescribe el art. 653).

En el art. 663, después de la palabra: “término”, añadir: “que no pase”.

Añadir después del art. 668, el siguiente: “El juez que conociere de la causa, acordará de oficio o a instancia de parte, en resolución legalmente fundada, pedir la extradición desde el momento en que por el estado del proceso y por su resultado fuese procedente”.

En el art. 672, después de la palabra: “declaración”, agregar: “dentro del término de cuarenta y ocho horas”.

Añadir al final del capítulo: “Del procedimiento para la extradición de criminales con países extranjeros”, los artículos siguientes:

“Art. ... En caso de urgencia, los tribunales de la república podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a solicitud directa de las autoridades judiciales de un país ligado con

la república por un tratado de extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión, y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido.

“El pedido podrá hacerse por medio del correo o del telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la vía diplomática al ministro de relaciones exteriores.

“Los tribunales que hubieren practicado el arresto, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del ministro de relaciones exteriores, por intermedio del de justicia”.

“Art... El extranjero arrestado en virtud de las disposiciones del artículo anterior, será puesto en libertad, si en el término de quince días, tratándose de un país limítrofe y de mes y medio tratándose de otros, no recibiese el gobierno argentino el pedido diplomático de extradición en debida forma”.

“Art.... El arresto provisorio de un extranjero podrá ordenarse también a pedido de un ministro diplomático hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición y serán aplicables a este caso las disposiciones de los dos artículos precedentes”.

“Art... Todo extranjero arrestado en virtud de un pedido de extradición podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en las mismas condiciones que si el delito imputado hubiese sido ejecutado en la república”.

En el art. 690, después de: “o los de la capital”, añadir: “y territorios nacionales”.

Suprimir los artículos 709, 713, 714 y 715.

(Art. 709. — Toda resolución sobre punto contradictorio de procedimiento criminal debe ser fundada, en disposición expresa de este código, y a falta de ella, en disposiciones vigentes antes de su promulgación, no derogadas).

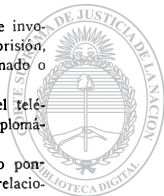
(Art. 713. — Las disposiciones del presente código relativas a la justicia nacional u ordinaria de la capital, reirán para los territorios nacionales tan pronto como se organice en ellos una justicia local.

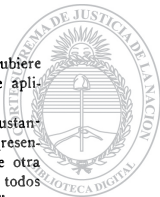
Mientras esto no suceda, el juez federal más próximo al lugar de un delito cometido en cualquier territorio nacional o aquél en cuya jurisdicción se halle el delincuente podrá conocer y juzgar del hecho, aplicando al caso la presente ley).

(Art. 714. — El presente código comenzará a regir áos meses después de su promulgación).

(Art. 715. — Quedan derogadas las leyes de procedimiento en materia criminal, que se opongan a las prescripciones de este código).

Poner como artículos finales los siguientes:





“Art... Cuando no se observaren los términos y no hubiere multa especialmente determinada para la inobservancia, se aplicará la de cincuenta a cien pesos”.

“Art... Las multas establecidas por demoras en la sustanciación de las causas, deberán ser solicitadas por los representantes del ministerio fiscal y aplicarse de oficio a falta de otra gestión, por los jueces o tribunales, incurriendo en ellas todos los funcionarios que no las hubiesen solicitado o aplicado”.

“Art... Toda causa deberá terminarse completamente en el término de dos años, no computándose las demoras a que se refiere el art...”

Sala de comisiones, Buenos Aires, agosto 18 de 1888. — *Wenceslao Escalante*, — *Ernesto Colombres*, — *Benjamín Basualdo*, — *Estanislao S. Zeballos*, — *Guillermo Torres*.

A la honorable cámara de diputados de la nación.

La comisión de códigos ha terminado la revisión del proyecto de código de procedimientos en materia penal, encomendado por V. H. a su estudio, y tiene la satisfacción de someter a la ilustrada consideración de la honorable cámara, el resultado de sus trabajos en el dictamen y proyecto de ley adjuntos.

Desde hace algunos años, pocas leyes se habrán dictado por el congreso, que respondan como ésta a una necesidad tan premiosamente sentida; pocas de su trascendencia, por lo delicado y múltiple de las materias que forman el objeto de sus preceptos; y pocas también honorable cámara en que la comisión encargada de dictaminar a su respecto haya encontrado tan allanada su difícil tarea, por los extensos estudios de juriconsultos distinguidos que han precedido a sus deliberaciones, procurándole los valiosos elementos que le han servido para la formación de su juicio y para el mejor acierto de sus resoluciones.

Son conocidos los antecedentes del asunto. El 27 de marzo de 1882 el exmo. señor presidente de la república encomendó al Dr. Don Manuel Obarrio la redacción de un proyecto de código de procedimientos en materia penal para los tribunales de la nación. En 15 de julio del mismo año el doctor Obarrio dió cima a su obra y remitióla al poder ejecutivo acompañada de una eruditísima nota explicativa de los principios sobre que el



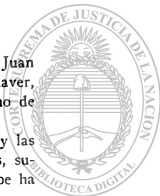
proyecto descansa, su plan, y de las soluciones principales que consagra en ciertos puntos del derecho criminal aún sometidos a controversia, “y sobre los que ni la legislación ni la doctrina se han pronunciado hasta el presente de una manera general y uniforme” según las propias palabras del autor.

Casi un año transcurrió desde entonces, y en 10 de abril de 1883, el poder ejecutivo expidió un decreto en que se expresa: que habiendo verdadera conveniencia en que antes de ser sometido a la aprobación legislativa el proyecto de código de procedimientos en materia penal, redactado por el Dr. Manuel Obarrio, fuera estudiado por personas que a su ilustración reconocida, reúnan la práctica en el ejercicio de la magistratura, las reformas propuestas en él, a fin de dejar establecida la bondad de ellas, haciendo por este medio más fácil y breve la discusión del proyecto por las honorables cámaras que podrían prestarle su sanción en el menor tiempo posible, respondiendo así a la urgencia con que esa ley era reclamada para la buena administración de justicia. Se nombraba una comisión compuesta por los Dres. D. Filemón Posse, miembro de la cámara de apelaciones en lo civil, Dr. Juan E. Barra, miembro de la cámara de apelaciones en lo criminal, y Dr. Onésimo Leguizamón, ex-ministro de la suprema corte de justicia de la nación, con el objeto de que estudiara el proyecto del Dr. Obarrio, y aconsejara las reformas que creyese conveniente introducir en él.

Esta comisión dió cuenta de su cometido en 28 de julio del mismo año, exponiendo en nota sucinta y prolija, el fundamento de cada una de las modificaciones por ella aconsejadas.

El proyecto del Dr. Obarrio así reformado, fué remitido por el poder ejecutivo al honorable congreso el 20 de agosto de 1884; él ha sido la base de los trabajos de la comisión que suscribe, y como se vé, llegaba a la consideración legislativa, rodeado de todo el prestigio que le daban los maduros estudios de que había sido objeto por parte de los jurisconsultos nombrados, cuya competencia es notoria.

Pero no han sido estos los únicos antecedentes ilustrativos de que ha dispuesto la comisión; y aparte de las luces que proyectan las doctrinas de los tratadistas y la legislación comparada, ha tenido la fortuna de contar con otros elementos de estudio de carácter nacional contenidos en el proyecto de código de



procedimientos en lo criminal, redactado por los doctores Juan José Montes de Oca, Manuel Obarrio y Antonio A. Malaver, en virtud de encargos que les fué conferidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en 18 de agosto de 1885.

El texto de este proyecto, así como sus concordanancias y las interesantes notas que llevan al pie los diferentes artículos, suministran abundantes materiales que la comisión que suscribe ha sabido utilizar debidamente.

Establecidos los antecedentes del proyecto en discusión, que confirman lo ya dicho de haber encontrado la comisión bastante allanada su tarea de expedirse en este difícil asunto, debemos ocuparnos ahora de la primordial dificultad con que tropezó ella desde el primer momento, antes de decidirse por la adopción de tal código, determinando de los que sobre enjuiciamiento criminal encontró en su cartera.

Sucede que fuera de los códigos de procedimiento criminal de que se ha hecho ya mención, confeccionado bajo las bases de los tribunales de derecho, el poder ejecutivo nacional, con fecha 1º de septiembre de 1884, elevó a la consideración de las cámaras legislativas, un proyecto de ley sobre enjuiciamiento por jurados, redactado por el Dr. Domínguez; y la coexistencia de proyectos tan opuestos en su base fundamental, en la cartera de la comisión encargada de su estudio, trajo, como es consiguiente, dudas respecto del sistema a adoptar.

Estas dudas generaron la consulta que en la sesión del 18 de mayo del año anterior, hizo la comisión de códigos de entonces a la honorable cámara por intermedio de un miembro distinguido de ella, el señor Dr. González.

La comisión pretendía que, dadas las dificultades hasta de carácter constitucional que habían surgido en su seno, respecto del sistema que habría de tomarse como punto de partida, la cámara hiciera una declaración previa y explícita que le sirviera de norte seguro en sus trabajos sobre la materia. Después de un prolongado debate, la cámara, procediendo discreta y cuerdamente, resolvió que tal conducta no tenía asidero en las prescripciones reglamentarias, y que lo correcto y del deber de la comisión era expedirse derechamente sobre el principio fundamental y los detalles del proyecto de ley que contara con su aprobación y simpatía.



En virtud de esta resolución, el primer cuidado de la comisión que suscribe, desde las sesiones preliminares que celebró en los comienzos del actual período legislativo, fué la dilucidación del sistema que había de adoptar para sus trabajos; si el juicio por jurados que, como lo expresa correctamente el doctor Obarrio, deja la apreciación de los hechos criminosos a las pruebas de convicción moral, a la conciencia de ciudadanos que sin tener carácter público permanente, forman en cada caso el tribunal que juzga respecto de esos hechos; o el juicio librado a los tribunales de derecho, que reposa sobre las pruebas legales, que aprecia cada circunstancia del proceso, de acuerdo con la ley escrita, y que declara la culpabilidad o inculpabilidad de los encausados, según el mérito jurídico de los antecedentes obrados en el juicio.

Abordada así la cuestión con entera franqueza, la comisión tuvo la satisfacción de encontrar la más perfecta armonía de opiniones entre sus miembros que unánimemente se pronunciaron por el segundo de los sistemas enunciados; y como se hubiera suscitado la duda de si entraba en las atribuciones del congreso dictar la ley de enjuiciamiento criminal bajo la expresada base, atendiendo a las preceptos constitucionales que consagran el jurado, la comisión ha tenido que ocuparse preferentemente de esclarecer la importancia y alcance de esta objeción de carácter previo y aparentemente grave.

Que el jurado, considerado del punto de vista institucional, no puede ser objetado entre nosotros, es tan evidente para la comisión como que el congreso, mientras no conceptúe oportuno su establecimiento, puede apartarse de él y legislar soberanamente bajo el concepto opuesto de los tribunales ordinarios.

Respecto de los asuntos criminales pertenecientes al fuero federal, rige lo dispuesto en el art. 102 de la constitución nacional, que dice: Todos los juicios ordinarios que se derivan del derecho de acusación concedido a la cámara de diputados, se terminarán por jurados, "luego que se establezca en la república esta institución", y como según el artículo 24 de la misma constitución, es al congreso a quien corresponde "promover" el establecimiento del juicio por jurados, se deduce lógicamente, como lo observa un reputado jurista argentino, que las palabras finales de aquel artículo importan dejar, con sabia previsión, al criterio de los



legisladores, la determinación de la época en que deban ser establecidos los jurys de enjuiciamiento.

Ahora, en cuanto a los delitos que no surten el fuero federal cometidos en la capital de la república o en los territorios nacionales, la comisión ha creído que el congreso, en su carácter de legislatura local, tiene las mismas facultades que las legislaturas provinciales para dictar las leyes de forma que reputé más adecuadas a las necesidades y más compatibles con el estado de civilidad de las localidades sometidas a su jurisdicción.

Y como no es discutible que las legislaturas de provincia tengan la ilimitada facultad de reformar sus procedimientos criminales, adoptando el sistema de enjuiciamiento que contare con sus preferencias, la comisión ha conceptuado que tal atribución no puede serle contestada al congreso cuando actúa como legislatura local de la capital y territorios federales.

Disipadas de esta suerte las dudas constitucionales, quedaba a considerar el punto referente a la oportunidad de "promover" por el congreso con ocasión de esta ley, el establecimiento del juicio por jurados.

La comisión ha pensado que no; que sería una transición demasiado brusca y no exenta de peligros pretender pasar del estado rudimentario en que se desenvuelve nuestra vida democrática, así como del caos reinante en la actualidad, en punto a procedimientos criminales, al de alta perfección social, cultura general y hábitos de gobierno propio que presupone y requiere el jurado para ser una institución viable y fructífera.

Las grandes reformas, sobre todo en países nuevos como el nuestro, no pueden implantarse de improviso: ellas deben brotar espontáneamente, si es permitida la expresión, como el resultado de un proceso de evolución gradual y progresivo, en pos del perfeccionamiento.

Hoy que en materia de procedimientos criminales no tenemos más legislación ni doctrina en vigencia que el informe hacinaamiento de las antiguas disposiciones del atrasado derecho colonial, entremezcladas con leyes sueltas contemporáneas, debemos contentarnos por el momento, con dar forma a lo informe sancionando en los preceptos de un código, ordenando los principios más avanzados de la moderna legislación penal.

Así se prepara el camino para que, en tiempo no lejano, si las circunstancias lo requieren, fluya sin dificultades, no *ex abrupto*, como tendría que serlo en la actualidad, la institución del jurado.

Por otra parte, la comisión, siempre de acuerdo con las conclusiones del método experimental, piensa que la mejor manera de promover eficazmente el establecimiento del jurado, consistiría en su adopción para juicios especiales, como los delitos de imprenta, por ejemplo.

Establecido en esa forma se daría un paso hacia adelante en el sentido de su más eficiente y benéfica radicación, permitiéndonos la experiencia recogida en estos ensayos aislados, palpar los inconvenientes o abusos a que pudiera prestarse en la práctica, al par que los medios más conducentes de corregirlos.

Tales son, someramente expuestas, las razones que en general, han servido de fundamento al dictamen adjunto.

Entrando ahora en ciertos pormenores, V. H. podrá apercibirse de que la mayor parte de las reformas aconsejadas por la comisión, consisten en aclaraciones de concepto, supresión de algunos artículos, por redundantes o por no corresponder la materia sobre que versan a un código de forma, y en la agregación de otros nuevos que, en nuestro sentir son indispensables para el complemento de la obra.

El art. 11 del proyecto, inspirado sin duda en el propósito recomendable de restringir en lo posible los casos de aplicación de la pena capital, había establecido que en ella no podría imponerse en última instancia, sino confirmando la sentencia de primera instancia, en tribunal íntegro y por unanimidad de votos.

En el seno de la comisión no han prevalecido ideas tan exageradamente abolicionistas y si bien ha convenido ella en que la pena de muerte debe reservarse para casos excepcionales, no ha reputado prudente llevar las restricciones legislativas hasta el extremo de hacer ilusoria, por cortapisas de forma, la aplicación de una pena que, de suyo, está ya circunscripta por el código penal a pocos y determinados delitos.

El aumento aterrador de la criminalidad, en sus formas más brutales y refinadas, es un hecho, aquí como en el viejo mundo, que las estadísticas revelan y que se impone a la reflexión de los pensadores, señalando el peligro inminente a que veríanse ex-





puestas las sociedades, si las leyes represivas sufrieran demasiado la influencia de ese sentimentalismo levantado y generoso que domina a muchos espíritus, induciéndoles a abogar por la abolición de la pena capital.

Hechos recientes, que han conmovido profundamente nuestra sociedad, han sido reveladores, por otra parte, del riesgo que se corre al exigir en todos los casos la unanimidad de votos en los miembros del tribunal que conozca de la causa en última instancia. Bastaría la disidencia de uno, por motivos más o menos fundados o respetables para que, no obstante el fallo condenatorio de primera instancia y la necesidad de dar satisfacción a la seguridad social, la pena de muerte quedara sin aplicarse en un caso claro e indubitable, ateniéndose a las prescripciones explícitas del código penal.

En este orden de ideas, la comisión ha establecido que la unanimidad de votos sólo será exigida en el tribunal cuando su fallo fuese revocatorio del de primera instancia, y que cuando fuese confirmatorio, la disidencia de uno de sus miembros no será obstáculo para la aplicación de la última pena. De esta suerte redactado el artículo, hasta es más lógico, pues así ni el fallo del inferior se impone al superior, ni la negativa de un solo vocal basta para dejar sin efecto la sentencia de primera instancia y la opinión fundada de los demás miembros del tribunal de la causa.

La comisión aconseja sean eliminados los artículos del proyecto relativos al ejercicio de las acciones civiles que nacen de los delitos. En primer lugar, porque esta materia no corresponde a un código de procedimientos criminales, y en segundo, porque estando ella legislada de antemano en el código civil, reproducir textualmente las disposiciones de éste en el código que nos ocupa, sería simplemente una redundancia, y si se las modificaba, habríase producido la incongruencia de derogar, mediante una ley formularia, de carácter local, los preceptos contenidos en la ley civil de fondo, vigente en toda la república.

Los artículos 196 y 197 del proyecto, al establecer que el sumario no sería secreto para el defensor del procesado quien podría intervenir en él bajo juramento de reserva, a objeto de “velar porque las diligencias que pasen a su presencia se consignen con entera exactitud, y que sean observadas estrictamente las reglas legales del procedimiento”, introducían una reforma de suma



trascendencia, cuya gravedad no escapó a la comisión desde el primer momento.

Después de largas y maduras deliberaciones, la comisión resolvió no aceptar tanta liberalidad y limitar la acción del defensor del procesado durante el sumario, a la facultad de hacer al juez las indicaciones y proponer las diligencias que juzgare conveniente, debiendo aquel decretarlas, siempre que las reputase conducentes al esclarecimiento de los hechos.

En la alternativa de optar entre franquicias para la libertad de defensa, rayanas ya en lo exagerado, y el gravísimo riesgo de dejar burlada en muchos casos la justicia social, la comisión ha estimado que lo que la prudencia aconseja es quedar en el término medio y no pasar al extremo peligroso.

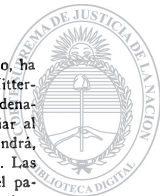
Esta solución fué adoptada de acuerdo con los miembros de la cámara criminal, doctores Aguirre y Yofre, consultados especialmente sobre el particular.

En el extenso y minucioso título consagrado en el proyecto a la comprobación del "cuerpo del delito", se había omitido trazar las reglas de proceder en los casos de delitos cometidos durante el viaje de los trenes y en los de muertes o lesiones ocasionadas por accidente en las vías férreas.

A objeto de subsanar esta notable deficiencia, la comisión que suscribe aconseja a V. H. en su dictamen, se agreguen al título respectivo dos artículos nuevos, en los que se determinen con precisión las facultades y atribuciones de los conductores de trenes en tales emergencias, conciliando, como es consiguiente, las necesidades de la administración de justicia respecto a la averiguación del hecho y a su imputabilidad, con las que exigen la viabilidad y el interés de los pasajeros y de las empresas de ferrocarriles.

El artículo 368 del proyecto, relativo a la fuerza probatoria de los dictámenes periciales, ha sido modificado sustancialmente.

Según él, que no es sino copia del art. 178 del código de procedimientos civiles vigente en la capital, "siempre que los peritos nombrados tuvieran título y sus conclusiones fueren terminantes asertivas, tendrán éstas fuerza de prueba legal". En los demás casos podrá el juez separarse del dictamen pericial, toda vez que tenga convicción contraria, expresando los fundamentos de esta convicción.



La comisión, en un orden de ideas completamente diverso, ha hecho suyas las siguientes magistrales apreciaciones de Mittermaier: "La prueba pericial — dice — descansa en un encadenamiento de probabilidades racionales, que corresponde apreciar al juez antes de declararse convencido. En todos los casos tendrá, pues, que decidir si el informe envuelve en sí la convicción. Las leyes modernas consagran este principio, y disponen que el parecer del perito no puede ser obligatorio para el tribunal, mientras no esté fundado en razón y en verdad. Reconocen igualmente en el magistrado el derecho de preguntarse si está convencido; y como nunca se le obliga a condenar, si no lo está profundamente, claro es que no tiene el deber de seguir el parecer de los peritos, sino cuando vea demostrada la certeza."

"Y no se nos arguya que el juez, en tal caso, parece atribuirse conocimientos superiores a la ciencia especial de los peritos, y que la decisión del valor de una consulta científica corresponde tan sólo al que posee la ciencia en un grado eminente; la posición del juez es muy sencilla y excluye toda idea de semejante censura; sus funciones consisten en recibir el informe de manos de los peritos, examinarle y compararle en su forma y tenor con los motivos en que se funda, con las circunstancias y las pruebas de otra naturaleza, ya existentes en los autos, etc., et."

En su mérito, la comisión ha reemplazado el art. 368 por el siguiente, que figura en el proyecto para la provincia de Buenos Aires, de los doctores Malaver, Obarrio y Montes de Oca: "La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca."

El recurso de revisión acordado contra las sentencias de la cámara de apelaciones y de la suprema corte ha sido ampliado por nosotros, permitiendo en casos determinados ir aún contra la autoridad de la cosa juzgada.

La comisión ha aceptado la doctrina hoy corriente entre los criminalistas, de que la presunción de verdad atribuida a la cosa juzgada, absoluta en materia civil, no es admisible sino dentro de ciertos límites en materia penal.



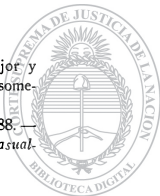
Según la teoría penal, dice el eminente criminalista *Haus*, la presunción de verdad que se atribuye a la cosa juzgada en materia represiva, protege a los ciudadanos que han sufrido la prueba de una sentencia, sin poderles dañar. La justicia y la razón exigen, en efecto, que el condenado, pronto a demostrar su inocencia por pruebas nuevamente descubiertas, pueda indefinidamente reclamar la anulación de la sentencia condenatoria de que ha sido víctima; porque la pena debe recaer sobre el culpable y no herir jamás a un inocente. Este principio fundamental de la justicia represiva no puede ser destruido por una ficción que no se justifica sino en cuanto es una garantía para los ciudadanos. Si para mantener la autoridad de la cosa juzgada, se ofrece al condenado el recurso de gracia como medio de hacer triunfar la verdad real sobre la verdad ficticia, se olvida que el ejercicio del derecho acordado al jefe del estado de indultar las penas pronunciadas por los jueces deja subsistente la condenación, y que no es perdón, sino justicia, lo que pide el ciudadano condenado por error. (*Droit Penal Belge*, t. 2, p. 450.)

Estas poderosas razones son las que ha tenido la comisión para aconsejar el agregado de los nuevos artículos que figuran en el dictámen, al capítulo del proyecto intitulado: Recursos contra las providencias y fallos de la corte suprema y de la cámara de apelaciones.

Tales son los puntos más culminantes del dictámen de la comisión acerca de lo que hemos creído conveniente hacer mención especial en este ligero informe.

Por lo demás, V. H. podrá apercibirse fácilmente, por las numerosas reformas proyectadas, de que ha sido nuestra preocupación constante abreviar en lo posible la terminación de los juicios, sometiendo a términos fijos todas las tramitaciones y estableciendo las multas en que se incurrirá por las demoras en la sustanciación de las causas.

Réstanos sólo, para concluir, hacer presente a V. H. que en las treinta y ocho sesiones que la comisión ha dedicado al estudio de este asunto, ha sido siempre acompañada por el ministro de justicia, culto, e instrucción pública, doctor Filemón Posse, quien con la doble autoridad de sus indiscutibles conocimientos jurídicos y el haber sido uno de los autores del proyecto confia-



do a nuestra revisión, ha contribuido eficazmente a la mejor y más pronta realización de la obra que tenemos el honor de someter a la distinguida consideración de V. H.

Dios guarde a V. H. — Buenos Aires, agosto 19 de 1888. —

Wenceslao Escalante — Ernesto Colombres — Benjamín Basualdo — Estanislao S. Zeballos — Guillermo Torres.

14. — Discusión en el congreso

Sr. Presidente:—Está en discusión general.

Sr. Figueroa (F. J.): — Pido la palabra. El informe está repartido, lo conocemos ya; es la ventaja de hacer los informes escritos, porque no hay necesidad de perder tiempo.

— No haciéndose uso de la palabra, se vota y es aprobado el proyecto en general y en particular.

15.—Ley núm. 2372 sancionando el código de procedimientos en lo criminal

Art. 1º — Desde el primero de enero de mil ochocientos ochenta y nueve, se observará como ley de la nación, en los asuntos criminales pertenecientes al fuero federal, y en los tribunales ordinarios de la capital y de los territorios nacionales, el proyecto de código de procedimientos en materia penal, presentado por la comisión revisora del formulado por el Dr. D. Manuel Obarrío, con las modificaciones introducidas por la comisión de códigos de la honorable cámara de diputados, en su dictamen de fecha diez y ocho de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.

Art. 2º—Solo se tendrán por auténticas las ediciones oficiales.

Art. 3º—Autorízase al poder ejecutivo para hacer de rentas generales los gastos necesarios en la impresión de dos mil ejemplares de dicho código.

Art. 4º—Comuníquese al poder ejecutivo. — *Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en Buenos Aires, a 4 de octubre de 1888. — M. Derqui — B. Ocampo. — Secretario del senado. — Carlos Tagle. — Juan Ovando. — Secretario de la cámara de diputados.*

Buenos Aires, octubre 17 de 1888. — Téngase por ley de la nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, e insértese en el registro nacional. — JUAREZ CELMAN — *Filemón Posse.*

16.—Decreto del P. E. sobre la edición oficial

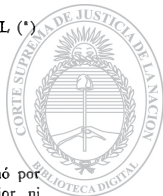
Buenos Aires, octubre 17 de 1888. — Debiendo observarse como ley de la nación desde el 1º de enero próximo, el proyecto de código de procedimientos en materia penal redactado por la comisión revisora del formulado por el Dr. D. Manuel Obarrio, con las modificaciones introducidas por la comisión de códigos de la honorable cámara de diputados en su dictamen de fecha diez y ocho de agosto del corriente año, y *considerando*: Que solo se tendrán por auténticas las ediciones oficiales de dicho código;

Que el poder ejecutivo se halla autorizado para hacer una edición de dos mil ejemplares, y que es conveniente encomendar esta edición a personas competentes; el presidente de la república decreta: Art. 1º — Comisionase a los Dres. D. Benjamín Basualdo y D. Ernesto Colombres, a fin de que corran con la edición oficial de dos mil ejemplares del código de procedimientos en materia penal.

Art. 2º — La comisión nombrada recibirá del ministerio de justicia las instrucciones del caso para la impresión.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese e insértese en el registro nacional. — JUAREZ CELMAN — *Filemón Posse*.





LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Disposiciones generales (b)

ART. 1.º—Ningún juicio criminal podrá ser iniciado sinó por actos u omisiones calificados de delitos por una ley anterior, ni ser proseguido y terminado ante otros jueces que los ordinarios.

Art. 1.º—Manual, t. 1, p. 8 y sigs.; t. 2, p. 88, 223; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 98; cód. de Ginebra, art. 1.º; c.á.m. crim., t. 69, p. 299.

(*) Las notas que van al pie del texto indican la página del Manual donde ha sido comentado el artículo respectivo, o el autor que trata la materia, o el fallo en que la disposición legal se ha aplicado. Así, la nota al art. 1, quiere decir que en el «Manual de procedimiento, (civil y penal), del doctor Tomás Jofré, tomo 1, página 8 y tomo 2, páginas 88 y 223, se analiza el artículo recordado; que el mismo ha sido aplicado en un fallo aparecido en la revista «Jurisprudencia Argentina» y en la colección de fallos de la cámara criminal de la capital de la república, que, además, concuerda con el código de procedimiento penal del cantón de Ginebra, etc.

Las abreviaturas más corrientes en las notas son: **comp. esp.**, o sea la compilación reformada de las disposiciones vigentes sobre el enjuiciamiento criminal español, 1880; **enj. esp.**, o sea la ley de enjuiciamiento criminal española de 1882. Los fallos se citan por tomo, t., y página, p., y cuando ellos pertenecen a la publicación de la inspección de justicia, se citan por año, mes y página. Cuando en el texto del código se encuentra una palabra o frase entre paréntesis, significa que ellas fueron suprimidas por el congreso. Los artículos o períodos que se consignan en bastardilla pero que están entre paréntesis, son agregados que hizo el congreso al proyecto que tomó por base.

Leyes que han modificado el código de procedimiento en materia penal.

1.º Sobre los arts. 17 y 18, véase el art. 18 de la ley núm. 4189.

2.º Sobre los arts. 22, 33, 43, 550, 551 y 646, véase la ley núm. 4055 y además la ley núm. 8918, en las ps. 243 y 257 respectivamente al final.

3.º Sobre el art. 75, véase la ley núm. 5107.

4.º Sobre los arts. 83, 90, 93, 101, 111, 120 y 121, véase la ley número 4162, en la p. 250.

5.º Sobre el art. 90, véase la ley núm. 7055, en la p. 254.

6.º Sobre el art. 363, véase la ley núm. 10903, en la p. 258.

7.º Sobre el artículo 376, véase la ley núm. 3508.

8.º Sobre los arts. 569 y sigs., véase la ley núm. 3906, arts. 5 a 8; la núm. 4578, arts. 9 a 11, y la núm. 9658, en las ps. 242, 253 y 257 respectivamente.

(b) Véase «Manual», t. 1, p. 8 y sigs.



ART. 2º—Nadie puede ser constituido en prisión preventiva sin orden escrita de juez competente, expedida contra persona determinada, y a mérito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad.

ART. 3º—En caso de infraganti delito cualquier individuo del pueblo puede detener al delincuente, al solo objeto de presentarlo inmediatamente al juez competente o al agente de la autoridad pública más inmediato, jurando que lo ha visto perpetrar el delito.

ART. 4º—El jefe de policía de la capital y sus agentes (*caracterizados*) tienen el deber de detener a las personas que sorprendan en infraganti delito, y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente.

ART. 5º—A los efectos de los dos artículos precedentes, el delito sólo se considerará infraganti respecto del que haya presenciado su perpetración.

ART. 6º—Detenido el presunto culpable y entregado al juez competente, éste procederá en las primeras horas hábiles de su despacho a interrogarlo y a practicar las diligencias necesarias para decretar su prisión preventiva o su libertad.

ART. 7º—Nadie puede ser procesado ni castigado sino una sola vez por la misma infracción.

ART. 8º—Durante el sumario, los jueces podrán interrogar al procesado, para que explique las contradicciones en que hubiere incurrido o las que resultasen entre su declaración y la de los testigos y demás constancias del proceso; pero en ningún caso podrán hacer al procesado cargos y reconvenciones tendentes a obtener la confesión de su culpabilidad.

Art. 2.º — Manual, t. 2, p. 95; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 768; constitución nacional, art. 18; cá. crim., t. 54, p. 299.

Art. 3.º — Manual, t. 2, p. 166; cód. de Ginebra, art. 2, inc. 2.º; cá. crim., t. 35, p. 151; t. 79, p. 264.

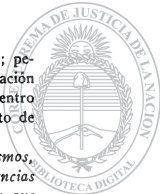
Art. 4.º — Manual, t. 2, p. 166, 247; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 768; cód. de Ginebra, art. 10.

Art. 5.º — Manual, t. 2, p. 78, 156; cód. de San Luis, art. 227; Haus, t. 1, núms. 412 y 414.

Art. 6.º — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 768.

Art. 7.º — Manual, t. 2, p. 78, 156; cód. uruguayo, art. 12; cá. crim. t. V, p. 216.

Art. 8.º — Constitución nacional, art. 18; comp. esp., art. 545; cód. uruguayo, art. 242.



ART. 9º.—El procesado podrá defenderse personalmente; pero si a juicio del juez esta defensa obstase a la buena tramitación de la causa, le ordenará que nombre un defensor letrado dentro del término que prudencialmente designe, bajo apercibimiento de nombrárselo de oficio.

Cuando los procesados prefieran defenderse por sí mismos, su intervención en el sumario se limitará a pedir las diligencias que crean conducentes al esclarecimiento de los hechos; sin que les sea comunicado su resultado, ni el de las demás que se practiquen. A los efectos de la disposición del presente artículo, el juez hará saber a los procesados, en el acto de la declaración indagatoria, el derecho que tienen a nombrar defensor a fin de que éste pueda intervenir desde las diligencias del sumario, en la forma que este código lo permite.

ART. 10.—La fuga o locura sobreviniente de los procesados no paralizará las diligencias del sumario; pero terminado éste, la causa se suspenderá hasta que el prófugo se presente o sea habido, o hasta que el loco recupere el uso de su razón.

ART. 11.—*La pena de muerte no podrá imponerse sino por unanimidad de votos del tribunal integro que conozca de la causa en última instancia, siempre que su fallo fuese revocatorio del de primera instancia.*

Esta unanimidad no será requerida, cuando el fallo del tribunal fuere confirmatorio y hubiese un solo voto disidente.

ART. 12.—No podrá aplicarse ni por analogía otra ley que la que rige el caso, ni interpretarse ésta extensivamente en contra del procesado.

ART. 13.—En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al procesado.

Art. 9.º — Manual, t. 1, p. 17, 245, 252; t. 2, p. 223, 248; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 94; constitución nacional, art. 18; comp. esp., art. 251; enj. esp., art. 118; cá. crim., t. 26, p. 278; t. 31, p. 272; t. 38, p. 366; t. 44, p. 164; t. 73, p. 337; t. 80, p. 6; t. 89, p. 428; t. 99, p. 330; marzo de 1911, p. 51; junio de 1913, p. 88.

Art. 10. — Manual, t. 1, p. 17; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 36.

Art. 11. — Manual, t. 2, p. 223; cá. crim., t. 96, p. 144.

Art. 12. — Manual, t. 1, p. 199; constitución nacional, art. 18.

Art. 13. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 16, 18, 91, 157, 299, 519, 533, 536, 537, 645, 779, 780, 781 y 807; t. 2, ps. 143, 146, 289, 398, 399, 828, 974 y 975; cód. Bs. Aires, art. 443; cód. de San Luis, art. 1; Fournier, «Código de Nueva York», ps. XLIII y XLV; ley 12, tit. 14, partida 3; sup. cort. nac., t. 60, p. 277; t. 69, p. 246 y 284; t. 75, p. 5; t. 114, p. 160; cá. crim., t. I, ps. 190, 395 y 528; t. II, ps. 247, 268 y 276; t. IV, p. 19;

CAPITULO II

De las acciones que nacen de los delitos (a)



ART. 14.—*De todo delito nacen acciones, las que son públicas cuando debe ejercitarlas el ministerio fiscal, sin perjuicio del derecho de acusar o de intervenir como parte querellante en el juicio, que incumbe a la persona ofendida o damnificada por el delito o a sus representantes legales; y privadas, cuando su ejercicio incumbe solamente a ésta.*

ART. 15.—Sólo la acción privada (*sea penal o civil*) se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

ART. 16.—La renuncia de la acción privada, (*ya penal, ya civil*) no perjudica más que al renunciante y a sus sucesores.

ART. 17.—Si la acción penal dependiese de cuestiones prejudiciales, cuya decisión competa exclusivamente a otra jurisdicción, no podrá iniciarse el juicio criminal antes que haya sentencia ejecutoriada en la cuestión prejudicial. (*)

ART. 18.—Las sentencias ejecutoriadas en el juicio civil no hacen cosa juzgada en el criminal, excepto las que recaigan en las cuestiones prejudiciales.

Si al resolverse en definitiva sobre una acción civil, resultase haber mérito para intentar la acción penal pública, se pasarán los antecedentes al ministerio respectivo.

septiembre de 1910, p. 1276; agosto de 1911, p. 247; marzo de 1913, p. 158; julio de 1914, p. 233; sup. cort. Bs. As., t. 9, p. 310, serie 3; t. 9, p. 580; t. 10, p. 365, serie 4; t. 1, p. 55 y t. 2, p. 313, serie 5; t. 4, ps. 81, 90, 183, 433, serie 8; R. Garraud, «Instruction criminelle et procédure pénales», t. 1, p. 484, núm. 234; ley 9, tít. 31, part. 7.

ART. 14. — Manual, t. 1, p. 283; t. 2, p. 58, 224, 248; cárm. crim., t. 14, p. 168; t. 33, p. 10; t. 34, p. 325; t. 36, p. 165; t. 52, p. 371; t. 94, p. 153. Véase además concordantes de los arts. 170 y sigs. de este código.

ART. 15. — Comp. esp., art. 240; enj. esp., art. 106.

ART. 16. — Comp. esp., art. 241.

ART. 17. — Manual, t. 2, ps. 54, 55; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 296; cód. civil, art. 1104; cód. prov. Bs. Aires, art. 16; cód. de San Luis, art. 14; enj. esp., art. 5.º; cód. italiano, art. 2.º; cód. austriaco de 1853, art. 4.º; sup. cort. nac., t. 96, p. 189; t. 97, p. 76; cárm. crim., t. 22, p. 269; t. 34, p. 242; t. 38, p. 385; t. 49, p. 242; diciembre de 1913, p. 267; Rivarola, «Derecho penal argentino», p. 391; Garraud, «Instruction criminelle», t. 2, p. 940. Véase concordantes del artículo siguiente.

ART. 18. — Manual, t. 2, ps. 54, 55; cód. uruguayo, art. 8; cárm. crim., t. 13, p. 262; t. 14, p. 346; t. 17, p. 179; t. 34, p. 242. Véase concordantes del artículo anterior.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 47 y sigs.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



TÍTULO II

De la jurisdicción (a)

ART. 19. — La jurisdicción criminal es improrrogable.

ART. 20. — El conocimiento de los delitos del fuero federal corresponde:

- 1º A la suprema corte de justicia nacional.
- 2º A los jueces de sección.
- 3º A los jueces de los territorios federales.

ART. 21. — La suprema corte nacional conocerá originariamente:

De las causas criminales concernientes a embajadores, ministros o agentes diplomáticos extranjeros; a las personas que compongan la legación, a los individuos de su familia o servidumbre, del modo y en los casos en que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho internacional.

ART. 22. — La suprema corte federal conocerá en grado de apelación:

- 1º De las sentencias definitivas y autos que tengan fuerza de tales, pronunciados por los jueces de sección o por los jueces de los territorios nacionales en causas de fuero federal. (*)
- 2º De las sentencias definitivas de las cámaras de apelación de la capital y tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: (**)

Art. 19. — Manual, t. 1, p. 275; t. 2, p. 225; cód. de Bs. Aires, art. 8; cód. de San Luis, art. 5; proyecto uruguayo, art. 30; cód. de Chile, art. 29; enj. esp., art. 8; sup. cort. nac., t. 48, p. 51; t. 118, p. 156; t. 123, p. 220; cárm. crim., t. 37, p. 167; t. 92, p. 6; Ortolán, t. 2, núm. 2146, p. 469.

Art. 20. — Sup. cort. nac., t. 95, p. 14.

Art. 21. — Manual, t. 1, ps. 387, 388.

Art. 22. — Manual, t. 1, ps. 145, 382 y sigs.; t. 2, p. 226; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 1, 2, 9, 12, 145, 147, 355, 612, 613, 614, 639, 808, 810, 811 y 813; t. 2, ps. 1, 2, 3, 38, 161, 167, 172, 321, 359, 364, 367, 557, 559, 560, 568, 570, 571, 719, 720, 733 y 864; sup. cort. nac., t. 64, p. 120; t. 67, p. 275; t. 70, p. 94; t. 76, p. 317; t. 77, ps. 72, 205 y 224; t. 78, p. 446; t. 81, p. 116; t. 82, p. 232; t. 105, p. 329; t. 119, p. 270; t. 120, p. 207, 216 y 357; t. 121, p. 96 y 264; t. 122, p. 388; t. 123, p. 87; t. 124, p. 219.

(*) Véase «Manual», t. 1, p. 272 y sigs., 314 y sigs. y 372 y sigs.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.

(**) Véase la nota (a) de la p. 89.



- 1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación, y la decisión haya sido contra su validez;
- 2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia, se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la constitución nacional, a los tratados o leyes del congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia;
- 3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la constitución, o de un tratado o ley del congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio.
- 3º De los recursos de queja por justicia retardada o denegada, contra los jueces de sección y de los territorios nacionales. (*)
- 4º De las contiendas de competencia en los casos que se determina en el capítulo respectivo. (**)

ART. 23. — Los jueces de sección y los de los territorios nacionales conocerán en primera instancia de las causas siguientes:

- 1º De los delitos cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o extranjeros.
- 2º De los delitos cometidos (*en los ríos islas y puertos argentinos*) en aguas, islas o puertos argentinos.
- 3º De los delitos cometidos en el territorio de la capital, en el de las provincias o territorios nacionales, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las

Art. 23. — Manual, t. 1, ps. 389 y sigs.; t. 2, p. 226; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 28; sup. cort. nac., t. 75, ps. 224 y 335; t. 77, p. 420; t. 79, p. 280; t. 81, ps. 66 y 383; t. 96, p. 375; t. 108, p. 360; t. 111 p. 156; t. 113, ps. 47, 150 y 263; t. 115, p. 178; t. 124, p. 205; cádm. crim., t. 91, p. 419; t. 96, ps. 269 y 271.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.

(**) Véase la nota (a) de la p. 89.



elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional, o de billetes de banco autorizados por el congreso.

- 4° De los delitos de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de la capital y territorios nacionales.

ART. 24. — La jurisdicción criminal ordinaria o del fuero común en la capital de la república y en los territorios nacionales será ejercida:

- 1° Por jueces correccionales.
- 2° Por jueces del crimen.
- 3° Por una cámara de apelaciones.

ART. 25. — La jurisdicción criminal ordinaria de los tribunales de la capital y de los (*que se establezcan en*) territorios nacionales se extiende:

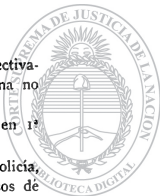
- 1° Al conocimiento de todos los delitos comunes cometidos en su respectiva jurisdicción por ciudadanos o extranjeros; salvo, *respecto de los tribunales de la capital*, los casos especialmente exceptuados por el derecho público interno o por los principios del derecho internacional.
- 2° Al conocimiento de los delitos ordinarios cometidos en el extranjero en los casos determinados por (*los tratados*) (*las*) leyes (*especiales*).
- 3° Al conocimiento de las causas criminales por violaciones cometidas en su respectiva jurisdicción, o por defraudación de las rentas fiscales o municipales, cuando provengan de impuestos establecidos exclusivamente para la capital o territorios nacionales.

ART. 26. — La jurisdicción criminal atribuida por esta ley a la justicia federal o nacional, en nada altera la jurisdicción que corresponda a los tribunales militares.

ART. 27. — El juzgamiento de las faltas o contravenciones a

ART. 25. — Manual, t. 1, p. 397 y 399; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 766 y 767; sup. cort. nac., t. 64, p. 125; t. 69, p. 446; t. 76, p. 152; t. 115, ps. 46 y 77; cárm. crim., t. 12, p. 381; t. 13, p. 260; junio de 1910, p. 646.

ART. 26. — Sup. cort. nac., t. 70, p. 152; t. 82, p. 23.



las ordenanzas municipales o de policía, corresponde respectivamente a cada una de estas administraciones, cuando la pena no exceda de un mes de arresto o cien pesos de multa.

ART. 28. — Los jueces de lo correccional conocerán en 1ª instancia:

- 1º De las faltas o contravenciones municipales y de policía, cuya pena exceda de un mes de arresto o cien pesos de multa.
- 2º De los delitos que merezcan pena de arresto o prisión que no exceda de un año; de multa que no exceda de mil pesos, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad.

ART. 29. — La acumulación legal de estas mismas penas dentro de los límites determinados, no alterará la jurisdicción atribuida a los jueces correccionales.

ART. 30. — Conocerán en segunda y última instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la municipalidad o de la policía, cuando la pena impuesta exceda de cinco días de arresto o quince pesos de multa.

ART. 31. — Los jueces en lo criminal conocerán en primera instancia en las causas siguientes:

- 1ª En las de homicidio, cualquiera que sea su forma y la calidad de la víctima.
- 2ª En las de lesiones graves.
- 3ª En las de falsificación.
- 4ª En las de incendios.
- 5ª En las de quiebra fraudulenta o culpable.
- 6ª En las de adulterio, bigamia o matrimonios ilegítimos.
- 7ª En las de violación, estupro y en las de sustracción o corrupción de menores.
- 8ª En las de prevaricato o cohecho.
- 9ª En las de defraudación de rentas fiscales, cuando provengan de impuestos establecidos exclusivamente para la capital y territorios nacionales.

Art. 28. — Manual, t. 1, p. 307; t. 2, ps. 153, 164, 210, 226, 227; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 766, 767, 813.

Art. 29. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 354, 367.

Art. 30. — Câm. crim., t. 40, p. 177.

Art. 31. — Sup. cort. nac., t. 65, p. 164; câm. crim., t. 24, p. 217; t. 31, p. 285.



10ª En todos los demás delitos del fuero común, cuyo conocimiento no se atribuya por este código a otros jueces.

ART. 32. — Los jueces del crimen en la capital serán de instrucción y de sentencia, correspondiendo a los primeros la formación de los sumarios y a los segundos la sustanciación del plenario y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

ART. 33. — La cámara de apelación conocerá en última instancia:

- 1º De los recursos contra las sentencias definitivas o autos que tengan fuerza de tales, pronunciados por los jueces del crimen o por los jueces correccionales, y *en su caso, por los jueces de los territorios nacionales.* (*)
- 2º De los recursos de queja por justicia retardada o denegada por los mismos.
- 3º De las contiendas de competencia en los casos que se determinan en el capítulo respectivo.

ART. 34. — Para determinar la competencia se tendrá en cuenta no sólo la naturaleza del delito, sino también las circunstancias especiales en que se haya producido, según puedan apreciarse prima facie.

ART. 35. — Si el lugar en que se ha cometido el delito fuere desconocido, el juez del lugar en que se hubiese procedido al arresto será preferido al de la residencia del culpable, a menos que este último hubiese prevenido en la causa.

ART. 36. — Cuando hubiere duda respecto a la jurisdicción en que se hubiere cometido el delito, será competente el juez que prevenga en la causa.

Art. 32. — Manual, t. 2, p. 226; cód. uruguayo, art. 28; cód. de Gi-nebra, art. 38; cód. italiano, art. 79; cám. crim., t. 24, p. 217.

Art. 33. — Manual, t. 1, p. 89.

Art. 34. — Manual, t. 1, p. 343; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 120; t. 2, p. 577; cód. de Bs. Aires, art. 9; cód. de San Luis, art. 7; enj. esp., art. 15; cód. italiano, art. 18; sup. cort. nac., t. 61, p. 414; t. 63, p. 371; t. 73, p. 87; cám. crim., t. 77, p. 47; t. 96, p. 87; t. V, p. 145; Amat y Furió, «Estudio práctico de enjuiciamiento criminal», p. 55; Ceferino M. Araujo, «Estudio sobre la organización y competencia de nuestros tribunales», p. 39; Saluto, op. cit., t. 1, p. 316.

Art. 35. — Manual, t. 1, págs. 343 y 344; enj. esp., art. 15; cód. italiano, art. 19; comp. esp., art. 30 y slgs.; cód. de Bs. Aires, art. 10; cód. de San Luis, art. 8; sup. cort. nac., t. 59, p. 102; t. 60, p. 219; t. 69, p. 288; t. 71, p. 298; t. 98, p. 154.

Art. 36. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 577.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



ART. 37. — Cuando una misma persona hubiere cometido dos o más delitos de carácter federal en diversas secciones judiciales, será competente para su juzgamiento el juez federal a quien correspondiere el conocimiento del delito más grave.

ART. 38. — En el caso de que uno de los delitos perteneciera al fuero federal y otro a la jurisdicción provincial o a la ordinaria de la capital o territorios nacionales, deberá ser juzgado primero por la jurisdicción federal.

ART. 39. — En el caso de que uno o más delitos pertenecieran a la jurisdicción ordinaria de la capital o de los territorios nacionales y otro u otros a la jurisdicción provincial, juzgarán primeramente los tribunales de la capital.

ART. 40. — Cuando una misma persona hubiera cometido dos o más delitos sometidos a distintos jueces de los que ejercen la jurisdicción común en el distrito de la capital o territorios nacionales, será competente para su juzgamiento, aquel a quien corresponda el conocimiento del delito de naturaleza más grave.

ART. 41. — Cuando se trate de una persona a quien se atribuyen dos o más delitos, unos de la competencia federal u ordinaria de la capital o territorios nacionales, y los otros de competencia especial, cada juez procederá a juzgar los delitos de su competencia, siguiendo el orden de prioridad de los diferentes juicios, establecido por leyes especiales, y en su defecto, por lo que resuelva la suprema corte o la cámara de apelaciones en su caso.

ART. 42. — Las disposiciones precedentes se aplicarán también a los delitos conexos.

Art. 37. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 577.

Art. 38. — Sup. cort. nac., t. 64, p. 84; t. 108, p. 27; noviembre de 1911, p. 64.

Art. 40. — Cám. crim., t. 83, p. 168; t. 91, p. 411.

Art. 41. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 639.

Art. 42. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 639; cód. de Bs. Aires, art. 11; cód. de San Luis, art. 9; proyecto uruguayo, arts. 31 y 37; cód. de Chile, art. 576; cód. austriaco, art. 57, nota 2; enj. esp., arts. 16 a 18; comp. esp., arts. 32 a 34; sup. cort. nac., t. 64, p. 84; t. 96, p. 189; t. 97, p. 76; cód. de Mendoza, art. 66.



TÍTULO III

De las cuestiones de competencia (a)

ART. 43. — Corresponde a la suprema corte de justicia dirimir las competencias que se susciten: (*)

- 1º Entre los jueces seccionales.
- 2º Entre un juez seccional y un juez del fuero común del distrito de la capital o territorios nacionales.
- 3º Entre alguno de estos jueces y un juez o tribunal de provincia.
- 4º Entre los jueces federales, los del fuero común de la capital o territorios nacionales y los que desempeñen la jurisdicción militar.

ART. 44. — Corresponde a la cámara de apelaciones de la capital la resolución de las cuestiones de competencia que ocurran:

- 1º Entre los diversos juzgados que ejerzan la jurisdicción nacional ordinaria (*del crimen*).
- 2º Entre estos juzgados y los tribunales eclesiásticos de la capital.

ART. 45. — Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

ART. 46. — La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita la causa.

ART. 47. — La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y la remita al que sea tenido por competente.

ART. 48. — El ministerio público, el procesado o su defensor y el que sea civilmente responsable, podrán proponer la inhibito-

Art. 43. — Manual, t. 1, ps. 275, 304; sup. cort. nac., t. 103, p. 96; t. 123, p. 43.

Art. 44. — Sup. cort. nac., t. 117, p. 281.

Art. 45. — Manual, t. 1, ps. 300, 301.

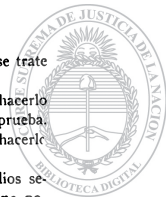
Art. 46. — Manual, t. 1, p. 301.

Art. 47. — Manual, t. 1, p. 304.

Art. 48. — Enj. esp., art. 19.

(*) Véase «Manual», t. 1, p. 300.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



ría o la declinatoria en cualquier estado del juicio cuando se trate de jurisdicciones de diversa naturaleza.

Tratándose de jurisdicciones idénticas, sólo podrán hacerlo en primera instancia hasta que esté consentido el auto de prueba.

El acusador privado, en uno u otro caso, sólo podrá hacerlo al tomar intervención en la causa.

ART. 49. — El que hubiere optado por uno de los medios señalados en el artículo 45, para promover la competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquel a que hubiese dado preferencia.

El simple aviso al juez que se tiene por incompetente de haberse interpuesto la inhibitoria, no importa el ejercicio simultáneo de ambas excepciones.

ART. 50. — En el escrito de inhibitoria se expresará que no se ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, el recurrente será condenado en las costas, aunque se decida en su favor la competencia, o aunque él la abandone en lo sucesivo.

ART. 51. — Los jueces ante quienes se proponga la inhibitoria, oirán al ministerio fiscal, quien se expedirá dentro de tercero día.

ART. 52. — Con vista de lo que diga el ministerio fiscal, mandarán los jueces librar oficio inhibitorio, o declararán no haber lugar a hacerlo, en auto motivado.

ART. 53. — Los autos en que los jueces inferiores denegaren el requerimiento de inhibición serán recurribles para ante el superior inmediato.

ART. 54. — Con el oficio de inhibición se acompañará testimonio del escrito en que se haya pedido, de lo expuesto por el ministerio fiscal, de la providencia que se hubiere dictado y de lo demás que los jueces estimen conducente para fundar su competencia.

ART. 55. — El juez requerido, cuando reciba el oficio de inhibición, oirá al ministerio fiscal y al acusador privado, si lo hu-

Art. 49. — Poder judicial español, arts. 360, 361 y 363; sup. cort. nac., t. 122, p. 244.

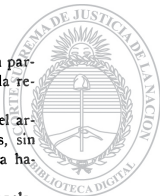
Art. 50. — Enj. esp., art. 33.

Art. 51. — Enj. esp., art. 34.

Art. 52. — Enj. esp., art. 36.

Art. 54. — Manual, t. 1, p. 303; enj. esp., art. 36.

Art. 55. — Manual, t. 1, p. 303; enj. esp., art. 29.



biere, al defensor del procesado o procesados y a los que sean partes como responsables civilmente del delito, sin perjuicio de la reserva del sumario, cuando la causa se hallase en tal estado.

ART. 56. — Las comunicaciones o traslados de que trata el artículo anterior, serán solo por tres días, pasados los cuales, sin más trámite, el juez dictará auto inhibiéndose o negándose a hacerlo.

ART. 57. — El auto en que se inhibieren los jueces será apelable en la forma determinada en el artículo 53.

ART. 58. — Consentida o ejecutoriada la sentencia en que los jueces se hubiesen inhibido del conocimiento de una causa, se remitirán los autos al juez que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante él para usar de su derecho, y se pondrán a su disposición el proceso, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.

ART. 59.—Si se negare la inhibición, se comunicará el auto al juez que la hubiese propuesto, con testimonio de los escritos de los interesados, del ministerio fiscal y de lo demás que se crea conveniente.

ART. 60.—En el oficio que los jueces dirijan en el caso del artículo anterior, exigirán que se les conteste para continuar actuando si se reconoce su jurisdicción, o que se remita la causa a quien corresponda para que se decida la competencia.

ART. 61. — Recibido el oficio expresado en el artículo anterior, los jueces que hayan propuesto la inhibitoria, dictarán auto desistiendo o sosteniendo su competencia, sin más sustanciación, en el término de tercero día.

ART. 62. — Consentido o ejecutoriado el auto en que los jueces desistan de la inhibitoria, lo comunicarán al juez competente, remitiéndole todo lo actuado para que pueda mandarlo unir a los autos.

ART. 63. — Si los jueces insistieran en la inhibitoria, lo comunicarán a los que hubieren sido requeridos de inhibición, para que remitan los autos al juez que corresponda, haciéndolo ellos de lo actuado en su juzgado, todo lo que se hará brevemente.

ART. 64. — Las competencias se decidirán dentro de los cua-

Art. 58. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 577.

Art. 60. — Sup. cort. nac., t. 112, p. 418.

Art. 64. — Enj. esp., art. 43.



tro días siguientes a aquel en que el ministerio fiscal hubiese emitido su dictámen.

ART. 65. — Los tribunales que hayan resuelto la competencia remitirán *dentro de tercero día* la causa y las actuaciones que hubiesen tenido a la vista para decidir las, al juez declarado competente; *y cuidarán de que se haga efectiva la condenación en las costas que se hubiere impuesto librando al efecto las órdenes oportunas*).

ART. 66.—Cuando la cuestión de competencia empeñada entre dos o mas jueces fuese negativa, por rehusar todos entender en una causa, la decidirá el tribunal respectivo.

ART. 67. — Las declinatorias se sustanciarán por cuerda separada, en la forma que establece la ley para los artículos de previo y especial pronunciamiento.

ART. 68. — Las inhibitorias y las declinatorias propuestas en las causas criminales durante el sumario, no suspenderán su curso, el cual se continuará:

1º Por el que haya empezado el conocimiento de la causa.

2º Si las dos hubieran empezado en la misma fecha, por el juez requerido de inhibición.

ART. 69.—Las inhibitorias y declinatorias en las causas criminales durante el plenario, suspenderán los procedimientos hasta que se discuta y decida la cuestión de competencia.

Durante la suspensión, el juez a quien corresponda la continuación de la causa, según lo establecido en el artículo anterior, practicará *de oficio o a instancia de parte* cualquiera actuación que sea absolutamente necesaria, y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irreparables, *(ya sea de oficio, ya a instancia de parte)*.

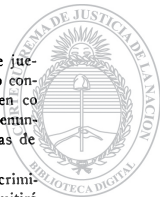
ART. 70. — En el caso de competencia negativa en las causas criminales entre la jurisdicción federal o la ordinaria de la capital o *territorios nacionales* y otra especial, la federal u ordinaria empezará o continuará la causa.

ART. 66. — Manual, t. 1, p. 303; enj. esp., art. 46; sup. cort. nac., t. 66, p. 319.

ART. 67. — Enj. esp., art. 45.

ART. 68. — Cód. de Bs. Aires, art. 18; cód. de San Luis, arts. 16 y 24; enj. esp., art. 26; sup. cort. nac., t. 119, p. 70.

ART. 69. — Manual, t. 1, p. 249.



ART. 71. — Cuando la competencia fuere negativa entre jueces que ejerzan una misma clase de jurisdicción, empezará o continuará el sumario hasta que aquella sea resuelta por quien corresponda, el juez ante quien se hubiere presentado la denuncia o querella, o a quien se hubieren remitido las diligencias de prevención.

ART. 72. — Para la decisión de toda competencia en lo criminal, el juez que deba continuar conociendo de la causa, remitirá al tribunal superior respectivo, cualquiera que sea el estado en que la competencia se empeñare, testimonio de las actuaciones relativas a la inhibitoria, y de lo demás que sea conducente en apoyo de su intención.

El juez que no deba continuar actuando, remitirá original la causa, y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas a la inhibitoria.

ART. 73. — Todas las actuaciones que se hayan practicado durante el sumario hasta la decisión de las competencias serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el juez que sea declarado competente.

Sin embargo, el juez a quien correspondiese la instrucción o el conocimiento de la causa, podrá ordenar la ratificación de las declaraciones o diligencias que estimase convenientes, y en todo caso el ministerio fiscal y los interesados podrán pedir esa ratificación durante el plenario.

TÍTULO IV

De las recusaciones

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 74. — Los jueces que ejerzan la jurisdicción criminal, cualquiera que sea su grado o jerarquía, solo podrán ser recusados por las causas enumeradas en esta ley.

Art. 74. — Cód. de Bs. Aires, art. 21; cód. de San Luis, art. 26; enj. esp., art. 62; sup. cort. nac., t. 78, p. 347; cá. crim., t. 29, p. 196.



ART. 75. — Son causas legítimas de recusación:

- 1ª El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil o del segundo de afinidad con alguna de las partes.
- 2ª El parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad con el letrado o representante de alguna de las partes que intervengan en la causa.
- 3ª Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de ellas como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta. (*)
- 4ª Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el proceso como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo, o dado recomendaciones acerca de la causa antes o después de comenzada.
- 5ª Ser o haber sido denunciador o acusador privado del que lo recusa.
- 6ª Ser o haber sido tutor o curador de alguno que sea parte en la causa.
- 7ª Haber estado en tutela o curatela de alguno de los expresados en el inciso anterior.
- 8ª Tener pleito pendiente con el recusante.
- 9ª Tener interés directo o indirecto en la causa.
- 10ª Tener sociedad o comunidad con alguna de las partes, excepto si la sociedad fuese anónima.
- 11ª Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes.
- 12ª Amistad íntima.
- 13ª Enemistad manifiesta.
- 14ª Haber recibido el juez beneficio de importancia en cualquier tiempo; o después de iniciado el proceso, presentes o dádvas aunque sean de poco valor.

ART. 76. — *Los fiscales podrán ser recusados por las cau-*

Art. 75. — Manual, t. 2, p. 87; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 106, 107, 570; cód. de Bs. Aires, art. 22; cód. de San Luis, art. 27; enj. esp., art. 54; recopilación castellana, tít. X, libro 2; Aguilera, «Ley de enjuiciamiento criminal», t. 1, ps. 346 y 353; sup. cort. nac., t. 21, p. 180; t. 51, p. 169 y 315; t. 52, ps. 57, 62 y 64; t. 65, p. 356; t. 66, p. 342; t. 75, p. 314; t. 80, p. 8; t. 86, p. 287; cárm. crim., t. 4, p. 142; t. 23, p. 296; t. 29, p. 196; t. 30, p. 146; t. 39, p. 241; t. 93, p. 435; t. 97, p. 58.

Art. 76. — Manual, t. 2, p. 249.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



sas determinadas en los incisos 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10, 12, 13, del artículo anterior, y además por las siguientes:

- 1º Parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguna de las partes.*
- 2º Ser o haber sido acusador privado del que lo recusa.*
- 3º Tener interés directo en la causa.*
- 4º Haber recibido después de iniciado el proceso, presentes o dádivas aunque sean de poco valor.*

ART. 77 — Los jueces que se encuentren en alguno de los casos del artículo 75, se inhibirán de oficio del conocimiento de la causa y la remitirán al juez a quien corresponda.

ART. 78.—Al deducirse la recusación deberá expresarse la causa en que se funde, indicándose los nombres de los testigos y su residencia, y acompañándose o mencionándose los documentos de que el recusante intente valerse.

ART. 79. — Los testigos no podrán ser nunca más de seis para cada causa de recusación, ni el recusante podrá valerse de otros que los indicados al deducirse la recusación.

ART. 80. — En los casos en que la recusación sea desestimada, el recusante será condenado en las costas del incidente, (*a menos que resultare haber procedido por error manifiesto*).

ART. 81. — La recusación deberá ser deducida por cualesquiera de las partes al presentar su primer escrito, salvo que la causa sea sobrevenida; o cuando conocida recién por la parte, la dedujere con el juramento de haber llegado recién a su conocimiento, en cuyo caso podrá entablarla hasta la citación para sentencia.

El procesado puede recusar al juez en el acto de ser llamado a prestar su declaración indagatoria, expresando las causas en que la funda, todo lo que hará constar el actuario en diligencia.

ART. 82.—*Las recusaciones se sustanciarán siempre por cuerda separada, sin que paralicen la causa que será proseguida por el juez o tribunal que entienda sobre la recusación.*

Art. 77. — Enj. esp., art. 55; comp. esp., art. 129; sup. cort. nac., t. 75, p. 314; cádm. crim., t. II, p. 379.

Art. 78. — Enj. esp., art. 57, in fine.

Art. 79. — Enj. esp., art. 65; comp. esp., art. 143.

Art. 80. — Enj. esp., art. 70; comp. esp., art. 153.

Art. 81. — Cdm. crim., t. 43, p. 290; t. 52, p. 413.



CAPITULO II

De la recusación de los miembros de la suprema corte

ART. 83. — Toda vez que fuesen recusados o resultasen impedidos todos o la mayoría de los miembros de la suprema corte, se integrará el tribunal insaculando a la suerte el número de conjuces que se necesite, de la lista de abogados que la misma corte debe formar en enero de cada año, con arreglo a la ley de 14 de setiembre de 1863. (*)

ART. 84. — Los conjuces deben ser recusados con los mismos requisitos que los miembros titulares.

ART. 85. — Presentado el escrito de recusación, el secretario le pondrá cargo y dará cuenta de él en el mismo día.

ART. 86. — Si de la lectura del libelo resultare que la causa alegada para la recusación no es de las enumeradas en este código, o hubiere sido deducida fuera de la oportunidad legal, la corte la desechará de plano.

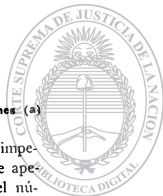
ART. 87. — Si la causa fuese legal y la recusación deducida en tiempo hábil, se comunicará por oficio al recusado. Si este reconociere ser ciertos los hechos, se le dará por separado sin más ulterioridad. Si no se reconociese impedido, se recibirá la causa a prueba con todos cargos por el término improrrogable de diez días, si esta hubiere de producirse en la capital, aumentando un día más por cada siete leguas si los testigos o los documentos de que haya de valerse el recusado existieran fuera del territorio de esta.

ART. 88. — Vencido el término probatorio, el secretario pondrá en el día los autos al despacho y la suprema corte decidirá dentro de tercero día, siendo su resolución inapelable.

ART. 89. — El recusado no podrá asistir ni a la vista ni a la votación del artículo.

Art. 83. — Sup. cort. nac., t. 77, p. 212.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



CAPITULO III

De la recusación de los miembros de la cámara de apelaciones: (a)

ART. 90. — Toda vez que fuesen recusados o resultaren impedidos, todos o la mayoría de los miembros de la cámara de apelaciones, se integrará el tribunal insaculando a la suerte el número de conjuces que se necesiten, de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica de los tribunales. (*).

ART. 91. — La recusación se sustanciará conforme a lo establecido en el capítulo anterior.

ART. 92. — Los conjuces de la cámara de apelaciones podrán ser recusados en la forma determinada en el artículo 84, respecto de los conjuces de la suprema corte.

CAPITULO IV

De la recusación de los jueces de sección:

ART. 93. — De la recusación de los jueces de sección, *en el caso que estos no reconozcan la verdad de la causa alegada*, conocerán:

- 1º Del de la capital, (*el juez de sección en lo comercial el otro* y si este estuviese impedido, el abogado en turno de la lista que debe formar la suprema corte, de conformidad a la ley de 24 de setiembre de 1878. (**).
- 2º De la recusación de los demás jueces de sección conocerá el abogado en turno de dicha lista.

Admitida la recusación, el conocimiento pasará al abogado que se sigue en turno. (**).

ART. 94. — Si la causa alegada no fuere de las que se especifican en este código, el juez la desechará de plano y proseguirá el juicio (*pues su resolución hará cosa juzgada*) *sin recuso alguno*.

(a) Véase la nota (a) de la p. 89.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.

(**) Véase la nota (a) de la p. 89.

(***) Véase la nota (a) de la p. 89.



ART. 95. — En caso de que la causa alegada sea de las establecidas en la ley, el juez, sin más trámite, recibirá a prueba el incidente con todos cargos por el término que corresponda (artículo 87).

ART. 96. — Vencido el término, el secretario pondrá de oficio una anotación en que lo haga constar, y en el mismo día llevará los autos al despacho con la prueba producida.

ART. 97. — El juez, acto continuo, llamará autos para sentencia, con noticia de las partes, y resolverá el artículo dentro de los tres días subsiguientes al de la última notificación.

ART. 98. — En caso de que no hubiere lugar a la recusación, condenará en costas al recusante, y le concederá solo en relación el recurso de apelación, si lo dedujera, elevando el incidente a la suprema corte.

ART. 99. — El secretario, luego que reciba el incidente, dará cuenta a la corte, la que mandará ponerlo en la oficina por cinco días dentro de los cuales podrán las partes recusar a los miembros de ella.

ART. 100. — Pasado este término sin que se hubiere deducido recusación, el secretario informará de ello con la correspondiente anotación, y la corte designará el día de la vista en audiencia pública, en la que podrán informar in voce los interesados, sus representantes o letrados.

ART. 101. — *De la recusación de los jueces de los territorios nacionales conocerá el juez de sección o DEL TERRITORIO NACIONAL, más próximo al asiento del juzgado, procediéndose conforme a las disposiciones del presente capítulo. (*)*

CAPITULO V

De la recusación de los jueces del crimen y demás inferiores de la capital

ART. 102. — El incidente de la recusación (*en las causas de procedimiento escrito*) correrá por cuerda separada, sin que pueda intervenir el recusado en la causa ni en el incidente, y será sustituido en esta forma:

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



Si se trata de uno de los jueces del crimen de la capital, por otro juez que desempeñe funciones análogas en la misma jurisdicción.

Si la recusación comprendiera todos los jueces del crimen, serán sustituidos por el juez correccional *en turno*.

Si el recusado fuese uno de estos últimos, será reemplazado por el otro; y si fuesen los dos, lo reemplazará el juez del crimen *en turno*.

ART. 103. — Formada la pieza separada, se oirá a la otra u otras partes que hubieren en la causa, por el término de tres días a cada una, que sólo podrá prorrogarse por otros dos, cuando a juicio del juez, hubiere justa causa para ello.

ART. 104. — Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, con la prórroga en su caso, se recibirá a prueba el incidente de recusación, cuando la cuestión fuese de hecho, por diez días, durante los cuales se producirá la que hubiere sido solicitada por las partes y admitida como pertinente.

ART. 105. — Del auto que dictaren los jueces denegando la prueba, podrá apelarse en relación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación.

ART. 106. — Cuando por ser la cuestión de derecho, no se hubiere recibido a prueba el incidente de recusación, o cuando hubieren pasado los diez días concedidos en el artículo 104 para la prueba, (*no se hubiese accedido a la reposición de que trata el art. 118*), se mandará citar a las partes a un comparendo verbal.

ART. 107. — Los autos en que se declare haber o no lugar a la recusación, serán siempre fundados y se pronunciarán dentro de los tres días siguientes al comparendo verbal de que habla el artículo anterior.

ART. 108. — Los autos que dicten los jueces del crimen y demás inferiores accediendo a la recusación, no serán apelables.

Los autos en que se denieguen, serán apelables en relación.

En el primer caso, continuará el conocimiento de la causa principal, el juez que haya resuelto el incidente, observándose la misma regla cuando fuere revocado el auto denegatorio de la recusación.

CAPITULO VI

De la recusación de los secretarios y ujieres

ART. 109. — Los secretarios de la suprema corte, el de la cámara de apelaciones, y los que actúen en los juzgados inferiores, pueden ser recusados por *(algunas de las causas enumeradas en el art. 87), las mismas causas que pueden serlo los fiscales.*

ART. 110. — Recusado el secretario, el juez respectivo averiguará sumariamente el hecho en que se funde, y sin más trámite resolverá el artículo, sea desechando la recusación y mandando proceder adelante, sea admitiéndola.

ART. 111. — En este último caso, el secretario recusado será reemplazado:

En la suprema corte, por otro secretario que actúe en ella.

En la cámara de apelaciones, por el secretario de la otra cámara de apelaciones.

En los juzgados inferiores en que hubiere más de un secretario, por otro de la misma clase, y en aquellos en que no actúe sino uno solo, por otro (*escribano*) que nombrará el juez de oficio. (*)

ART. 112. — La resolución del juez que acepte o rechace la recusación de los secretarios, será inapelable.

ART. 113. — Las mismas disposiciones se observarán cuando los recusados sean los ujieres.

El ujier de la suprema corte, será reemplazado por uno de los secretarios del juzgado de sección de la capital.

El de la cámara de apelaciones, por el ujier de la otra cámara respectiva.

TITULO V

Del ministerio fiscal (a)

ART. 114. — En los tribunales federales, o de territorios nacionales, el ministerio fiscal será ejercido:

1º Por el procurador general de la suprema corte.

Art. 114. — Manual, t. 1, p. 219; cám. crim., t. 14, p. 168; t. 58, p. 364.

(*) Véase «Manual», t. 1, p. 219 y sigs.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.





- 2º Por los procuradores fiscales titulares, o en su defecto por los especiales nombrados en cada caso por los jueces de sección, *o de los territorios nacionales*.

ART. 115. — En los tribunales ordinarios del distrito de la capital, el ministerio fiscal será desempeñado:

- 1º Por el fiscal de la cámara de apelaciones.
2º Por dos o más agentes fiscales que ejercerán sus funciones en los juzgados inferiores.

ART. 116. — Corresponde al procurador general de la suprema corte: (y *a' fiscal de la cámara de apelaciones*).

- 1º *Intervenir en todas las causas de jurisdicción originaria de la suprema corte.*
2º Intervenir en todos los asuntos en que hubiesen sido parte los procuradores fiscales ante los jueces inferiores.
3º Cuidar de que los encargados de ejercer el ministerio fiscal en estos juzgados, promuevan las gestiones que les correspondan y desempeñen fielmente los demás deberes de su cargo.
4º Ejercer las demás funciones que especialmente se le confieran por las disposiciones de este código.

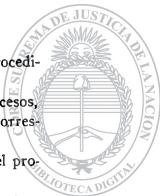
ART. 117. — *Corresponden al fiscal de la cámara de apelaciones, las funciones establecidas en el artículo anterior, con excepción de las determinadas en el inciso 1º.*

ART. 118. — Corresponde a los procuradores fiscales y a los agentes fiscales:

- 1º Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que correspondan a la justicia federal o del fuero común, en el distrito en que ejercen sus funciones, y que llegasen a su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que consideren necesarias, sea ante los jueces o ante cualquiera otra autoridad inferior, salvo aquellos casos en que por las leyes penales, no sea permitido el ejercicio de la acción pública.
2º Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en los procesos, y ejercitar todas las acciones y

Art. 116. — Ley de organización del poder judicial en España, art. 113.

Art. 118. — Ley de organización del poder judicial en España, arts. 110 y 111; cám. crim., t. 33, p. 10; mayo de 1911, p. 91.



recursos previstos en las leyes penales y de procedimientos.

- 3º Requerir de los jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo en caso necesario los reclamos que correspondan.
- 4º Vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y reglas del procedimiento.
- 5º Velar por que el orden legal en materia de competencia sea estrictamente observado.

ART. 119. — En caso de que los representantes del ministerio fiscal tuviesen algun motivo de legítimo impedimento, deberán manifestarlo, y el juez de la causa podrá dárllos por separados, pasando el asunto a quien debe subrogarlos.

ART. 120. — Cuando el procurador general de la corte o el fiscal de la cámara de apelaciones, estuviesen impedidos de intervenir en los juicios criminales, los tribunales respectivos nombrarán un abogado de la matrícula que reúna las condiciones exigidas para ser miembro del tribunal. (*)

ART. 121. — En caso de impedimento de los agentes fiscales de los tribunales ordinarios de la capital, se reemplazarán recíprocamente, y si todos estuviesen incapacitados, serán reemplazados por los agentes fiscales de lo civil, por orden de turno. (**)

ART. 122. — Los abogados que desempeñen las funciones del ministerio fiscal en sustitución de los titulares, gozarán del honorario que les asigne el tribunal o juez que conociere en la causa.

Este honorario será satisfecho por el tesoro público.

Art. 119. — Comp. esp., art. 228; enj. esp., art. 96.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.

(**) Véase la nota (a) de la p. 89.

TÍTULO VI

De las notificaciones, citaciones y emplazamientos (a)



ART. 123. — Los autos y providencias judiciales serán notificados dentro de las veinte y cuatro horas después de dictados, pudiendo el juez, en caso de urgencia, determinar un número menor de horas dentro de las que deba hacerse la notificación.

ART. 124. — Las notificaciones serán diligenciadas por los ujieres en los asuntos que pendan ante la suprema corte y cámara de apelaciones.

ART. 125. — En los juzgados inferiores las notificaciones se harán por los secretarios (*o escribanos actuarios*).

ART. 126. — Cuando las notificaciones se hiciesen en la oficina, se extenderán en el expediente, pudiendo la persona a quien se haga, sacar copia de la resolución.

ART. 127. — La notificación será firmada por el funcionario que la practicare y por el interesado. Si éste no supiere, no pudiese o no quisiere firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el actuario, no pudiendo servirse nunca para ello de los dependientes de su oficina.

ART. 128. — Si la notificación se hiciese en el domicilio de las partes, el ujier o actuario llevará por duplicado una cédula en que esté transcripto el auto que va a notificar, y después de leerla íntegra al interesado, le entregará una de las copias, y al pie de la otra que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo con expresión del día, hora y lugar en que se hubiese practicado la diligencia, observando, respecto de la forma lo prescripto en el artículo precedente.

ART. 129. — Cuando el ujier o el actuario no encuentre la persona, a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquiera

ART. 124. — Cód. de Bs. Aires, art. 39; cód. de San Luis, art. 31.

ART. 126. — Cód. de Bs. Aires, art. 40; cód. de San Luis, art. 32.

ART. 127. — Cód. de Bs. Aires, art. 41; cód. de San Luis, art. 33.

ART. 128. — Cód. de Bs. Aires, art. 42; cód. de San Luis, art. 34; cám. crim. t. 59, p. 390.

ART. 129. — Cód. de Bs. Aires, art. 43; cód. de San Luis, art. 35; enj. esp., art. 172.

(a) Véase «Manual», t. 1, p. 252 y sigs.



persona de la casa, empezando por la más caracterizada, y a falta de ella, a cualquier vecino que sepa leer, prefiriendo los más inmediatos, y procediendo en todos los casos en la misma forma del artículo anterior. Si el vecino requerido se negase a recibir la cédula, será esta fijada en la puerta del domicilio constituido por el interesado, en presencia de dos testigos, que firmarán la diligencia.

ART. 130. — En la diligencia de entrega se hará constar la obligación del que recibiere la copia de la cédula, de entregarla al que debía ser notificado, inmediatamente que regrese a su domicilio, bajo la multa de cuatro a veinte pesos si dejare de entregarla.

ART. 131. — Ninguna cédula podrá entregarse en día feriado, y en los días hábiles, antes de salir ni después de puesto el sol, salvo los casos de habilitación de días u horas.

ART. 132. — Ningún secretario o ujier podrá autorizar cédula alguna ni diligencia *que no hubiere practicado personalmente*, en la cual tengan interés ellos, sus mujeres o sus parientes consanguíneos, dentro del cuarto grado civil, o afines dentro del segundo.

ART. 133. — Las citaciones a los testigos y demás personas que no sean parte directa en el juicio y cuya comparecencia se considere necesaria o conveniente para la prosecución de la causa, se practicarán por los secretarios o escribanos con las mismas formalidades establecidas para las notificaciones.

Deberá expresarse además en la cédula el apercibimiento de que en caso de no comparecer a la primera citación, incurrirán en la multa de veinte a cuarenta pesos, y a la segunda citación, de ser conducidos por la fuerza pública a los objetos de la providencia decretada, sin perjuicio de ser procesados como reos del delito en que incurrieren por su desobediencia.

ART. 134. — La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos establecidos para las notificaciones y además los siguientes:

Art. 130. — Comp. esp., art. 281; enj. esp., art. 173.

Art. 131. — Manual, t. 1, p. 271; cód. de Bs. Aires, art. 44; cód. de San Luis, art. 37.

Art. 133. — Cód. de Bs. Aires, art. 45; cód. de San Luis, art. 39.

Art. 134. — Cód. de Bs. Aires, art. 46; cód. de San Luis, art. 40; enj. esp., art. 175; comp. esp., art. 283; c&m. crim., t. 45, p. 108.



1º El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado.

2º La prevención de que si no compareciere, le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.

ART. 135. — Si el que ha de ser notificado, citado o emplazado se hallare ausente del lugar del juicio, pero dentro de la circunscripción del juzgado, la notificación o citación se hará por medio de oficio al juez o autoridad judicial del lugar de su residencia; más si se hallare en ajena jurisdicción, se verificará por medio del correspondiente exhorto.

ART. 136. — Cuando las notificaciones, citaciones o emplazamientos, hubieren de practicarse en el extranjero, se observará para ello los trámites prescriptos en los tratados, si los hubiere, y en su defecto, se estará al principio de la reciprocidad o la práctica de las naciones. (*)

ART. 137. — Practicada la notificación, citación o emplazamiento, o hecho constar la causa que lo hubiere impedido, se unirá a los autos la cédula, el oficio o exhorto expedido.

ART. 138. — Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo en todo a lo dispuesto en este título.

Serán igualmente nulas todas las actuaciones que se practiquen con posterioridad a la diligencia, siempre que tengan con ella relación directa.

Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, de la providencia o mandato judicial que dió causa a la diligencia nula, surtirá esta desde entonces sus efectos como si se hubiere hecho con arreglo a la ley.

ART. 139. — La citación por edictos solo procederá contra

Art. 135. — Cód. de Bs. Aires, art. 47; cód. de San Luis, art. 41.

Art. 136. — Comp. esp., art. 285; enj. esp., art. 177.

Art. 137. — Comp. esp., art. 287; enj. esp., art. 179.

Art. 138. — Comp. esp., art. 288; enj. esp., art. 180; cádm. crim., t. 43, p. 329.

Art. 139. — Manual, t. 2, p. 41; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 502; comp. esp., arts. 367 a 369 y 651 y 652; enj. esp., arts. 386 a 839; leyes 12 y 18, tít. 1; y 1, tít. 29, part. 7.ª; leyes 47, 48, 66, 119, 140 y 148 del estilo; 3, tít. 10, lib. 4, recop. castellana.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



el procesado cuyo paradero se ignora y que no ha podido ser notificado.

Los edictos serán publicados durante el tiempo de la citación en dos diarios o periódicos, si los hubiere, y *si nó* se fijarán en los parajes públicos del lugar del delito, y contendrán:

- 1º La designación del juez que conociere de la causa.
- 2º El nombre y apellido del emplazado.
- 3º El delito por el que se le procesa.
- 4º El término dentro del cual deberá presentarse, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será declarado rebelde.
- 5º La fecha en que se expide; y
- 6º La firma del secretario o actuario.

ART. 140. — (1) *Los periódicos en que se haga su publicación, serán agregados a los autos.*

ART. 141. — El término del emplazamiento, será de treinta días, contados desde la primera publicación.

ART. 142. — *El que practicare las notificaciones, citaciones y emplazamientos contra las disposiciones de este código, a más de responder de los perjuicios que cause a las partes, incurrirá en una multa de cincuenta a cien pesos la primera vez, perdiendo el empleo en caso de reincidencia.*

TÍTULO VII

De las costas procesales (a)

ART. 143. — En todo auto o sentencia que ponga término a la causa o a cualquiera de sus incidentes, deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.

ART. 144. — Las costas serán a cargo de la parte vencida en el juicio o en el incidente.

Art. 140. — Manual, t. 2, p. 42; comp. esp., art. 653; enf. esp., art. 838.

Art. 141. — Manual, t. 2, p. 41.

Art. 143. — Comp. esp., art. 355; enf. esp., art. 239.

Art. 144. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 123, 288, 314, 533 y 570; t. 2, ps. 541, 697, 698, 706, 737, 740; comp. esp., art. 355; enf. esp., art. 239; cód. de Bs. Aires, art. 67; cód. de San Luis, art. 71; supr. cort. nac. t.

(1) **Don**, dice el texto oficial.

(*) Véase más adelante, cap. XXXIII, núm. 8.



ART. 145. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las personas que desempeñen el ministerio fiscal solo serán condenadas en costas en caso de notorio desconocimiento de las leyes.

En el mismo caso, serán condenados en costas los abogados que intervienen en los procesos.

ART. 146. — La costas consistirán:

1.º En la reposición o reintegro del valor del papel sellado empleado en la causa.

2º En el pago de todos los gastos originados en el juicio a la parte vencedora.

ART. 147. — La importancia de los honorarios de los abogados, procuradores, peritos y demás personas que hayan intervenido en las diligencias procesales, será determinada en la forma establecida por las leyes de procedimientos civiles, *sin que ello paralice la prosecución de la causa.*

TÍTULO VIII

De la rebeldía o contumacia del procesado (a)

ART. 148. — Será declarado rebelde:

1º El procesado que, notificado en legal forma, no compareciere a la citación o llamamiento judicial.

2º El que hubiere fugado del establecimiento en que se hallare preso.

3º El que hallándose en libertad provisoria dejare de concurrir a la presencia del juez, el día que estuviere señalado, o cuando fuere llamado.

49, p. 291; t. 53, p. 155; t. 62, p. 246; t. 71, p. 40; t. 98, p. 393; cá. crim. t. 14, p. 301; t. 32, ps. 391 y 392; t. 46, p. 97; t. 65, p. 220; t. 80, p. 55; t. 84, p. 314; t. 88, ps. 323, 324 y 374; t. 95, ps. 163 y 260; t. 96, p. 324; t. VI, p. 400.

Art. 146. — Comp. esp., art. 356; enj. esp., art. 240.

Art. 146. — Manual, t. 2, p. 44; Comp. esp., art. 357; enj. esp., art. 241.

Art. 147. — Supr. cort. nac., t. 122, p. 259.

Art. 148. — Manual, t. 2, p. 41; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 602; comp. esp., arts. 365 y 366; enj. esp., arts. 834 y 835; cá. crim., t. 31, p. 366.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 41.



ART. 149. — No compareciendo el procesado dentro del término señalado, previo certificado del secretario, se hará por el juez la declaración de su rebeldía o contumacia.

ART. 150. — Ni la citación del procesado ni su rebeldía paralizarán el sumario.

Terminado éste, se guardarán los autos y las piezas de convicción que no fueren de un tercero irresponsable; y aunque lo fuesen cuando el juez creyese que es indispensable su conservación; en cuyo caso, se hará al tercero la indemnización correspondiente.

Si el procesado se presentase o fuere habido, la causa seguirá su curso.

ART. 151. — Si la rebeldía fuese declarada durante el plenario, se suspenderá el curso de la causa, hasta la presentación o aprehensión del procesado.

ART. 152. — Si fuesen dos o más los procesados, y no a todos se les hubiese declarado en rebeldía, se suspenderá el curso de la causa respecto a los rebeldes y se continuará respecto a los demás.

ART. 153. — Cuando la causa se suspendiese en el plenario por rebeldía de los procesados, se observará lo dispuesto en el artículo 150.

En uno y otro caso, cuando se hubieren de devolver los instrumentos del delito o las piezas de convicción, a sus dueños, que fuesen terceros irresponsables, se hará en una acta la descripción minuciosa de todo lo que hubiera de entregarse.

ART. 154. — *En cualquiera de los casos de suspensión de la causa por rebeldía, se mandarán devolver los efectos del delito a los terceros irresponsables que justifiquen ser sus dueños.*

Art. 149. — Manual, t. 2, p. 42; comp. esp., art. 370; enj. esp., art. 839.

Art. 150. — Manual, t. 1, p. 18; t. 2, p. 42; comp. esp., arts. 371 y 846; enj. esp., art. 840; sup. cort. nac., t. 64, p. 185; cádm. crim., t. 1, p. 226; t. 24, p. 219.

Art. 151. — Manual, t. 1, p. 18; t. 2, p. 42; comp. esp., arts. 371 y 846; enj. esp., art. 840; cádm. crim. t. 31, p. 356.

Art. 152. — Comp. esp., art. 372; enj. esp., art. 842.

Art. 153. — Comp. esp., art. 374; enj. esp., art. 844.

LIBRO SEGUNDO

Del sumario (a)

TITULO I

De la denuncia y la querrela

CAPITULO I

De la denuncia (b)



ART. 155. — Toda persona capaz que presenciare la perpetración de cualquier delito que dé lugar a la acción pública, o que, por algún otro medio, tuviere conocimiento de esa perpetración, podrá denunciarla:

- 1º Al juez competente para la instrucción del sumario.
- 2º A los funcionarios del ministerio fiscal.
- 3º A los funcionarios o empleados superiores de la policía de la capital y territorios nacionales.

ART. 156. — La denuncia debe contener de un modo claro y preciso, en cuanto sea posible:

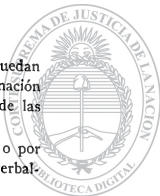
- 1º La relación circunstanciada del hecho reputado criminoso, con expresión del lugar, tiempo y modo como fué perpetrado, y con qué instrumentos.
- 2º Los nombres de los autores, cómplices y auxiliares en el delito, así como de las personas que lo presenciaron o que pudieren tener conocimiento de su perpetración.

Art. 155. — Manual, t. 2, p. 76; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 273; comp. esp., art. 387; enj. esp., art. 259; cód. de Bs. Aires, art. 69; cód. de San Luis, art. 81; proyecto uruguayo, art. 101; cód. de Chile, art. 104; cód. italiano, art. 149; cádm. crim. t. 13, p. 252; t. 16, p. 172; *Fournier*, «Código de Nueva York», p. LXXVIII; *Faustin Hélie*, op. cit., t. V, p. 306; *Amat y Furió*, op. cit., p. 286; *Goyena*, «Febrero reformado», t. 5, p. 450; leyes 7 y 8, tít. 33, lib. 12 de la nov. recopil.

Art. 156. — Manual, t. 2, p. 76.

(a) Véase «Manual», t. 2, p. 73.

(b) Véase «Manual», t. 2, p. 76.



3º Todas las indicaciones y demás circunstancias que puedan conducir a la comprobación del delito, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la averiguación de las personas (*criminal y civilmente*) responsables.

ART. 157. — La denuncia podrá hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial; por escrito o verbalmente.

ART. 158. — La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el denunciante, y si no pudiese hacerlo por otra persona a su ruego.

El funcionario que la recibiere, rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, que podrá rubricarlas también por sí o por otra persona a su ruego.

ART. 159. — Cuando la denuncia fuere verbal, se extenderá un acta por el funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no supiere o no pudiese firmar lo hará otra persona a su ruego.

ART. 160. — El funcionario que recibiere una denuncia verbal o escrita, hara constar la identidad de la persona del denunciante por cédula de vecindad, por dos testigos, o por juramento en último caso.

ART. 161. — En el caso de denuncia hecha por un mandatario especial, el testimonio de poder será agregado a la denuncia.

ART. 162. — Hecha la denuncia se expedirá a los denunciantes, si lo solicitaren, una nota o certificado en que consten el día y hora de su presentación, el hecho denunciado, si este fuese conocido, los comprobantes que se hubiesen presentado de los hechos, y las demás circunstancias que consideren importantes.

ART. 157. — Manual, t. 2, p. 77; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 122; comp. esp., art. 397; enj. esp., art. 265; cód. de Bs. Aires, art. 70; cód. de San Luis, art. 82; proyecto uruguayo, art. 103; cód. de Chile, art. 112; cá. crim., t. 18, p. 116; t. 62, p. 207.

ART. 158. — Manual, t. 2, p. 77; comp. esp., art. 398; enj. esp., art. 266.

ART. 159. — Manual, t. 2, p. 77; comp. esp., art. 399; enj. esp., art. 267.

ART. 160. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 273; comp. esp., art. 400; enj. esp., art. 268; cód. de Bs. Aires, art. 71; cód. de San Luis, art. 83; cód. de Chile, arts. 110 y 111; proyecto uruguayo, art. 106.

ART. 162. — Comp. esp., art. 401; enj. esp., art. 268, in fine.



ART. 163. — No se admitirán denuncias de descendientes contra ascendientes, consanguíneos o afines y vice-versa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano contra hermano.

Esta prohibición no comprende la denuncia por delito ejecutado contra el denunciante, o contra una persona cuyo parentesco con el denunciante sea más próximo que el que lo liga con el denunciado.

ART. 164. — Toda autoridad o todo empleado público que en ejercicio de sus funciones adquiriera el conocimiento de un delito que dé nacimiento a la acción pública, estará obligado a denunciarlo a los funcionarios del ministerio fiscal, al juez competente, o a los funcionarios o empleados superiores de policía en la capital y *territorios federales*.

En caso de no hacerlo, incurrirán en las responsabilidades establecidas en el código penal. *En el año . . . e inhabilitación*

ART. 165. — Los médicos, cirujanos y demás personas que profesan cualquier ramo del arte de curar, harán conocer dentro de veinte y cuatro horas, o inmediatamente, en caso de grave peligro, los envenenamientos y otros graves atentados personales cualesquiera que sean, en los cuales hayan prestado los socorros de su profesión, al juez competente, al ministerio fiscal o a los funcionarios de policía, bajo las represiones establecidas en la legislación penal.

En esta declaración, se indicará dónde se encuentra la víctima, y en cuanto fuere posible, los nombres y demás circunstancias que puedan importar para la averiguación de los delinquentes.

ART. 166. — Cuando sean varias las personas que hayan concurrido a la curación o asistencia de la persona lesionada, todas ellas están obligadas a prestar la declaración prescripta en el artículo anterior.

Art. 163. — Comp. esp., art. 391; enj. esp., art. 261; cód. de Bs. Aires, art. 72; cód. de San Luis, art. 84; cód. de Chile, art. 109.

Art. 164. — Manual, t. 2, p. 77; comp. esp., art. 392; enj. esp., art. 262; cód. de Bs. Aires, art. 73; cód. de San Luis, art. 86; cód. de Chile, arts. 105 y 107; proyecto uruguayo, art. 108; proyecto para Bs. Aires de Malaver, Montes de Oca y Obarrio, nota al art. 205; cód. francés, art. 29; cãm. crim., t. 16, p. 172; julio de 1911, p. 83.

Art. 165. — Manual, t. 2, p. 116; comp. esp., art. 392; enj. esp., art. 262; cód. de Bs. Aires, art. 75; cód. de San Luis, art. 87; proyecto uruguayo, art. 109; cód. de Chile, art. 106; cãm. crim., t. 45, p. 108.



ART. 167. — Se exceptúa de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el caso en que las personas mencionadas hubieran tenido conocimiento del delito por revelaciones que les fueren hechas bajo el secreto profesional.

ART. 168. — El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia.

ART. 169. — Los jueces que recibieren una denuncia con todos los requisitos exigidos en el presente capítulo, estarán obligados a iniciar las diligencias necesarias para la averiguación del hecho y de los delinquentes, conforme a las disposiciones establecidas en este código.

Cuando la denuncia se hiciere ante los funcionarios del ministerio fiscal, éstos la comunicarán a la brevedad posible al juez que debe instruir el sumario.

Cuando se hiciere a los funcionarios o autoridades de policía, deberán éstos practicar sin demora todas las diligencias de carácter urgente que la investigación criminal exija, dando cuenta del hecho denunciado al juez a quien corresponda la instrucción inmediatamente después de haber llegado a su conocimiento.

CAPITULO II

De la querrela (a)

ART. 170. — La persona particularmente ofendida por un delito del cual nace acción pública, podrá asumir el rol de parte querellante, y promover en tal carácter el juicio criminal. (*)

Art. 167. — Manual, t. 2, p. 116; cádm crim., t. 45, p. 108. cód. de Ba. Aires, art. 76; cód. de San Luis, art. 88; proyecto uruguayo, art. 110; cód. de Chile, art. 108; ley 27, tít. 1.º, part. 7.º; sup. cort. nac., t. 65, p. 172; t. 99, p. 161; t. 100, p. 342; cádm. crim., t. 32, p. 394.

Art. 169. — Comp. esp., arts. 402 a 404; enj. esp., art. 269.

Art. 170. — Manual, t. 2, p. 58 y 150; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 10; t. 2, p. 24, 115 y 551; cód. de Ba. Aires, art. 84; cód. de San Luis, art. 95; cód. civil, art. 133 y 135; cód. francés, art. 63; cód. italiano, art. 53; cód. de Ginebra, art. 17; sup. cort. nac., t. 52, p. 168; t. 55, p. 348; t. 58, p. 362; t. 65, p. 172; t. 76, p. 17; cádm. crim., t. 6, p. 610; t. 15, p. 46; t. 16, p. 117; t. 18, p. 116 y 377; t. 19, p. 230; t. 24, p. 221; t. 25, p. 18; t. 34, p. 242 y 325; t. 40, p. 312; t. 42, p. 159; t. 44, p. 116, t. 62, p. 32; t. 53, p. 278 y 288; t. 54, p. 370; t. 58, p. 299 y 354; t. 59, p. 34, 285 y 376;

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 77.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



El mismo derecho tienen los representantes legales de los incapaces por los delitos cometidos en las personas o bienes de sus representados.

ART. 171. — Los funcionarios del ministerio fiscal deducirán también en forma de querella las acciones penales.

ART. 172. — El particular querellante quedará sometido a la jurisdicción del juez que conociere de la causa, en todo lo relativo al juicio por él promovido y a sus (*efectos o*) consecuencias legales.

ART. 173. — El mismo podrá apartarse de la querella en cualquier estado de la causa, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieren resultarle por sus actos anteriores.

ART. 174. — Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá haberla abandonado el que la hubiere interpuesto, cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto en que el juez así lo hubiere acordado.

Al efecto, a los cinco días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante, o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el juez que conociere de los autos, que aquél pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo anterior.

ART. 175. — Se tendrá también por abandonada la querella, cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos

t. 61, p. 114; t. 67, p. 98. 373 y 399; t. 78, p. 140 y 252; t. 81, p. 189; t. 85, p. 425; t. 93, p. 73; t. 94, p. 13. 44 y 369; t. 95, p. 119 y 129; t. 97, p. 52. 106 y 270; t. 99, p. 6; t. II, p. 360; t. III, p. 174; cádm. fed. de La Plata, t. 6, p. 290; cádm. fed. de Córdoba, t. 3, p. 297; *Digesto italiano*, «Azione penale», núm. 36; *Rivarola*, «Derecho penal argentino», p. 586.

ART. 171. — Comp. esp., art. 407; enj. esp., art. 271; cádm. crim., t. 33, pág. 5.

ART. 172. — Comp. esp., art. 411; enj. esp., art. 274; cádm. crim., t. 53, p. 291.

ART. 173.—Comp. esp., art. 412; enj. esp., art. 274, inc. 2.º; cód. de Bs. Aires, art. 86; cód. de San Luis, art. 97; leyes 17 y 19, tít. 1.º, part. 7.º; cádm. crim., t. 95, p. 72.

ART. 174.—Manual, t. 2, p. 78; comp. esp., art. 413; enj. esp., art. 275; cód. de Bs. Aires, art. 88; cód. de San Luis, art. 100; proyecto uruguayo, art. 119; supr. cort. nac., t. 62, p. 144; ley 17, tít. 1.º, part. 7.º

ART. 175. — Manual, t. 2, p. 78; comp. esp., art. 414; enj. esp., art. 276; cód. de Bs. Aires, art. 89; cód. de San Luis, art. 101; proyecto uruguayo, art. 120; cádm. crim., t. 10, p. 417; t. 15, p. 428; t. 41, p. 327; t. 66, p. 54.



o representantes legales a sostenerla, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que la muerte o incapacidad hubieren ocurrido.

ART. 176. — La querella se promoverá siempre por escrito, salvo los casos de procedimiento verbal, y deberá expresar:

- 1º El nombre, apellido y domicilio del querellante.
- 2º El nombre, apellido y domicilio del querellado.

En caso de ignorar estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer.

- 3º La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supiere.
- 4º La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.
- 5º El querellante podrá pedir que se proceda oportunamente a la detención o prisión del presunto culpable y al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir su responsabilidad.
- 6º La firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiese firmar.

La querella deberá firmarse en este último caso ante el secretario del juzgado.

ART. 177. — El que promoviere querella por un delito cualquiera, contrae responsabilidad personal cuando hubiese procedido calumniosamente.

Art. 176. — Manual, t. 2, p. 77; comp. esp., art. 415; enj. esp., art. 277; cód. de Bs. Aires, art. 85; cód. de San Luis, art. 96; cód. de Chile, art. 115; cárm. crim., agosto de 1912, p. 60.

Art. 177. — Manual, t. 2, p. 78; cód. uruguayo, art. 185; cód. de Bs. Aires, art. 90; cód. de San Luis, art. 102; cód. de Chile, art. 52; sup. cort. nac., t. 99, p. 161; t. 101, p. 398; cárm. crim., t. 23, p. 124; t. 56, p. 22; t. 95, p. 72.



TÍTULO II

Objeto y carácter del sumario, autoridades que pueden instruirlo o prevenir su instrucción (a)

ART. 178. — El sumario tiene por objeto:

- 1º Comprobar la existencia de un hecho punible.
- 2º Reunir todas las circunstancias que puedan influir en su calificación legal.
- 3º Descubrir sus autores, cómplices y auxiliares.
- 4º Practicar las diligencias necesarias para la aprehensión de los delincuentes y para asegurar su responsabilidad pecuniaria.

ART. 179. — El sumario puede iniciarse:

- 1º Por denuncia.
- 2º Por querrela.
- 3º Por prevención.
- 4º De oficio.

ART. 180. — El sumario es secreto y durante él no hay debates ni defensas. Durante su formación, el defensor del procesado podrá hacer las indicaciones y proponer las diligencias que juzgue convenientes, y el juez deberá decretarlas siempre que las reputé conducentes al esclarecimiento de los hechos. La negativa del juez no dará lugar a recurso alguno, debiendo, sin embargo, hacerse constar en el proceso a los efectos que ulteriormente correspondan. (b).

Art. 178. — Manual, t. 1, p. 294; t. 2, p. 44 y 229; comp. esp., art. 420; enj. esp., art. 299; cód. uruguayo, art. 143; cód. de Ginebra, art. 57; cá. crim., t. 24, p. 217.

Art. 179. — Manual, t. 2, p. 49, 229.

Art. 180. — Manual, t. 2, p. 83, 230, 231, 261; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 298; com. esp., art. 422; enj. esp., art. 301; cód. de Bs. Aires, art. 444; cód. de San Luis, art. 3; ley francesa de 8 de diciembre de 1897, art. 8; Fournier, op. cit., p. XXX; Garraud, op. cit., t. 1, ps. 31, 33, 66, 122, 128 y 130; cód. de Chile, art. 99; cód. uruguayo, art. 444; proyecto belga, art. 444; Rodolfo Rivarola, «La justicia en lo criminal», tomo único, p. 64; Vedia, «Constitución argentina», p. 96; Faustin Hélie, «Traité de l'instruction criminelle», t. V, p. 814; proyecto del señor Voces Jiménez, en la cámara de diputados de la nación; cá. crim., t. 52, p. 569; t. 93, p. 84; t. 99, p. 392.

(a) Véase «Manual», t. 2, p. 73.

(b) La redacción del artículo es la que resulta de la sanción legislativa. Véase Diario de sesiones de la cámara de diputados de la nación, año 1898, t. 1, p. 650.



ART. 181. — Cuando se proceda por denuncia o querrela, servirá de base al procedimiento la misma querrela o denuncia.

En los casos de prevención de los funcionarios de policía, el sumario comenzará con las actuaciones y diligencias practicadas por dichos funcionarios.

ART. 182. — Cuando se proceda de oficio, formará la cabeza del proceso, el auto, que mande proceder a la averiguación del delito.

Este auto deberá contener en lo posible:

- 1º La determinación del hecho punible.
- 2º El tiempo en que ha llegado a noticia del juez.
- 3º La designación del lugar en que ha sido ejecutado.
- 4º La orden de proceder a su averiguación y al descubrimiento de los autores y coparticipes.
- 5º La determinación de las primeras diligencias que se consideren necesarias o convenientes y que se manden practicar.
- 6º La citación del representante del ministerio fiscal a efecto de que tome en el sumario la intervención que legalmente le corresponde.

ART. 183. — Inmediatamente que los funcionarios de policía tuvieren conocimiento de un delito público, lo participarán a la autoridad judicial que corresponda.

ART. 184. — En los delitos públicos los funcionarios de policía tendrán las siguientes obligaciones y facultades:

- 1º Averiguar los delitos que se cometan en el distrito de (*la capital*) su jurisdicción.
- 2º Recibir las denuncias que se les hicieren sobre los mismos delitos.
- 3º Verificar sin demora las diligencias necesarias para hacer constar las huellas o rastros aparentes del delito, cuando haya peligro de que esas huellas desaparezcan si se retardasen estas diligencias.

Art. 182. — Manual, t. 2, ps. 49, 75, 83, 230.

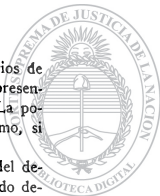
Art. 183. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 127; comp. esp., art. 429; enj. esp., art. 284; cód. de Bs. Aires, art. 448; cód. de San Luis, art. 103; sup. cort. nac., t. 67, p. 371.

Art. 184. — Manual, t. 2, ps. 80, 230, 247; comp. esp., art. 427; cód. de Bs. Aires, art. 91; cód. de San Luis, art. 112; cód. italiano, art. 203; proyecto uruguayo, art. 126; sup. cort. nac., t. 71, p. 366.



Si el retardo no ofreciese peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que las huellas del hecho no desaparezcan y que el estado de los lugares no sea modificado.

- 4º Proceder a la detención del presunto culpable en los casos mencionados en el artículo 4.
- 5º Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirir en los momentos de la ejecución del hecho y practicar todas las diligencias urgentes que se consideren necesarias para establecer su existencia y determinar los culpables.
- 6º Poner en conocimiento del juez competente (*sin la menor tardanza*) *dentro de 24 horas*, las denuncias recibidas y las informaciones y diligencias practicadas a los objetos de la investigación criminal.
- 7º Disponer que antes de practicarse las averiguaciones y exámenes a que deba procederse, no haya alteración alguna en todo lo relativo al objeto del crimen y estado del lugar en que fué cometido.
- 8º Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgaren necesarias, recibiendo las declaraciones de los ofendidos, y los informes, noticias y esclarecimientos que puedan servir al descubrimiento de la verdad, de las demás personas que puedan prestarlas.
- 9º Secuestrar los instrumentos del delito, o cualesquiera otros que puedan servir para el objeto de las indagaciones.
10. Conservar incomunicado al delincuente, si la investigación criminal lo exigiere.
11. Impedir, si lo juzgan conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias antes de concluir las diligencias de investigación, y remitir a los contraventores a la autoridad competente, a fin de que les sean aplicadas las penas en que hubieren incurrido, si no tuvieran alguna excusa o justificación legal.
12. Hacer uso de la fuerza (*pública*) cada vez que fuese indispensable para el debido desempeño de sus atribuciones.



ART. 185. — La intervención conferida a los funcionarios de policía en la prevención del sumario, cesará luego que se presente a formarlo el juez a quien corresponda la instrucción. La policía, sin embargo, continuará como auxiliar de este último, si así se le ordenare.

Las diligencias practicadas, los instrumentos y efectos del delito y la persona de los delinquentes en el caso de haber sido detenidas, deberán ponerse en el acto a disposición de dicho juez.

ART. 186. — Los funcionarios a quienes corresponda la instrucción de las primeras diligencias, podrán ordenar, siempre que lo creyesen necesario, que les acompañen los dos primeros médicos que fueren habidos, para prestar en su caso los oportunos auxilios de su profesión. Los médicos que siendo requeridos por dichos funcionarios aun verbalmente, no se prestasen a lo expresado en el párrafo anterior, incurrirán en una multa de cincuenta a doscientos pesos, a no ser que hubieren incurrido por su desobediencia en responsabilidad criminal.

ART. 187. — En el caso en que los funcionarios de policía encargados de la prevención del sumario, no estuvieren facultados para entrar, en ejercicio de sus funciones, a un establecimiento público, deberán solicitar previamente permiso de la autoridad o empleado a cuyo cargo estuviere el establecimiento.

Ese permiso no podrá ser negado sin causa legítima.

ART. 188. — Cuando con el mismo objeto de la investigación criminal o aprehensión del delincuente, fuere necesario penetrar en el domicilio de algun particular, el funcionario de policía deberá recabar del juez competente la respectiva orden de allanamiento.

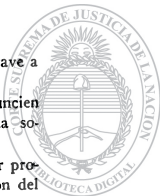
ART. 189. — Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes:

- 1º Cuando se denuncie por uno o mas testigos, haber visto personas que han asaltado una casa, introduciéndose en ella, con indicios manifiestos de ir a cometer algún delito.

Art. 185. — Manual, t. 2, p. 80.

Art. 186. — Comp. esp., art. 432.

Art. 187. — Leyes 18, tít. 7 y 2; tít. 19, lib. 8, R. C. y auto 7, tít. 23, lib. 4, R. C.



2º Cuando se introduzca en la casa un reo de delito grave a quien se persigue para su aprehensión.

3º Cuando se oigan voces dentro de la casa que anuncien estarse cometiendo algún delito o cuando se pida socorro.

ART. 190. — Los funcionarios de policía deberán formar proceso de todas las diligencias que practiquen en la prevención del sumario.

ART. 191. — El proceso de prevención habrá de contener: (*interviniendo el juez de instrucción*).

1º El lugar, día, mes y año en que fué iniciado.

2º El nombre, profesión, estado y domicilio de cada una de las personas que en él intervinieren.

3º El juramento de los peritos y testigos.

4º La declaración, informe o dictámen textuales de los peritos y del ofendido, deposiciones, informaciones y resultado de cualquier diligencia tendente a obtener, no solo el completo conocimiento del hecho reputado criminal y todas las circunstancias que deban contribuir para la calificación exacta del delito, sino la referencia de cualquier presunción, indicio o sospecha por las que se pueda llegar a descubrir cuáles fueron los autores, cómplices o auxiliadores.

5º La firma de todos los que intervienen en el proceso o la mención de los que no supieren o no pudieren hacerlo.

ART. 192. — En el sumario de prevención, se observarán las mismas formalidades que deben observar los jueces de instrucción.

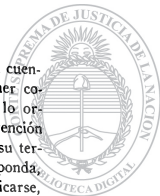
ART. 193. — Concluidas las diligencias *urgentes* del sumario de prevención, será todo remitido dentro de veinte y cuatro horas al juez competente.

Los comisarios de policía harán esa remisión por intermedio del jefe del departamento.

Art. 191. — Manual, t. 2, p. 81; comp. esp., arts. 441 y 442; enj. esp., arts. 292 y 293.

Art. 192. — Manual, t. 2, p. 81; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 404; cáma crim. diciembre de 1912, p. 99; julio de 1913, p. 68; septiembre de 1913, p. 103.

Art. 193. — Manual, t. 2, p. 82.



ART. 194.—Cuando los funcionarios de policía no dieran cuenta al juez que corresponda, inmediatamente después de tener conocimiento de la perpetración de un delito público, como lo ordena el art. 183, o no remitiesen las diligencias de la prevención del sumario, antes de las veinte y cuatro horas después de su terminación, el juez expresado pedirá del superior que corresponda, la amonestación o corrección disciplinaria que sea de aplicarse, sin perjuicio de las responsabilidades civiles para con el perjudicado.

En caso de reincidencia podrá pedir la suspensión o destitución.

TÍTULO III

De la instrucción

ART. 195.—La instrucción del sumario corresponde a los jueces a quienes compete el juzgamiento de los delitos que le sirven de objeto, con excepción de lo dispuesto para el distrito de la capital y sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los funcionarios de la policía en títulos anteriores.

ART. 196. — Los jueces a quienes corresponda la instrucción, examinarán sin demora la denuncia y demás actuaciones que les sean remitidas por los funcionarios de policía y harán practicar en estos casos, así como en los que el procedimiento se iniciare de oficio o por denuncia o querella, todas las diligencias que sean necesarias para llegar a la investigación del hecho punible y de las personas responsables de su ejecución.

El sumario será organizado por el juez, actuando con un secretario.

ART. 197. — La ratificación de las diligencias practicadas por los funcionarios o empleados de policía, será ordenada por los jueces sumariantes, siempre que las encontraren defectuosas o irregulares, o que por cualquier otra circunstancia lo considerasen conveniente.

Art. 194. — Manual, t. 2, p. 82; cá.m. crim., t. 24, p. 277; t. 45, p. 99.

Art. 196. — Manual, t. 2, p. 91; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 404; cá.m. crim., t. 65, p. 148.

Art. 197. — Manual, t. 2, p. 91; comp. esp., art. 455.



ART. 198.—El juez que instruyese el sumario practicará las diligencias que le propusiere el agente fiscal o el particular querellante, excepto las que considere innecesarias o perjudiciales.

Contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas, no habrá lugar a recurso alguno, pero se dejará constancia en autos.

ART. 199. — Cuando se presentare querella en la forma y con los requisitos prevenidos en la ley, el juez después de admitirla, si fuera procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren, salvo las que considerase contrarias a las leyes, o innecesarias o perjudiciales para el objeto de la querella, las cuales denegará en resolución motivada.

ART. 200.—Desestimaré en la misma forma la querella, cuando los hechos en que se fundase no constituyan delito, o cuando no se considerase competente para instruir el sumario objeto de la misma.

Contra el auto a que se refiere este artículo, procede el recurso de apelación en relación.

ART. 201. — En el caso de concurrir varios querellantes particulares, los jueces ordenarán que se presenten todos bajo una sola representación, salvo el caso en que no hubiere entre ellos identidad de intereses.

ART. 202. — Las diligencias pedidas y denegadas en el sumario podrán ser propuestas de nuevo en el plenario.

ART. 203.—El juez podrá permitir al querellante intervenir en todas las diligencias del sumario en que le sea permitido al procesado o a su defensor.

ART. 204.—En los casos de delitos contra la propiedad, el damnificado que no quiera entablar la acción criminal, tendrá intervención en el sumario, al solo objeto de hacer constar la propiedad de la cosa que reclama.

Art. 198. — Manual, t. 2, p. 83; comp. esp., arts. 456 y 457; enj. esp., arts. 311 y 312.

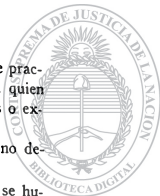
Art. 200. — Comp. esp., art. 458; enj. esp., art. 313; cá. crim., t. V, p. 155.

Art. 201. — Ley 3, tít. 2, lib. 2, del fuero juzgo; ley 18, tít. 5, part. 3.ª

Art. 202. — Comp. esp., art. 460; enj. esp., art. 314.

Art. 203. — Comp. esp., art. 462; enj. esp., art. 316.

Art. 204. — Comp. esp., art. 466; enj. esp., art. 320.



ART. 205. — Las diligencias del sumario que hubieren de practicarse fuera del lugar en que tenga su asiento el juez a quien compete su instrucción, tendrán lugar por medio de oficios o exhortos, según corresponda en cada caso.

Estas diligencias serán reservadas para todos los que no deban intervenir en ellas.

ART. 206. — Cuando al mes de iniciado un sumario no se hubiere terminado, el juez que lo instruya deberá informar al tribunal superior respectivo, sin que medie petición de parte, de las causas que hayan impedido su conclusión; informe que estará obligado a presentar cada (*semana*) *ocho días* después del vencimiento de aquel término.

TÍTULO IV

Del cuerpo del delito (a)

ART. 207. — La base del procedimiento en materia penal es la comprobación de la existencia de un hecho o de una omisión, que la ley repute delito o falta.

ART. 208. — Cuando el delito que se persiguiera hubiese dejado pruebas materiales de su perpetración, el juez las hará constar en el sumario recogiéndolas inmediatamente y conservándolas para el plenario si fuere posible.

ART. 209. — Siendo habida la persona o cosa objeto del delito, el juez describirá detalladamente su estado y circunstancias, y especialmente todas las que tuvieren relación con el hecho punible.

ART. 205. — Manual, t. 1, p. 349; comp. esp., art. 468 y 469; enj., esp., art. 322 y 323.

ART. 206. — Manual, t. 2, p. 83; comp. esp., art. 470; enj. esp., art. 324.

ART. 207. — Manual, t. 2, p. 231; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 195; cód. uruguayo, art. 151; c. m. crim., noviembre de 1910, p. 1650; mayo de 1911, p. 21; septiembre de 1911, p. 355.

ART. 208. — Manual, t. 2, p. 89 y 92; comp. esp., art. 472; enj. esp., art. 344; cód. uruguayo, art. 153; cód. de Bs. Aires, art. 93; cód. de San Luis, art. 116; cód. de Chile, art. 133; cód. italiano, art. 202; proyecto uruguayo, art. 147; Garraud, «Instruction criminelle», t. 1, p. 567; Ortolán, «Elementos de derecho penal», t. 1, núms. 1129 a 1141; Haus, «Droit pénal belge», t. 1, párrafos 289 y 290; Mittermaier, op. cit., p. 151 y siguientes.

ART. 209. — Manual, t. 2, ps. 89, 90, 93; comp. esp., art. 473; enj. esp., art. 335; cód. de Bs. Aires, art. 94; cód. de San Luis, art. 117; proyecto uruguayo, art. 146.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 87.



En los casos de muerte por heridas, deberá consignarse en la descripción ordenada con intervención de peritos, la naturaleza, situación y número de aquellas, haciéndose además constar la posición en que se hubiere encontrado el cadáver y la dirección de los rastros de sangre y demás que se notaren.

ART. 210.—Si para la apreciación del delito o de sus circunstancias tuviere importancia el reconocimiento de un lugar cualquiera, el juez hará consignar en los autos la descripción del mismo, sin omitir ningún detalle que pueda tener valor, tanto para la acusación como para la defensa.

ART. 211. — El juez procurará recojer en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito, extendiendo diligencia con expresión del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolas minuciosamente.

La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados, notificándose a la misma el auto en que se mande recogerlas.

ART. 212. — El juez procederá con intervención de perito siempre que lo creyere necesario.

ART. 213. — Cuando en el acto de describir la persona o cosa objeto del delito, y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes o fueren conocidas personas que puedan declarar acerca del modo y forma con que aquel hubiese sido cometido, y de las causas de las alteraciones que se observaren en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, o acerca de su estado anterior, serán examinados inmediatamente después de la descripción, y sus declaraciones se considerarán como complemento de ella.

ART. 214.—Para llevar a efecto lo dispuesto en el artículo anterior, podrá ordenar el juez que no se ausenten durante la di-

Art. 210. — Manual, t. 2, p. 89; comp. esp., art. 475.

Art. 211. — Manual, t. 2, ps. 90, 93; comp. esp., art. 476; enj. esp., art. 334; cód. de Bs. Aires, art. 97; cód. de San Luis, art. 120; cód. de Chile, art. 136; proyecto uruguayo, art. 151; cárn. crim., t. 13, p. 398; t. 15, p. 277; t. 97, p. 56; ley 7.ª, tít. 33, part. 7.ª

Art. 212. — Manual, t. 2, p. 93; comp. esp., art. 477; enj. esp., art. 336.

Art. 213. — Manual, t. 2, p. 90; comp. esp., art. 478; enj. esp., art. 337; cód. de Bs. Aires, art. 98, cód. de San Luis, art. 121; proyecto uruguayo, art. 152.

Art. 214. — Manual, t. 2, p. 90; comp. esp., art. 479.



ligencia de descripción las personas que hubieren sido halladas en el lugar, y que comparezcan además inmediatamente las que se hallaren en cualquier otro.

Los que desobedecieren la orden incurrirán en la responsabilidad señalada para los testigos en el (artículo 310) título respectivo.

ART. 215.—Los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el art. 211 se sellarán, si fuere posible, (acordándose) ordenándose su retención y conservación. Las diligencias a que esto diere lugar se firmarán por la persona en cuyo poder se hubieren hallado, y en su defecto por dos testigos.

Si los objetos no pudiesen por su naturaleza conservarse en su forma primitiva, el juez acordará lo que estime más conveniente para conservarlos del mejor modo posible.

ART. 216. — Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará el plano del lugar, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, ó la copia o diseño de los efectos o instrumentos del mismo, aprovechando para ello todos los recursos que ofrezcan las artes. El plano, retrato, copia o diseño se unirán a los autos.

ART. 217.—Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito que hubiese dado ocasión al sumario, el juez averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente; las causas de la misma o los medios que para ello se hubiesen empleado, procediendo en seguida a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquiera otra clase que se puedan adquirir acerca de la perpetración del delito.

ART. 218.—Cuando el delito fuere de los que no dejan huellas de su perpetración, el juez procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delito y sus circunstancias, y la preexistencia de la

Art. 215. — Manual, t. 2, ps. 90, 93; com. esp., art. 480; enj. esp., art. 338.

Art. 216. — Manual, t. 2, ps. 89, 90, 216; comp. esp., art. 481; cód. de Bs. Aires, art. 96; cód. de San Luis, art. 119; enj. esp., art. 327; cód. de Chile, art. 134.

Art. 217. — Manual, t. 2, p. 90; comp. esp., art. 482; sup. cort. nac., t. 96, p. 430.

Art. 218. — Manual, t. 2, ps. 90, 91; comp. esp., art. 484.



cosa, cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción o destrucción de la misma.

ART. 219.—Si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, y la persona fuere desconocida, antes de proceder al entierro del cadáver o después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente, se identificará por medio de testigos que a la vista del mismo den razón satisfactoria de su conocimiento.

ART. 220.—No habiendo testigos de reconocimiento, si el estado del cadáver lo permitiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por tiempo a lo menos de veinte y cuatro horas, expresando en un cartel, que se fijará a la puerta del depósito de cadáveres, el sitio, hora y día en que aquel se hubiese hallado y el juez que estuviere instruyendo el sumario, a fin de que, quien tuviere algún dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito y sus circunstancias, lo comunique al juez.

ART. 221.—Cuando a pesar de tales prevenciones no fuera el cadáver reconocido, recogerá el juez todas las vestiduras y demás objetos encontrados en él, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

ART. 222.—En los sumarios a que se refiere el artículo 219, cuando por la percepción exterior no aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver en presencia del juez, siempre que fuere posible, por los médicos de los tribunales, o en su caso, por los que el juez designe, los cuales, después de describir exactamente dicha operación, informarán sobre la naturaleza de las heridas o lesiones, el origen del fallecimiento y sus circunstancias.

En todos los casos, sea cual fuere el procedimiento empleado para el reconocimiento de las lesiones, los peritos deben manifestar si en su opinión la muerte ha sobrevenido a consecuencia

ART. 219. — Manual, t. 2, ps.90, 231; comp. esp., art. 485; enj. esp., art. 340.

ART. 220. — Manual, t. 2, p. 90; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 376; comp. esp., art. 486; enj. esp., art. 341.

ART. 221. — Manual, t. 2, p. 90; comp. esp., art. 487; enj. esp., art. 342.

ART. 222. — Manual, t. 2, p. 90; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 405; comp. esp., art. 488; enj. esp., art. 343; cód. austríaco, art. 127; cam. crim., t. 94, p. 98.

de aquellas o si ha sido el resultado de causas preexistentes o posteriores extrañas al hecho consumado.

ART. 223.—En los casos de lesiones corporales el juez ordenará que los peritos determinen prolijamente en sus informes la importancia de esas lesiones, la posibilidad de su curación y en qué tiempo; los órganos afectados o mutilados, las consecuencias que producirán en la salud del ofendido o en su capacidad para el trabajo y demás circunstancias que contribuyan a determinar la mayor o menor gravedad del delito.

ART. 224.—En los casos de infanticidio el juez hará que los peritos expresen en sus informes la época probable del parto, declarando si la criatura ha nacido viva, las causas que razonablemente hayan podido producir la muerte, y si en el cadáver se notan o no lesiones.

ART. 225.—En el caso de aborto, hará constar la existencia de la preñez, los signos demostrativos de la expulsión violenta del feto, la época del embarazo, las causas que hayan determinado el hecho y las circunstancias de haber sido provocado por la madre o por algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de aquella, y las demás circunstancias que según el código penal deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter y gravedad del delito.

ART. 226.—Cuando aparecieren señales o indicios de envenenamiento, se recojerán inmediatamente las cosas o sustancias que se presumiesen nocivas, disponiendo el juez instructor el análisis por peritos químicos, que lo verificarán con asistencia de las personas en cuyo poder se hubiesen hallado, si lo solicitaren.

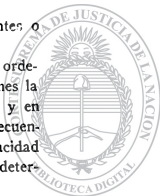
ART. 227.—En los casos de envenenamiento, hecha la autopsia, el juez ordenará el análisis químico de los órganos o sustancias que se presume contienen el veneno, previa verificación de estar intactas las etiquetas numeradas y rubricadas, que los envases deben tener, para precaver toda alteración o sustitución.

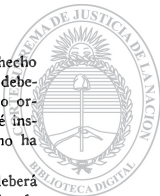
Art. 223. — Manual, t. 2, p. 232; cód. austriaco, arts. 127, 129 y 132.

Art. 224. — Manual, t. 2, p. 90; cód. austriaco, art. 130.

Art. 226. — Cód. austriaco, art. 121; cód. de Bs. Aires, art. 110; cód. de San Luis, art. 133; cód. de Chile, arts. 150 y 151; proyecto uruguayo, art. 164; sup. cort. nac., t. 96, p. 430; Mittermaier, op. cit., p. 157.

Art. 227. — Manual, t. 2, p. 232; cód. austriaco, art. 131.





ART. 228. — Si se trata de robo o de cualquier otro hecho cometido con efracción, violencia o escalamiento, el juez deberá hacer constar y describir las huellas y rastros del delito ordenando a los peritos que expliquen de qué manera, con qué instrumentos o medios y en qué época consideran que el hecho ha sido verosímilmente ejecutado.

ART. 229. — En los robos y hurtos o subtracciones, deberá comprobarse, ante todo, cuando menos por semiplena prueba, la existencia anterior y la desaparición de las cosas que se suponen robadas o substraídas. En defecto de esa comprobación, se admitirá la declaración jurada del dueño, siendo persona de notoria honradez y que además por su estado haya podido estar en posesión de las cosas robadas o substraídas.

ART. 230. — En los casos de incendio voluntario, el juez hará que los peritos determinen en sus informes el lugar, la manera y la época en que se ha cometido, la calidad de las materias incendiarias empleadas en su ejecución, el mayor o menor peligro para la vida de las personas o para la ruina o deterioro de las propiedades, las desgracias personales que haya producido, el lugar en que empezó el fuego, la causa de su desarrollo y si pudo o no fácilmente extinguirse. Deberá determinar igualmente la importancia aproximativa de los daños y perjuicios ocasionados por el incendio.

ART. 231. — En todos los delitos que causen un daño o pérdida, o entrañasen la amenaza de un peligro para los bienes, fuera de los determinados en los artículos anteriores, el juez deberá comprobar la fuerza o la astucia empleada, los medios o ins-

Art. 228. — Manual, t. 2, p. 91; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 524; cód. de Bs. Aires, art. 111; cód. de San Luis, art. 134; proyecto uruguayo, art. 165; enj. esp., art. 328; cám. crim., t. 48, p. 53; t. 95, p. 238; t. 96, p. 105; septiembre de 1910, p. 1243.

Art. 229. — Manual, t. 2, p. 90, 91; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 530, 531, 565 y 944; t. 2, p. 540; cód. uruguayo, art. 155; cód. de Bs. Aires, art. 112; cód. de San Luis, art. 135; cód. de Chile, art. 167; proyecto uruguayo, art. 166; enj. esp., art. 364; Aguilera, «Ley de enjuiciamiento criminal», t. 3, p. 468; cám. crim., t. 74, p. 34; mayo de 1911, p. 309; mayo de 1912, p. 214.

Art. 230. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 696; cód. austriaco, art. 137; cód. de Bs. Aires, art. 116; cód. de San Luis, art. 138; proyecto uruguayo, art. 169; Mittermaier, op. cit., p. 188, núm. 7; Saluto, op. cit. t. 2, p. 293.

Art. 231. — Cód. austriaco, art. 138; cód. de Bs. Aires, art. 116; cód. de San Luis, art. 139; proyecto uruguayo, art. 170.



trumentos de que se hayan servido los delinquentes, la existencia del daño recibido o por recibirse, la gravedad del perjuicio para la propiedad o para la vida, la salud o la seguridad corporal de la persona.

ART. 232. — *Si durante el viaje de un tren se cometiere algún delito, el conductor deberá tomar las medidas necesarias para asegurar la persona del delincuente, el que será puesto a disposición del juez respectivo en la primera estación que se toque, acompañándole un parte detallado del hecho criminal, con expresión de las personas que lo presenciaron. Para el cumplimiento de este deber, el conductor tendrá las facultades y autoridad, que son inherentes a los agentes de policía.*

ART. 233. — *Cuando por algún accidente en las vías férreas, se produjere la muerte o lesión de cualquier persona, el conductor hará detener el tren a objeto de hacer constar la situación y estado del muerto o herido, debiendo procederse en cuanto a la denuncia del hecho, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.*

ART. 234. — Cuando para la calificación del delito o de sus circunstancias fuese necesario estimar el valor de la cosa que hubiere sido su objeto, o el importe del perjuicio causado, o que hubiere podido causarse, el juez sumariante oírá sobre ello al dueño o perjudicado, y acordará después el reconocimiento pericial en la forma determinada en el título respectivo.

El juez instructor facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos de apreciación sobre que hubiere de recaer su informe; y si no estuvieren a su disposición, les suministrará los datos oportunos que se pudieren reunir.

ART. 235. — La confesión del procesado no eximirá al juez de practicar las diligencias prescriptas en este título con el mismo celo y actividad que en los demás casos.

Art. 232. — Cód. de Bs. Aires, art. 117; cód. de San Luis, art. 140; proyecto uruguayo, art. 171; enj. esp., art. 354.

Art. 233. — Enj. esp., art. 354.

Art. 234. — Comp. esp., art. 514; enj. esp., art. 365.

Art. 235. — Comp. esp., art. 516.



Título V

De la declaración indagatoria (a)

ART. 236. — Cuando haya motivo bastante para sospechar que una persona es autor, cómplice o encubridor de un delito, se procederá a recibirle declaración indagatoria.

ART. 237. — Si el presunto culpable estuviere privado de su libertad, se le recibirá la declaración indagatoria dentro del término de veinte y cuatro horas a contar desde que fué púesto a disposición del juez.

Este término podrá prorrogarse por otras veinte y cuatro horas, cuando el juez no hubiere podido recibir la declaración indagatoria o cuando el procesado lo pidiere para nombrar defensor.

ART. 238. — Si en el mismo delito apareciese complicada más de una persona, la declaración se tomará separadamente a cada una de ellas.

ART. 239. — Si el procesado se negase a declarar, se hará constar por acta en el proceso que deberá ser firmada por el juez, el procesado, su defensor, si concurriere, y el secretario.

El silencio del interrogado o su negativa a declarar, no hará presunción alguna en su contra.

ART. 240. — Cuando el presunto delincuente no se opusiere a la declaración, deberá tomársele ésta en la forma determinada en el artículo siguiente. En ningún caso se le exigirá juramento ni promesa de decir verdad.

Art. 236. — Manual, t. 2, p. 97, 222; cód. de Bs. Aires, art. 118; cód. de San Luis, art. 147, proyecto uruguayo, art. 177; Fournier, op. cit., p. XXXIX y sig.; cádm. crim., t. 99, p. 392; septiembre de 1913, p. 363; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 488, série 8.^a

Art. 237. — Manual, t. 2, p. 97; comp. esp., art. 538; enj. esp., art. 386; cód. uruguayo, art. 60; cód. de Bs. Aires, art. 119; cód. de San Luis, art. 148; cód. francés, art. 93; cód. de Chile, art. 341; proyecto uruguayo, art. 177; cód. austriaco de 1853, art. 153; cádm. crim., t. 99, p. 330.

Art. 239. — Manual, t. 2, p. 97; cód. de Bs. Aires, art. 120; cód. de San Luis, art. 149; Mittermaier, «Proced. crim. en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord», p. 238.

Art. 240. — Cód. uruguayo, art. 157.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 97.



ART. 241. — El presunto delincuente será preguntado:

- 1º Por su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, si los tuviere, edad, estado, profesión u oficio, patria, domicilio y *residencia*.
- 2º En qué lugar se hallaba el día y hora en que se cometió el delito.
- 3º Si ha tenido noticia de él.
- 4º Con qué personas se acompañó.
- 5º Si conoce al delincuente y sus cómplices o auxiliadores, y en caso afirmativo *que exprese quienes son y si estuvo con ellos antes o después de perpetrarse el delito*.
- 6º Si conoce el instrumento con que el delito fué cometido, o cualquiera otros objetos que con él tengan relación, los cuales le serán mostrados al efecto.
- 7º Si ha sido procesado en alguna otra ocasión; y en su caso, por qué causa, en qué juzgado, qué sentencia recayó y si ha cumplido la pena que se le impuso.
- 8º Por todos los demás hechos y pormenores que puedan conducir a descubrir los antecedentes y causas que motivaron el delito y que produjeron su ejecución, como asimismo por todas las circunstancias que hayan precedido, acompañado o seguido a esa ejecución y que sirvan para establecer la mayor o menor gravedad del hecho y la mayor o menor culpabilidad del procesado.

ART. 242. — Las preguntas serán siempre (*directas*) *claras y precisas* sin que por ningún concepto puedan hacerse de un modo capcioso o sugestivo.

Tampoco se podrá emplear con el procesado género alguno de coacción o amenaza, ni promesa.

ART. 243. — El juez que infringiere lo dispuesto en los dos artículos anteriores será corregido disciplinariamente, a no ser que incurriese en mayor responsabilidad.

Art. 241. — Manual, t. 2, p. 98; comp. esp., arts. 540 y 541; enj. esp., arts. 388 y 389; cód. de Bs. Aires, art. 121; cód. de San Luis, art. 150; cód. de Chile, art. 343; proyecto uruguayo, art. 179.

Art. 242. — Manual, t. 2, p. 97; comp. esp., art. 541; enj. esp., art. 389.

Art. 243. — Comp. esp., art. 543; enj. esp., art. 394.



ART. 244. — Cuando el examen del procesado se prolongare mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hubiese hecho fuese tan considerable que hubiere perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que hubiese de preguntársele, *(se suspenderá el examen)*, el juez podrá suspender el examen hasta que el procesado descanse y recupere la calma.

ART. 245. — El procesado no será obligado a contestar precipitadamente. Las preguntas le serán repetidas siempre que parezca que no la ha comprendido, y con mayor razón cuando la respuesta no concuerde con la pregunta. *(En estos casos no se escribirá sino la respuesta dada a la pregunta repetida)*.

ART. 246. — Se permitirá al procesado manifestar cuanto tenga por conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas que hiciere y las demás diligencias que propusiere, si el juez las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.

ART. 247. — El procesado podrá dictar por sí mismo sus declaraciones.

Si no lo hiciere, lo hará el juez, procurando, en cuanto fuere posible, consignar las mismas palabras de que aquel se hubiere valido.

ART. 248. — Concluida la declaración indagatoria, el procesado podrá leerla por sí mismo, y el juez le hará saber que le asiste este derecho.

Si no lo hiciere por sí o su defensor, el secretario la leerá integramente bajo pena de nulidad, haciéndose mención expresa de la lectura.

En este acto el interrogado manifestará si se ratifica en su contenido, o si tiene algo que añadir o enmendar.

ART. 249. — Si el declarante no se ratifica en sus respuestas y tuviere algo que añadir o enmendar, así se hará; pero no se

Art. 244. — Comp. esp., art. 542; enj. esp., art. 393.

Art. 246. — Comp. esp., art. 545; enj. esp., art. 396; cód. de Buenos Aires, art. 122; cód. de San Luis, art. 151; cód. de Chile, art. 351; proyecto uruguayo, art. 183; sup. cort. nac., t. 119, p. 374; sup. cort. prov. Bs. As., t. 4, p. 488, serie 8.

Art. 247. — Enj. esp., art. 390 y 397; cód. de Bs. Aires, art. 123; cód. de San Luis, art. 152.

Art. 248. — Comp. esp., art. 551; enj. esp., art. 402; cód. de Bs. Aires, art. 125; cód. de San Luis, art. 154; cód. de Chile, art. 332; proyecto uruguayo, art. 184.



raspará lo escrito, sino que se agregarán las nuevas declaraciones, enmiendas o alteraciones al final del acta, con referencia a lo enmendado o alterado, cuando esto tuviere lugar.

ART. 250. — La declaración será, bajo pena de nulidad, firmada por todos los que hubieren intervenido en ella, y si el declarante lo quisiere, rubricará cada una de sus fojas o pedirá que se rubriquen por el juez de instrucción, en caso de que no supiere o no pudiese hacerlo.

Si el interrogado no supiere, no pudiese o no quisiere firmar la declaración, se hará mención de ello, y el acto valdrá sin su firma.

ART. 251. — No se harán enmiendas, raspaduras o correcciones en las diligencias de la declaración (*sin salvarlas*), *debiendo salvarse las faltas o errores que se hubieran cometido* al final de la misma.

ART. 252. — Si el interrogado no entendiése el idioma nacional, será examinado por intermedio de un intérprete, que prestará juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

El nombramiento del intérprete recaerá entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el lugar en que se toma la declaración. En su defecto será nombrado un perito del respectivo idioma.

ART. 253. — Si el interrogado fuere sordo-mudo y supiera leerse le harán por escrito las preguntas. Si supiere escribir contestará por escrito, y si no supiere lo uno ni lo otro, se nombrará un intérprete por cuyo conducto se le harán las preguntas, y se recibirán sus contestaciones.

Será nombrado intérprete un maestro de sordo-mudos, si lo hubiere en el lugar, y en su defecto cualquiera que supiese comunicarse con el interrogado.

ART. 250. — Cód. de Bs. Aires, art. 126; cód. de San Luis, art. 165; enj. esp., art. 404; proyecto uruguayo, art. 186.

ART. 251. — Comp. esp., arts. 552 y 598; enj. esp., arts. 403 y 450; cód. civil, art. 1001; cód. de Bs. Aires, art. 127; cód. de San Luis, art. 156; proyecto uruguayo, art. 185.

ART. 252. — Cám. crim., mayo de 1914, p. 73.

ART. 253. — Comp. esp., art. 547; enj. esp., art. 398; cód. de Buenos Aires, art. 124; cód. de San Luis, art. 153; proyecto uruguayo, arts. 187 y 188; cám. crim., abril de 1910, p. 286.



El nombrado prestará juramento en presencia del sordo-mudo antes de comenzar a desempeñar el cargo.

ART. 254. — El procesado podrá declarar cuantas veces quisiere ante el juez sumariante, quien le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa.

ART. 255. — Concluida la declaración indagatoria, o negándose a prestarla, se hará saber inmediatamente al procesado la causa de su prisión.

Se le hará conocer, así mismo, el derecho que tiene de nombrar defensor, si no lo hubiere nombrado con anterioridad, nombramiento que podrá hacer en el mismo acto, si lo juzgase conveniente.

TÍTULO VI

De la incomunicación de los procesados (a)

ART. 256. — La incomunicación de una persona detenida o presa, podrá ser decretada solamente por el juez o funcionario que instruya las diligencias del sumario, cuando para ello existiera causa bastante, que se expresará en el auto o acta respectiva.

ART. 257. — En ningún caso la incomunicación podrá exceder de cinco días, si bien podrá acordarse nuevamente en auto motivado por otros cinco, bajo la responsabilidad del juez o funcionario que lo ordene.

ART. 258. - - Se permitirá al incomunicado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, con tal que no puedan servir de medio para eludir la incomunicación o para atentar contra su vida.

Estos objetos no se entregarán al incomunicado sin previa autorización del juez o funcionario que haya decretado su incomunicación.

ART. 254. — Comp. esp., art. 549; enj. esp., art. 400; cód. de Bs. Aires, art. 128; cód. de San Luis, arts. 157 y 158; cód. francés, art. 113; cód. italiano, art. 333; proyecto uruguayo, art. 233; proyecto belga, art. 69; cádm. crim., t. 99, p. 392l

ART. 255. — Cdm. crim., t. 99, ps. 330 y 392.

ART. 256. — Manual, t. 2, p. 35; comp. esp., art. 554 y su nota.

ART. 257. — Manual, t. 2, p. 36; comp. esp., art. 556; enj. esp., art. 506.

ART. 258. — Comp. esp., art. 556; enj. esp., arts. 509 y 510.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 31.



Se le permitirá igualmente la ejecución de aquellos actos civiles urgentes, que no admitan dilación, y que no perjudiquen la responsabilidad civil ni los propósitos del sumario. El juez apreciará en cada caso, sin recurso alguno, si ha de conceder o no la autorización que se le pida.

ART. 259. — El alcaide de la cárcel o el jefe del establecimiento cuidará, bajo su responsabilidad, de que el incomunicado no se relacione con más personas que las que permitiere el juez.

TÍTULO VII

De las circunstancias personales del procesado (a)

ART. 260. — El juez a quien corresponda la instrucción, procurará hacer constar en las diligencias del sumario, todas las circunstancias personales del procesado, que puedan tener influencia para determinar la clasificación legal o la mayor o menor gravedad del hecho que se le imputa.

ART. 261. — Cuando el procesado fuere mayor de diez años y menor de (*catorce*) diez y ocho o mayor de setenta, el juez instructor deberá comprobar por medio de información el criterio del (*menor*) procesado y especialmente su aptitud o discernimiento para delinquir.

En esta información serán oídas las personas que puedan depone con acierto por sus circunstancias personales y por las relaciones que hayan tenido con el procesado, antes y después de haberse ejecutado el hecho.

El juez deberá además hacer practicar por los médicos de los tribunales un reconocimiento sobre el grado de desarrollo de las facultades intelectuales del procesado, y sobre el estado de su instrucción por los peritos que correspondan.

Art. 259. — Comp. esp., art. 558; enj. esp., art. 611.

Art. 260. — Manual, t. 2, p. 40, 233; comp. esp., art. 523; cód. de Bs. Aires, arts. 134; cód. de San Luis, art. 170; proyecto uruguayo, art. 201; enj. esp., art. 374; cám. crim., t. 10, p. 297.

Art. 261. — Comp. esp., art. 533; enj. esp., art. 380; cód. de Bs. Aires, art. 135; cód. de San Luis, arts. 171 y 172; proyecto uruguayo, arts. 202 y 204; cód. de Chile, art. 370; proyecto Lira, art. 223; sup. cort. Bs. As., t. 6, p. 54, serie 3.^a

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 36.



Si el procesado fuere sordo-mudo, se practicarán igualmente las diligencias establecidas en los párrafos precedentes.

ART. 262. — Si se advirtiesen en el procesado indicios de enajenación mental, se averiguará por personas que lo hayan tratado, por reconocimiento de facultativos y por medio de pruebas y observaciones, si esta enajenación era anterior al delito, o ha sobrevenido a él, si es permanente o eventual, o si es cierta o simulada, si es total o parcial.

ART. 263. — En los casos del artículo anterior, el juez podrá suspender la declaración del procesado, mientras se hacen las investigaciones requeridas, sin que esto obste a su detención e (1) incommunicación.

TÍTULO VIII

De la identidad del delincuente (a)

ART. 264. — En los casos en que se impute la perpetración de un hecho punible a persona cuyo nombre se ignore o fuera común a varios, el juez ordenará el reconocimiento de ésta por el que le hubiere dirigido la imputación o cargo.

ART. 265. — En el reconocimiento se observará lo siguiente:

1º Que la persona que sea objeto de él no se disfrace ni disfigure.

2º Que aquella se presente acompañada con otros individuos vestidos de una manera semejante en cuanto fuere posible.

Art. 262. — Comp. esp., art. 534; enj. esp., art. 381; cód. austriaco, art. 134.

Art. 263. — Manual, t. 2, p. 41.

Art. 264. — Manual, t. 2, p. 36; comp. esp., art. 517; enj. esp., art. 368; cód. de Méjico, art. 226; cód. de Bs. As., art. 130; cód. de San Luis, art. 166; proyecto uruguayo, art. 193; Luis Reyna Almandos, «Dactiloscopia argentina», ps. 3 y 47; Vucetich, «Sistema Vucetich de la provincia de Buenos Aires», Luis Reyna Almandos, «Origen e influencia jurídico-social del sistema dactiloscópico argentino», p. 45; cá. crim., t. 66, p. 415; mayo de 1911, p. 291; mayo de 1912, p. 219.

Art. 265. — Manual, t. 2, p. 36, 116; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 667; Comp. esp., art. 518; enj. esp., art. 369; cód. de Méjico, art. 228; cód. de Bs. Aires, art. 131; cód. de San Luis, art. 167; proyecto uruguayo, art. 196; cód. de Chile, art. 365; Carlos Felice, cód. para Cerdeña, art. 2147; Saluto, «Commenti al codice di procedura penale», núm. 810.

(1) O, dice la sanción legislativa. Diario de sesiones citado, p. 651.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 36 y sigs.



- 3° Que los individuos que la acompañan sean de una clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias.

ART. 266. — Colocada en una fila la persona destinada para la confrontación y las que deben acompañarla, se introducirá al declarante, y después de tomarle juramento de decir verdad, se le preguntará:

- 1° Si persiste en su declaración anterior.
- 2° Si después de ella ha visto la persona a quien atribuye el hecho, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto.
- 3° Si entre las personas presentes se encuentra la que designó en su declaración o imputación.

Contestando afirmativamente la última pregunta, para lo que se le permitirá que examine detenidamente a las personas de la rueda o fila, se le prevendrá que designe al que tiene per delincuento y que manifieste las diferencias y semejanzas que observa en el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que su declaración o imputación se refiere.

ART. 267. — En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, así como los nombres de todos lo que hubiesen formado la rueda o fila.

ART. 268. — Cuando fuesen varios los que hubiesen de reconocer a una persona, la diligencia deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueren varios los que hubiesen de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

ART. 269. — El que tuviere (1) o prendiere a algún presunto culpable que no fuera conocido, tomará las precauciones necesarias para que el detenido o preso no haga en su persona o traje alteración alguna que pueda dificultar su reconocimiento por quien corresponda.

ART. 266. — Manual, t. 2, p. 37; comp. esp., art. 518; enj. esp., art. 369; cód. de Méjico, art. 231; cádm. crim., t. 66, p. 415.

ART. 268. — Comp. esp., art. 519; enj. esp., art. 370.

ART. 269. — Comp. esp., art. 520; enj. esp., art. 371.

(1) Detuviere, díce la sanción legislativa.



ART. 270. — Si el presunto reo, al recibirle su declaración, negare su nombre y apellido, su nacionalidad o domicilio, o lo fingiere, se procederá a identificar su persona por medio de testigos de conocimiento, y en su defecto por los medios que parezcan oportunos.

ART. 271. — A fin de que puedan servir como prueba de identidad, se harán constar con la minuciosidad posible las señas personales del procesado.

TITULO IX

De los testigos (a)

CAPITULO I

Reglas generales

ART. 272. — El juez sumariante procederá a recibir declaración a todas las personas que hubieren sido o fueren indicadas por los que intervinieren en el proceso o que creyera que tienen conocimiento del delito que se trata de averiguar.

Si algún testigo de los expresamente indicados no fuese examinado, se pondrá constancia de la causa que haya obstado al examen.

ART. 273.—Todo habitante del país que no esté impedido, tendrá obligación de concurrir al llamamiento para declarar en causa criminal cuanto supiere sobre lo que le fuere preguntado.

Art. 270. — Manual, t. 2, p. 37; comp. esp., art. 622.

Art. 271. — Comp. esp., art. 523; enj. esp., art. 374; cód. de Bs. Aires, art. 133; cód. de San Luis, art. 169.

Art. 272. — Manual, t. 2, p. 233; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 940; cód. de Bs. Aires, art. 136; cód. de San Luis, art. 175; proyecto uruguayo, art. 208.

Art. 273. — Comp. esp., art. 560; enj. esp., art. 410; cód. uruguayo, art. 221; cód. austriaco, art. 150; leyes 32 y 35, tít. 16, part. 3.ª y 6, tít. 6, lib. 4, R. C.; cód. de Bs. Aires, art. 137; cód. de San Luis, art. 176; proyecto uruguayo, art. 209; cód. de Chile, art. 210; Mittermaier, «Tratado de la prueba», ps. 267 a 269; Saluto, «Commenti al codice di procedura penale», t. 2, p. 348, núm. 664.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 105 y sigs.



ART. 274. — El número de los testigos, tanto de cargo como de descargo, es ilimitado, mientras que el juez los considere pertinentes a la formación del sumario.

ART. 275. — No podrán ser admitidos como testigos:

- 1º Los eclesiásticos, sobre los hechos que les hayan sido revelados en la confesión.
- 2º Los militares o funcionarios públicos, cuando no pudieran deponer sin violar el secreto que hayan conocido por razón de su estado o cargo, a menos que fueren desligados de su obligación por sus superiores.
- 3º Los defensores del inculpado, respecto de lo que les haya sido confiado en esta calidad.
- 4º Los abogados y procuradores, cuando se trate de hechos o circunstancias de que hayan tenido conocimiento por las revelaciones hechas por sus clientes en el ejercicio de su respectivo ministerio.
- 5º Los médicos, farmacéuticos, parteras y toda otra persona, sobre los hechos que por razón de su profesión les hayan sido revelados.
- 6º Las personas que al tiempo de declarar no se encuentran, por razón de su estado físico, moral o mental, en estado de decir la verdad.

ART. 276. — No pueden ser testigos sino para simples indicaciones y al solo objeto de la indagación sumaria: (a).

Art. 274. — Cám. crim., t. 30, p. 353.

Art. 275. — Manual, t. 2, p. 114; enj. esp., art. 416; cód. austríaco, art. 151; cód. uruguayo, art. 227; cód. de Bs. Aires, art. 139; cód. de San Luis, art. 178; proyecto uruguayo, art. 210; cám. crim., t. 45, p. 108; t. 97, p. 111; junio de 1910, ps. 775 y 790; ley 9.ª, tít. 6.º, part. 3.ª; Garraud, «Droit criminel», p. 672.

Art. 276. — Manual, t. 2, ps. 23, 114, 122, 233; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 943; t. 2, ps. 406 y 696; cód. de Bs. Aires, art. 141; cód. de San Luis, art. 180; Mittermaier, op. cit., ps. 272 a 294; cód. austríaco, art. 170; cód. uruguayo, art. 224; proyecto uruguayo, art. 224; cód. austríaco de 1853, art. 271; Jerónimo Cortés, «Vistas fiscales», t. 1, p. 79; ley 22, tít. 16, part. 3.ª; ley 18, tít. 16, part. 3.ª; Saluto, op. cit., t. 3, p. 246, núms. 986 y sigs.; Framarino, op. cit., t. 2, ps. 66, 129, 133 y 134; sup. cort. nac., t. 65, p. 136; t. 66, p. 136; cám. crim., t. 26, p. 203; t. 30, p. 353; t. 44, p. 289; t. 58, p. 77; t. 71, p. 30; t. 76, p. 89; t. 77, p. 72; t. 79, p. 309; t. 84, p. 23; t. II, p. 247; t. V, p. 193; julio de 1910, p. 950; marzo de

(*) En el proyecto original este encabezamiento está redactado así: **Pueden ser testigos para las indicaciones de la indagación sumaria:** Véase proyecto de la comisión revisora, art. 294.



1.º Los menores de diez y ocho años.

Habiendo llegado a esta edad, será válido su dicho aun en lo que se refiere a cualquier suceso pasado en los cuatro años anteriores.

2.º Los procesados o perseguidos por razón de algún delito, y los condenados a una pena corporal durante el tiempo de la condena, salvo el caso de delito perpetrado en el establecimiento donde el testigo se hallare preso.

3.º Los que hayan sido condenados por falso testimonio, o incurrido en falsedad en sus declaraciones y juramentos.

4.º Los que no tengan industria o profesión conocida.

5.º Los que se encontrasen en estado de completa ebriedad en el momento de verificarse el hecho sobre que deponen.

6.º Los que tengan enemistad con el inculpado, si esa enemistad fuera por su naturaleza bastante para abrigar dudas fundadas sobre la imparcialidad de sus declaraciones.

7.º Los amigos íntimos del querellante y del procesado, sus socios, sus dependientes (*asalariados*) o *sirvientes* y los cómplices en el delito.

8.º Los que tuvieren interés en el resultado de la causa.

9.º Los que tuvieren pleito pendiente con el procesado o con su mujer o persona de su familia dentro del tercer grado civil, o lo hubiere tenido con la misma persona con un resultado contrario a sus intereses, distando la sentencia que le hubiere definido de una época menor de cuatro años.

Existirá la misma inhabilidad cuando la litis haya ocurrido entre los parientes del testigo dentro del cuarto grado civil y el procesado.

10. Los denunciantes, cuando tal hecho los afecte directamente, salvo a petición del procesado y en interés de su defensa.

11. Los acreedores o deudores de la parte que los presenta.

1911, p. 206; mayo de 1911, p. 281; julio de 1911, p. 197; marzo de 1912, p. 238; mayo de 1912, p. 71; junio de 1912, p. 219; septiembre de 1912, p. 239; marzo de 1913, ps. 160 y 166; sup. cort. Bs. As., t. 5, p. 65 y t. 7, p. 253, serie 3; t. 6, p. 171 y t. 10, p. 176, serie 4; t. 4, p. 226, serie 8.



12. Los que hubieren recibido del querellante o procesado beneficios de importancia; o después de iniciada la causa, dádivas u obsequios aunque sean de poco valor.
13. Los que hubiesen practicado diligencias o dado recomendaciones en contra del procesado.
14. Los que declaren de ciencia propia sobre hechos que no pueden apreciar por la carencia de facultades o de aptitudes o por imposibilidad material que resultare comprobada.
15. Los que tengan impedimento para exponer sus ideas de palabra o por escrito.

ART. 277. — Las inhabilidades declaradas de parentesco, amistad, enemistad, vínculo social o dependencia, solo tienen lugar en cuanto puedan los testigos ser inspirados por su interés, afecto u odio.

La misma regla deberá observarse en todas las demás inhabilidades que se funden en la presunción de parcialidad del testigo por su situación personal respecto del procesado o de sus acusadores.

ART. 278. — No podrán ser llamados como testigos:

- 1º El cónyuge del acusado, aún cuando estén legalmente separados;
- 2º Sus ascendientes y descendientes, legítimos o naturales legalmente reconocidos;
- 3º Sus hermanos legítimos o naturales igualmente reconocidos;
- 4º Sus afines hasta el segundo grado;
- 5º Los tutores y pupilos, recíprocamente.

ART. 279. — Las personas indicadas en el artículo precedente solo podrán ser oídas en los casos previstos en el artículo 163.

ART. 280. — En el caso de que se presentase a declarar alguna de las personas comprendidas en el artículo 278, se le hará

Art. 277. — Manual, t. 2, p. 23; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 533 y 943; t. 2, p. 398; cód. uruguayo, art. 225; cód. de Bs. Aires, art. 142; cód. de San Luis, art. 181; cód. de Chile, art. 491; cám. cim., t. 79, p. 304; supr. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 228, serie 8.

Art. 278. — Manual, t. 2, p. 111; cód. de Méjico, art. 60; cód. de Bs. Aires, art. 140; cód. de San Luis, art. 179; proyecto uruguayo, art. 211; Framarino, «Lógica de las pruebas», t. 2, ps. 53 y 54.

Art. 280. — Manual, t. 2, p. 111, 114.



saber que no puede hacerlo en contra del procesado sino en los casos previstos en el artículo 163, o para dar las explicaciones que considere convenientes en favor del procesado, a efecto de practicar las indagaciones que corresponda.

CAPITULO II

Citación de los testigos

ART. 281. — La citación de los testigos se hará en la forma determinada en el título VI, libro 1º de este código.

ART. 282. — En los casos urgentes, puede citarse verbalmente a los testigos que se hallen en el lugar del juicio y obligarlos a comparecer en el momento, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia.

ART. 283. — En el caso del artículo anterior y mediando causas graves, podrán ser detenidas las personas que deban declarar, cuando fundadamente se tema que no podrán ser habidas con el mismo objeto, ya por tratarse de sujetos desconocidos, ya de personas próximas a emprender viaje.

En todo caso, esta detención no podrá exceder del término que sea absolutamente indispensable para la diligencia que es su objeto, bajo la responsabilidad del juez.

ART. 284. — El exhorto u oficio que se libre a las autoridades del lugar en que el testigo resida, tendrá por objeto o la simple citación para que el testigo comparezca a declarar, o para que se tome la declaración por la autoridad a quien se dirija.

ART. 285. — Para que el testigo sea llamado a declarar en el lugar donde se encuentre el juez sumariante será necesario:

1º Que la distancia sea reducida o los medios de transporte fáciles.

2º Que la importancia de la causa lo haga necesario.

ART. 286. — Las causas a que se refiere el artículo precedente deberán ser apreciadas prudencialmente por el juez, así como la indemnización que deba darse al testigo por el tiempo de

Art. 282. — Comp. esp., art. 574; enj. esp., art. 430.

Art. 283. — Cód. uruguayo, art. 230.



trabajo perdido o gastos de traslación al lugar del juicio, en caso que éste lo reclamare.

ART. 287. — Cuando la declaración deba ser tomada por la autoridad competente en lugar en que se halle el testigo, con el exhorto u oficio deberá acompañarse el interrogatorio a cuyo tenor se practicará el examen.

Los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán en la forma que establezcan los tratados, o a falta de estos los usos internacionales. (*)

ART. 288. — Practicada la citación o hecho constar la causa que la hubiere impedido, se unirá a los autos la cédula original, el diario, exhorto u oficio expedido.

CAPITULO III

Del examen de los testigos

ART. 289. — Toda persona debidamente citada está obligada a concurrir a prestar declaración ante el juez de la causa.

ART. 290. — Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

1º Las personas que no pueden comparecer al juzgado por enfermedad, edad avanzada o decoro del sexo, en cuyo caso el juez de instrucción con el secretario se trasladará a su domicilio, donde les recibirá las declaraciones.

2º El presidente y el vice presidente de la república y los ministros nacionales, los gobernadores y *vice gobernadores* de provincia y sus ministros y *los gobernadores de los territorios federales*.

Los miembros del congreso y de las legislaturas de provincia, así como los del poder judicial de la nación y de las provincias.

Los miembros de los tribunales militares.

Las dignidades del clero.

ART. 289. — Ley 35, tft. 16, part. 3.ª; ordenanza de intendentes, núm. 85.

ART. 290. — Cám. crim. septiembre de 1910, p. 1243.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



Los ministros diplomáticos y cónsules generales.

Los militares del ejército de línea y mar desde coronel inclusive para arriba.

Estos funcionarios serán examinados por medio de informe.

ART. 291. — Cuando un testigo no compareciere en el día señalado o se negare a declarar sin causa justificada, será penado:

1º Cuando no compareciere, con multa de veinte a cuarenta pesos, debiendo duplicarse esta pena en caso de reincidencia, sin perjuicio de hacerle comparecer por medio de la fuerza pública.

2º Cuando se negare a declarar, se le tendrá arrestado hasta que preste declaración, sin perjuicio de la pena de desacato a la autoridad, establecida en el código penal.

ART. 292. — Cada testigo debe ser examinado separadamente en presencia del secretario del juzgado, bajo pena de nulidad.

ART. 293. — Nadie, salvo el agente fiscal, podrá asistir a la declaración de los testigos durante el sumario, salvo los casos siguientes:

1º Cuando el testigo sea ciego, o no sepa leer ni escribir.

2º Cuando el testigo sea mujer soltera.

3º Cuando sea mujer casada y ella o su marido quieran que esté acompañada.

4º Cuando el testigo ignore el idioma nacional o sea sordomudo, o sordo o mudo simplemente.

ART. 294. — En el primer caso del artículo anterior, el juez nombrará para que acompañe al testigo otra persona que firmará la declaración después que aquel la hubiere ratificado.

En el segundo y tercer caso, la mujer o su marido, si fuere

Art. 291. — Cód. de Bs. Aires, art. 143; cód. de San Luis, art. 182; cód. de Chile, art. 211.

Art. 292. — Manual, t. 2, p. 107; comp. esp., art. 582; enj. esp., art. 435; cód. belga, art. 73; cód. de Bs. Aires, art. 144; cód. de San Luis, art. 183; cód. francés, art. 75; proyecto uruguayo, arts. 218, 219 y 221; cód. de Chile, art. 214; Saluto, op. cit., núm. 675.

Art. 293. — Cód. de Méjico, art. 211; cód. de Bs. Aires, art. 145; cód. de San Luis, art. 184; proyecto uruguayo, art. 220; sup. cort. nac., t. 47, p. 457.

Art. 294. — Cód. de Méjico, arts. 212 y 213; cód. de Bs. Aires, art. 146; cód. de San Luis, arts. 185 y 186.



casada, podrán elegir persona que la acompañe y el juez aprobará la elección, si no hallare inconveniente.

Ni para este ni para otros actos judiciales podrá servir de testigo el que sea dependiente de la secretaría.

En el cuarto caso, se procederá con arreglo a lo establecido respecto a la declaración indagatoria.

ART. 295. — Antes de que los testigos comiencen a declarar, se les instruirá de las penas que el código penal impone a los que se producen con falsedad. Esto podrá hacerse hallándose reunidos los testigos.

ART. 296. — Una vez prestado EL (1) juramento, según la forma autorizada por sus creencias religiosas, de decir verdad en cuanto le fuere preguntado, el testigo manifestará:

- 1º Su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio.
- 2º Si conoce o no al procesado y a las demás partes.
- 3º Si le afecta alguno de los impedimentos o inhabilidades legales que lo incapacite para declarar, *las que le serán previamente explicadas.*

ART. 297. — Hecha la manifestación anterior, el testigo será preguntado:

- 1º Por todas las circunstancias del delito, tiempo, lugar y modo cómo fué cometido, dando razón de su dicho.
- 2º Cuando declarase como testigo de vista, por el tiempo y lugar en que lo vieron, si estaban otras personas que también lo vieron y cuáles son. (a).
- 3º Cuando declarasen de oídas, por la persona a quien oyeren, en qué tiempo y lugar, y si estaban presentes otras personas que también lo hubieran oído y cuáles eran.

ART. 298. — Si con motivo de la declaración, el testigo presentase algún objeto que pueda servir para hacer cargo al reo o para su defensa, se hará mención de su presentación y se agregará al proceso, siendo posible, o se guardará en la secretaría del juzgado.

Art. 295. — Cód. de Méjico, art. 215; cód. austriaco, art. 165; cám. crim., t. 77, p. 184.

Art. 296. — Cód. austriaco, arts. 165, 166, 169 y 246; comp. esp., art. 583; enj. esp., art. 436; cód. de Méjico, art. 216.

(1) La palabra subrayada fué agregada por los correctores. Véase art. 315 del proyecto de la comisión revisora del formulado por el doctor Manuel Obarrio.

(*) Eran, dice el proyecto de la comisión revisora, que no fué reformado en esta parte por el congreso.



Si el objeto presentado fuere algún escrito, será rubricado por el juez y por el testigo que lo ofreciere, o por el secretario en caso que éste no supiere o no pudiese hacerlo.

ART. 299. — En las declaraciones que se prestaren evacuando alguna cita, no se leirá al testigo la diligencia en que aquella se hubiere hecho.

ART. 300. — Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer respuestas que lleven escritas. Sin embargo, podrán ver algunas notas o documentos que llevasen, según la naturaleza de la causa.

ART. 301. — No se consignará en los autos las declaraciones de testigos que, según el juez sumariante, fueren manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objetos del sumario. Tampoco se consignará en cada declaración las manifestaciones que se hallasen en el mismo caso.

Pero se consignará siempre todo lo que pueda servir de cargo como de descargo al procesado.

ART. 302. — El juzgado, siempre que lo creyere necesario o cuando le sea reclamado por el agente fiscal, procederá a repre- guntar a cualquier testigo, a hacerle nuevas interrogaciones u otras diligencias y exámenes, que aunque ya practicados, se reputen convenientes para el esclarecimiento de la verdad.

ART. 303. — Se aplicarán a las declaraciones de los testigos, las disposiciones relativas a la declaración indagatoria del procesado, en cuanto fueren pertinentes.

ART. 304. — Si de la instrucción aparece que algún testigo se ha producido con falsedad, se mandará compulsar las piezas conducentes para la averiguación de este delito, y se formará separadamente el debido proceso.

Art. 299. — Comp. esp., art. 585; cód. de Bs. Aires, art. 147; cód. de San Luis, art. 187.

Art. 300. — Enj. esp., art. 437; cód. de Méjico, art. 217.

Art. 301. — Comp. esp., art. 595; enj. esp., art. 445; cód. de Bs. Aires, art. 148; cód. de San Luis, art. 188; cód. de Chile, art. 238.

Art. 304. — Cód. de Méjico, art. 224; cód. de Bs. Aires, art. 149; cód. de San Luis, art. 139; proyecto uruguayo, art. 227.



TITULO X

Del mérito de la prueba de testigos (a)

ART. 305. — Los jueces apreciarán al resolver, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones.

ART. 306. — La declaración de dos testigos hábiles, contestes en el hecho, lugar y tiempo y de buena reputación o fama, (*será invocada*) *podrá ser invocada* por el juez como plena prueba de lo que afirmaren.

ART. 307. — Para que merezca *entera fé* el dicho de los testigos, han de mediar las condiciones y circunstancias siguientes:

- 1º Que hayan prestado juramento según sus creencias religiosas.
- 2º Que los hechos sobre que declaren hayan podido caer directamente bajo la acción de sus sentidos.
- 3º Que den la razón de sus dichos, expresando porqué y de que manera saben lo que han declarado.
- 4º Que no se encuentren afectados por tachas o inhabilidades legales, justificadas en forma.

ART. 308. — La inhabilidad de los testigos, será apreciada:

Art. 305. — Manual, t. 2, p. 23, 116; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 569 y 779; cód. de Bs. Aires, art. 248; cód. de San Luis, art. 285; Caravantes, «Ley de enjuiciamientos», t. 2, p. 248; Mittermaier, op cit., ps. 272 a 273 y 301; Framarino, «Lógica de las pruebas», t. 2, p. 66; sup. cort. nac., t. 103, p. 63; cá. crim., t. 30, p. 274; t. 33, p. 44; t. 49, p. 56; t. 76, p. 89; t. 79, p. 309; t. V, p. 181; t. VI, p. 477; setiembre de 1911, p. 315; octubre de 1912, p. 328; sup. cort. Bs. As., t. 5, p. 63, serie 3; t. 4, p. 134, 226 y 270, serie 8.

Art. 306. — Manual, t. 2, p. 23, 108; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 298, 566, 778, 780, 792 y 940; t. 2, ps. 289, 680 y 840; cód. uruguayo, art. 222; cód. de Buenos Aires, art. 249; cód. de San Luis, art. 286; cód. de Chile, art. 487; sup. cort. nac., t. 96, p. 430; t. 103, p. 62; t. 120, p. 109; cá. crim., t. 48, p. 403; agosto de 1910, p. 1154; junio de 1911, p. 238; febrero de 1912, p. 142; marzo de 1912, p. 207; sup. cort. Bs. As., t. 4, p. 134, 226 y 270, serie 8.

Art. 307. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 533, 644, 778, 934 y 940; t. 2, ps. 288, 679 y 840; cód. uruguayo, art. 223; cód. de Bs. Aires, art. 250; cód. de San Luis, art. 287; cód. austriaco de 1853, art. 269; cá. crim., t. 8, p. 236; t. 17, p. 200; cá. civ., t. 73, p. 240; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, ps. 81, 90, 159, y 226, serie 8.

Art. 308. — Manual, t. 2, p. 116; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 533 y 778; cód. de Bs. Aires, art. 251; cód. de San Luis, art. 288; cá. crim., t. 1, p. 220; t. 71, p. 30; t. V, p. 121; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 226, serie 8.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 113.

Por el juez de instrucción, a la época de pronunciarse respecto del sobreseimiento o de la elevación de la causa a plenario.

Por el juez de sentencia, al tiempo de dictarla.



TÍTULO XI

De los careos

ART. 309. — Toda vez que los testigos discordasen acerca de algún hecho o circunstancia que interese en el sumario, el juez procederá a carearlos.

ART. 310. — Se careará un solo testigo con otro testigo y no concurrirán a esta diligencia más personas que las que deben carearse y los intérpretes, si fueren necesarios.

ART. 311. — Los testigos prestarán juramento en la forma establecida.

Cumplida esta diligencia, se dará lectura, en lo pertinente, a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando la atención de los careados sobre las contradicciones, a fin de que entre sí se reconvenzan para obtener la aclaración de la verdad.

ART. 312. — Se escribirán las preguntas y contestaciones que mutuamente se hicieren, sin permitir que los careados se insulten o amenacen; y se harán constar, además, las particularidades que sean pertinentes, y firmarán todos la diligencia que se extienda, previa lectura y ratificación.

ART. 313. — Si se hallase ausente algún testigo que deba carearse con otro que estuviese presente, se leerá a este su declaración, y las particularidades de la del ausente en que se desacuerde; y las explicaciones que dé u observaciones que haga para

Art. 309. — Manual, t. 2, p. 117, 118, 234; cód. de Bs. Aires, art. 150; cód. de San Luis, art. 191; proyecto uruguayo, art. 228; enj. esp., art. 451; Eliseondo, «Práctica universal», t. 4, p. 359; Saluto, op. cit., número 813.

Art. 310. — Enj. esp., art. 451 y 452; cód. de Méjico, art. 234; cód. de Bs. Aires, art. 151; cód. de San Luis, art. 192; proyecto uruguayo, arts. 230 y 231.

Art. 311. — Comp. esp., art. 600; enj. esp., art. 452; cód. de Méjico, art. 235; cód. de Bs. Aires, art. 151.

Art. 312. — Comp. esp., arts. 601 y 602; enj. esp., arts. 453 y 454.

Art. 313. — Cód. de Bs. Aires, art. 152; cód. de San Luis, art. 193; proyecto uruguayo, art. 233.¹



confirmar, variar o modificar sus anteriores asertos, se consignarán en la diligencia.

Subsistiendo la disconformidad, se librará exhorto u oficio a la autoridad que corresponda, insertando a la letra la declaración del testigo ausente, la del presente solo en la parte que sea necesaria, y el medio careo, a fin de que se complete esta diligencia con el testigo ausente, en la misma forma establecida para el presente.

ART. 314. — El careo entre los procesados, se verificará en la misma forma que el de los testigos, pero sin recibirles juramento ni promesa de decir verdad.

Esta diligencia podrá decretarse en los casos en que los procesados se hiciesen cargos recíprocos o estuviesen en desacuerdo sobre un mismo hecho.

ART. 315. — Los careos de procesados con testigos, podrán tener lugar de oficio o a petición de los primeros o de alguno de ellos.

TITULO XII

De la confesión (a)

ART. 316. — Toda manifestación del procesado, por la cual se reconozca como autor, cómplice o encubridor de un delito, *o de una tentativa punible* surtirá los efectos legales de la confesión, siempre que reuna conjuntamente las condiciones siguientes:

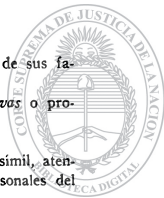
1º Que sea hecha ante el juez competente.

Art. 314. — Manual, t. 2, p. 117, 118.

Art. 315. — Manual, t. 2, p. 118; cádm. crim., t. 91, p. 6.

Art. 316. — Manual, t. 2, p. 89, 100, 234; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 16, 287, 298, 301, 312, 618, 521, 531, 665, 569, 571, 644, 940 y 942; t. 2, ps. 537, 680, 695 y 828; cód. uruguayo, arts. 235, 236 y 237; ley 1, tít. 13, part. 3.º; cód. de Bs. Aires, art. 236; cód. de San Luis, arts. 104 y 160; cód. austriaco de 1853, arts. 264, 265 y 266; Mittermaier, «Tratado de la prueba», p. 221; Framarino, t. 2, p. 78; Hélie, «De l'instruction criminelle», t. 2, núms. 2336 y 2632, ps. 413 y 441; sup. cort. nac., t. 52, p. 126; t. 77, p. 243; t. 97, p. 305; t. 101, p. 321; t. 107, p. 291; t. 114, p. 226; t. 116, p. 146 y 190; t. 119, p. 382; t. 120, p. 287; cádm. crim., t. 18, p. 325; t. 57, p. 152; t. 63, p. 212; t. 66, p. 72; t. 76, p. 385; t. 84, p. 172; noviembre de 1910, p. 1650; agosto de 1911, p. 225; diciembre de 1911, p. 283; febrero de 1912, p. 156; marzo de 1912, p. 261; julio de 1912, p. 241; febrero de 1913, p. 114; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, ps. 90 y 270, serie 8.

(*) Véase «Manuals», t. 2, p. 98.



se puede retractar
sobre esto, antes
de la sentencia.

2º Que el que la hace, goce del perfecto uso de sus facultades mentales.

3º Que no medie violencia, intimidación, *dádivos* o promesas.

4º Que no se preste por error evidente.

5º Que el hecho confesado sea posible y verosímil, atendiendo las circunstancias y condiciones personales del procesado.

6º Que recaiga sobre hechos que el inculcado conozca por la evidencia de los sentidos y no por simples inducciones.

7º *Que la existencia del delito (Que el cuerpo del delito) esté legalmente comprobada y la confesión concuerde con sus circunstancias y accidentes.*

ART. 317. — La confesión es simple y calificada.

Es simple, cuando el que la hace se manifiesta lisa y llanamente autor, cómplice o encubridor del delito que se le imputa, expresando o no sus circunstancias o detalles.

La confesión es calificada, cuando reconociéndose el que la hace, como autor o partícipe del hecho, manifiesta a la vez los motivos que atenúan o excusan su responsabilidad, *(como por ejemplo, si tratándose de un homicidio declarase haberlo ejecutado por defender su vida o por cualquier otra circunstancia que importe desconocer la criminalidad del hecho o atenuar su importancia).*

ART. 318.—La confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante.

Art. 317. — Cód. uruguayo, arts. 238, 239 y 240.

Art. 318. — Manual, t. 2, p. 23, 101, 234; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 151, 276, 287, 300, 531, 940 y 943; t. 2, ps. 679, 695 y 840; cód. uruguayo, art. 241; cód. de Bs. Aires, art. 236; cód. de San Luis, art. 161; cód. de Santa Fe, art. 286; cód. de Entre Ríos, art. 569; cód. de Jujuy, art. 207; cód. de Santiago del Estero, art. 247; código de Corrientes, art. 316; cód. de Salta, art. 276; cód. de Córdoba, art. 270; cód. de La Rioja, art. 278; cód. de Mendoza, art. 147; leyes 2, 4 y 5, tit. 13, part. 3.º; Mittermaier, op. cit., tomo único, ps. 205 y sigs.; Framarino, «La lógica de las pruebas», t. 2, p. 173; Bonnier, «La prueba», t. 1, núm. 368; Mittermaier, «Tratado de la prueba en materia criminal», p. 237; sup. cort. nac., t. 3, p. 383; t. 5, ps. 88 y 311; t. 7, p. 461; t. 12, p. 315; t. 24, p. 401; t. 26, p. 280; t. 36, p. 14; t. 61, p. 195; t. 62, p. 112; t. 68, p. 369; t. 69, p. 371; t. 73, ps. 316 y 350; t. 86, p. 287; t. 86, p. 82; t. 104, p. 17; t. 106, p. 51; t. 123, p. 238 y 268; cárm. crim., t. 1, p. 519; t. 4, p. 21; t. 8, p. 268; t. 9, p. 209; t. 12, p. 205; t. 15, p. 41; t. 27, p. 313; t. 32, p. 213; t. 33, p. 17; t. 41, p. 415; t. 42, p. 138; t. 57,



Los distintos hechos y circunstancias que ella contenga, no importan excepciones cuya prueba incumba al acusado, *salvo cuando por la calidad de las personas, sus antecedentes u otras circunstancias del hecho resulten presunciones graves en contra del confesante.*

ART. 319. — Cuando la acusación tenga por base la confesión, puede esta retractarse en cualquier estado del juicio antes de la sentencia que causa ejecutoria.

Para que la retractación sea admisible, es indispensable que el inculcado ofrezca pruebas sobre hechos decisivos que justifiquen haberse producido la confesión, oprimido por medios violentos, por amenazas, *dádivas* o promesas, que tienen por causa un error evidente, o que el delito confesado es físicamente imposible.

ART. 320. — El incidente que se promueva sobre retractación de la confesión, se sustanciará en pieza separada, sin que pueda suspender los procedimientos en la causa principal hasta el estado de sentencia.

El término de prueba en los incidentes sobre retractación de la confesión, será la mitad del ordinario.

ART. 321. — La confesión que revista las circunstancias expresadas en el art. 316, prueba acabadamente el delito. Pero en el caso de que este merezca pena de muerte, solo podrá condenarse al reo a la pena inmediata cuando no haya otra prueba que la corrobore.

p. 52; t. 71, p. 293; t. 84, p. 181; t. 94, p. 235; t. 95, p. 262; junio de 1910, p. 656; julio de 1910, p. 862; abril de 1911, p. 190; julio de 1911, ps. 286 y 318; abril de 1912, p. 165; septiembre de 1912, p. 68; junio de 1913, p. 262; marzo de 1914, p. 162; sup. cort. Bs. Aires, t. 3, p. 354, serie 1; t. 7, p. 320; t. 8, ps. 358 y 369, serie 3; t. 7, p. 279; t. 8, p. 566; t. 9, p. 529; t. 10, ps. 73 y 490, serie 4; t. 3, ps. 127 y 194, serie 5; t. 4, ps. 66, 90, 160, 198, 205, 226 y 270, serie 8.

Art. 319. — Manual, t. 2, p. 104; cód. uruguayo, art. 243; cód. de Bs. Aires, art. 237; cód. de San Luis, art. 162; cód. austriaco de 1853, art. 267; Mittermaier, op. cit., caps. I y IV; sup. cort. nac., t. 99, p. 205; cám. crim., junio de 1911, ps. 207 y 237.

Art. 320. — Manual, t. 2, p. 104; cód. uruguayo, arts. 244 y 246; cód. de Bs. Aires, art. 238; cód. de San Luis, art. 163; sup. cort. nac., t. 123, p. 175.

Art. 321. — Manual, t. 2, ps. 100, 235; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 644; t. 2, p. 537; cód. de Bs. Aires, art. 239; cód. de San Luis, art. 164; sup. cort. nac., t. 97, p. 305; t. 107, p. 291; t. 108, p. 407; t. 114, p. 228; t. 115, p. 154; t. 118, ps. 48, 140 y 190; t. 123, p. 275; cám. crim., t. 38, p. 136.



TITULO XIII

Del examen pericial (a)

ART. 322. — El juez ordenará el examen pericial, siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria.

ART. 323. — Por regla general, los peritos deberán ser dos o más; pero bastará uno:

- 1º Cuando solo este pueda ser habido.
- 2º Cuando haya peligro en el retardo.
- 3º Cuando el caso sea de poca importancia.

ART. 324. — Los peritos deberán tener títulos de tales en la ciencia, arte o industria a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio, si la profesión o arte estuviere reglamentada.

ART. 325. — Si la profesión o arte no estuviere reglamentada, o si estándolo no hubiese peritos titulares en el lugar del juicio, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, aunque no tengan título.

ART. 326. — Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento, y para ello deberán ser citados en la misma forma que los testigos.

Art. 322. — Manual, t. 2, p. 93, 119, 235; comp. esp., art. 604; enj. esp., art. 456; ley 118, tít. 18, part. 3.ª; cód. de Bs. Aires, art. 153; cód. de San Luis, art. 194; proyecto uruguayo, art. 235; cód. de Chile, art. 242; sup. cort. nac., t. 96, p. 29; Reus, «Ley de enjuiciamiento criminal española», t. 1, p. 281; Mittermaier, op. cit., ps. 161, 162, 163 y 164; Reus, op. cit., nota al art. 456.

Art. 323. — Manual, t. 2, p. 23, 120; cód. de México, art. 181; cód. de Bs. Aires, art. 154; cód. de San Luis, art. 195; Mittermaier, op. cit., p. 176; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 209, serie 8.

Art. 324. — Manual, t. 2, p. 121; cód. de Bs. Aires, art. 155; cód. de San Luis, art. 196; cód. austriaco de 1853, arts. 138, 139, 140, 141 y 142.

Art. 325. — Manual, t. 2, p. 121; cód. de Bs. Aires, art. 156; cód. de San Luis, art. 197; cód. de Chile, art. 246; proyecto uruguayo, art. 239; sup. cort. nac., t. 113, p. 340; t. 121, p. 226; cá. crim., septiembre de 1914, p. 39.

Art. 326. — Cód. de Bs. Aires, art. 157; cód. de San Luis, art. 198; cód. austriaco, art. 121; cód. de Chile, arts. 249 y 258; proyecto uruguayo, art. 240; sup. cort. nac., t. 113, p. 340; cá. crim., abril de 1910, p. 425.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 119.



ART. 327. — Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez, para desempeñar un servicio pericial, si no estuviera legítimamente impedido.

En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del juez, en el acto de hacersele saber el nombramiento.

ART. 328. — El perito que, sin alegar excusa fundada, dejare de acudir al llamamiento del juez, o se negare a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos.

ART. 329. — No podrán prestar informe pericial acerca del delito, los que no están obligados a declarar como testigos, ni los que se encuentren afectados por alguna de las inhabilidades *para ser testigos. (que producen la nulidad de las declaraciones)*.

ART. 330. — Hecho el nombramiento de peritos, se notificará inmediatamente a las partes.

ART. 331. — Si el reconocimiento o informe pericial pudiere tener lugar de nuevo en el plenario, los mismos peritos no podrán ser recusados por las partes, a menos que hubiese causa sobreviniente.

ART. 332. — Si el nombramiento no pudiere reproducirse por cualquiera causa en el plenario, los nuevos peritos podrán ser recusados por las partes.

ART. 333. — Los peritos podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces, bajo las reglas siguientes:

- 1^a Deducida la recusación durante el sumario, si la diligencia pericial fuera urgente, se practicará no obstante dicha recusación, nombrándose, siempre que fuese posible, otro perito acompañante que deberá expedirse por separado.

La recusación se resolverá en pieza separada, y si fuese

Art. 327. — Comp. esp., art. 610; enj. esp., art. 462.

Art. 328. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 798; comp. esp., art. 611; enj. esp., art. 463; cám. crim., septiembre de 1914, p. 239.

Art. 329. — Manual, t. 2, p. 122; comp. esp., art. 612; enj. esp., art. 464; cód. de Bs. Aires, art. 158; cód. de San Luis, art. 199; proyecto uruguayo, art. 245; cód. de Chile, art. 263.

Art. 330. — Manual, t. 2, p. 93; comp. esp., art. 614; enj. esp., art. 466.

Art. 333. — Manual, t. 2, p. 122; comp. esp., art. 616; enj. esp., artículo 468.



admitida, se considerará sin valor alguno el informe del recusado.

2º En el plenario, el incidente de recusación suspenderá, mientras no sea resuelta, la diligencia o informe pericial.

ART. 334. — La parte que intentase recusar al perito o peritos nombrados, deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusación y la prueba testifical o documental que tuviera.

ART. 335. — El juez examinará los documentos que produjere el recusante, oírán inmediatamente a los testigos que se le presentasen y resolverá lo que corresponda sobre la recusación. Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario para nombrar el perito que hubiese de sustituir al recusado, y constituirse el nombrado en el lugar correspondiente.

Si no la admitiese, se procederá como si no se hubiere usado de la facultad de recusar.

De la resolución que se dicte no habrá recurso, pero ésta circunstancia puede considerarse por el superior al resolver sobre lo principal.

ART. 336. — Decretado el reconocimiento pericial durante el sumario, podrán las partes nombrar peritos a su costa, que acompañarán a los que el juez haya designado, siempre que dicha diligencia no pueda reproducirse en el plenario.

Durante el plenario, las partes podrán usar libremente del mismo derecho, y aun solicitar cualquier prueba pericial en los casos en que ella fuera procedente.

ART. 337. — El juez fijará a los peritos todos aquellos puntos que crea oportunos, y les dará por escrito o de palabra todos los datos que tuviere, haciendo mención de ellos en la diligencia y cuidando muy particularmente de no darlos de una manera sugestiva.

Art. 334. — Comp. esp., art. 618; enj. esp., art. 469.

Art. 335. — Comp. esp., art. 619; enj. esp., art. 470.

Art. 336. — Manual, t. 2, p. 123; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 299; com. esp., art. 620; enj. esp., art. 471; cód. de Bs. Aires, art. 169; cód. de San Luis, art. 200; sup. cort. nac., t. 53, ps. 243 y 248; cám. crim., t. 94, p. 92.

Art. 337. — Comp. esp., art. 624; enj. esp., art. 475; cód. de Méjico, art. 187; cód. de Bs. Aires, art. 160; cód. de San Luis, art. 201.



Después de esto los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera, expresando los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión.

ART. 338. — Cuando lo juzgue conveniente, el juez asistirá al reconocimiento que los peritos hagan de las personas o de los objetos.

ART. 339. — *Los peritos practicarán unidos la diligencia, y las partes podrán asistir a ella y hacerles cuantas observaciones quieran, debiendo retirarse cuando aquellos pasen a discutir y a deliberar.*

ART. 340. — Los peritos emitirán su opinión por medio de declaración que se asentará en acta, exceptuándose de estas disposiciones los casos en que la naturaleza y gravedad del hecho, requiriere la forma escrita y los informes facultativos de los profesores de alguna ciencia, los cuales deberán emitir su opinión por escrito, y pedir el tiempo que necesiten para formularla.

ART. 341. — La diligencia de exámen podrá suspenderse, si la operación se prolongase demasiado; pero deberán tomarse en tal caso las precauciones convenientes para evitar alteraciones en las personas, objetos o lugares sujetos al exámen.

ART. 342. — El informe pericial comprenderá, si fuere posible:

- 1º Una descripción de la persona o cosa que debe ser objeto del mismo, en el estado o del modo en que se hallare.
- 2º Una relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado.
- 3º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia o arte.

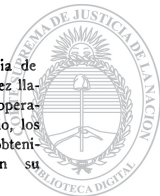
ART. 338. — Comp. esp., art. 626; enj. esp., art. 477; cód. de Méjico, art. 188.

ART. 339. — Manual, t. 2, p. 93; comp. esp., arts. 625 y 628; enj. esp., arts. 476 y 480; cód. de Buenos Aires, art. 161; cód. de San Luis, art. 202.

ART. 340. — Cód. de Méjico, art. 189; cód. de Buenos Aires, art. 162; cód. de San Luis, art. 203.

ART. 341. — Comp. esp., art. 630; enj. esp., art. 482.

ART. 342. — Manual, t. 2, p. 121; comp. esp., art. 627; enj. esp., art. 478; cód. de Bs. Aires, art. 163; cód. de San Luis, art. 204; proyecto uruguayo, art. 254; cód. de Chile, art. 259; Mittermaier, op. cit., ps. 182 y 195; Framarino, op. cit., t. 2, p. 304; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 193, serie 8.



ART. 343. — Cuando entre los peritos hubiera disidencia de opiniones, de suerte que ninguna haya tenido mayoría, el juez llamará uno o más peritos ante los cuales se renovarán las operaciones y experimentos, si fuere posible; y en caso contrario, los primeros peritos les comunicarán el resultado que se haya obtenido, y con estos datos, los nuevamente llamados emitirán su opinión.

ART. 344. — Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, los jueces no permitirán que se verifique el primer análisis, sino cuando más sobre la mitad de las sustancias, a no ser que su cantidad sea tan escasa que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirlas todas, cuya circunstancia se hará constar en el acta de diligencia, y se procederá de conformidad al artículo anterior.

ART. 345. — Siempre que se tratara de exámenes médico-legales, será lícito a los peritos revisar las actuaciones producidas para tomar por sí mismo los antecedentes del caso, si creyesen no ser bastantes los datos suministrados para sus procedimientos. La divulgación de lo que de ellos resultare, hará incurrir en la responsabilidad de los que violan los secretos profesionales.

ART. 346. — La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca.

Art. 343. — Manual, t. 2, p. 121; comp. esp., art. 632; enj. esp., art. 484; cód. de México, art. 190; cód. de Bs. Aires, art. 164; cód. de San Luis, art. 205; cód. de Chile, art. 263; **Framarino**, op. cit., t. 2, p. 306.

Art. 344. — Enj. esp., art. 479; cód. de México, art. 191.

Art. 345. — Cód. de Bs. Aires, art. 165; cód. de San Luis, art. 206.

Art. 346. — Manual, t. 2, ps. 123, 262, 263; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 121, 287, 300, 533, 565, 569, 571, 778, 791, 940 y 945; t. 2, ps. 124, 537; cód. de Bs. Aires, art. 252; cód. de San Luis, art. 289; cód. de Chile, arts. 500 y 501; **Framarino**, op. cit., t. 2, ps. 292, 300, 302, 304, 305, 307, 311 y 353; **Garraud**, «Instruction criminelle», t. 1, p. 507, y nota 24, en la misma página; cód. austriaco de 1853, art. 272; sup. cort. nac., t. 116, p. 419; t. 117, p. 401; ley 118, tít. 18, part. 3.ª; cdm. crim., t. 54, p. 211; t. 56, p. 269; t. 94, p. 150; abril de 1913, p. 21; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, ps. 169 y 270, serie 8; **Bonnier** y su traductor Caravantes, «Tratado de las pruebas», t. 1, núm. 128, p. 134 y sigs.; **Mittermaier**, op. cit., p. 200 y sigs.



ART. 347. — Los que prestaren informes como peritos en virtud de orden judicial, tendrán derecho a cobrar honorarios, si no tuviesen retribución o sueldo del Estado, *sin que esto paralice la prosecución de la causa.*

TITULO XIV

De la prueba instrumental (a)

ART. 348. — Los documentos que se presenten durante la instrucción o (y) que de cualquier manera deban obrar en el proceso, se agregarán a este previa (citación) notificación de las partes.

ART. 349. — Los instrumentos públicos constituyen plena prueba (*mientras no se pruebe su falsedad*) a menos que sean *enervados por otras pruebas.*

ART. 350. — Los escritos privados, reconocidos (*legalmente*) en su firma y en su contenido, constituyen contra el que hace el reconocimiento, la misma prueba que los documentos públicos.

ART. 351. — El procesado no podrá ser obligado al reconocimiento de documentos privados que obren en su contra.

ART. 352. — Los medios de prueba establecidos en materia civil para la comprobación de los documentos privados, rigen también en lo criminal, en cuanto no estén limitados o en oposición con lo que se determina en este código.

Art. 347. — Comp. esp., art. 613; enj. esp., art. 465; cód. de Bs. Aires, art. 166; cód. de San Luis, art. 207; cód. de Chile, art. 267.

Art. 348. — Manual, t. 2, p. 126, 235; cód. de Méjico, art. 236; cód. de Bs. Aires, art. 167; cód. de San Luis, art. 208; proyecto uruguayo, art. 257; cádm. crim., t. 67, p. 93.

Art. 349. — Manual, t. 2, p. 127; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 123, 298, 301, 533, 569 y 779; t. 2, ps. 537 y 538; cód. civil, art. 993; cód. uruguayo, art. 246; cód. de Bs. Aires, art. 253; cód. de San Luis, art. 290; cód. de Chile, art. 505; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 270, serie 8.

Art. 350. — Manual, t. 2, p. 127, 128; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 90; cód. uruguayo, art. 247; cód. civil, art. 1028.

Art. 351. — Manual, t. 2, p. 127, 128, 251; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 151; cód. de Bs. Aires, art. 170; cód. de San Luis, art. 211; proyecto Malaver, Obarrio y Montes de Oca, art. 425; sup. cort. nac., t. 57, p. 44; t. 101, p. 322.

Art. 352. — Manual, t. 2, p. 93, 128; Jurisprudencia Argentina, t. 2, ps. 697 y 704; cód. uruguayo, art. 247; cód. de Bs. Aires, art. 254; cód. de San Luis, art. 291, última parte.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 125.



ART. 353. — Siempre que se pidiere copia o testimonio de parte de un documento que obre en los archivos públicos, el otro interesado tendrá derecho a que se adicione con lo que crea conducente del mismo documento.

ART. 354. — Los documentos existentes fuera del distrito jurisdiccional donde funcione el juez, se compulsarán a virtud de exhorto dirigido a la autoridad judicial del lugar en que aquellos se encuentren.

ART. 355. — Las cartas de particulares substraídas del correo o de cualquier portador particular, no serán admitidas en juicio.

ART. 356. — Las que no fueran substraídas, solo podrán ser presentadas en juicio, por terceros con el consentimiento de sus dueños o en virtud de mandato judicial.

TITULO XV

De las presunciones o indicios (a)

ART. 357. — Las presunciones o indicios en el juicio criminal, son las circunstancias y antecedentes, que teniendo relación con el delito, pueden razonablemente fundar una opinión sobre la existencia de hechos determinados.

Art. 353. — Cód. de Méjico, art. 237.

Art. 354. — Cód. de Méjico, art. 238.

Art. 355. — Manual, t. 2, p. 126; cód. de Bs. Aires, art. 168; cód. de San Luis, art. 209; *Merlin*, verbo Lettre y *Dalloz*, verbo Letre missive, núm. 62.

Art. 356. — Manual, t. 2, p. 127; cód. de Bs. Aires, art. 169; cód. de San Luis, art. 210; *Rousseau*, «De la correspondence par lettres mislives et telegraphes», ps. 212 y 213; *Baudouin*, «Discurso en la corte de Syan; *Garraud*, «Droit criminel», p. 687; sup. cort. nac., t. 46, p. 38.

Art. 357. — Manual, t. 2, p. 130; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 276, 300, 525, 533, 778, 791 y 934; t. 2, ps. 288, 537 y 975; cód. de Bs. Aires, art. 255; cód. de San Luis, art. 292; cód. de Mendoza, art. 220; cód. de Chile, art. 598; cód. uruguayo, art. 251; cód. austriaco, arts. 280 y 281; leyes 60, 62, 102 y 133 del estilo; 3, tít. 14, libro 3, fuero juzgo; 3, tít. 8, libro 2, fuero real; 8 y 12, tít. 14, part. 3.ª; 32, tít. 16, part. 3.ª; 26, tít. 1; 12 y 13, tít. 17, part. 7.ª; 11, título 25, libro 8, recopilación castellana; *Framarino*, op. cit., t. 2, ps. 246, 266 y 281; *Mittermaier*, op. cit., ps. 377 a 386; *Garraud*, «La preuve par indices dans le procès pénal»; cádm. crim., t. 1, ps. 37 y 577; t. 2, ps. 91, 140, 159, 402, 461 y 520; t. 3, ps. 102, 168 y 390; t. 4, ps. 88, 97, 200, 203 y 426; t. 5, ps. 329 y 357; t. 7, ps. 487, 530 y 538; t. 9, p. 38; t. 10, p. 563; t. 11, p. 86; t. 15, p. 281; t. 17, p. 334; t. 18, ps. 91 y 325; t. 19, p. 241; t. 27, p. 336; t. 29, p. 271, 283 y 389; t. 31, p. 297; t. 32, p. 118; t. 35, p. 22; t. 38, p. 221; t. 40, p. 38; t.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 129.



ART. 358. — Para que haya plena prueba por presunciones o indicios, es preciso que éstos reúnan las condiciones siguientes:

- 1º Que el cuerpo del delito conste por medio de pruebas directas e inmediatas.
- 2º Que los indicios o presunciones sean varios, reuniendo, cuando menos, el carácter de anteriores al hecho y concomitantes con el mismo.
- 3º Que se relacionen con el hecho primordial que debe servir de punto de partida para la conclusión que se busca.
- 4º Que no sean equívocos, es decir, que *todos reunidos* no puedan conducir a conclusiones diversas.
- 5º Que sean directos, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho de que se trata.
- 6º Que sean concordantes los unos con los otros, de manera que tengan íntima conexión entre sí y se relacionen sin esfuerzo, desde el punto de partida hasta el fin buscado.
- 7º Que se funden en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones o indicios.

42, p. 186; t. 48, p. 203; t. 65, p. 394; t. 67, p. 272; t. 71, p. 105; junio de 1914, p. 311; sup. cort. Bs. As., t. 1, p. 261, ser. 1; t. 1, p. 7; t. 2, p. 84; t. 10, p. 188, ser. 2; t. 4, p. 108, ser. 3; t. 1, p. 24; t. 3, p. 484; t. 6, ps. 178, 180 y 188; t. 7, p. 356, ser. 4; t. 3, ps. 129 y 353; t. 4, p. 425, ser. 5; t. 4, p. 198; t. 5, p. 24, ser. 8.

Art. 358. — Manual, t. 2, ps. 23, 89, 100, 129, 139; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 151, 157, 276, 300, 369, 376, 525, 527, 531, 633, 665, 778, 791, 934, 942, 943 y 945; t. 2, ps. 123, 142, 288, 403, 537, 840 y 975; com. esp., art. 838, cód. uruguayo, art. 254; cód. de Bs. Aires, art. 266; cód. de San Luis, art. 293; cód. de Chile, art. 516; Ellero, «De la certidumbre en los juicios criminales», ps. 102, 103, 146, 148 y 243; Mittermaier, «Tratado de la prueba en materia criminal», ps. 373 y 403; Garraud, «Instruction criminelle», t. 2, ps. 288 y 289; Framarino, op. cit., t. 1, ps. 270, 276, 281, 287, 320, 323 y 330; sup. cort. nac. t. 54, p. 68; t. 56, p. 377; t. 66, p. 267; t. 71, p. 51; t. 106, p. 441; t. 108, p. 173; t. 109, p. 118; t. 112, p. 388; t. 114 p. 71; t. 122, p. 427; t. 124, p. 388; cádm. crim., t. 17, p. 334; t. 62, p. 338; t. 79, p. 115; t. 94, p. 98 y 432; t. 95, p. 33; t. III, p. 180; t. IV, p. 68; t. V, p. 381; t. VI, p. 382 y 454; mayo de 1910, p. 689; junio de 1910, p. 650; noviembre de 1910, p. 1667; diciembre de 1910, p. 2416; febrero de 1911, p. 225; abril de 1911, p. 200 y 273; mayo de 1911, p. 273; junio de 1911, ps. 233, 238 y 244; julio de 1911, ps. 92, 121 y 279; diciembre de 1911, ps. 287 y 316; marzo de 1912, p. 264; abril de 1912, p. 55; junio de 1912, p. 79; agosto de 1912, p. 344; diciembre de 1912, ps. 299 y 306; julio de 1913, p. 77 y 202; septiembre de 1913, p. 88; noviembre de 1913, p. 56; septiembre de 1914, ps. 241, 244 y 246; cádm. fed. La Plata, t. 4, ps. 52 y 132; sup. cort. Bs. Aires, t. 10, p. 481, ser. 4; t. 4, p. 587, ser. 5.



TITULO XVI

De la interceptación de la correspondencia escrita y telegráfica

ART. 359.—Siempre que el juez de instrucción (*tuviere indicios de*) *estimare* que la interceptación de la correspondencia postal o telegráfica que el procesado remitiere o que le fuese dirigida, pueda suministrar medios para comprobar los hechos, acordará su detención, apertura y exámen.

ART. 360. — La detención y remisión de la correspondencia se ordenará a la oficina de correos y telégrafos respectiva.

ART. 361. — Recibida la correspondencia postal o telegráfica, el juez procederá a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia de esta diligencia.

El juez leerá para sí su contenido, y si no tuviera relación con el proceso, la devolverá al interesado, sus representantes o miembros inmediatos de su familia, bajo la debida constancia.

ART. 362. — Si por el contrario existiere esa relación, tomará las notas que considere necesarias, y rubricadas las cartas y telegramas por el juez, se conservarán de este modo y bajo su responsabilidad durante el sumario.

Art. 359. — Manual, t. 2, ps. 82 236; comp. esp., art. 714; enj. esp., art. 579; cód. austriaco, art. 143; cód. de Bs. Aires, art. 200; cód. de San Luis, art. 247; cód. de Chile, art. 197; proyecto uruguayo, art. 261; sup. cort. nac., t. 46, p. 36.

Art. 360. — Cód. de Bs. Aires, art. 201; cód. de San Luis, art. 248; cód. de Chile, art. 197, inc. 2.º; proyecto uruguayo, art. 262.

Art. 361. — Cód. de Bs. Aires, art. 202; cód. de San Luis, art. 249; cód. de Chile, arts. 201 y 202; enj. esp., arts. 584 a 588; proyecto uruguayo, art. 263.

Art. 362. — Comp. esp., art. 721; enj. esp., art. 586; cód. de Bs. Aires, art. 203; cód. de San Luis, art. 260; cód. de Chile, art. 201.



TITULO XVII

De la detención y de la prisión preventiva (a)

ART. 363. — Fuera del caso de pena impuesta por sentencia, la libertad de las personas solo puede restringirse con el carácter de detención o con el de prisión preventiva.

ART. 364. — Además de los casos anteriormente determinados en este código, la detención podrá decretarse:

- 1º Cuando ocurrido un hecho que presente los caracteres de delito, o que lo haga presumir, no fuera posible en el primer momento individualizar cuando menos por sospechas o indicios directos, la persona de su autor y hubieren dos o más sobre quienes pueda recaer la responsabilidad penal.
- 2º Cuando en el lugar de la ejecución de un delito se encontrasen reunidas varias personas, y la autoridad encargada de la instrucción o de la prevención del sumario juzgue necesario o conveniente que ninguna de ellas se separe del lugar expresado hasta practicar las diligencias indagatorias que correspondan.
- 3º Cuando la averiguación del delito exija la concurrencia de alguna persona para prestar informes o declaración y se negare a hacerlo.
- 4º Cuando hubiere temor fundado de que el testigo se oculte, fugue o ausente, y su deposición se considere necesaria a los objetos del esclarecimiento del delito y averiguación de los culpables.

ART. 365. — En los casos del inciso 1º del artículo precedente, la restricción a la libertad de una persona, solo podrá durar mientras se practiquen las primeras investigaciones del sumario o de las diligencias de prevención.

ART. 363. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 954; cód. de México, art. 240; cód. de Bs. Aires, art. 171; cód. de San Luis, art. 212; cód. francés, art. 94; enj. esp., art. 489; cám. crim., t. 68, p. 112.

ART. 364. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 954; cód. de Bs. Aires, art. 178; cód. de San Luis, art. 218; cód. de Chile, art. 277; cód. austríaco, de 1853, art. 154; cám. crim., t. 25, p. 156.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 166 y sigs.



En ningún caso la simple detención por la causa expresada, podrá prolongarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo la responsabilidad del funcionario que la autorice.

Cuando ocurra el caso previsto en el inciso 2º, la detención terminará en el acto de recibir las declaraciones o informes de las personas expresadas, siempre que no resulten complicadas en el hecho que las ha motivado.

En los casos de los incisos 3º y 4º, la detención se limitará al tiempo necesario para tomar declaración al testigo o para que se preste el informe.

El juez deberá recibir esa declaración o informe inmediatamente después de encontrarse el testigo o perito a su disposición.

ART. 366. — La detención se convertirá en prisión preventiva, cuando medien conjuntamente estos requisitos:

- 1º Que esté justificada, cuando menos por una prueba semiplena, la existencia de un delito (*público*).
- 2º Que al detenido se le haya tomado declaración indagatoria o se haya negado a prestarla, habiéndosele además impuesto de la causa de su prisión.
- 3º Que haya indicios suficientes a juicio del juez para creerlo responsable del hecho.

ART. 367. — La prisión preventiva se hará constar en los autos por resolución especial del juez de instrucción, estableciendo las causas que la motivan.

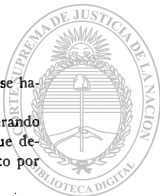
ART. 368. — (*Cualquiera persona puede detener:*) Ninguno podrá ser aprehendido, sino por los agentes a quienes la ley da la facultad de hacerlo, y en conformidad a las disposiciones de este código. Sin embargo, cualquiera persona puede aprehender:

- 1º Al que intentare cometer un delito en el momento de (*ir*) *empezar* a cometerlo.

Art. 366. — Manual, t. 2, p. 43; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 560, 635, 767 y 953; t. 2, p. 144; cód. de Bs. Aires, art. 179; cód. de San Luis, art. 219; sup. cort. nac., t. 50, p. 181; t. 75, p. 33; t. 108, p. 14; cám. crim., t. 68, p. 113; t. 92, ps. 352 y 375; noviembre de 1912, p. 40; junio de 1913, p. 76; abril de 1914, p. 117.

Art. 367. — Sup. cort. nac., t. 73, p. 418.

Art. 368. — Comp. esp., arts. 634 y 635; enj. esp., arts. 489 y 490; cód. de Méjico, art. 240; cód. de Ginebra, art. 2; cód. de Bs. Aires, art. 184; cód. de San Luis, art. 226.



2º Al delincuente infraganti.

3º Al que se fugare del establecimiento penal en que se hallare extinguiendo su condena.

4º Al que se fugare del lugar en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que debiere cumplir la condena que se le hubiere impuesto por sentencia irrevocable.

5º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.

6º Al que se fugare estando preso por causa pendiente.

7º Al procesado y condenado que estuviere en rebeldía.

ART. 369. — La autoridad policial o sus agentes, tendrán obligación de detener a cualquiera que se hallare en alguno de los casos del artículo anterior.

ART. 370. — La autoridad o agente de policía que detuviere a una persona, deberá entregarla, bajo su responsabilidad, al juez más próximo al lugar en que se hubiere hecho la detención, en las primeras horas hábiles de su despacho.

Cuando un particular detiene a otro, está obligado a conducirlo inmediatamente al juez o agente más próximo de la autoridad.

ART. 371. — Si el juez a quien se hiciere la entrega, fuere el propio de la causa, procederá según corresponda a su situación o estado.

ART. 372. — Si no fuere el competente, extenderá una diligencia expresiva de la persona que hubiere hecho la detención, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla e identificarla, de los motivos que esta manifestare haber tenido para la detención, y del nombre, apellido y circunstancias del detenido.

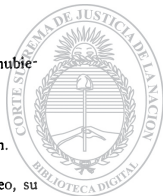
Esta diligencia será firmada por el juez, el secretario y la persona que hubiere ejecutado la detención, y si esta no supiese (*firmar lo harán dos testigos*) o no quisiese firmar, se hará constar en el acta.

Inmediatamente después, serán remitidas estas diligencias y la persona detenida a disposición del juez que conociere de la

Art. 370. — Comp. esp., art. 641; enj. esp., art. 496.

Art. 371. — Comp. esp., arts. 642 y 644; enj. esp., arts. 497 y 498.

Art. 372. — Las mismas concordancias del artículo anterior.



causa, o a quien correspondiere conocer en ella, o a quien hubiere condenado al detenido, según los casos.

ART. 373. — La orden de prisión contendrá:

- 1º El nombre del juez que la ordena.
- 2º La persona o autoridad a quien se comete la prisión.
- 3º El delito por que se procede.
- 4º El nombre, apellido, o sobrenombre del presunto reo, su empleo, profesión o clase, nacionalidad, domicilio y demás señas generales o particulares que consten o se hubieren adquirido para designarlo clara y distintamente.
- 5º El lugar a que se ha de conducir el reo.
- 6º Si ha de estar o no incomunicado.

ART. 374. — Cuando la aprehensión de una persona deba practicarse en distinta jurisdicción, se llevará a efecto librando oficio o exhorto a la autoridad judicial del lugar donde aquella resida, con transcripción del auto en que se ordena la detención o prisión.

En los casos de suma urgencia, podrá usarse de la vía telegráfica.

ART. 375. — Si el procesado se encontrase en país extranjero, deberá procederse a su extradición con arreglo a los tratados, o en su defecto a los usos internacionales.

TITULO XVIII

De la libertad bajo fianza (a)

ART. 376. — Cuando el hecho que motive la prisión del procesado tenga solo pena pecuniaria o corporal, cuyo máximo no exceda de dos años de prisión, o una y otra conjuntamente, podrá decretarse su libertad provisoria, siempre que preste alguna de las cauciones determinadas en el presente título. (*)

Art. 373. — Manual, t. 2, ps. 43, 166, 167; comp. esp., art. 650; enj. esp., art. 505; cód. de Bs. Aires, art. 186; cód. de San Luis, art. 229.

Art. 376. — Manual, t. 2, p. 173, 236; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 767; comp. esp. art. 653; enj. esp., art. 529; cód. uruguayo, art. 202; sup. cort. nac., t. 63, p. 39; t. 64, p. 398; t. 67, p. 90 y 316; t. 73, p. 400; t. 76; p. 192; t. 78, p. 351; cá. crim., t. 15, p. 390; t. 29, p. 180; t. 64, p. 307; t. 73, p. 224; t. 93, p. 49 y 269; t. 94, p. 333; t. 95, p. 131; marzo

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 171.

(*) Véase la nota (a) de la p. 69.



ART. 377. — No podrá, sin embargo, decretarse la libertad bajo caución:

1º Cuando el procesado fuere reincidente.

2º Cuando mediase reiteración o concurrencia de varios delitos.

ART. 378. — Para determinar la calidad y cantidad de la caución, se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado, y todas las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad, como así mismo la importancia aproximativa de su responsabilidad civil]

ART. 379. — La caución tendrá por objeto garantizar la comparecencia del procesado, cuando fuere llamado o citado por el juez que conociere de la causa. Garante además el cumplimiento de la pena pecuniaria, las costas del juicio y las responsabilidades civiles que nacen del delito, en caso de que el procesado no compareciere.

ART. 380. — La caución puede ser personal, real o juratoria.

ART. 381. — Puede ser fiador toda persona que teniendo capacidad legal para contratar, sea de responsabilidad y arraigo.

Una misma persona no podrá otorgar más de dos fianzas en cada distrito o sección judicial, mientras no sean canceladas.

ART. 382. — A los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, las fianzas deberán anotarse:

En el distrito de la capital, en un registro especial llevado por los funcionarios y en la forma que determine la cámara de apelaciones en lo criminal.

de 1910, p. 132; abril de 1910, p. 322; mayo de 1910, p. 511; agosto de 1911, p. 117; septiembre de 1911, p. 121; octubre de 1911, p. 69; mayo de 1912, p. 80; julio de 1912, p. 41; diciembre de 1912, p. 115; abril de 1914, p. 116.

Art. 377. — Manual, t. 2, p. 173; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 767; sup. cort. nac., t. 68, p. 384; t. 77, p. 283; cám. crim., t. 32, p. 77; t. 63, p. 420; t. 69, p. 180.

Art. 378. — Comp. esp., art. 659; enj. esp., art. 531; sup. cort. nac. t. 64, p. 352.

Art. 379. — Manual, t. 2, p. 176; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 529; comp. esp., art. 660; enj. esp., art. 532; cód. uruguayo, art. 204.

Art. 380. — Manual, t. 2, p. 175; comp. esp., art. 661; enj. esp. arts. 533 y 591; cód. uruguayo, art. 206; cód. de Méjico, art. 262.

Art. 381. — Comp. esp. art. 662; enj. esp. art. 592; cód. de Bs. Aires, art. 390; cód. de San Luis, art. 419; proyecto uruguayo, art. 294; cód. italiano, art. 338.



En los juzgados seccionales y de los territorios nacionales por los secretarios de los jueces y en la forma que lo determine la suprema corte. (*)

ART. 383. — La caución real podrá constituirse:

- 1º Gravando con hipoteca bienes inmuebles.
- 2º Depositando la suma de dinero que el juez determine.
- 3º Depositando efectos públicos u otros papeles de crédito cotizables al precio de su cotización.

En este último caso, la cantidad señalada para la garantía deberá ser aumentada en una cuarta parte más de la determinada.

ART. 384. — Los dineros, los efectos públicos u otros papeles de crédito, depositados de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, quedan sometidos a un privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.

ART. 385. — La caución real puede ser prestada por el procesado o por un tercero.

ART. 386. — La caución juratoria se admitirá cuando concurran conjuntamente las circunstancias siguientes:

- 1º Que el procesado sea notoriamente pobre o desvalido.
- 2º Que la pena del delito no exceda de cuatro meses de arresto o quinientos pesos de multa.
- 3º Que los antecedentes del procesado no den lugar a presumir que burlará la acción de la justicia.

ART. 387. — Para ser puesto en libertad bajo caución juratoria el procesado prometerá lo siguiente:

- 1º Presentarse siempre que sea llamado por el juez de la causa.
- 2º Fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin conocimiento y autorización del juez que de la causa conozca, bastando su contravención para ordenar nuevamente su prisión.

ART. 383. — Manual, t. 2, p. 175; comp. esp., arts. 663 y 665; enj. esp., arts. 591 y 593.

ART. 386. — Manual, t. 2, p. 174; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 501; cód. uruguayo, art. 206.

ART. 387. — Manual, t. 2, p. 175; cód. uruguayo, art. 207.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



ART. 388. — La caución aceptada se extenderá por diligencia en el proceso, previniéndose en ese acto al encausado, la pena en que incurrirá por su trasgresión.

ART. 389. — El ministerio fiscal, el acusador particular y el juez, deberán expedirse sucesivamente cada uno de ellos en las peticiones de libertad provisoria bajo caución, dentro de cuarenta y ocho horas.

ART. 390. — Las cauciones para decretarse la libertad provisoria, podrán otorgarse *apud acta*. En el caso de gravámen hipotecario, se ordenará también la inscripción en el registro correspondiente.

ART. 391. — El inculcado y el fiador, deberán en el mismo acto de prestar la caución, elegir domicilio en el lugar donde tenga su asiento el juzgado, para las citaciones y notificaciones que ocurrieren en adelante.

Las citaciones y notificaciones que se hagan al inculcado o su defensor, deben ser hechas también al fiador, cuando aquellas se relacionen con la obligación de éste.

ART. 392. — Si el procesado no compareciese al llamado del juez durante el proceso, el juez decretará inmediatamente orden de prisión contra él, y *fixará un término al fiador para que lo presente bajo apercibimiento de hacerse efectiva la garantía*.

Si el fiador o dueño de los bienes dados en la garantía, no presentare el procesado en el término que fija el juez, se procederá a hacerse efectiva la garantía, (*si hubiese sentencia ejecutoriada contra el procesado*). El fiador podrá ofrecer a embargo bienes del procesado.

ART. 393. — Si el procesado compareciese o fuese presentado por el fiador antes de hacerse efectiva la garantía, queda-

Art. 388. — Cód. uruguayo, art. 208; cám. crim., t. 37, p. 63.

Art. 389. — Manual, t. 2, p. 175.

Art. 390. — Manual, t. 2, p. 175; comp. esp., art. 666; enj. esp., art. 596; cód. uruguayo, art. 219; cód. de Bs. Aires, art. 392; cód. de San Luis, art. 423.

Art. 391. — Manual, t. 2, p. 176; cód. de Bs. Aires, art. 393; cód. de San Luis, art. 424; cód. Italiano, art. 339; proyecto uruguayo, art. 299.

Art. 392. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 529; comp. esp., art. 671; enj. esp., art. 598; cód. uruguayo, art. 206; cód. de Bs. Aires, art. 394; cód. de San Luis, art. 425; cám. crim., t. 32, p. 430; t. V, p. 166.

Art. 393. — Manual, t. 2, p. 176; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 529; cód. de Bs. Aires, art. 395; cód. de San Luis, art. 426; cám. crim., t. 24, p. 314.



rá revocado el auto que ordenó su efectividad, siendo los costos y costas a cargo del fiador.

ART. 394. — Para hacer efectiva la obligación personal del fiador, se procederá ejecutivamente. Cuando la caución consista en inmuebles hipotecados, estos se venderán en público remate con los requisitos establecidos en el código de procedimientos civiles.

Los efectos públicos se enagenarán por corredores de bolsa o en su defecto por agentes comerciales.

ART. 395. — El auto que decreta o deniegue la libertad bajo caución, será reformable de oficio o a instancia de parte, durante todo el curso de la causa.

El término para apelar de resoluciones sobre excarcelación, es de tres días, y el recurso solo se otorgará en relación.

ART. 396. — Se cancelará la fianza:

- 1º Cuando el fiador lo pidiera presentando a la vez al procesado.
- 2º Cuando fuere constituido en prisión, revocándose el auto de libertad provisoria.
- 3º Cuando se dictare auto irrevocable de sobreseimiento o sentencia irrevocable absolutoria, o cuando siendo condenatoria, se presentase el reo llamado para cumplir la condena.
- 4º Por muerte del procesado, estando pendiente la causa.

ART. 397. — Una vez hecha efectiva la fianza, solo quedan al fiador contra el procesado las acciones que acuerda el derecho común para su indemnización.

Art. 394. — Manual, t. 2, p. 176; comp. esp., art. 672; enj. esp., arts. 536 y 613; cód. de Bs. Aires, art. 396; cód. de San Luis, art. 427; proyecto uruguayo, art. 302.

Art. 395. — Manual, t. 2, ps. 62, 175; cód. de Bs. Aires, art. 391; cód. de San Luis, art. 422; cód. francés, art. 115, inc. 2.º; cód. de Mendoza, art. 290 y su nota; enj. esp., art. 539; sup. cort. nac., t. 62, p. 200; cám. crim., t. 8, p. 85; t. 32, p. 356; t. 36, p. 93; t. 98, p. 375; mayo de 1911, ps. 59 y 60.

Art. 396. — Manual, t. 2, p. 176; comp. esp., art. 677; cód. de Bs. Aires, art. 398; cód. de San Luis, art. 429; cód. de Mendoza, art. 302 y su nota; enj. esp., art. 541; proyecto uruguayo, art. 303; cám. crim., t. 33, p. 297; agosto de 1911, p. 75.

Art. 397. — Comp. esp., art. 679.

ART. 398. — Todas las diligencias de libertad provisional bajo caución se sustanciarán por cuerda separada.

TITULO XIX

De las visitas domiciliarias y pesquisas en lugares cerrados (a)

ART. 399. — Los jueces encargados de la instrucción, a instancia del ministerio fiscal o de oficio, pueden practicar pesquisas o investigaciones, sea en la habitación o domicilio del procesado, o en cualquier otro *lugar*, cuando existan indicios suficientes para presumir que allí se encuentra el presunto delincuente o que puedan hallarse objetos útiles para el descubrimiento y comprobación de la verdad.

ART. 400. — No podrán hacerse pesquisas domiciliarias sino desde que sale hasta que se pone el sol.

Se exceptúan de esta disposición:

- 1º Las pesquisas que deban practicarse en edificios o lugares públicos.
- 2º Los que no admitan demora en su ejecución sin gran peligro.
- 3º En los casos determinados en el artículo 189 y otros de análoga naturaleza.
- 4º En los casos en que el interesado o su representante preste su consentimiento expresa o tácitamente.

ART. 401. — Se reputan edificios o lugares públicos, para la observancia de lo dispuesto en este título:

Art. 398. — Manual, t. 2, p. 175; comp. esp., art. 680; enj. esp., art. 590.

Art. 399. — Manual, t. 2, p. 82, 96, 236; comp. esp., art. 685; enj. esp., art. 550; cód. austríaco, art. 139; código de Bs. Aires, art. 187; cód. de San Luis, art. 232; cód. francés, art. 16; cód. de Chile, art. 177; proyecto uruguayo, art. 264; sup. cort. nac., t. 76, p. 433; cá. crim., t. 75, p. 23; *Saluto*, op. cit., núms. 630 y 631.

Art. 400. — Comp. esp., arts. 682 y 687; enj. esp., arts. 546, 550 y 551; cód. uruguayo, art. 284; cód. de Bs. Aires, art. 188; cód. de San Luis, art. 233; cód. de Chile, art. 178; proyecto uruguayo, art. 265; cá. crim., t. 75, p. 23; *Saluto*, op. cit., núms. 630 y 631.

Art. 401. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 831; comp. esp., art. 689; enj. esp., art. 547; cód. de Bs. Aires, art. 189; cód. de San Luis, art. 234; proyecto uruguayo, art. 266.

(a) Véase «Manual», t. 2, p. 94.





- 1º Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil, de la nación, de la provincia o del municipio.
- 2º Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, *fueren o no lícitos*.
- 3º Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no esté destinado a la habitación o residencia particular.

ART. 402. — Para practicar pesquisas en los templos o lugares religiosos, y en los edificios públicos de la nación, de las provincias o de los municipios, deberá darse aviso de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.

ART. 403. — La resolución en que el juez ordene la entrada y registro en el domicilio de un particular, será siempre fundada.

ART. 404. — El juez expresará determinadamente en todo auto de entrada o registro, el edificio o lugar cerrado que ha de ser su objeto, si ha de tener lugar solamente de día y la autoridad o funcionario que lo hubiere de practicar.

ART. 405. — Si la pesquisa hubiere de hacerse en el domicilio de un particular, se notificará a éste la orden de allanamiento, o a su encargado, si aquel no fuere habido a la primera diligencia de su busca.

Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquiera otra persona, mayor de edad, que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto a los individuos de la familia del interesado.

Si no se hallare a nadie, se hará esto constar por diligencia, que se extenderá con asistencia de dos vecinos.

ART. 406. — Desde el momento en que el juez acordare la pesquisa en cualquier lugar, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado o la sustracción

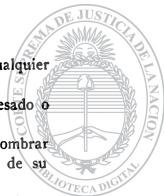
Art. 402. — Comp. esp., arts. 691 y 692; enj. esp. arts. 555 y 556; cód. de Bs. Aires, art. 190; cód. de San Luis, art. 235; cód. de Chile, art. 179; proyecto uruguayo, art. 267.

Art. 403. — Manual, t. 2, ps. 94, 95, 96; cárn. crim., t. 13, p. 252.

Art. 404. — Manual, t. 2, p. 96; cód. de Bs. Aires, art. 191; cód. de San Luis, art. 237.

Art. 405. — Comp. esp., art. 702; enj. esp., art. 566; cód. de Bs. Aires, art. 192; cód. de San Luis, art. 238; cód. de Chile, art. 182; proyecto uruguayo, art. 268; sup. cort. nac., t. 96, p. 430.

Art. 406. — Comp. esp., art. 703; enj. esp., art. 567.



de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualquier otra cosa que hubiera de ser objeto del registro.

ART. 407. — El registro se hará a presencia del interesado o de la persona a quien encomendare sus veces.

Si aquel no fuese habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia, mayor de edad.

Si no lo hubiere, se hará a presencia de dos testigos vecinos.

ART. 408. — Practicada la visita o pesquisa, el juez hará extender acta en la cual se consignará el resultado, de la diligencia, haciendo constar todas las circunstancias que puedan tener alguna importancia en la causa.

La diligencia será firmada por los concurrentes, y si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

ART. 409. — El juez o funcionario que practique el registro, recogerá los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles y cualquier otra cosa que hubiere encontrado, si esto fuere necesario para el resultado del sumario.

Los libros y papeles que se recogiesen, serán foliados, sellados y rubricados en todas sus hojas útiles por el juez, secretario (*interesado y demás personas que hubieren asistido a la diligencia*) y el interesado o sus representantes.

Los objetos mencionados serán inventariados y colocados en lugar seguro a disposición del juzgado.

ART. 410. — Si para apreciar la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen encontrado en la pesquisa, fuere necesario algún reconocimiento pericial, se acordará en el acto por el juez en la forma establecida en el título “Del exámen pericial”.

Art. 407. — Manual, t. 2, p. 96; comp. esp., art. 705; enj. esp., art. 569; cód. de Bs. Aires, art. 194; cód. de San Luis, art. 241; cód. de Chile, art. 186; proyecto uruguayo, art. 270.

Art. 408. — Manual, t. 2, ps. 96, 126; comp. esp., art. 709; enj. esp., art. 572; cód. de Buenos Aires, art. 195; cód. de San Luis, art. 242; proyecto uruguayo, art. 271.

Art. 409. — Manual, t. 2, p. 93; comp. esp., art. 711; enj. esp., arts. 573 y 574; cód. austriaco, art. 143; cód. de Bs. Aires, art. 197; cód. de San Luis, art. 244; cód. de Chile, art. 191; proyecto uruguayo, art. 272.

Art. 410. — Comp. esp., art. 712; enj. esp., art. 577; cód. de Bs. Aires, art. 198; cód. de San Luis, art. 245.



TITULO XX

De los embargos (a)

ART. 411. — Junto con la orden de prisión preventiva, el juez decretará el embargo de bienes suficientes del procesado para garantizar la *pena pecuniaria* y la efectividad de sus responsabilidades civiles.

El procesado podrá sustituir este embargo por una caución personal o real.

ART. 412. — La fijación de la cantidad por la cual deberá trabarse el embargo será hecha por el juez en el mismo auto en que lo decreta.

ART. 413. — El embargo deberá hacerse sobre bienes señalados por el procesado, o en su defecto por su mujer, hijos u otras personas que se encuentren en su domicilio en el acto de practicarse la diligencia.

No señalando bienes el procesado o las personas indicadas por no encontrarse o negarse a hacerlo, se procederá a trabar embargo sobre bienes que se reputen de propiedad del primero y cuyo valor alcance a cubrir la cantidad determinada por el juez.

El embargo se hará en el orden y forma establecida en el código de procedimientos civiles, respecto de las ejecuciones.

ART. 414. — Cuando el alguacil o funcionario encargado de trabar el embargo, creyere que los bienes señalados no son suficientes, embargará además los que considere necesarios, sujetándose a lo prescripto en el artículo anterior.

ART. 415. — Si los bienes embargados fueren muebles, se entregarán en depósito, bajo inventario, por el encargado de hacer el embargo, al vecino que designare al efecto.

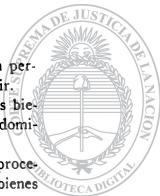
El depositario firmará la diligencia de recibo, obligándose a conservar los bienes a disposición del juez que conozca de la causa, y en caso contrario a pagar la cantidad (*para cuyo afian-*

Art. 411. — Manual, t. 1, p. 294; t. 2, ps. 43, 82, 237; comp. esp., art. 724; enj. esp., art. 589; cám. crim., t. 79, p. 426; julio de 1910, p. 867.

Art. 412. — Comp. esp., art. 724; enj. esp., art. 589.

Art. 413. — Comp. esp., arts. 730 y 731; enj. esp., arts. 597 y 598.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 43.



zamiento se hubiere hecho el embargo) que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pudiere incurrir.

El depositario podrá recoger y conservar en su poder los bienes embargados, o dejarlos, bajo su responsabilidad, en el domicilio del procesado.

ART. 416. — Verificado el embargo, se requerirá al procesado para que manifieste si opta porque se enajenen los bienes embargados o porque se conserven en depósito y administración.

Si optare por la enajenación, se procederá a la venta en remate, hasta cubrir la cantidad señalada, que se depositará en el banco nacional.

Si optare por el depósito y administración, cuando se trate de bienes muebles se nombrará por el juez un depositario administrador de responsabilidad, que recibirá los bienes bajo inventario y se obligará a rendir al juzgado cuenta justificada de sus gastos y productos cuando se le mande.

ART. 417. — Los bienes embargados se enajenarán aún contra la voluntad del procesado y la opinión del depositario administrador, siempre que los gastos de administración y conservación, excedan de los productos que dieren, a menos que el pago de dichos gastos se asegure por el procesado u otra persona a su nombre.

ART. 418. — El embargo de bienes inmuebles, no comprende el de sus frutos o rentas, salvo el caso en que el juez lo determine expresamente.

Este embargo deberá anotarse en (*el registro de hipotecas*) los registros respectivos.

ART. 419. — Cuando se trate embargo sobre sementeras o plantaciones, el juez designará la forma de su administración.

En todos los casos, el procesado tiene derecho a designar una persona de su confianza, como interventor.

ART. 420. — El juez ordenará que el administrador dé fianza del buen cumplimiento del cargo, cuando no fuera de notoria responsabilidad.

Art. 416. — Comp. esp., art. 734; enj. esp., art. 601.

Art. 417. — Comp. esp., art. 735; enj. esp., art. 602; cádm. crim., t. 96, p. 320.

Art. 418. — Comp. esp., arts. 736 y 737; enj. esp., arts. 603 y 604.

Art. 419. — Comp. esp., art. 738; enj. esp., art. 605.



ART. 421. — El administrador tendrá derecho a una retribución.

Para determinar esta retribución, se atenderá a la importancia de los bienes, a los cuidados y responsabilidades que la administración imponga y a la manera cómo haya sido desempeñado el encargo por el administrador.

Nunca podrá exceder, sin embargo, de un diez por ciento sobre el producto líquido de los bienes administrados.

ART. 422. — Si el embargo consistiere en pensiones o sueldos, se librará oficio a quien hubiere de satisfacerlos, para que retenga a disposición del juzgado la cuarta parte de lo que corresponde percibir.

ART. 423. — Todas las diligencias sobre fianzas y embargos se instruirán en pieza separada, *no admitiéndose las apelaciones que se interpongan sino en el efecto devolutivo.*

ART. 424.—*Las terceras que se deduzcan, serán sustanciadas en la forma que establece el código de procedimientos civiles.*

TITULO XXI

De la responsabilidad de terceras personas

ART. 425. — Los jueces decretarán el embargo de bienes pertenecientes a personas extrañas a la ejecución del delito, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

- 1º Que esas personas se encuentren sometidas a la responsabilidad civil del delito, con arreglo a disposiciones *(del código pena!)* legales.
- 2º Que la parte damnificada lo haya solicitado.

ART. 426. — Regirán, respecto de esta clase de embargos, las disposiciones del título anterior.

ART. 427. — Las personas a quienes pertenecieren los bienes embargados o que para libertarse del embargo hubieren prestado caución, serán oídas, aún durante el sumario, sobre las ex-

Art. 421. — Comp. esp., art. 740; enj. esp., art. 607.

Art. 424. — Manual, t. 2, p. 60.

Art. 425. — Manual, t. 2, ps. 43, 238; comp. esp., art. 786; enj. esp., art. 615.

Art. 427. — Comp. esp., art. 786; enj. esp., art. 616.



cepciones o defensas que alegaren para demostrar su irresponsabilidad.

ART. 428. — Este incidente, como todos los que se refieren a bienes afectados o comprometidos por el embargo, correrá por cuerda separada y los autos que en él se dictasen serán solo apelables en el efecto devolutivo.

TITULO XXII

De la conclusión del sumario y del sobreseimiento

CAPITULO I

De la conclusión del sumario

ART. 429. — Practicadas las diligencias que el juez sumariante haya creído necesarias para la averiguación del hecho punible y de sus autores, cómplices y encubridores, dictará un auto declarando cerrado el sumario, y lo elevará *bajo recibo* al juez de sentencia, cuando no fuere el mismo, con todas las piezas de convicción.

ART. 430. — Si en cualquier estado del sumario, resultare que el hecho a que se refiere solo reviste el carácter de un delito correccional, el juez sumariante ordenará que el proceso con los demás antecedentes sea pasado al juez competente para el conocimiento de esta especie de causas.

ART. 431. — Del auto mandando remitir el proceso al juez correccional, podrá apelarse por el ministerio fiscal o por el querellante particular.

El recurso será admitido en ambos efectos, pero solo en relación.

ART. 429. — Manual, t. 2, ps. 116, 159; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 952 y 953; enj. esp., art. 622; cód. de B. Aires, art. 209; cám. crim., t. 93, p. 294.

ART. 430. — Manual, t. 2, p. 159; comp. esp., art. 799; enj. esp., art. 624; cám. crim., t. 78, p. 181.

ART. 431. — Manual, t. 2, p. 159.



CAPITULO II

Del sobreseimiento (a)

ART. 432. — En cualquier estado del sumario, el juez podrá decretar el sobreseimiento.

ART. 433. — El sobreseimiento será definitivo o provisional, total o parcial.

ART. 434. — Será definitivo:

- 1º Cuando resulte con evidencia que el delito no ha sido perpetrado.
- 2º Cuando el hecho probado no constituyere delito.
- 3º Cuando aparecieren de un modo indudable exentos de responsabilidad criminal los procesados.

ART. 435. — Será provisional:

- 1º Cuando los medios de justificación acumulados en el proceso, no sean suficientes para demostrar la perpetración del delito.
- 2º Cuando comprobado el hecho criminal, no aparezcan indicaciones o indicios bastantes para determinar a sus autores, cómplices o encubridores.

ART. 436. — El sobreseimiento definitivo es irrevocable, dejando cerrado el juicio definitivamente, en los dos primeros casos del artículo 434, de una manera absoluta, y en el tercer caso, respecto de los procesados o procesado a cuyo favor se decretare.

Art. 432. — Manual, t. 2, p. 143; cádm. crim., t. 61, p. 40; diciembre de 1913, p. 88.

Art. 433. — Comp. esp., art. 793; enj. esp., art. 634; cádm. crim., t. 30, p. 106.

Art. 434. — Manual, t. 2, p. 140; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 561; t. 2, ps. 143 y 195; com. esp., art. 794; enj. esp., art. 637; cód. de Bs. Aires, art. 378; cód. de San Luis, art. 390; proyecto uruguayo, art. 327; cód. de Chile, arts. 438 y 469; sup. cort. nac. t. 65, ps. 348 y 377; t. 56, p. 50; t. 57, p. 226; t. 61, p. 21; t. 96, p. 430; cádm. crim. t. 1, p. 384; t. 78, p. 420; t. 95, p. 72; t. I, p. 384; julio de 1913, p. 28; ley 15, tít. 22, part. 3.ª, y 23, tít. 1, part. 7.ª

Art. 435. — Manual, t. 2, p. 145; Jurisprudencia Argentina, t. 42, ps. 201 y 329; comp. esp., art. 801; enj. esp., art. 641; cádm. crim., t. 25, p. 112; abril de 1914, p. 32.

Art. 436. — Cód. de Bs. Aires, art. 382; cód. de San Luis, art. 394; cód. de Chile, art. 448; proyecto belga, art. 94; sup. cort. nac., t. 65, p. 172.

(*) Véase «Manuals», t. 2, p. 143.



El sobreseimiento provisional, deja el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes, salvo el caso de prescripción.

ART. 437. — En los casos de sobreseimiento definitivo, deberá hacerse la declaración de que la formación del sumario, no perjudica el buen nombre y honor de los procesados.

ART. 438. — El sobreseimiento es total, cuando se decreta para todos los procesados.

Es parcial, cuando se limita a alguno o algunos de los procesados.

ART. 439. — Si procediere el sobreseimiento parcial en la causa, resultando completa inculpabilidad de un procesado, se sobreseerá (*libremente*) *definitivamente* respecto de éste.

ART. 440. — Decretado el sobreseimiento total, se mandará que se archiven los autos y las piezas de convicción que no tuvieren dueño conocido, después de haberse practicado las diligencias necesarias para la ejecución de lo mandado.

ART. 441. — *Antes de decretarse el sobreseimiento serán oídos el acusador particular y el ministerio fiscal, quienes deberán expedirse dentro de tercero día.*

El auto que ordene el sobreseimiento será apelable en relación. El término para apelar será el de tres días.

ART. 442. — *El sumario no deberá durar más de treinta días en la capital y sesenta en las demás secciones, no computándose en dichos términos las demoras por articulaciones maliciosas del procesado o por diligenciamiento de oficios o exhortos, cuando el retardo fuese independiente de la voluntad del juzgado.*

Transcurridos dichos términos, el juez sobreseerá o elevará la causa a plenario, conforme a las disposiciones de este código.

Art. 437. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 143; comp. esp., art. 795; enj. esp., art. 638; cód. de Bs. Aires, art. 383; cód. de San Luis, art. 395; cádm. crim., noviembre de 1912, p. 40.

Art. 438. — Comp. esp., art. 802; enj. esp., art. 634.

Art. 441. — Comp. esp., art. 803; cód. de Bs. Aires, art. 385; cód. de San Luis, art. 398; cód. uruguayo, art. 333; sup. cort. nac. t. 59, p. 210; cádm. crim. t. 31, p. 214; t. 93, p. 84; abril de 1910, p. 345; junio de 1912, p. 57.



TÍTULO XXIII

De los artículos de previo y especial pronunciamiento (a)

ART. 443. — Las únicas excepciones que podrán oponerse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, serán las siguientes:

- 1º Falta de jurisdicción.
- 2º Falta de personalidad en el acusador o sus representantes.
- 3º Falta de acción en el mismo.
- 4º Cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento.
- 5º Amnistía o indulto.
- 6º Litis pendencia.
- 7º Condonación o perdón del ofendido en los delitos, que no dan lugar a la acción pública.
- 8º Prescripción de la acción o de la pena.

ART. 444. — Las excepciones expresadas en el artículo anterior, podrán oponerse en cualquier estado del sumario.

ART. 445. — Si concurrieren dos o más de las excepciones mencionadas, deberán proponerse conjuntamente.

Las que no se hubiesen deducido como previas, solo podrán alegarse al contestar la acusación.

ART. 446. — El escrito de oposición de excepciones, deberá acompañarse con los documentos justificativos de los hechos que las fundaren. Si no estuviesen a disposición del procesado, habrá de designarse, clara y determinadamente, el archivo, oficina o lugar donde se encuentren, salvo que manifieste ignorar por el momento estos antecedentes y ofrezca producirlos durante el término de prueba.

Art. 443. — Comp. esp., art. 807; enj. esp., art. 666; cód. uruguayo, art. 165; mayo de 1912, p. 78.

Art. 444. — Comp. esp., art. 808; enj. esp., art. 667; cód. uruguayo, art. 166.

Art. 446. — Manual, t. 2, p. 149.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 147.



ART. 447. — Opuestas las excepciones sin presentarse los documentos justificativos, o sin hacerse la designación o manifestación anteriormente expresadas, no podrá más tarde admitirse documento alguno.

Sin embargo, podrán admitirse si fueran de fecha posterior, o de fecha anterior bajo juramento de haber recién llegado a su noticia.

ART. 448. — Del escrito en que se propongan excepciones previas, se correrá vista al ministerio fiscal y acusador particular, quienes deberán expedirse dentro del término de tres días.

ART. 449. — Si las excepciones opuestas dieran solo lugar a una cuestión de derecho, el juez sin otra tramitación, resolverá lo que legalmente corresponda.

ART. 450. — En el caso en que esas excepciones se funden en hechos que no estén justificados en el proceso, se recibirá el incidente a prueba por un término que no podrá exceder de la mitad del señalado en este código como máximo en el juicio plenario.

ART. 451. — Vencido el término de prueba, el juez mandará agregar al proceso las que se hubieren producido previo certificado del secretario, y convocará a las partes a una audiencia verbal.

ART. 452. — Realizada esta con los que concurrieren, aún cuando fuere solo una de ellas, se hará constar sus exposiciones o alegatos en acta levantada por el secretario y firmada por los concurrentes.

Enseguida se pondrá la causa al despacho, y el juez deberá resolver el incidente dentro de los tres días siguientes al de la vista.

ART. 453. — Cuando una de las excepciones opuestas fuera la de declinatoria de jurisdicción, el juez la resolverá antes que las demás.

Art. 447. — Manual, t. 2, p. 149.

Art. 448. — Manual, t. 2, p. 149.

Art. 449. — Manual, t. 2, p. 149; ley 86, tít. 15, lib. 2, recopilación de Indias.

Art. 450. — Manual, t. 2, p. 149.

Art. 451. — Manual, t. 2, p. 149.

Art. 452. — Manual, t. 2, p. 149; comp. esp., art. 816; enj. esp., art. 674.

Art. 453. — Manual, t. 2, p. 149; comp. esp., art. 817; enj. esp., art. 674.



En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones dilatorias.

Si se considerase incompetente, mandará remitir el proceso al juez a cuya jurisdicción corresponda, y se abstendrá de resolver sobre las otras.

ART. 454. — Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones perentorias enumeradas en el artículo 443, se sobreseerá definitivamente, mandándose que se ponga en libertad al procesado o procesados que no estuviesen presos por otras causas.

ART. 455. — El auto resolviendo el artículo será apelable en relación dentro de tercero día.

ART. 456. — El incidente a que dé lugar la oposición de excepciones se sustanciará y fallará en juicio separado, sin perjuicio de continuarse las diligencias del sumario.

En el caso en que las excepciones se opusiesen después de concluido el sumario, se suspenderá la sustanciación de la causa principal. Exceptúase el caso en que fuesen varios los procesados y sólo alguno o algunos dedujesen excepciones, en cuyo caso se formará pieza separada en que se discutirán y resolverán, continuando la causa principal con los demás procesados.

Art. 454. — Comp. esp., art. 818; enj. esp., art. 675.

Art. 456. — Manual, t. 2, p. 148.

LIBRO TERCERO

Del plenario (a)

TÍTULO I

De la elevación de la causa a plenario, discusión y prueba

CAPÍTULO I

De la elevación de la causa a plenario y su discusión



ART. 457. — *Recibido el proceso, el juez de sentencia correrá vista de lo actuado por seis días sucesivos al ministerio fiscal y al acusador particular, para que se expidan sobre el mérito del sumario.*

ART. 458. — El juez, a petición del ministerio fiscal o del querellante particular, ordenará que se pongan a su disposición en el modo y lugar que considere conveniente, la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción a efecto de que sean examinadas.

ART. 459. — El proceso original no pasará al acusador particular.

Este deberá, examinarlo en la secretaría del juzgado. Sin embargo, el juez podrá, según la gravedad de la causa y el volumen de los autos, permitir que estos se entreguen al abogado del acusador, bajo su responsabilidad, por el término correspondiente.

ART. 460. — Cuando el ministerio fiscal y el acusador parti-

Art. 457. — Manual, t. 2, p. 157, 161, 250; enj. esp., art. 626.

Art. 458. — Comp. esp., art. 629.

Art. 460. — Manual, t. 2, p. 49, 50, 238; Jurisprudencia Argentina, t. I, ps. 561 y 952; cód. de Bs. Aires, art. 212; cód. de San Luis, art. 264; sup. cort. nac., t. 36, p. 226; t. 52, p. 126; t. 57, p. 395; cásm. crim., t. 57, p. 277; t. 78, p. 398; t. V, p. 130; abril de 1910, p. 276; setiembre de 1910, p. 1272.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 169.



cular opinaren que la causa no debe pasar al estado de plenario, el juez, si estuviere de acuerdo con sus conclusiones, decretará el sobreseimiento en la forma que corresponda.

Si el juez, por el contrario, creyere que hay mérito bastante para llevar adelante los procedimientos, mandará pasar (*) la causa al procurador general de la corte, si fuere el juez de sección de la capital, y al fiscal de la cámara de apelaciones, si fuere de los del crimen o de lo correccional del mismo distrito, a fin de que dictaminen sobre la procedencia o improcedencia de la elevación de la causa al estado de plenario.

Los jueces de las otras secciones (*federales*) judiciales en los mismos casos, pasarán la causa a un fiscal especial, que nombrarán al efecto.

ART. 461. — Cuando el procurador general de la corte, el fiscal de la cámara y el fiscal especial, se manifestasen de acuerdo con la opinión del funcionario del ministerio fiscal que emitió primero su juicio, el sobreseimiento será obligatorio para el juez.

En el caso contrario, el juez ordenará que se formule la acusación en el término de seis días.

ART. 462. — En el caso previsto en el artículo anterior, el juez de la causa, deberá hacer reemplazar al agente fiscal o fiscal especial que hubiere pedido el sobreseimiento en la forma establecida para los casos de inhabilidad o impedimento del ministerio fiscal.

ART. 463. — Presentada la acusación por el acusador particular, si lo hubiere, y por el ministerio fiscal, se conferirá traslado al procesado o procesados o sus defensores y a las personas responsables civilmente, para que presenten sucesivamente sus defensas dentro del mismo término concedido a cada uno de los acusadores, si aquellos no tuviesen un mismo defensor.

Art. 461. — Manual, t. 1, p. 224; t. 2, p. 49; cód. de Bs. Aires, art. 214; cód. de San Luis, art. 256; proyecto uruguayo, art. 332; sup. cort. nac., t. 36, p. 226; t. 52, p. 226; cám. crim., t. 57, p. 277; t. 78, p. 398; julio de 1913, p. 64.

Art. 462. — Cám. crim., t. 41, p. 279; t. 55, p. 179.

Art. 463. — Manual, t. 2, p. 157; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 941; t. 2, p. 144; cód. de Bs. Aires, art. 220; cód. de San Luis, art. 261; cód. austriaco, art. 219; cód. de Chile, art. 460; proyecto uruguayo, art. 346; Goyena, op. cit., t. 5, p. 577; Blackstone, «Code criminal d'Angleterre», t. 2, p. 120; sup. cort. nac., t. 60, p. 30; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 115, serie 8; Fournier, op. cit., p. XCV.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



ART. 464. — El proceso será examinado en la secretaría por el procesado o su defensor, en su caso, y por las demás personas responsables. El defensor del procesado y los abogados de estos últimos, podrán, sin embargo, solicitar la entrega de los autos en la forma determinada en el artículo 459.

ART. 465. — Si cualquiera de los interesados o el ministerio fiscal no devolviera el proceso dentro de los términos señalados, el secretario, luego de vencido, dará cuenta al juzgado y éste ordenará su entrega inmediata.

Esa entrega podrá exigirse por apremio personal, en el caso de que no se cumpliera la orden del juzgado, (*sin causa justificada*).

ART. 466. — Vencido el término para la presentación de la defensa, el secretario pondrá el proceso al despacho para proveer lo que corresponda.

CAPITULO II

De la prueba (a)

ART. 467. — El juez ordenará en todos los casos la recepción de la causa a prueba, a menos que las partes la renuncien expresamente, lo que podrán hacer al expedirse en la acusación y la defensa.

ART. 468. — En todos los casos, incumbe a la acusación la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado.

ART. 469. — Rigen respecto de los medios de prueba en el plenario, las disposiciones de los títulos respectivos.

Art. 464. — Cód. de Bs. Aires, art. 222; cód. de San Luis, art. 262.

Art. 467. — Manual, t. 2, p. 158; comp. esp., arts. 824 y 826.

Art. 468. — Manual, t. 2, p. 163; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 940; t. 2, p. 975; cód. uruguayo, art. 216; cód. de Bs. Aires, art. 224; cód. de San Luis, art. 264; Garraud, «Instruction criminelle», t. 1, número 230; Framarino, «Lógica de las pruebas en materia criminal», t. 1, ps. 171 y 172; cárm. crim., t. 4, p. 96; t. 23, p. 396; t. 24, p. 205; t. IV, p. 179; agosto de 1912, p. 326; junio de 1913, p. 211; Garraud, op. cit., t. 5, núm. 23; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, p. 90 y 553, serie 8.

Art. 469. — Manual, t. 2, p. 162, 163.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 162.



ART. 470. — El acusador no podrá dirigir posiciones al acusado para obtener su confesión; pero éste podrá hacerlo respecto del acusado particular, desde que la causa sea recibida a prueba, hasta la citación para sentencia.

ART. 471. — El término ordinario de prueba no excederá de treinta días, si ella hubiere de producirse en el distrito de la capital, o dentro del municipio o pueblo donde tenga su asiento el juzgado, aumentándose un día por cada siete leguas, si hubiese de darse fuera de él, pero en el territorio de la república.

ART. 472. — Cuando la prueba haya de rendirse fuera de la república, se dará el término extraordinario, que el juez considere suficiente, atendidas las distancias y la facilidad de (*las comunicaciones*) *la viabilidad*.

ART. 473. — Para obtener el término extraordinario se deberá:

- 1º Designar el lugar donde residen los testigos y nombrarlos, o los documentos, cuyas fechas o contenido, registro o archivo deberán indicarse siendo posible.
- 2º Pedir ese término dentro de diez días contados desde la recepción de la causa a prueba.

ART. 474. — Del escrito en que se pida el término extraordinario, se dará traslado a la otra parte por tres días improrrogables, transcurridos los cuales se resolverá el artículo.

Esta resolución será solo apelable en relación cuando se deniegue el término extraordinario.

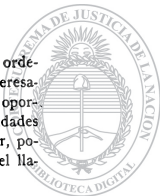
ART. 475. — El término extraordinario correrá conjuntamente con el ordinario, y ni uno ni otro podrán suspenderse, sino mediante alguna causa que haga imposible la ejecución de la prueba propuesta.

ART. 476. — La parte que dejare de producir la prueba indicada fuera del territorio nacional, deberá abonar todas las costas que por su causa se devengaren, incluso los gastos en que incurriere la otra parte, para hacerse representar donde hubieren de practicarse las diligencias.

Art. 470. — Manual, t. 2, p. 99; cárm. crim., t. 44, p. 172. En contra, t. 53, p. 291; t. 46, p. 136; t. 65, p. 217.

Art. 472. — Manual, t. 2, p. 162; cód. de Bs. Aires, art. 225; cód. de San Luis, art. 265; sup. cort. nac., t. 62, p. 90; t. 79, p. 424.

Art. 473. — Cód. de Bs. Aires, art. 226; cód. de San Luis, art. 266; sup. cort. nac., t. 62, p. 90.



ART. 477. — Toda diligencia de prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término concedido. A los interesados incumbe urgir para que tales diligencias sean practicadas oportunamente; pero si no lo fueren, por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas o por caso fortuito o fuerza mayor, podrán los interesados exigir que se practiquen hasta antes del llamamiento de autos.

ART. 478. — El decreto en que se ordenen diligencias de pruebas, será notificado dentro de veinte y cuatro horas.

ART. 479. — Las actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea incompatible con las buenas costumbres, en cuyo caso el juez deberá declararlo así por medio de un auto, y ordenar la reserva conveniente.

ART. 480. — El juez asistirá a las diligencias que deban practicarse fuera del juzgado, pero dentro de la ciudad o del pueblo donde tenga su asiento. En los tribunales colegiados la diligencia será practicada por uno de sus miembros.

ART. 481. — Cuando la prueba haya de practicarse fuera del lugar del asiento del juzgado, las órdenes o exhortos serán librados dentro de veinte y cuatro horas a más tardar.

ART. 482. — Para toda diligencia de prueba se señalará el día en que debe tener lugar, citándose al efecto a todos los interesados en el juicio, con un día al menos de anticipación.

ART. 483. — La prueba testimonial será ofrecida necesariamente dentro de los primeros diez días del término de prueba, a cuyo efecto la parte a quien interese presentará una lista de los testigos, con expresión de sus nombres, profesión y domicilio, y el interrogatorio a cuyo tenor hayan de ser aquellos examinados.

ART. 477. — *Manual*, t. 2, p. 163; *cód. de Bs. Aires*, art. 228; *cód. de San Luis*, art. 269; *sup. cort. nac.*, t. 47, p. 356; t. 53, p. 260; t. 75, p. 219; *cám. crim.*, t. 98, p. 100.

ART. 478. — *Cód. de Bs. Aires*, art. 230; *cód. de San Luis*, art. 271.

ART. 479. — *Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 143; *cód. de Bs. Aires*, art. 231; *cód. de San Luis*, art. 272.

ART. 480. — *Cód. de Bs. Aires*, art. 232; *cód. de San Luis*, art. 273.

ART. 481. — *Cód. de Bs. Aires*, art. 233; *cód. de San Luis*, art. 274.

ART. 482. — *Cód. de Bs. Aires*, art. 234; *cód. de San Luis*, art. 275; *cám. crim.*, t. 72, p. 112.

ART. 483. — *Manual*, t. 2, p. 163, 250; *sup. cort. nac.*, t. 66, p. 352; t. 67, p. 371; *cám. crim.*, t. 35, p. 237.

La recepción de la prueba de testigos, tendrá lugar después del término señalado para su ofrecimiento, en el día y hora que el juez determine.

TITULO II

De la ratificación de las declaraciones de los testigos del sumario (a)

ART. 484. — Durante el término de prueba, el juez ordenará la ratificación de los testigos del sumario, cuyas declaraciones fueran observadas por alguna de las partes, o cuando lo considere necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Los acusadores particulares o sus representantes, los procesados y sus defensores y el ministerio fiscal, pueden concurrir a la ratificación de los testigos y hacerles por intermedio del juez las preguntas que estimaren pertinentes.

ART. 485. — En el caso de que alguno de los testigos examinados en el sumario haya muerto, o esté ausente en términos que sea difícil su ratificación y alguna de las partes no se hubiere conformado con su declaración, deberá practicarse de oficio la información de abono la que consiste en la justificación de dos o más personas de probidad, las cuales depondrán sobre el concepto de veracidad que les merecía el testigo muerto o ausente.

Art. 484. — Manual, t. 2, p. 107, 163; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 536; comp. esp., arts. 829 y 830; cód. de Bs. Aires, art. 242; cód. de San Luis, art. 278; Escribano, «Diccionario de legislación y jurisprudencia», verbo juicio criminal, párrafo XC; Gutiérrez, «Práctica criminal», p. 270; en contra, recopilación castellana, ley 15, tít. 7, libro 2; cádm. crim., t. 94, p. 84.

Art. 485. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 535 y 536; comp. esp., art. 831; cód. de Bs. Aires, art. 243; cód. de San Luis, art. 279; cód. de Chile, art. 498; Escribano, Ratificación de testigos y juicio criminal, párrafo XC; sup. cort. nac., t. 101, p. 322; sup. cort. Bs. Aires, t. 4, ps. 134 y 511, serie 8.

(a) Véase «Manual», t. 2, p. 114.





TITULO III

De las tachas (a)

ART. 486. — Los testigos podrán ser tachados cuando concurra cualquiera de las circunstancias mencionadas en el título noveno del libro II.

ART. 487. — Las tachas serán alegadas y probadas dentro del término de prueba señalado para lo principal.

Si se dedujeren contra testigos que hubieren de examinarse fuera del lugar del juicio, ofreciendo probarlas donde la diligencia tenga lugar, podrán insertarse en las órdenes y despachos los interrogatorios correspondientes.

ART. 488. — La prueba testimonial de tachas será ofrecida en un solo acto, designando el nombre y calidad de los testigos (*con arreglo al artículo 323*).

ART. 489. — Las pruebas de las tachas serán consideradas en la sentencia juntamente con lo principal, apreciándose con arreglo a lo dispuesto en el artículo 305.

TITULO IV

De la conclusión de la causa para definitiva

ART. 490. — Vencido el término de prueba, el secretario pondrá la nota correspondiente. Desde este momento el proceso se conservará en la secretaría por seis días, notificándose a las partes para que tanto el acusador o acusadores, como el procesado o su defensor puedan instruirse de las pruebas producidas, que se agregarán a los autos y foliarán.

ART. 491. — Al día siguiente de vencidos los seis días de que

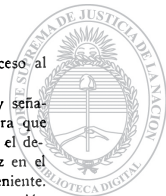
Art. 486. — Manual, t. 2, p. 114; cód. de Bs. Aires, art. 244; cód. de San Luis, art. 280; cód. de Chile, art. 520; cá. crim., t. 3, p. 572; t. 5, p. 525; marzo de 1912, p. 247.

Art. 487. — Cód. de Bs. Aires, art. 245; cód. de San Luis, art. 281; cá. crim., t. 28, p. 222.

Art. 489. — Cód. de Bs. Aires, art. 427; cód. de San Luis, art. 283; cód. de Chile, art. 524.

Art. 490. — Manual, t. 2, p. 164; comp. esp., art. 834; cód. de Bs. Aires, art. 258; cód. de San Luis, art. 295; sup. cort. nac., t. 47, p. 359.

(a) Véase «Manual», t. 2, p. 114.



habla el artículo precedente, el secretario pondrá el proceso al despacho con la correspondiente nota.

ART. 492. — El juez dictará la providencia de autos y señalará un día, con el intervalo de cinco cuando menos, para que informen ante él in voce, el acusador particular, el fiscal y el defensor del procesado, los que podrán hacer entrega al juez en el mismo acto, de los escritos o apuntes que juzgasen conveniente.

ART. 493. — Desde entonces quedará cerrada toda discusión en la misma instancia y no podrá presentarse más escritos, ni producirse más prueba, salvo la que el juez creyese oportuno para mejor proveer.

ART. 494. — Terminada esta audiencia, el juez examinará el proceso, y pronunciará su sentencia dentro de veinte días.

TÍTULO V

De la sentencia (a)

ART. 495. — Los jueces dictarán sus sentencias con sujeción a las siguientes reglas:

Primera: Se principiará expresando el lugar y la fecha en que se dictare el fallo, los hechos que hubieren dado lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los hubiere; y de los procesados, consignando los sobrenombres o apodos con que estos sean conocidos, su estado, nacionalidad, domicilio, oficio o profesión, y (*en su defecto*) todas las demás circunstancias con que hubiesen figurado en la causa.

Segunda: Se consignarán los hechos que se consideren probados y que estuviesen relacionados con el punto o puntos que *de* abrazar el fallo.

Tercera: Se expresarán las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa.

ART. 493. — Cód. de Bs. Aires, art. 259; cód. de San Luis, art. 296; Garraud, op. cit., t. 1, p. 13; cádm. crim., t. 98, p. 326; t. V, p. 190.

ART. 494. — Manual, t. 1, p. 249.

ART. 495. — Manual, t. 2, p. 164, 251; Jurisprudencia Argentina, t. 2, ps. 32, 190; comp. esp., art. 839; sup. cort. nac., t. 98, p. 413; t. 104, p. 377; cádm. crim., t. 64, p. 9; mayo de 1911, p. 318; marzo de 1914, p. 144.

(*) Véase más adelante, cap. XXXIII.



Cuarta: Se consignarán en párrafos, también numerados, los puntos siguientes:

- 1º La calificación legal de los hechos que se hubieren estimado probados.
- 2º La calificación legal de la participación que en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los procesados.
- 3º La calificación legal de las circunstancias atenuantes y agravantes.
- 4º La calificación legal de los hechos probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los procesados, o las personas sujetas a ella, a quienes se hubiere oído en la causa, y la que corresponda a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas y a la declaración de querrela calumniosa.
- 5º En seguida, se citarán las disposiciones legales que se consideren aplicables y se pronunciará el fallo condenando o absolviendo al procesado o procesados por el delito o delitos que hayan sido materia del proceso, imponiendo la pena que corresponda.

ART. 496. — La sentencia resolverá igualmente:

- 1º Todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil, que hubieren sido objeto del juicio.
- 2º Al pago de las costas procesales.
- 3º La calificación del carácter de la acusación, declarándola calumniosa, si lo hubiere pedido el acusado.

ART. 497. — La absolución se entenderá libre en todos los casos.

Queda absolutamente prohibida la simple absolución de la instancia.

Art. 496. — Manual, t. 1, p. 294; t. 2, p. 78; Jurisprudencia Argentina, t. 2, ps. 32, 736; comp. esp., art. 839; cdm. crim., t. 43, p. 167.

Art. 497. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 935, 940 y 942; comp. esp., art. 840; cód. de Bs. Alres, art. 266; cód. de San Luis, art. 303; proyecto uruguayo, art. 408, inc. 5.º; cód. de Chile, art. 529; ley 9, tít. 22, part. 3.º; leyes 4, tít. 30 y 26, tít. 1, part. 7.º; Gregorio López, glosa número 9, a la ley 26, tít. 1, part. 7.º; sup. cort. nac., t. 49, p. 152; t. 61, p. 362; t. 112, p. 388.



TITULO VI

De los recursos en general (a)

CAPITULO I

Del recurso de reposición

ART. 498. — El recurso de reposición tiene lugar contra los autos interlocutorios, a efecto de que el mismo juez que los haya dictado, los revoque por contrario imperio.

ART. 499. — Debe interponerse este recurso dentro de tercero día, resolviéndolo el juez sin substanciación alguna.

ART. 500. — La resolución que recaiga hará ejecutoria *para el recurrente* a menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación en subsidio, y la providencia reclamada reuniera las condiciones establecidas en el artículo siguiente, para que la interlocutoria sea apelable.

CAPITULO II

Del recurso de apelación

ART. 501. — El recurso de apelación solo se otorgará de las sentencias definitivas y de las interlocutorias que decidan algún artículo o causen gravámen irreparable (*por aquellas*).

ART. 502. — El término para apelar, no habiendo disposición expresa en contrario, para casos especiales, será el de cinco días.

Art. 498. — Cód. de Bs. Aires, art. 290; cód. de San Luis, art. 309; cód. de Chile, art. 78, inc. 1.º; sup. cort. nac., t. 63, p. 111.

Art. 499. — Cód. de Bs. Aires, art. 291; cód. de San Luis, art. 310; cód. de Chile, art. 78, inc. 2.º

Art. 500. — Cód. de Bs. Aires, art. 292; cód. de San Luis, art. 311; cód. de Chile, art. 78, inc. 3.º

Art. 501. — Cód. de Bs. Aires, art. 295; cód. de San Luis, art. 314; cód. de Chile, art. 76; proyecto belga, arts. 113 y 114; sup. cort. nac., t. 42, p. 160; t. 48, ps. 41 y 524; t. 46, ps. 51, 97 y 128; t. 53, p. 68; t. 54, p. 467; t. 56, p. 408; t. 75, p. 153; t. 78, p. 444; cádm. crim., t. 26, p. 155; t. 32, p. 371; t. 78, p. 168; t. 98, p. 150; junio de 1913, p. 180.

Art. 502. — Cód. de Bs. Aires, art. 296; cód. de San Luis, art. 315; cód. de Chile, art. 77; sup. cort. nac., t. 69, p. 280.

(a) Véase «Manual», t. 1, p. 36, y más adelante, cap. XXXV.



ART. 503. — *La apelación podrá deducirse por diligencia o por escrito. En este último caso el escrito de apelación deberá limitarse a la mera interposición del recurso, salvo que fuese conjuntamente deducido con el de reposición o con el de nulidad, y si esta regla fuese infringida, se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario pondrá en autos, determinando el recurso y la fecha de su interposición.*

El juez proveerá lo que corresponda sin más trámite.

ART. 504. — *La apelación de sentencia definitiva se otorga libremente y en ambos efectos, a no ser que el interesado pida que se le conceda solo en relación. Si la sentencia fuese absoluta, el juez sin perjuicio del recurso, concederá la libertad bajo caución con audiencia fiscal.*

ART. 505. — *La de autos interlocutorios se concederá en un solo efecto, a excepción de los casos en que, por disposición de este código, deba otorgarse en ambos.*

ART. 506. — *Cuando se otorgue el recurso en ambos efectos, por la misma diligencia se mandarán remitir los autos originales a la suprema corte o cámara de apelaciones, según corresponda.*

La remisión se hará de oficio, por el primer correo o a lo más por el segundo siguiente a la apelación, bajo la responsabilidad del juez tratándose de sentencias expedidas por los jueces que funcionan fuera de la capital.

Tratándose de las sentencias de los jueces de la capital, la remisión se efectuará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación; pasando el actuario el expediente al secretario del tribunal que haya de conocer del recurso. En ningún caso la falta de sellos será causa para demorar la remisión de los autos.

ART. 507. — *Si solo se concediere la apelación en el efecto devolutivo, se mandará sacar testimonio de lo que el apelante señale.*

ART. 503. — Cód. de Bs. Aires, art. 297; cód. de San Luis, art. 316; cód. de Chile, art. 538.

ART. 504. — Manual, t. 2, ps. 174 y 250; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 501; cód. de Bs. Aires, art. 298; cód. de San Luis, art. 317; sup. cort. nac., t. 49, p. 47; t. 70, p. 337; cám. crim., t. 17, p. 419; t. 58, p. 375; t. 83, p. 128; diciembre de 1912, ps. 68 y 120; en contra, julio de 1913, p. 98; septiembre de 1913, p. 98.

ART. 505. — Cám. crim., t. 17, p. 379; t. 26, p. 155; t. 52, p. 371; t. 96, p. 177.

ART. 506. — Cód. de Bs. Aires, art. 299; cód. de San Luis, art. 318; proyecto belga, art. 115.



lare de los autos, con las adiciones que el colitigante hiciere y las que el juez estimare necesarias, y ese testimonio será remitido al superior *dentro de tercero día*.

ART. 508. — Transcurridos los términos expresados sin interponerse la apelación, quedarán consentidas las sentencias, salvo que fuese el caso de consulta, en que el juez remitirá de oficio los autos al superior en los términos señalados en el artículo 506.

CAPITULO III

Del recurso de nulidad

ART. 509. — El recurso de nulidad solo tiene lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas sustanciales prescriptas a su respecto por este código, o por omisión de formas esenciales del procedimiento, o por contener éste defectos de los que, por expresa disposición del derecho, anulen las actuaciones.

ART. 510. — Solo podrá deducirse el recurso de nulidad contra las resoluciones de que pueda interponerse apelación, deduciéndole conjuntamente con esta, y en el término para ella concedido.

ART. 511. — Si el procedimiento estuviese arreglado a derecho y la nulidad consistiese en la forma de la sentencia, el tribunal así lo declarará, y mandará pasar la causa a otro juez de 1ª instancia para que sentencie.

ART. 512. — Cuando la nulidad provenga de vicio en el procedimiento, se declarará por nulo todo lo obrado que se relacione con la actuación nula, y se devolverán los autos al juez para que volviendo a sustanciar el proceso, desde aquella misma actuación en adelante, pronuncie sentencia, con arreglo a derecho.

Art. 509. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 313, 536, 568 y 953; cód. de Bs. Aires, art. 301; proyecto uruguayo nota al art. 471; sup. cort. nac., t. 11, p. 251; t. 12, p. 170; t. 19, ps. 163 y 284; t. 41, p. 368; t. 51, p. 260; t. 61, p. 352; t. 62, p. 200; t. 96, p. 189; t. 97, p. 76; t. 98, p. 195; t. 102, p. 43; t. 113, ps. 39 y 178; cám. crim., t. 14, p. 343; t. 18, p. 276; t. 60, p. 160; t. 61, ps. 40 y 51; septiembre de 1911, p. 218; junio de 1913, ps. 41 y 180; mayo de 1914, p. 50; sup. cort. de Bs. Aires, t. 5, ps. 68 y 198; t. 6, p. 209; t. 8, p. 144; t. 9, p. 225, ser. 1.

Art. 510. — Cód. de Bs. Aires, art. 302; cód. de San Luis, art. 321; sup. cort. nac., t. 48, p. 108.

Art. 511. — Jurisprudencia Argentina, t. 2., ps. 32 y 189; cám. crim., t. 98, p. 324.



ART. 513. — La nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada, sin embargo, siempre que no se reclame la reparación de aquellos en la misma instancia en que se hayan cometido.

CAPITULO IV

Del recurso de queja

ART. 514. — El recurso de queja podrá interponerse:

- 1º Cuando el juez deniegue los recursos de apelación y nulidad, o solo el primero debiendo acordarlos.
- 2º Cuando deje transcurrir los términos legales sin pronunciar la resolución que corresponda.

ART. 515. — En los casos del inciso 1º del artículo anterior, la parte que se sintiere agraviada, podrá ocurrir directamente en queja al superior, pidiendo que se otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión de los autos.

ART. 516. — Esta queja deberá interponerse dentro de tres días después de notificada la denegación, aumentándose con un día más por cada siete leguas, si se ocurriese de providencias de los jueces de fuera de la capital.

ART. 517. — La queja por retardo de justicia no podrá deducirse ante el superior, sin que previamente los interesados hayan requerido del juez de la causa el despacho, y este dejare por cinco días sin expedir resolución.

Art. 513. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 526; cód. de Bs. Aires, art. 304; cód. de San Luis, art. 323; proyecto uruguayo, art. 471 y su nota, in fine; sup. cort. nac., t. 53, p. 155.

Art. 514. — Cód. de Bs. Aires, art. 306; cód. de San Luis, art. 325; sup. cort. nac., t. 97, p. 76; t. 103, p. 233.

Art. 515. — Cód. de Bs. Aires, art. 307; cód. de San Luis, art. 326; cód. de Chile, art. 84; sup. cort. nac., t. 45, p. 307; t. 55, p. 398; t. 71, p. 159.

Art. 516. — Cód. de Bs. Aires, art. 308; cód. de San Luis, art. 327; sup. cort. nac., t. 46, p. 307; t. 55, p. 398; t. 59, p. 32; t. 71, p. 159; t. 72, p. 198; t. 114, p. 140; t. 118, p. 73; t. 120, p. 355.



TITULO VII

Del modo de proceder en segunda instancia

CAPITULO I

ART. 518. — Cuando el recurso se hubiere concedido libremente, el mismo día en que los autos lleguen al tribunal superior, el secretario dará cuenta, poniendo la correspondiente anotación.

ART. 519. — El tribunal superior mandará inmediatamente poner el proceso en la secretaría para que las partes hagan uso de su derecho; debiendo el apelante o apelantes expresar agravios dentro de nueve días a contarse desde el siguiente al de la notificación de esa providencia y en la que se designarán los días de la semana en que los interesados deban comparecer a la oficina del ujier para ser notificados.

ART. 520. — En la misma providencia nombrará el tribunal defensor al procesado que no lo tuviere. Si este fuere el apelante, el término para expresar agravios correrá desde la aceptación del defensor.

ART. 521. — El término para expresar agravios será común, a menos que el ministerio fiscal hubiese sacado los autos con tal objeto.

ART. 522. — Del escrito de expresión de agravios se dará traslado al apelado o a su representante, por el mismo término de nueve días. En este escrito el apelado podrá adherirse al recurso, en cuyo caso se dará traslado de la adhesión al apelante por seis días.

ART. 523. — Si el apelante no expresare agravios en el término competente, acusada la rebeldía, se despachará ésta en el término de veinticuatro horas, y pasadas éstas, se declarará de-

Art. 518. — Cód. de Bs. Aires, art. 320; cód. de San Luis, art. 343.

Art. 519. — Manual, t. 2, p. 46; cód. de Bs. Aires, art. 321; cód. de San Luis, art. 344; sup. cort. de Bs. Aires. t. 1, p. 25, ser. 9.

Art. 522. — Cód. de Bs. Aires, art. 324; cód. de San Luis, art. 348; sup. cort. nac., t. 57, p. 434; t. 113, p. 39; t. 114, p. 379; cám. crim. t. 36, p. 192.

Art. 523. — Manual, t. 2, p. 42; cód. de Bs. Aires, art. 323; cód. de San Luis, art. 347.



caído su derecho para expresar agravios, siguiendo su curso la instancia.

ART. 524. — Si el apelado no contestase el escrito de agravios dentro del término señalado, no podrá hacerlo en adelante, y previa anotación del secretario, la instancia seguirá su curso.

ART. 525. — No rige respecto de los funcionarios del ministerio fiscal, la prohibición de sacar el proceso de la oficina, para expedirse en la expresión de agravios o su contestación.

ART. 526. — El orden en que deberá oírse al ministerio fiscal en la discusión de la causa en segunda instancia, será el siguiente:

En primer término, cuando la apelación haya sido interpuesta por el funcionario que representare al ministerio en primera instancia.

En segundo término, cuando el recurso fuere promovido por el acusador particular.

En último término, cuando el apelante fuera el defensor del procesado.

ART. 527. — Con los escritos de expresión de agravios y contestación, quedará concluida la causa para prueba o definitiva, según corresponda.

ART. 528. — Los interesados podrán presentar, bajo juramento, antes de notificarse la providencia de autos para definitiva, los documentos de que no hubiesen tenido conocimiento hasta entonces, o que no hubiesen podido proporcionárselos en tiempo oportuno.

De los que cada parte presente, se correrá traslado a la contraria la cual deberá evacuarlo dentro del tercer día.

ART. 529. — Podrá también el (*defensor del procesado*) *procesado, o su defensor* dirigir posiciones al acusador particular antes de la citación para sentencia, siempre que no versen sobre los mismos hechos que hayan dado lugar a la presentación de otras en la primera instancia.

ART. 524. — Cód. de Bs. Aires, art. 325; cód. de San Luis, art. 349.

ART. 527. — Cód. de Bs. Aires, art. 326; cód. de San Luis, art. 350; sup. cort. nac., t. 57, p. 437.

ART. 528. — Cód. de Bs. Aires, art. 327; cód. de San Luis, art. 351; sup. cort. nac., t. 52, p. 139.



ART. 530. — Podrán igualmente los interesados pedir que la causa se reciba a prueba:

1º Cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener importancia para la resolución del recurso, ignorado antes o posterior al término de prueba de la primera instancia.

2º Cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante por causas completamente ajenas a su voluntad.

ART. 531. — En cuanto al término de prueba, medios probatorios de que pueda usarse, formalidades con que han de hacerse las probanzas, discusiones y conclusiones de la causa, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia.

ART. 532. — En todos los actos de prueba que hubieren de practicarse ante el tribunal, llevará la palabra el presidente pero los demás vocales, con su venia, podrán hacer la preguntas que estimen oportunas.

ART. 533. — Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practicarse fuera de la sala del tribunal, si éste no considerase necesario asistir a ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto a uno de sus miembros. Si fuese fuera del distrito de la capital, la comisión será conferida a la autoridad judicial de la localidad.

ART. 534. — Luego que la discusión de la causa esté concluida con el pronunciamiento de la providencia de autos, pasará a secretaría.

ART. 535. — Dentro de tercero día, contados desde la notificación de la providencia de autos, o al practicarse esta notificación, y en la misma diligencia, manifestarán las partes si van a informar in voce. Si no lo verifican se resolverá sin dichos informes.

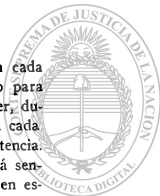
Art. 530. — Cód. de Bs. Aires, art. 328; cód. de San Luis, art. 352; sup. cort. nac., t. 69, p. 169; t. 99, p. 290; cám. crim., t. 96, ps. 188 y 418; t. I, ps. 222, 516 y 546; t. VI, ps. 356 y 496; agosto de 1910, p. 1037.

Art. 531. — Cód. de Bs. Aires, art. 329; cód. de San Luis, art. 353.

Art. 532. — Cód. de Bs. Aires, art. 330; cód. de San Luis, art. 354.

Art. 533. — Cód. de Bs. Aires, art. 331; cód. de San Luis, art. 355.

Art. 534. — Cód. de Bs. Aires, art. 332; cód. de San Luis, art. 356.



ART. 536. — Los miembros del tribunal se instruirán cada uno privadamente del proceso, antes de celebrar acuerdo para pronunciar sentencia, y solo podrán tener aquel en su poder, durante el término que el presidente (*señale*) *debe señalar* a cada uno, dentro del fijado por este código para pronunciar sentencia.

ART. 537. — El tribunal que conozca del recurso dictará sentencia dentro de treinta días, desde que la causa se halle en estado, salvo los casos en que está fijado expresamente un término más corto en este código.

ART. 538. — Cuando el recurso se conceda en relación, se llamará autos inmediatamente, pasando el expediente a secretaría.

Las partes manifestarán en el término y en la forma del artículo 535, si van a informar in voce, siendo entendido que si no lo verifican, se resolverá sin dicho informe.

ART. 539. — Si el apelante pretendiese que el recurso ha debido otorgársele libremente, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia de autos, que así se declare y se le dé término para expresar agravios.

El tribunal resolverá sobre esta petición sin tramitación alguna, accediendo o negando. En el primer caso, se sustanciará el recurso, según queda prevenido para el de apelación libremente concedida.

ART. 540. — Cuando se interpusiere el recurso de queja, por recurso denegado, el tribunal ordenará al juez que informe en un breve término, que al efecto le señalará.

ART. 541. — Recibido dicho informe, el tribunal si lo considerase necesario, podrá ordenar para mejor proveer la remisión del proceso.

ART. 542. — El tribunal pronunciará resolución dentro de cinco días, contados desde que se recibiere el informe o se pusiere el proceso a su disposición.

ART. 543. — La resolución del tribunal deberá desechar la queja o proveer lo que corresponda, según que el recurso haya

Art. 537. — Manual, t. 1, p. 249.

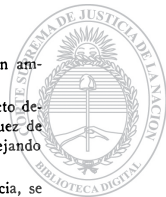
Art. 539. — Cód. de Bs. Aires, art. 334; cód. de San Luis, art. 363.

Art. 540. — Cód. de Bs. Aires, art. 335; cód. de San Luis, art. 365.

Art. 541. — Cód. de Bs. Aires, art. 336; cód. de San Luis, art. 366.

Art. 542. — Cód. de Bs. Aires, art. 337; cód. de San Luis, art. 367.

Art. 543. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 315; cód. de Bs. Aires, art. 338; cód. de San Luis, art. 368.



debido concederse libremente o en relación o en uno o en ambos efectos.

Cuando el recurso haya debido acordarse solo en el efecto devolutivo, el tribunal ordenará la remisión de los autos al juez de 1ª instancia, si los hubiera pedido para mejor proveer, dejando las compulsas necesarias.

ART. 544. — El recurso de queja por retardo de justicia, se instruirá acompañando copia certificada del escrito en que se hubiere requerido el despacho, cuya copia deberá darse por el secretario sin mandato judicial.

ART. 545. — Si el recurso fuera procedente, el superior señalará al juez un término prudencial para que administre justicia, o que se comunicará por oficio y bajo apercibimiento de costas y perjuicios.

ART. 546. — Si al recurso de apelación se hubiere unido el de nulidad, el tribunal conocerá de ambos al mismo tiempo y por los mismos trámites.

ART. 547. — Siendo la sentencia confirmatoria en todas sus partes de la de 1ª instancia, las costas del recurso serán a cargo del apelante, a menos que fuese el fiscal, si este no hubiere procedido con notorio desconocimiento de las leyes.

CAPITULO II

Recursos contra las providencias y fallos de la corte suprema y de la cámara de apelaciones (a)

ART. 548. — Las providencias interlocutorias dictadas por la corte suprema o por la cámara de apelaciones, son susceptibles del recurso de reposición.

ART. 549. — El recurso a que se refiere el artículo precedente, deberá interponerse dentro del término y en la forma establecida en el artículo 499.

ART. 550. — De las sentencias definitivas de la cámara de

ART. 546. — Cód. de Bs. Aires, art. 339; cód. de San Luis, art. 369; cám. crim., t. 52, p. 200.

ART. 550. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 809; t. 2, p. 3; sup. cort. nac., t. 113, p. 240.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 263 y más adelante, cap. XXXV.



apelaciones solo habrá recurso a la suprema corte federal en los casos del artículo 22, inciso 2º. (*)

ART. 551. — *Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, aunque hayan sido pronunciadas por la suprema corte de justicia, en los casos siguientes:*

- 1º *Cuando consta de un modo indudable que el delito fué cometido por una sola persona, y habiendo sido juzgado por dos o más jueces, aparecen como reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas.*
- 2º *Cuando se haya condenado a alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de otro cuya existencia se acredite después de la sentencia.*
- 3º *Cuando se haya condenado a alguno por resolución cuyo fundamento haya sido un documento, que después se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal; o cuando el condenado hallase o cobrase documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte acusada.*
- 4º *Cuando una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal o haya disminuído su penalidad.*

Art. 551. — Manual, t. 1, p. 404; t. 2, p. 263; cap. XXXVI, núm. 12; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 94 y 809; cód. de Bs. Aires, art. 311; cód. de San Luis, art. 333; proyecto uruguayo, art. 485; cód. francés, art. 443; cód. holandés, art. 375; cód. suizo, art. 150; cód. alemán, art. 399; cód. de Chile, art. 705; enj. esp., art. 954; cód. italiano, art. 538; ley francesa de 8 de junio de 1895; ley holandesa de 14 de julio de 1899; Garraud, «Droit criminel», p. 942, nota 1; Saluto, op. cit., t. 7, p. 243; Haus, «Principes généraux de droit pénal belge», núms. 1291 y 1292; Ortolán, «Résumé des éléments de droit pénal», núm. 1773; Manzini, «Trattato di procedura penale italiana», t. 2, p. 600; sup. cort. nac., t. 43, p. 20; t. 45, p. 351; t. 65, ps. 119, 403 y 399; t. 68, p. 177; t. 69, p. 35; t. 95, p. 81; t. 97, ps. 39 y 419; t. 98, p. 248; t. 101, ps. 298, 299 y 368; t. 102, p. 53; t. 104, ps. 331 y 332; t. 115, p. 139; cá. crim., t. II, p. 377; t. V, p. 219.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



ART. 552. — *El recurso de revisión podrá promoverse por el condenado o por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos y por el ministerio fiscal.*

La muerte del condenado no impide que se deduzca, para reabilitar su memoria, o procurar el castigo del verdadero culpable.

ART. 553. — *La suprema corte o la cámara de apelaciones según los casos, conocerán de este recurso, oyendo al ministerio fiscal y procediendo en los demás como queda establecido para los casos de apelación libre.*

ART. 554. — *En el caso del inciso 1º del artículo 551 anulará las sentencias, si existiese efectivamente contradicción en la designación de las personas que han sido declaradas delincuentes, y dispondrá que se instruya de nuevo la causa por el juez a quien corresponda el conocimiento del delito.*

En el caso del inciso 2º, anulará la sentencia y ordenará que se ponga inmediatamente en libertad al condenado, si resultase acreditada la identidad de la persona por cuya muerte se le hizo cargo.

En los casos del inciso 3º, anulará también la sentencia, y resolverá que se instruya de nuevo la causa por el juez competente.

Y en el caso del inciso 4º, decidirá que se ponga en libertad al condenado o que se le disminuya la pena, según corresponda.

ART. 555. — *El tribunal podrá, para mejor proveer, decretar las diligencias que juzgue necesarias.*

ART. 556. — *Para que sea admisible el recurso, deberá acompañarse al deducirse testimonios de la sentencia, los documentos y pruebas correspondientes. En caso contrario será desechado de plano.*

Art. 552. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 94; cód. de Bs. Aires, art. 312; cód. de San Luis, art. 334; cód. de Chile, art. 706; cód. holandés, art. 373; cód. alemán, art. 401; ley de enj. esp., arts. 955 y 961; cód. italiano, art. 539; proyecto uruguayo, art. 486; Ortolán, op. cit., núm. 1767; sup. cort. nac., t. 97, p. 39.

Art. 553. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 94; cód. de Bs. Aires, art. 313; cód. de San Luis, art. 325; cód. italiano, art. 540; sup. cort. nac., t. 65, p. 119.

Art. 554. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 94.

Art. 555. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 94 y 273; cód. de Bs. Aires, art. 315; cód. de San Luis, art. 337.

Art. 556. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 94; cód. de Bs. Aires, art. 316; cód. de San Luis, art. 338.



TITULO VIII

De la ejecución de las sentencias (a)

ART. 557. — La ejecución de las sentencias corresponde al juez que haya conocido en el juicio en primera instancia.

ART. 558. — Cuando el juez a quien corresponda la ejecución de la sentencia no pudiere practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias, comisionará en la forma que competa al juez del distrito en que deban tener efecto, para que las practique.

ART. 559. — Cuando se trate de la ejecución de la pena capital, se facilitará al reo lo necesario para que pueda otorgar testamento, y se le prestarán los demás auxilios que pidiere.

Se le permitirá también recibir las visitas de su familia y amigos, *procediéndose en lo demás, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 56 a 59 del código penal.*

ART. 560. — *Todo condenado a muerte será fusilado.*

ART. 561. — Las penas de presidio, penitenciaria, prisión o arresto, se harán saber a las autoridades encargadas de la dirección del establecimiento en que deban cumplirse esas condenas, con inclusión de un testimonio literal de la sentencia, a los efectos determinados respecto de cada una de ellas en el código penal.

ART. 562. — La pena de destierro se hará saber al ministerio de justicia para que, por intermedio de las autoridades que corresponda, haga salir al condenado del territorio nacional.

Art. 557. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 25; cód. de Buenos Aires, art. 360; cód. de San Luis, art. 370; *Reus*, «Ley de enjuiciamiento criminal», t. 2, p. 141; sup. cort. nac., t. 101, p. 368; t. 120, p. 19; t. 99, p. 397.

Art. 558. — Comp. esp., art. 949; enj. esp., art. 987; cód. de Bs. Aires, art. 361; cód. de San Luis, art. 371.

Art. 559. — Comp. esp., art. 952; cód. de Bs. Aires, art. 362; cód. de San Luis, art. 372.

Art. 560. — Comp. esp., art. 953; cód. de Bs. Aires, art. 363; cód. de San Luis, art. 373.

Art. 561. — Comp. esp., arts. 956 y 957; cód. de Bs. Aires, art. 364; cód. de San Luis, art. 374.

Art. 562. — Comp. esp., art. 960; cód. de Bs. Aires, art. 366; cód. de San Luis, art. 376.

(*) Véase más adelante, cap. XXXVII.



ART. 563. — Si la pena fuere la de inhabilitación general, deberá publicarse la sentencia en dos periódicos del lugar en que tenga su asiento el juzgado que haya resuelto el caso en primera instancia y *en la capital de la república*.

Si el procesado estuviere ejerciendo algún empleo o cargo público, aunque proceda de elección popular, se comunicará al cuerpo, autoridad o jefe respectivo.

ART. 564. — Si la inhabilitación fuera especial, se hará solo la comunicación de que habla el artículo anterior, haciéndose presente que el condenado ha quedado privado del empleo que desempeñaba, e incapacitado para obtener otros empleos del mismo género dentro del tiempo de la condena.

ART. 565. — Las penas de destitución o suspensión se comunicarán a las autoridades superiores del condenado, a los efectos legales.

ART. 566. — La pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, se pondrá en conocimiento del jefe del departamento general de policía, o de las autoridades del lugar en que residiere el penado, para que velen por el estricto cumplimiento de la sentencia durante el tiempo de la condena.

ART. 567. — La condenación al pago de multas o cantidades pecuniarias, reparación de daños, indemnización de perjuicios y satisfacción de costas, se hará efectiva según las reglas establecidas por las leyes de procedimientos civiles *para la ejecución de las sentencias*.

ART. 568. — Si el condenado a la pena de multa no pudiere o rehusare pagarla, se dictarán las órdenes necesarias para la aplicación de la pena equivalente, según el código penal.

Art. 563. — Comp. esp., art. 961; cód. de Bs. Aires, art. 367; cód. de San Luis, art. 377.

Art. 564. — Comp. esp., art. 962; cód. de Bs. Aires, art. 368; cód. de San Luis, art. 378.

Art. 565. — Cód. de Bs. Aires, art. 369; cód. de San Luis, art. 379.

Art. 566. — Cód. de Bs. Aires, art. 370; cód. de San Luis, art. 380.

Art. 567. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 935; cód. de Bs. Aires, art. 371; cód. de San Luis, art. 381; cádm. crim., t. 87, p. 160.

Art. 568. — Cód. de Bs. Aires, art. 372; cód. de San Luis, art. 382.

LIBRO CUARTO

De los juicios correccionales y sobre faltas y de algunos procedimientos especiales

SECCION I

De los juicios correccionales y sobre faltas

TITULO I

De los juicios correccionales

CAPITULO I

Procedimiento en materia correccional (a)



ART. 569. — El procedimiento ante el juez correccional será verbal y actuado.

ART. 570. — Luego que el juez correccional tuviere noticia por denuncia, querella, aviso de la policía, o cualquier otro medio, de haberse cometido alguno de los delitos que caen bajo su jurisdicción y que den lugar al ejercicio de la acción pública, mandará convocar a juicio verbal al agente fiscal, al querellante, si lo hubiere, al procesado o su defensor y a los testigos que pudieren dar razón de los hechos, señalando día y hora para la celebración del juicio, y haciéndose saber a los interesados que deben concurrir al acto con las pruebas que tuvieren.

También se dispondrá la celebración del juicio verbal, pero sin convocar al agente fiscal, cuando el delito solo pudiere perseguirse a instancia de parte legítima y ésta solicitara su castigo.

El juicio verbal a que se refiere este artículo, se celebrará dentro del término de tres días, pudiendo solo prorrogarse por causa bastante, que se hará constar en el expediente.

Art. 569. — Manual, t. 2, p. 153, 252; cá. crim., t. 69, p. 249.

Art. 570. — Cá. crim., t. 52, p. 493.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 151.



ART. 571. — Los testigos que hubieren declarado en el sumario de prevención formado en la policía, deberán asistir al mismo juicio, siempre que el juzgado considere necesaria su ratificación. Los interesados podrán solicitarla asimismo en el acto del comparendo, y en tal caso la diligencia se practicará en una nueva audiencia.

ART. 572. — *Dentro de veinticuatro horas contadas desde que el procesado se encuentre a disposición del juez, se le tomará la declaración indagatoria, a la que podrá asistir el defensor.*

ART. 573. — Cuando por justo motivo no pudiere celebrarse el juicio verbal en el día señalado, o no pudiere concluirse en un solo acto, el juez señalará el día más inmediato posible para su celebración o continuación haciéndolo saber a los interesados.

ART. 574. — El juicio será público, dando principio por la lectura de la querella, si la hubiere, siguiendo a esto el examen bajo juramento de los testigos convocados y la agregación de la prueba instrumental producida. En seguida se examinarán los testigos que presentare el acusado en su descargo.

ART. 575. — Terminado este acto, el juez señalará una nueva audiencia para oír la acusación y la defensa.

ART. 576. — Si se pidiese prueba por alguna de las partes, el juez señalará con ese objeto una nueva audiencia dentro de un término que no excederá de diez días, salvo que fuese prueba que debiese producirse fuera de su jurisdicción, *(en cuyo caso se observará)* debiendo entonces observarse lo prescripto para este caso.

ART. 577. — Si no hubiere acusador particular y el ministerio fiscal *(no formulare acusación)* no hallare causa bastante para acusar, se decretará el sobreseimiento en la forma que correspondía.

ART. 578. — Si se opusieren tachas a alguno de los testigos, deberán justificarse éstas en una audiencia inmediata pudiendo los interesados hacer las peticiones que convengan a sus propósitos.

ART. 579. — Producida la prueba y puesto el proceso por tres días a disposición de los interesados en la secretaría del juzgado

Art. 572. — Manual, t. 2, p. 100.

Art. 574. — Manual, t. 2, p. 35.

Art. 577. — Manual, t. 2, p. 49, 50; cádm. crim., t. 69, p. 250.



para el examen y estudio de sus constancias, el juez señalará otra audiencia para que las partes aleguen sobre la prueba.

ART. 580. — Dentro de diez días de celebrada la anterior audiencia, el juez dictará sentencia fundada y por escrito.

ART. 581. — Si la sentencia absolutoria fuese apelada por el acusador o fiscal, se pondrá al procesado en libertad (*previo el otorgamiento de la caución legal que corresponda*) sometiéndolo a la vigilancia de la autoridad.

ART. 582. — De la resolución definitiva del juez correccional, podrá apelarse solo en relación dentro de tres días.

El recurso de nulidad se interpondrá conjuntamente y se resolverá en la misma forma del recurso de apelación.

ART. 583. — Cuando vista la causa por el superior entendiera que debieran practicarse diligencias y recibirse pruebas, que no se hayan recibido o practicado, las mandará practicar para formular su juicio, *dentro de un término que no exceda de quince días*.

ART. 584. — El juez correccional cuidará de que todas las diligencias del sumario se practiquen a la mayor brevedad, dictando las órdenes y requerimientos necesarios para la efectividad inmediata de las diligencias que ordenare en la instrucción de la causa.

TÍTULO II

Del procedimiento en los juicios sobre faltas (a)

ART. 585. — *El procedimiento ante el jefe de policía y las autoridades municipales, será verbal y actuado. Su carácter es breve y sumario.*

ART. 586. — *Concluida la investigación, el jefe o la autoridad municipal, en su caso, dictará la resolución que corresponda dentro del término de veinte y cuatro horas.*

ART. 587. — El recurso de apelación de las resoluciones sobre faltas, dictadas por la policía o municipalidad, se interpondrá den-

Art. 585. — Manual, t. 1, p. 307; t. 2, p. 210, 248.

Art. 586. — Manual, t. 2, p. 210.

Art. 587. — Manual, t. 2, p. 210.

(*) Véase «Manual», t. 1, p. 307 y t. 2, p. 211.



tro del término de veinte y cuatro horas para ante el juez correccional.

ART. 588. — El juez correccional resolverá el recurso previa audiencia del apelante a la que podrá asistir el asesor de la policía o municipalidad y en presencia de las actuaciones producidas sin perjuicio de tomar otros antecedentes que creyere indispensables.

ART. 589. — La resolución del juez correccional debe dictarse dentro de tercero día después de practicadas las diligencias de que habla el artículo anterior.

ART. 590. — *El tiempo que dure el procedimiento se descontará siempre de la pena.*

SECCION II

De los juicios especiales *

TITULO I

Procedimiento en los delitos de calumnia e injuria (a)

ART. 591. — No se dará curso a querrella alguna por calumnia o injuria sin convocar previamente al acusado y acusador a un comparendo de conciliación.

ART. 592. — En caso de que el acusado no concurriera a la citación, se seguirá la causa por los trámites legales. Si no compareciese el querellante sin justa causa, se le tendrá por desistido con costas.

ART. 593. — Cuando la querrella se dedujere por injuria o calumnia, inferida en juicio, deberá acompañarse un testimonio del escrito o acta en que se hubiere vertido, expedido por orden del juez que conociere de la causa.

Art. 588. — Manual, t. 2, p. 210.

Art. 590. — Manual, t. 2, p. 210.

Art. 591. — Manual, t. 2, p. 156, 248; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 289; comp. esp., art. 753; enj. esp., art. 804; cá. crim., t. 37, p. 81; t. 44, p. 205; t. 46, p. 35; julio de 1913, p. 71.

Art. 592. — Manual, t. 2, p. 42, 156; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 762; cá. crim., t. 27, p. 233; septiembre de 1912, p. 70.

Art. 593. — Manual, t. 2, p. 156; comp. esp., arts. 754 y 755; enj. esp., arts. 805 y 806.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 155.



ART. 594. — La querella por injuria o calumnia escrita o impresa es improcedente si no se acompaña el instrumento que las contenga.

ART. 595. — En cualquier estado del juicio en que el (*querellado*) acusado ofreciera retractación de una manera pública de la calumnia o injuria que ha dado lugar a la acusación, se sobreseerá en la causa, debiendo satisfacerse por el mismo todas las costas originadas.

El sobreseimiento en este caso no extingue la acción civil.

ART. 596. — En las causas de calumnia o injuria no se decretará nunca la detención o prisión preventiva del procesado, salvo el caso en que hubiere motivos fundados para presumir que trata de ausentarse del país.

TÍTULO II

De la falsificación de documentos públicos y privados

ART. 597. — Las querellas y denuncias por falsificación de documentos públicos o privados, deberán recibirse aun cuando esos documentos hayan servido de base a actos judiciales o jurídicos y aun cuando existan sentencias a su respecto, pronunciadas en las jurisdicciones civiles.

ART. 598. — El documento argüido de falso será rubricado en el acto de su presentación, en cada una de sus páginas por el juez o funcionario encargado de la instrucción, por el secretario y por la persona que lo haya presentado, si supiere escribir.

ART. 599. — El juez hará levantar inmediatamente una acta en la que se hará referencia al estado material del documento, de las raspaduras, interlineaciones, adiciones o cualesquiera otras circunstancias que puedan indicar la falsedad o alteración.

Esta acta será depositada en la secretaría del juzgado.

Art. 595. — Manual, t. 2, p. 66; cá. crim., t. V, p. 194; junio de 1912, p. 87.

Art. 596. — Manual, t. 2, p. 158; Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 289; cá. crim., t. 56, p. 140; t. 78, p. 121.

Art. 597. — Manual, t. 2, p. 93.

Art. 598. — Manual, t. 2, p. 93.

Art. 599. — Manual, t. 2, p. 93.



ART. 600. — Si la escritura argüida de falsa o de haber sido alterada, se encontrara en un estado que no permitiere la suscripción de que habla el artículo 598, se observará lo que se establece en el artículo precedente.

ART. 601. — Cualquiera que, como depositario público o privado, tenga en su poder las escrituras argüidas de falsas, está en la obligación de presentarlas siempre que el juez se lo ordene, bajo pena de apremio personal en caso de no hacerlo, oído el ministerio fiscal.

La orden judicial y el recibo que se le dará por la entrega de los documentos, le servirá de descargo respecto de los interesados en el mismo documento.

ART. 602. — Corresponde al juez que practica la instrucción procurarse las escrituras que deban servir para el cotejo. Si estas escrituras se hallasen en poder de notarios u otros depositarios públicos, se observará lo dispuesto en el artículo precedente.

ART. 603. — Las escrituras que deban servir de tipo de comparación, serán rubricadas conforme a lo dispuesto en el artículo 598.

ART. 604. — *Cuando sea necesario extraer del lugar en que se encuentre un instrumento auténtico, el secretario del juzgado dejará a' depositario una copia exacta, que será concertada y firmada por ambos, dándole el recibo correspondiente para la constancia del hecho. En el proceso se consignará la anotación respectiva, que deberá ser firmada por el juez, por el secretario y por la persona que hace la entrega. Si ésta se hallase fuera del lugar de la residencia del juzgado, el documento se pedirá por medio de exhorto u oficio al juez territorial, quien concertará o hará concertar por un escribano subalterno suyo, la copia que debe dejarse en poder del depositario. La anotación que en este caso se haga en el proceso, se firmará únicamente por el juez y el secretario de la causa.*

Sin embargo, si la escritura forma parte de un registro de que no pueda separarse ni por poco tiempo, el juez ordenará la presentación del mismo registro, a efecto de verificar o establecer el hecho denunciado.

Art. 601. — Manual, t. 2, p. 93.

Art. 602. — Manual, t. 2, p. 93.

Art. 605. — Manual, t. 2, p. 93.



Practicada esta diligencia, al juzgado devolverá el registro pudiendo pedirlo cuantas veces le fuera necesario para la investigación criminal.

Podrá también dejarse testimonio exacto de las observaciones que haya requerido el examen del documento.

ART. 605. — Los instrumentos privados pueden también presentarse como tipo de comparación, si las partes interesadas los reconocieran.

Estos documentos no podrán, sin embargo, admitirse para el cotejo, sino cuando sea imposible o difícil al juez procurarse instrumentos o escrituras públicas. Se preferirá siempre los instrumentos de fecha más inmediata a la del instrumento argüido de falso.

Los particulares que tuvieran en su poder los instrumentos mencionados, no podrán ser compelidos inmediatamente para que los presenten; pero si después de haberseles citado al lugar de la instrucción a fin de que verifiquen la entrega o expongan los motivos en que fundan su negativa, fuesen *estos* desestimados, el juez podrá compelerlos con apremio personal.

ART. 606. — Los reconocimientos periciales en los casos de falsedad, serán practicados por calígrafos u otras personas competentes de acuerdo con lo establecido en (*el título XIII del libro II*) este código.

ART. 607. — El instrumento argüido de falso se le presentará al inculpado en el acto de la indagatoria para que declare si lo reconoce y será requerido para que lo rubrique en todas sus páginas. Si no puede o no quiere rubricarlo, se hará mención de ello en el proceso.

La misma mención se hará en caso de negarse a practicar el reconocimiento.

ART. 608. — Podrá igualmente el procesado ser requerido para que presente un escrito cualquiera de su mano, y también para que forme un cuerpo de escritura bajo el dictado del juez de instrucción.

En caso de rehusarse a hacerlo, se hará constar por diligencia.

ART. 609. — Cuando los instrumentos públicos sean declarados falsos en todo o en parte, el juez que hubiere conocido del

ART. 609. — Cód. de Bs. Aires, art. 373; cód. de San Luis, art. 383; cód. de Chile, art. 173.



delito, ordenará que estos actos sean reconstituidos, suprimidos o reformados.

ART. 610. — Si el instrumento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, agregándosele la copia de la sentencia que haya establecido la falsedad total o parcial.

Si estuviese protocolizado, se anotará la declaración hecha en la misma sentencia, al márgen de su matriz en los testimonios que se hubiesen presentado, y en el registro respectivo.

ART. 611. — Si la falsedad o alteración de los instrumentos no ha sido establecida, el juez ordenará su restitución.

El querellante y cualquiera que haya tomado parte en el juicio para sostener la acusación en su interés civil será condenado en las costas del juicio, sin perjuicio de la acción del acusado para formar querrela o acusación calumniosa en los casos que compete.

ART. 612. — Los instrumentos que hayan servido para el coitejo, serán devueltos a quien corresponda dentro de los tres días siguientes a la fecha de la sentencia ejecutoriada.

TÍTULO III

Del procedimiento en el caso de fuga de presos

ART. 613. — En el caso de evasión de algún procesado o condenado, los directores del establecimiento en que se hallare detenido o estuviere cumpliendo su condena, o cualquier otro encargado de su custodia o traslación, deberá dar cuenta de la evasión sin demora al juez de la causa, si esta se hallare pendiente, o al juez de instrucción que corresponda, cuando la misma hubiere terminado.

El juez de la causa pasará en el primer caso, inmediatamente, todos los antecedentes al juez de instrucción para la confirmación del hecho y proceder en forma legal contra los responsables de la fuga.

Art. 610. — Cód. de Bs. Aires, art. 375; cód. de San Luis, art. 385.

Art. 611. — Cód. de Bs. Aires, art. 376; cód. de San Luis, art. 386.

Art. 612. — Cód. de Bs. Aires, art. 377; cód. de San Luis, art. 387.

Art. 613. — Manual, t. 2, p. 155.



ART. 614. — Si el fugitivo es detenido, será trasladado a la prisión donde se encontraba cuando verificó su fuga o a otra que ofreciere mayor seguridad, debiendo ser puesto al mismo tiempo a disposición del juez competente.

ART. 615. — El juez procederá con toda brevedad a su interrogatorio, a fin de verificar la identidad de la persona y descubrir los cómplices de su evasión.

ART. 616. — Si de la investigación resultare que a la evasión del preso han concurrido otras personas, o que de cualquier manera han favorecido su fuga, se procederá para la investigación de su culpabilidad y aplicación de la pena en su caso, en la forma ordinaria.

TÍTULO IV

Del modo de proceder en los casos de detención, arresto o prisión ilegal de personas (*)

ART. 617. — Contra toda orden o procedimiento de un funcionario público tendente a restringir sin derecho la libertad de una persona, procede un recurso de amparo de la libertad para ante el juez competente.

Procede también el recurso de habeas corpus, cuando una autoridad provincial haya puesto preso a un miembro del congreso o cualquier otro individuo que obre en comisión o como empleado del gobierno nacional.

Art. 614. — Manual, t. 2, p. 155.

Art. 615. — Manual, t. 2, p. 155.

Art. 616. — Manual, t. 2, p. 155.

Art. 617. — Manual, t. 2, p. 193; Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 300, 560, 568, 790, 791, 953 y 954; t. 2, ps. 18, 22, 144 y 146; cód. de Bs. Aires, art. 415; cód. de San Luis, art. 466; Cooley, «Constitutional limitations», 7.ª ed., ps. 483 y sigs.; Dicey, «Introduction à l'étude du droit constitutionnel», p. 202; Fournier, «Código de Nueva York», p. VI; J. Tavares Bastos, «O habeas corpus na republica», ps. 8, 545, 587, 596 y 677; sup. cort. nac., t. 10, p. 55; t. 19, ps. 191 y 231; t. 46, p. 83; t. 55, p. 362; t. 64, p. 406; t. 68, p. 316; t. 75, p. 161; t. 77, p. 237; t. 79, p. 136; t. 117, p. 165; c.án. crim., t. V, p. 89; noviembre de 1910, p. 1683; febrero de 1911, p. 30.

(*) Véase «Manual», t. 2, p. 178.



ART. 618. — A los efectos del artículo precedente, los jueces federales, del crimen de la capital y los de los territorios nacionales, conocerán del mencionado recurso en todos los casos, con excepción de los siguientes:

- 1º Cuando la orden de detención, arresto o prisión emana de un superior en el orden judicial.
- 2º Cuando fuese expedida por alguno de los jueces correccionales o del crimen de la capital en ejercicio de sus funciones.
- 3º Cuando emane de alguna de las cámaras del congreso.

ART. 619. — En todo caso, el juez competente para conocer del recurso, solicitará inmediatamente del funcionario autor de la orden de detención, el informe sobre los motivos de que ésta procede, para resolver en su vista.

ART. 620. — El auto de habeas corpus, debe ser obedecido inmediatamente siempre que de sus términos conste claramente cual es el funcionario autor de la orden de detención y la persona objeto de dicha orden.

La desobediencia del autor de la orden de detención al auto de habeas corpus, podrá ser castigada, según los casos con (*prisión*) *arresto* que no pasará de un mes, o multa que no excederá de doscientos pesos nacionales, aplicable al tesoro de las escuelas del distrito en que resida el multado.

ART. 621. — No hay derecho para pedir el auto de habeas corpus cuando la privación de la libertad fuese impuesta como pena por autoridad competente.

ART. 622. — La petición de habeas corpus puede ser deducida por la misma persona detenida o por otra a su nombre y expresará sustancialmente:

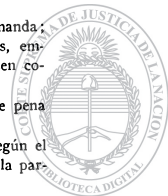
- 1º Que la persona que hace la petición o en favor de quien se hace, se halla bajo orden de detención o detenida, presa o restringida en su libertad; el funcionario, empleado u oficial público autor de la orden de detención; el indi-

Art. 618. — Sup. cort. nac., t. 64, p. 406; t. 75, p. 75; t. 82, p. 107; t. 123, p. 109.

Art. 619. — Cód. de Bs. Aires, art. 417; cód. de San Luis, arts. 468 y 469.

Art. 621. — Sup. cort. nac., t. 72, p. 328.

Art. 622. — Manual, t. 2, p. 195; cód. de Bs. Aires, art. 418; cód. de San Luis, art. 470.



viduo que pide o en cuyo favor se hace la demanda; mencionando, los nombres de dichos funcionarios, empleados u oficial público, si dichos nombres fuesen conocidos.

- 2º Que la persona detenida no lo esté en virtud de pena impuesta por autoridad competente.
- 3º La causa o pretexto de la detención o prisión, según el mejor conocimiento o creencia de ella, que tenga la parte demandante.
- 4º Si la detención o prisión se hubiere ejecutado en virtud de algún mandamiento o providencia, deberá agregarse una copia, o manifestarse por lo menos que la copia de la orden, mandamiento o providencia no se agrega a causa de haber sido removida u ocultada la persona detenida o presa, o porque se ha rehusado a dar la copia, aun cuando se ha hecho la demanda de ella y se han ofrecido al empleado que debiera darla los derechos u honorarios que le correspondían por expedirla.
- 5º La petición debe expresar en qué consiste la ilegalidad.
- 6º El que haga la demanda del auto de habeas corpus debe afirmar bajo juramento lo que expresa en ella.

ART. 623. — Cuando un tribunal o juez de jurisdicción competente tenga conocimiento por prueba satisfactoria, de que alguna persona es mantenida en custodia, detención o confinamiento por funcionario de su dependencia, o inferior administrativo, político o militar, y que es de temerse sea transportada fuera del territorio (*de la república*) *de su jurisdicción* o que se le hará sufrir un perjuicio irreparable antes de que pueda ser socorrida por un auto de habeas corpus, pueden expedirlo de oficio, ordenando a quien la detiene o a cualquier comisario, agente de policía u otro empleado, que tome la persona detenida o amenazada y la traiga a su presencia para resolver lo que corresponda según derecho.

ART. 624. — Cuando la prueba mencionada en el artículo precedente sea también suficiente para justificar el arresto del funcionario mencionado, que ha privado ilegalmente de su libertad



a otro, el auto que se expida deberá también contener orden para el arresto de la persona que haya cometido tal delito.

ART. 625. — El empleado o la persona encargada de la orden mencionada en los tres artículos precedentes, la ejecutará trayendo ante el tribunal y juez, la persona detenida y también la del que la detiene, si así se le ordena en el auto, devolviéndolo en seguida con informe.

ART. 626. — Si el funcionario que detuviere á una persona es traído ante el tribunal o juez como sindicado de un delito, será examinado, constituido en prisión, si procede, o admitido a dar fianza en los casos que *(la fianza puede ser admitida) la ley lo permita.*

ART. 627. — La orden de habeas corpus se notificará por copia legalizada del original al funcionario a quien se dirige, o a aquel bajo la guarda o autoridad de quien se encuentre el individuo en cuyo favor haya sido expedida.

ART. 628. — Si el detentador rehusa recibirla, se le informará verbalmente su contenido; si se oculta o impide la entrada a la persona encargada de la ejecución, la orden será fijada exteriormente en un lugar aparente de su morada o de aquella en que la persona detenida se encuentre, por ante dos testigos.

ART. 629. — Si el funcionario o corporación autor de la orden de detención fuese de aquellos que tienen por razón de su cargo facultad para expedir tales órdenes, el juez competente para conocer del recurso se limitará a pedir inmediatamente el informe del caso y en su vista procederá a resolver el recurso.

ART. 630. — En los demás casos el funcionario autor de la detención reclamada devolverá la orden de habeas corpus presentando la persona en ella designada, si se encuentra bajo su guarda y autoridad, y escribiendo al dorso o agregando por separado un informe en que clara e inequívocamente se exprese:

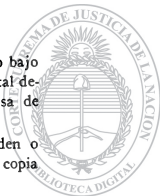
1º Si se tiene o no en custodia, detenido o restringido bajo su poder, el individuo que se le ordena presentar.

Art. 627. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 12; cód. de Bs. Aires, art. 419; cód. de San Luis, art. 471.

Art. 628. — Cód. de Bs. Aires, art. 420; cód. de San Luis, art. 472.

Art. 629. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 144; cód. de Bs. Aires, art. 421; cód. de San Luis, art. 473.

Art. 630. — Cód. de Bs. Aires, art. 422; cód. de San Luis, art. 474.



- 2º Si tiene a dicho individuo en su poder o restringido bajo su custodia, cuál es la autoridad con que le impone tal detención, prisión o restricción y la verdadera causa de ella, explicándola claramente.
- 3º Si la parte está detenida en virtud de auto, órden o mandamiento escrito, debe agregarse original o en copia al informe.
- 4º Si el funcionario a quien se ha dirigido y notificado el auto, ha tenido en su poder o custodia al individuo requerido en cualquier tiempo (*anterior a la fecha del auto*) y si ha transferido dicha custodia a otro, el informe debe expresar con particularidad a quién, por qué causa, en qué tiempo y por qué autoridad tuvo lugar dicha transferencia.

ART. 631. — Si el funcionario a quien ha sido dirigido y notificado debidamente un auto de habeas corpus, rehusare o descuidare cumplirlo, presentando la persona nombrada en él, e informando plena y explícitamente al devolverlo, sobre todos los puntos a que tal informe debe contraerse, según lo dispuesto en este título, dentro del tiempo requerido, y no alegase excusa suficiente para dicha desobediencia y descuido, el tribunal o juez a quien debiere devolverse, desde que se justifique que el auto fué dirigido y notificado debidamente, tiene el deber de dar orden dirigida a cualquier comisario o agente de policía u oficial de justicia, para que aprehenda inmediatamente al funcionario culpable de la desobediencia o descuido y sea detenido hasta que devuelva el auto con el informe debido y obedezca las órdenes que se le hayan dado con respecto a la persona para cuyo socorro se expidió el auto.

En caso de depender el funcionario desobediente de una autoridad superior (a), que no sea directamente responsable de su mala conducta ante los jueces, se solicitará de ésta el concurso necesario para que la orden mencionada se cumpla, *sin perjuicio*

Art. 631. — Manual, t. 2, p. 195; cód. de Bs. Aires, art. 423; cód. de San Luis, art. 475; sup. cort. nac., t. 55, p. 119.

(*) **De las que no son directamente responsables**, dice el proyecto de la comisión revisora citada, en el art. 650, que no fué modificado por el congreso.



de la responsabilidad en que el funcionario hubiese incurrido por su desobediencia.

En caso de ineficacia de tal requisición, el juez procederá como lo prescribe el artículo 634.

ART. 632. — Siempre que por enfermedad o impedimento de la persona que se ordene presentar, no pueda ser traída sin peligro ante la autoridad competente a quien ha de volverse el auto, el funcionario que la tiene en custodia debe expresarlo así en el informe con que lo devuelva acompañando certificado médico donde fuera posible; y si se quedare satisfecha de la verdad de tal afirmación y por otra parte el informe fuere suficiente, procederá a resolver el caso sin necesidad de que se halle presente el interesado.

El tribunal o juez podrá además en este caso, si lo cree necesario, trasportarse al lugar en que se encuentra el detenido, para adoptar la resolución que corresponda.

ART. 633. — Para la ejecución de la orden de arresto, y para traer a custodiar la persona para cuyo alivio se expidió el auto de habeas corpus, el empleado o persona que haya sido encargado de tal ejecución, puede llamar en su auxilio la fuerza pública del lugar, como en los demás casos semejantes.

ART. 634. — Traída a presencia del juez la persona detenida y producido el informe del detentador, o solamente esto, según el caso, el juez procederá a examinar los hechos contenidos en él y la causa de la detención, prisión o restricción de la libertad.

Si no se manifestase causa legal para la detención o restricción de la libertad, o para la continuación de ella, se decretará la libertad inmediata de la persona presa o detenida.

En los casos del artículo 629, el juez requerirá en términos respetuosos al funcionario respectivo para que ponga en libertad en el acto al detenido, y si fuere desobedecido, dará cuenta inmediatamente al poder público ante el cual por la constitución o por la ley, dicho funcionario sea justiciable por actos de inconducta o faltas en el cumplimiento de sus deberes, para que proceda según corresponda.

Art. 634. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 300 y 305; t. 2, p. 24 y 144; cód. de Bs. Aires, art. 424; cód. de San Luis, art. 476; sup. cort. nac., t. 76, p. 209; t. 117, p. 165.



ART. 635. — El preso o detenido será devuelto a su estado de detención si del examen del caso resultare algunas de las circunstancias siguientes:

- 1ª Que se halla detenido en virtud de orden, auto o decreto de autoridad competente.
- 2ª Que la detención o prisión sea el resultado de una sentencia definitiva.
- 3ª Que se halle preso o detenido por desacato contra tribunal, juez, autoridad o corporación con derecho para castigarlo, siempre que dicha facultad resulte de la orden o mandamiento.

ART. 636. — Mientras se dicte la resolución, se encomendará el preso a la custodia del empleado del lugar que pueda tener este encargo y con los cuidados que su edad u otras circunstancias aconsejen.

ART. 637. — No se podrá dictar resolución alguna, tratándose de una acción criminal, sin intervención del ministerio fiscal.

ART. 638. — La persona presentada en virtud de un auto de habeas corpus, puede negar los hechos afirmados en el informe o alegar otros para probar que su prisión o detención es ilegal, o que es acreedora a que se le ponga en libertad.

En este caso, el juez acordará un término breve para la prueba.

ART. 639. — La sentencia pronunciada en el recurso de habeas corpus, será apelable, y solo se concederá en el efecto devolutivo cuando sea absolutoria, debiendo interponerse el recurso dentro del perentorio término de veinte y cuatro horas.

ART. 640. — El procedimiento a que dé lugar el recurso de amparo de la libertad será verbal y sumario, y tramitado separadamente de la cuestión de fondo con que pudiere tener relación.

ART. 641. — Cualquier empleado de los que habla el artículo 623 que tenga detenida una persona y rehuse dar copia a todo el que la pida de la orden, auto, providencia o disposición origen

ART. 635. — Manual, t. 2, p. 194.

ART. 637. — Manual, t. 2, p. 195.

ART. 638. — Cód. de Bs. Aires, art. 425; cód. de San Luis, art. 477.

ART. 639. — Manual, t. 2, p. 195; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 781; cód. de Bs. Aires, art. 426; cód. de San Luis, art. 478; sup. cort. nac., t. 69, p. 135.

ART. 640. — Cód. de Bs. Aires, art. 427; cód. de San Luis, art. 479.



de la detención referida, aún cuando se le ofrezcan los derechos u honorarios que por el o le corresponda, incurrirá en una multa de doscientos pesos nacionales a favor de la persona detenida.

ART. 642. — Es pasible de una multa de quinientos a mil pesos o de arresto por cuatro a ocho meses, o de una y otra, todo el que teniendo en custodia algún individuo que con arreglo a las disposiciones de este código sea acreedor a un auto de habeas corpus para averiguar la causa de su detención, transfiera al preso a la custodia de otra persona, o lo ponga bajo el poder o autoridad de otro, o lo oculte, o cambie el lugar de su detención, con el designio o propósito de eludir la expedición, notificación o efectos del auto.

ART. 643. — El cumplimiento de todo auto de habeas corpus debe siempre tener lugar en un término *que no pase* de veinte y cuatro horas, si el preso o detenido no se encuentra a mayor distancia que siete leguas del punto en que se encuentra el juez o tribunal que lo ha expedido.

Si estuviere a mayor distancia se acordará un día más por cada siete leguas que se tuviera que recorrer.

ART. 644. — Las costas del recurso, en caso de ser negado, serán a cargo del peticionante, y siendo otorgado, a cargo del funcionario autor de la detención ilegal.

ART. 645. — La falta de sellos o reposiciones necesarias, no obstará en caso alguno a la tramitación y resolución del recurso de amparo de la libertad.

Art. 642. — Manual, t. 2, p. 195.

Art. 644. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 791; cód. de Bs. Aires, art. 428; cód. de San Luis, art. 480; sup. cort. nac., t. 57, p. 98; t. 79, p. 366.



TITULO V

Del procedimiento en los casos de extradición de criminales

CAPITULO I

Del procedimiento para la extradición de criminales con países extranjeros (*)

ART. 646. — La extradición de delincuentes, sea que se solicite por la república o que se otorgue por ella a solicitud de otra nación, solo procede:

1º En los casos que determinen los tratados existentes. (*)

2º A falta de tratados, en los casos en que sea procedente la extradición, según el principio de reciprocidad o la práctica uniforme de las naciones.

ART. 647. — Solo el juez que conozca de la causa en que estuviere procesado el reo ausente en territorio extranjero, será competente para conocer del incidente sobre extradición.

En caso de ser ésta solicitada por un gobierno extranjero, el juez competente será el del domicilio de la persona reclamada.

ART. 648. — Habiendo tratados, la extradición será pedida u otorgada en la forma y con los requisitos que aquellos prescriban.

A falta de tratados, la extradición será pedida u otorgada por la vía diplomática, con arreglo al procedimiento y condiciones que se establecen en este código.

ART. 649. — *El juez que conociere de la causa, acordará de oficio o a instancia de parte, en resolución legalmente fundada,*

Art. 646. — Manual, t. 1, ps. 349 y 367; t. 2, p. 252; sup. cort. nac., t. 70, p. 74; t. 71, p. 182; t. 109, p. 208; cá.m. crim., diciembre de 1910, p. 2034.

Art. 647. — Manual, t. 1, p. 361.

Art. 648. — Manual, t. 1, p. 356; sup. cort. nac., t. 26, p. 447; t. 67, p. 307; t. 78, p. 307; t. 96, p. 305; t. 103, p. 126; t. 109, p. 208; t. 111, p. 35; t. 122, p. 167.

Art. 649. — Manual, t. 1, p. 361.

(*) Véase «Manual», t. 1, p. 353.

(*) Véase la nota (a) de la p. 89.



pedir la extradición desde el momento en que por el estado del proceso y por su resultado fuese procedente.

ART. 650. — Contra el auto acordando o denegando la extradición, podrá interponerse el recurso de apelación, si lo hubiese dictado un juez de primera instancia.

ART. 651. — Con la nota o comunicación en que se solicite la extradición, ya por las autoridades del país o por las extranjeras, habrá de remitirse un testimonio literal del auto que decreta esta diligencia y además los siguientes documentos:

- 1º La sentencia de condenación según la forma prescripta por la legislación respectiva, si se tratase de un condenado, o el mandato de prisión expedido por tribunales competentes con la designación exacta y la fecha del crimen o delito que la motivara, si se tratase de un procesado o presunto delincuente. Estos documentos se enviarán originales o en copia auténtica.
- 2º Todos los datos y antecedentes necesarios para justificar la identidad de la persona requerida.
- 3º La copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación respectiva.

ART. 652. — Cuando el pedido de extradición no se hallase autorizado por tratados, el poder ejecutivo nacional con vista del procurador general, resolverá lo que corresponda.

Si la resolución fuese negativa, devolverá la requisición al gobierno o juez de que proceda con copia del dictamen del procurador general, y resolución dictada.

En caso de creerse procedente la solicitud, se dirigirá inmediatamente al juez de la sección donde se encuentre el refugiado, con todos los antecedentes, dando aviso al gobierno extranjero interesado. Cuando la extradición fuese pedida por los jueces de la república, el poder ejecutivo nacional dirigirá la nota que corresponde al gobierno de la nación donde se encuentra refugiado el delincuente y lo avisará al juez requirente.

Art. 650. — Manual, t. 1, p. 361.

Art. 651. — Manual, t. 1, p. 361; sup. cort. nac., t. 106, p. 20; t. 117, ps. 19 y 137.

Art. 652. — Manual, t. 1, p. 359.



ART. 653. — Pasada la solicitud de extradición al juez que debe conocer de ella en la república, procederá a ordenar la detención del refugiado y a tomarle declaración *dentro del término de 48 horas* con el fin de comprobar la identidad de la persona poniéndola inmediatamente en libertad si resultase haberse procedido contra ella por error.

ART. 654. — Si la identidad de la persona apareciere justificada por semiplena prueba, a lo menos, se intimará al arrestado que nombre un defensor letrado en el término de tres días, debiendo el juez nombrarlo de oficio si aquel dejase transcurrir ese término.

ART. 655. — En la discusión de un pedido de extradición, no será permitido poner en cuestión la validez intrínseca de los documentos producidos por el gobierno requirente, debiendo el juicio limitarse a los siguientes puntos:

- 1º Identidad de la persona.
- 2º Examen de las formas extrínsecas de los documentos presentados.
- 3º Si el crimen o delito se encuentra comprendido en alguno de los casos mencionados en el artículo 646.
- 4º Si la pena aplicada pertenece a la categoría de pena que por las leyes del país requirente corresponda al crimen o delito en cuestión.
- 5º Si la acción penal o la pena respectiva están prescriptas, según las leyes de la nación requirente.
- 6º Si la sentencia o el auto de prisión, en su caso, han sido expedidos por los tribunales competentes del país requirente.

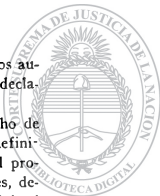
ART. 656. — El defensor del individuo reclamado tendrá seis días para presentar su defensa, de la cual se concederá vista por otros seis días al procurador fiscal de la sección, quien será necesariamente parte en todo incidente relativo a extradición.

ART. 657. — Si hubiere necesidad de comprobar algunos hechos, se recibirá la causa a prueba, siguiendo respecto a esta y sus términos lo prescripto en este código.

Art. 653. — Manual, t. 1, p. 359.

Art. 655. — Manual, t. 1, p. 369; sup. cort. nac., t. 99, p. 290; t. 110, p. 413; t. 113, p. 364; t. 117, p. 138.

Art. 656. — Manual, t. 1, p. 369.



ART. 658. — Vencido el término probatorio y llamados los autos, el juez fallará el incidente en el término de diez días, declarando si hay o no lugar a conceder la extradición.

ART. 659. — Del fallo del juez de sección habrá derecho de apelación para la corte suprema, la cual, resolverá breve y definitivamente el punto, previa vista del procurador general. El proceso original se pasará al ministerio de relaciones exteriores, dejando constancia suficiente, y esta resolución se transmitirá al gobierno referente.

ART. 660. — Ningún reo extraído podrá ser juzgado por un delito anterior al que motivó la solicitud de extradición.

Si por causa del delito anterior al hecho de la extradición, pero descubierto con posterioridad, se pidiese autorización para procesar al individuo ya entregado, el pedido que deberá venir acompañado de las piezas del proceso en que constan las observaciones del individuo acusado o declaración firmada de no tener ninguna que hacer, será sometido al juez de sección que hubiere entendido en la demanda de extradición y su resolución será apelable.

ART. 661. — El gobierno argentino podrá autorizar el tránsito por el territorio de la república de un individuo extraído que no fuese ciudadano argentino, sin más requisito que la presentación por la vía diplomática de la sentencia condenatoria o del mandato de prisión correspondiente.

ART. 662. — Los tribunales encargados de juzgar los casos de extradición, tendrán también la facultad para resolver si deben o no entregarse en todo o en parte al gobierno requirente los papeles y otros objetos que se hubiesen tomado al presunto delincuente.

ART. 663. — Los exhortos emanados de una autoridad extranjera competente, en materia criminal, no política, se introducirán por la vía diplomática y serán transmitidos a las autoridades judiciales competentes.

ART. 664. — En caso de urgencia podrá dirigirse directamente a las autoridades argentinas, quienes deberán diligenciarlos

Art. 659. — Sup. cort. nac., t. 70, p. 74; t. 109, p. 208.

Art. 660. — Manual, t. 1, p. 360.

Art. 662. — Manual, t. 1, p. 360; sup. cort. nac., t. 104, p. 125.



sin demora, siempre que no estuviesen en desacuerdo con las leyes de la república.

ART. 665. — Las citaciones en causa criminal, no política, a testigos domiciliados o residentes en la república, no serán recibidas ni notificadas, sino bajo la condición que estos testigos no pudieran ser perseguidos ni presos por hechos o condenas anteriores, ni como cómplices del delito encausado.

ART. 666. — Si el individuo reclamado se hallase enjuiciado o condenado por crimen o delito cometido en la república, la extradición será aplazada hasta que concluya el juicio o termine su condena.

ART. 667. — Cuando el delito que motiva la solicitud de extradición tenga una pena menor en la república, el encausado no será extraído sino a condición de que los tribunales del país que lo reclama le impondrán la pena menor.

ART. 668. — Si el criminal fuese reclamado por más de un estado al mismo tiempo, será atendido con preferencia aquel en cuyo territorio hubiese cometido el delito mayor, y siendo de igual gravedad aparente, el que lo hubiese reclamado primero.

ART. 669. — Si el reo fuese ciudadano argentino y prefiriese ser juzgado por los tribunales argentinos, el gobierno de la nación requirente, podrá suministrar a dichos tribunales todos los antecedentes y pruebas del delito a fin de que sea juzgado con arreglo a las leyes de la república.

ART. 670. — En la orden de extradición se comprende naturalmente la entrega de todos los objetos que el acusado hubiere hurtado en país extranjero y que se hallasen en su poder al tiempo de arrestarle, y los que puedan servir de prueba del delito que se le imputare.

ART. 671. — *En caso de urgencia, los tribunales de la república podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a solicitud directa de las autoridades judiciales de un país ligado con*

Art. 666. — Manual, t. 1, p. 360.

Art. 667. — Manual, t. 1, p. 360; sup. cort. nac., t. 70, p. 422; t. 72, p. 101; t. 75, p. 447; t. 79, p. 20; t. 82, p. 99; t. 107, p. 425; t. 110, p. 193 y 361; t. 117, p. 137.

Art. 668. — Manual, t. 1, p. 360.

Art. 669. — Manual, t. 1, p. 358.

Art. 670. — Manual, t. 1, p. 360.

Art. 671. — Manual, t. 1, p. 362.



la república por un tratado de extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión; y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido.

El pedido podrá hacerse por medio del correo o del telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la vía diplomática al ministro de relaciones exteriores.

Los tribunales que hubieren practicado el arresto lo pondrán inmediatamente en conocimiento del ministro de relaciones exteriores por intermedio del de justicia.

ART. 672. — El extranjero arrestado en virtud de las disposiciones del artículo anterior, será puesto en libertad, si en el término de quince días, tratándose de un país limítrofe, y de mes y medio tratándose de otros, no recibiese el gobierno argentino el pedido diplomático de extradición en debida forma.

ART. 673. — El arresto provisorio de un extranjero podrá ordenarse también a pedido de un ministro diplomático, hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición, y serán aplicables a este caso las disposiciones de los dos artículos precedentes.

ART. 674. — Todo extranjero arrestado en virtud de un pedido de extradición, podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en las mismas condiciones que si el delito imputado hubiese sido ejecutado en la república.

CAPITULO II

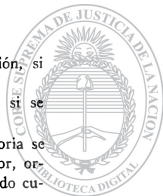
De la extradición de los reos condenados o procesados por los jueces de sección o de los tribunales de la capital, aislados en otras provincias (*)

ART. 675. — El juez de sección o los de la capital y territorios nacionales que estuviesen procesando o hubiesen condenado a un reo que se asilare en el territorio de otra sección, podrán pedir su extradición al juez de la sección respectiva con los siguientes requisitos:

Art. 672. — Manual, t. 1, 362.

Art. 675. — Manual, t. 1, p. 363.

(*) Véase «Manual», t. 1, p. 362.



- 1º Acompañando copia legalizada del auto de prisión, si se tratare de un procesado.
- 2º Acompañando copia legalizada de la sentencia, si se tratare de un condenado.

ART. 676. — El juez de la sección a quien la requisitoria se dirija, con los requisitos establecidos en el artículo anterior, ordenará inmediatamente la captura del procesado o condenado cuya extradición se le pida.

Probada la identidad de la persona, lo remitirá sin más trámite a disposición del juez requirente, a cuyo efecto se procederá como queda establecido para la extradición pedida por otra nación.

TÍTULO VI

De las prisiones y de las visitas a los presos

ART. 677. — Ningún director o jefe de presidio, penitenciaría u otro establecimiento de condenados, ni ningún empleado o alcaide de las cárceles de detención y seguridad, podrá, bajo las represiones establecidas en el código penal, recibir ni detener a persona alguna, sino en virtud de orden de detención, arresto o prisión, o de sentencia condenatoria.

ART. 678. — Los directores o alcaides de las cárceles de detención o de seguridad, cuidarán que la incomunicación de los procesados, en los casos de ser ordenada por el juez o funcionario que practica las diligencias de la instrucción, sea puntualmente observada.

ART. 679. — Cuidarán asimismo, que los presos se mantengan separados en cuanto sea posible, según sus antecedentes personales y la naturaleza y gravedad de los delitos que se les impute, velando especialmente porque los niños o jóvenes que entren en las prisiones, no estén en contacto inmediato con los presuntos criminales de otra edad.

ART. 680. — Los defensores de los procesados, luego de cesar la incomunicación, podrán conferenciar libremente con sus defendidos, sin que puedan obstar las disposiciones reglamentarias del establecimiento sobre las visitas a los detenidos.



ART. 681. — Los detenidos enfermos permanecerán en el lugar o establecimiento en que se encontraren, si allí fuera posible prestarles toda la asistencia que la enfermedad requiera. De otro modo, deberán ser trasladados a un hospital u hospicio en virtud de orden del juez de instrucción, o del que conociere de la causa, quienes deberán ordenar las medidas precaucionales necesarias para impedir la evasión.

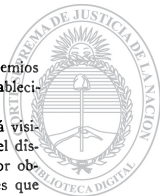
ART. 682. — Los directores y alcaides de cárceles o establecimientos análogos, deberán informar sobre el estado de la enfermedad, muerte o evasión de presos al juez de instrucción, si el sumario no hubiere terminado, y al juez que conociere de la causa si ésta hubiere pasado al estado de plenario.

En el caso de haber mediado condenación, la comunicación deberá hacerse al juez que dictó la sentencia.

Sin perjuicio de esa comunicación, los directores de las prisiones harán practicar todas las medidas necesarias para la asistencia de los enfermos y dar sepultura a los muertos.

ART. 683. — Las autoridades judiciales y administrativas cuidarán de una manera especial en lo que respectivamente les concierne:

- 1º De que los establecimientos destinados a la detención o prisión de los individuos sospechados de delincuencia, y condenados como tales, sean no sólo seguros sino adecuados e higiénicos.
- 2º De que la salud de los presos sea debidamente atendida.
- 3º De que su alimentación sea suficiente y sana.
- 4º De que sean preservados del rigor de las estaciones.
- 5º De que su tratamiento corresponda a los reglamentos dictados para los mismos establecimientos por la autoridad competente.
- 6º De que no se use con los presos rigores no permitidos por esos reglamentos.
- 7º De que bajo consideración o pretexto alguno, se les cause mortificaciones más allá de las que entraña la pena a que hayan sido condenados y exija estrictamente su seguridad.
- 8º De que se someta inmediatamente a juicio para su debida represión al empleado público que imponga a los



presos que guarde, severidades, vejámenes o apremios arbitrarios, o los coloque en los lugares del establecimiento no destinados al efecto.

ART. 684. — Cada uno de los jueces de instrucción podrá visitar las cárceles de los detenidos o condenados existentes en el distrito en que tenga su asiento el juzgado. La visita tendrá por objeto conocer el estado de los presos y oír las reclamaciones que estos hagan, sobre el tratamiento que reciban en el establecimiento, y las peticiones que directamente formulen sobre el estado de la causa.

ART. 685. — Los jueces de instrucción darán cuenta al superior toda vez que encontrando atendibles las reclamaciones o pedidos de los presos, no estuviere en la órbita de sus atribuciones resolverlas por sí mismos.

ART. 686. — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores todos los meses se hará una visita de cárceles, por el miembro de la cámara de apelaciones que esta designe, y otra cada tres meses por la cámara integra a cuya visita deberán concurrir los jueces del crimen y correccionales, el ministerio fiscal y los defensores de los procesados.

Estas disposiciones rigen para la suprema corte nacional y jueces de sección cuando ocurra el caso que las motiva.

ART. 687. — Las visitas de que habla el artículo anterior, además del objeto que se señala a las visitas del juez de instrucción en el artículo 684, tendrán el de averiguar el estado de las causas e indagar, sobre todo, la razón de las demoras que se noten en el procedimiento.

ART. 688. — El tribunal tomará las medidas necesarias para el pronto despacho de las causas, haciendo uso de sus facultades legales.

ART. 689. — El tribunal pondrá en conocimiento del ministerio de justicia, todas las faltas y defectos que note en la administración de las prisiones para que sean corregidos debidamente.

El mismo tribunal podrá invitar al ministro del ramo para acompañarlo en las visitas generales.



TITULO FINAL

Disposiciones complementarias

ART. 690. — Es obligatorio para los defensores de los procesados, interponer los recursos de apelación o nulidad de las sentencias en que se imponga la pena capital, presidio o penitenciaría.

No se considerarán ejecutoriadas esas sentencias, aun cuando los defensores no deduzcan dentro del término los recursos correspondientes.

ART. 691. — En los casos del artículo anterior, transcurrido el término legal, el secretario de la causa la pondrá al despacho, y el juez sin más trámite la elevará con oficio al superior.

Este dará a la causa la tramitación establecida para los casos en que la apelación se interpone libremente.

ART. 692. — En las causas comprendidas en el artículo 690, háyase o no interpuesto en tiempo y forma los recursos, el tribunal dictará el fallo que corresponda, aun cuando no se presente por el defensor el escrito de expresión de agravios.

ART. 693. — Cuando el defensor no hubiere interpuesto el recurso en 1ª instancia, o habiéndolo interpuesto no expresase agravios, tratándose de penas de presidio o penitenciaría la sentencia del superior no podrá modificar la del inferior en un sentido desfavorable al procesado.

Esta disposición no se aplicará, cuando el ministerio fiscal o acusador particular hubiere recurrido de la misma sentencia.

ART 694. — Cuando no estuviere determinado un término, regirá el establecido para casos análogos, debiéndolo fijar el juez previamente.

Art. 690. — Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 35; cód. de Bs. Aires, art. 309; cód. de San Luis, art. 328; sup. cort. nac., t. 41, p. 359; t. 52, p. 126; t. 71, p. 292; t. 74, p. 370; t. 96, p. 91; t. 101, p. 298; t. 114, p. 379; ley 11, tít. 22, part. 3.^a

Art. 693. — Jurisprudencia Argentina, t. 1, ps. 299 y 566; t. 2, ps. 35, 127 y 695; cód. de Bs. Aires, art. 310; cód. de San Luis, art. 331; cód. austriaco, art. 295; sup. cort. nac., t. 36, p. 226; t. 44, p. 275; t. 49, p. 395; t. 52, p. 126; t. 54, ps. 45 y 46; t. 58, p. 208; t. 63, p. 46 y 55; t. 69, p. 144 y 145; t. 73, p. 316; t. 79, p. 309; t. 81, p. 198; t. 96, p. 189; t. 97, p. 76 y 244; t. 98, p. 195; t. 106, p. 441; t. 113, p. 39; t. 114, p. 379; t. 115, p. 312 y 418; t. 116, ps. 146, 162, 206 y 419; t. 117, p. 401.



ART. 695. — Cuando los jueces obligados a pronunciar sentencia interlocutoria o definitiva, hubiesen dejado vencer otro tanto del término que la ley o el superior en su caso señalasen con tal objeto, a pesar de reclamo de parte interesada, incurrirán en una multa de doscientos a seiscientos pesos nacionales oro a favor del reclamante.

La acción para perseguir esta multa será personal y ejecutiva ante el juez civil contra la persona del autor o autores de la demora, sin que contra ella puedan admitirse otras excepciones que la de imposibilidad física, o recargo excesivo de trabajo, acreditado por los libros del juzgado o tribunal a que perteneciese el demandado.

ART. 696. — En materia de procedimiento penal no habrá más nulidades que las establecidas en este código, o las que resultasen de la violación de sus disposiciones expresas, ni serán apelables otros autos que aquellos expresamente declarados tales.

ART. 697. — Cuando no (a) *se observaren los términos y no hubiere multa especialmente determinada para la inobservancia, se aplicará la de cincuenta a cien pesos.*

ART. 698. — *Las multas establecidas por demoras en la sustanciación de las causas, deberán ser solicitadas por los representantes del ministerio fiscal y aplicarse de oficio a falta de otra gestión, por los jueces o tribunales, incurriendo en ella todos los funcionarios que no las hubiesen solicitado o aplicado.*

ART. 699. — *Toda causa deberá terminarse completamente en el término de dos años, no computándose las demoras a que se refiere el artículo 442.*

Art. 695. — Manual, t. 2, ps. 165, 229, 252.

(*) Cuando no se observaren los términos, etc., dice la sanción legislativa. Diario de sesiones citado, p. 856.

LEYES VARIAS
SOBRE ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Y PROCEDIMIENTO PENAL







ART. 1. — Los jueces federales de sección, legalmente impedidos o recusados, serán suplidos por abogados de la matrícula, designados como se establece en el artículo siguiente.

ART. 2. — Todos los años, por el mes de noviembre, o por lo menos, antes de las vacaciones, la suprema corte formará una lista de abogados residentes en el lugar en que tenga su asiento cada juzgado, que no bajen de tres ni excedan de diez, quienes, durante el año siguiente, por turno, suplirán a los expresados jueces en los casos indicados.

ART. 3. — Los nombramientos que se hicieren de fiscales ad hoc, recaerán también en los letrados comprendidos en la enunciada lista, debiendo igualmente ser llamados por turno.

ART. 4. — Los funcionarios suplentes, creados por esta ley, solo pueden ser recusados con los mismos requisitos que los titulares y sus honorarios serán costeados por el tesoro nacional.

ART. 5. — En las informaciones de pobreza que se produzcan en los juzgados nacionales, se observarán las mismas reglas establecidas en cada provincia, determinando quienes deben ser considerados como pobres para litigar.

Acuerdo y resolución de la suprema corte sobre registro de fianzas de excarcelación.

En Buenos Aires, a 14 de marzo de 1889, reunidos en acuerdo extraordinario los señores presidente y ministros de la suprema corte, doctores don Benjamín Victorica, don Uladislao Frías, don Federico Ibarguren, don Calixto S. de la Torre y don Salustiano J. Zavalia, dijeron: Que estando dispuesto por el art. 382 del código de procedimientos en lo criminal que las fianzas de excarcelación deberán anotarse en los juzgados seccionales por los secretarios de los jueces y en la forma que lo determine la suprema corte, oído el señor procurador general, acor-



daban: que la mencionada anotación se haga por los secretarios de los juzgados en un registro especial que deberán llevar con sujeción a lo dispuesto por las leyes generales y, en lo adaptable, por el artículo 9 del reglamento dictado para los juzgados seccionales, inserto en la página 12, tomo 1º, de los fallos del tribunal. Con lo que concluyó el acto, disponiéndose además que se comunicase el presente acuerdo a los jueces de sección y de los territorios nacionales, y que se publicara. — *Benjamín Victorica, Uladislao Frías, Federico Ibarguren, C. S. de la Torre, Salustiano J. Zavalia, José E. Domínguez*, secretario.

Ley n.º 3806, sobre organización del territorio nacional de los Andes, de fecha 13 de enero de 1900; sancionada el 9 de enero de 1900.

ART. 5. — La justicia correccional, la civil y comercial, en causas cuyo valor no pase de mil pesos, será ejercida por jueces de paz nombrados por el poder ejecutivo, en el número que considere necesarios, según la densidad de la población y la subdivisión territorial que se haga. Los nombrados no podrán excusarse de aceptar el cargo.

ART. 6. — El conocimiento de las causas criminales y en las civiles y comerciales de valor mayor de mil pesos, corresponderán al juez de sección de Salta.

ART. 7. — De las resoluciones de los jueces de paz en las causas correccionales y en las comerciales y civiles, de valor mayor de pesos cincuenta, habrá recurso de apelación ante un tribunal formado por el secretario de la gobernación, como presidente, y dos vocales nombrados por el gobernador del territorio. Anualmente nombrará el gobernador dichos dos vocales y dos suplentes, para los casos de impedimento de aquellos, de entre los vecinos de la localidad en que tengan asiento las oficinas de la gobernación. Las resoluciones, en las causas civiles y comerciales de valor de pesos cincuenta o menor, tendrán fuerza de definitivas.

ART. 8. — Los procedimientos ante los jueces de paz, y ante el tribunal de apelaciones, serán verbales y actuados.



Ley n.º 4055, sobre reformas de la justicia federal y creación de cámaras de apelación, de fecha 11 de enero de 1902; sancionada el 8 de enero de 1902.

ART. 1. — El poder judicial de la nación será ejercido:

- 1º Por la corte suprema de justicia.
- 2º Por cuatro cámaras federales de apelación.
- 3º Por los jueces de sección de la capital y de cada una de las provincias.

CAPITULO I

DE LA SUPREMA CORTE

ART. 2. — La suprema corte conocerá originaria y exclusivamente, de las causas mencionadas en el art. 101 de la constitución nacional y art. 1º de la ley núm. 48 de 14 de setiembre de 1863, y en revisión, con arreglo al art. 241 de la ley núm. 50 de la misma fecha.

ART. 3. — La corte suprema, conocerá también en última instancia por apelación y nulidad de las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelación en los siguientes casos:

- 1º De las que fueren dictadas en las demandas contra la nación, a que se refiere la ley núm. 3952 de 6 de octubre de 1900.
 - 2º De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos; por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos y, en general, en todas aquellas causas en que la nación o un recaudador sea parte actora, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos.
- En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la capital o territorios nacionales y no generales para la nación.
- 3º De las que recayesen en todas las causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de



guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles.

4º De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros.

5º De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición, y en las de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio o penitenciaría.

ART. 4. — En los casos que con arreglo a lo establecido en el art. 551 del código de procedimientos en lo criminal proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las cámaras federales, la corte suprema, conocerá de dicho recurso por apelación.

ART. 5. — Conocerá igualmente de los recursos que se promovieran por retardo o denegación de justicia, en los casos a que se refieren los artículos anteriores.

ART. 6. — La corte suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras federales de apelación; por las cámaras de apelación de la capital; por los tribunales superiores de provincia y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos por el art. 14 de la ley núm. 48 de 14 de setiembre de 1863.

ART. 7. — Si procediese el recurso del artículo anterior, y la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuese revocado por la suprema corte.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que la hubiese dictado y quedará de hecho cancelada, si la sentencia recurrida fuese confirmada por la suprema corte. El fisco nacional estará exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

ART. 8. — En los casos en que la suprema corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes e improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre las causas, que se mandará



agregar a los autos y sin más trámite quedará la causa conclusa para definitiva.

ART. 9. — La suprema corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten:

c) Entre un juez letrado de territorios nacionales y un juez juez o tribunal superior local de la capital, o juez y tribunal superior de provincia.

b) Entre un juez de sección y un juez o tribunal superior local de la capital, o un juez o tribunal superior de provincia.

c) Entre un juez letrado de territorios nacionales y un juez o tribunal superior local de la capital, o un juez o tribunal superior de provincia.

d) Entre un juez o tribunal superior local de la capital y un juez o tribunal superior de provincia; entre los tribunales superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias; y entre un tribunal militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional o provincial.

ART. 10. — La suprema corte ejercerá superintendencia sobre las cámaras federales, jueces de sección, jueces letrados de territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

ART. 11. — La superintendencia de la suprema corte comprende:

- 1º Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción;
- 2º Exigir que se le remita anualmente o en cualquier tiempo, una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas;
- 3º Acordar o denegar licencia a los miembros de las cámaras federales, jueces de sección, jueces letrados de los territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, para ausentarse del lugar en que desempeñan sus funciones, por más de tres días, o dejar de asistir al tribunal, juzgado u oficina por más de una semana;



- 4º Imponer a los mismos penas disciplinarias por falta a la consideración y respeto debidos a la corte o a alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, por falta o negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos o multas que no excedan de doscientos pesos.

En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta, o negligencia fuese grave, la corte suprema la pondrá en conocimiento de la cámara de diputados de la nación, cuando fuesen cometidas por miembros de las cámaras federales de apelación, por los jueces de sección y jueces letrados de los territorios nacionales; y cuando ellas fuesen cometidas por los procuradores fiscales, defensores de menores, pobres y ausentes, los suspenderá, solicitando enseguida su exoneración del poder ejecutivo.

CAPITULO II

DE LAS CAMARAS FEDERALES DE APELACION

ART. 12. — Habrá cuatro cámaras federales de apelación que serán compuestas cada una de tres miembros, y tendrán su asiento la primera en la capital de la república, la segunda en la ciudad de La Plata, la tercera en la ciudad del Paraná y la cuarta en la ciudad de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circunscripción la jurisdicción apelada que les confiere la presente ley.

La primera circunscripción comprende la capital de la república, las provincias de San Luis, de Mendoza y de San Juan.

La segunda circunscripción comprende la provincia de Buenos Aires, y los territorios de La Pampa, del Neuquen, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz, y de Tierra del Fuego.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos, Santa Fé y Corrientes y los territorios del Chaco, Formosa y Misiones.

La cuarta circunscripción comprende las demás provincias y demás territorios que no se incluyen en las otras tres.



El ministerio público será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de procurador fiscal de las cámaras federales de apelación en la capital y ciudad de La Plata. En las cámaras del Paraná y Córdoba, dicho cargo y el de procurador fiscal ante el juzgado de sección, será desempeñado por un solo funcionario.

ART. 13.—Las condiciones para ser miembros de las cámaras federales de apelación y procurador fiscal de las mismas, y para su nombramiento, serán las que se requieren para ser miembros de la suprema corte.

ART. 14. — No podrán ser simultáneamente jueces de la misma cámara, los parientes o afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará su puesto.

ART. 15. —Cada cámara nombrará anualmente su presidente, y actuará con el secretario y demás empleados que le designe la suprema corte de conformidad con la ley de presupuesto.

ART. 16. — Las cámaras federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia, en todos los casos enumerados en el art. 3º de la presente ley.

ART. 17. — La cámaras federales conocerán en grado de apelación y en última instancia:

- 1º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de sección en las causas de su competencia, que no fuesen de las enumeradas en el art. 3º de la presente ley, y siempre que el valor disputado, en las causas civiles y comerciales, exceda de quinientos pesos.
- 2º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces letrados de los territorios nacionales, aunque fuesen dictados en causas criminales del fuero común.
- 3º De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los jueces de sección o de los letrados de los territorios nacionales.
- 4º De las consultas que elevasen los jueces letrados de los territorios nacionales, en los casos del art. 42 de la ley de organización de dichos territorios.



ART. 18. — Contra las sentencias dictadas por las cámaras federales en los casos del artículo anterior, solo se concederán los recursos autorizados por los artículos 4º y 6º de la presente ley.

ART. 19. — Las cámaras federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de los territorios nacionales y entre éstos y aquéllos.

ART. 20. — Las cámaras federales observarán en materia civil y comercial, los procedimientos establecidos para la suprema corte, en la ley núm. 50 de 14 de septiembre de 1863 y leyes especiales, y en materia penal el código de procedimientos criminal de la nación.

ART. 21. — En caso de recusación o impedimento de alguno de los miembros de las cámaras de la capital, el tribunal se integrará insaculando a la suerte el número de conjuces que sea necesario, de la lista a que se refiere el art. 23 de la ley núm. 50 de 14 de septiembre de 1863.

Las cámaras federales de La Plata, Córdoba y Paraná, se integrarán en la misma forma, de la lista de conjuces que se insaculare anualmente para suplir los jueces de sección respectivos, con arreglo al art. 2º de la ley de 24 de septiembre de 1878.

ART. 22. — Las cámaras federales dictarán su reglamento interno y lo someterán a la aprobación de la suprema corte.

ART. 23. — Sin perjuicio de la superintendencia de la suprema corte, las cámaras federales de apelación podrán corregir a sus secretarios y demás empleados subalternos con apercibimientos, suspensión sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días o multas hasta cien pesos por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia o falta a la consideración y respeto debidos al tribunal o a algunos de sus vocales.

Tendrán también las facultades de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos y las audiencias de las causas y las que se cometieren contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.



ART. 24. — Los expedientes actualmente en trámite ante la suprema corte, que sean del conocimiento de las cámaras federales de apelación, según las disposiciones de la presente ley, se distribuirán para su resolución entre las distintas cámaras creadas y de acuerdo con la jurisdicción del tribunal de origen, una vez terminado su trámite. Las causas especificadas en el art. 16 de la presente ley, que a la fecha de su promulgación se encontrasen pendientes del fallo de la suprema corte, serán decididas por ésta.

ART. 25. — En la primera instalación de las cámaras federales, los jueces nombrados para la que tenga su asiento en la capital de la república, prestarán juramento ante la suprema corte, de desempeñar fielmente su cargo, de conformidad a los que prescriben la constitución y las leyes de la nación; los nombrados para las que tengan su asiento en La Plata, Córdoba y Paraná, lo prestarán ante los gobernadores de provincia. En lo sucesivo prestarán juramento ante las mismas cámaras. Los secretarios jurarán el fiel desempeño de sus funciones ante los mismos tribunales.

ART. 26. — Los miembros de la cámara federal de la capital, y su procurador fiscal gozarán del mismo sueldo asignado a los miembros de las cámaras de apelación de la capital, y tendrán un secretario con setecientos cincuenta pesos; un ujier con doscientos; un oficial mayor con doscientos; un oficial primero con ciento veinte; tres escribientes con cien pesos cada uno; gastos de oficina, alquiler de casa, quinientos; tres ordenanzas a cincuenta pesos cada uno; un auxiliar para el fiscal con cien pesos; gastos de oficina para el mismo, cincuenta; un ordenanza para el mismo, cincuenta pesos: todo al mes.

Los miembros de la cámara federal de La Plata y su procurador fiscal, tendrán mensualmente mil doscientos pesos cada uno y un secretario con quinientos; un ujier con ciento ochenta; un oficial primero con ciento veinte; tres escribientes con ochenta cada uno; gastos de oficina y alquiler de casa, quinientos; tres ordenanzas con cincuenta cada uno; un auxiliar del fiscal con ochenta; gastos de oficina para el mismo, cincuenta; un ordenanza para el mismo, cincuenta.

Los miembros de las cámaras federales de Córdoba y Paraná, gozarán del sueldo mensual de ochocientos pesos y tendrá



cada cámara un secretario con cuatrocientos pesos; un ujier con ciento ochenta pesos; tres escribientes con ochenta pesos; gastos de oficina y alquiler de casa, trescientos pesos; dos ordenanzas a cuarenta pesos cada uno; un auxiliar del fiscal, ochenta pesos; ordenanza para el mismo, cuarenta pesos.

Estos sueldos y asignaciones regirán mientras se provea a ellos en la ley de presupuesto.

CAPITULO III

DE LOS JUECES DE SECCION

ART. 27. — La jurisdicción y competencia de los jueces de sección, será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales de 14 de septiembre de 1863, y demás leyes especiales dictadas por el honorable congreso nacional.

ART. 28. — Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley.

ART. 29. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Ley n.º 4162, sobre integración de los tribunales federales, en los casos de recusación o impedimento de fecha 8 de enero de 1903; sancionada el 29 de diciembre de 1902.

ART. 1. — En los casos de recusación, impedimento, vacancia, o licencia de algunos de los ministros de la suprema corte, se integrará este tribunal, hasta completar el número legal para fallar, en el orden siguiente:

- 1º Con el procurador general;
- 2º Con los miembros de la cámara federal de apelación de la capital, y
- 3º Con los conjuces de la lista de 25 abogados, que reúnan las condiciones para ser miembros de la misma corte y que ésta formará por insaculación en el mes de diciembre de cada año.

ART. 2. — En lo sucesivo, la integración de las cámaras federales, en los casos del art. 1º, se hará:

- 1º Con el fiscal de la cámara;



- 2º Con el juez o jueces de la sección donde funciona el tribunal;
- 3º En la de la capital, como se establece en el inciso 3º del artículo 1º.
- 4º En las cámaras de La Plata, Córdoba y Paraná, con los conjuces que en diciembre de cada año insaculará la corte suprema para el siguiente, en número de diez, de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros titulares, que las mismas cámaras le pasarán al efecto en el mes de noviembre.

ART. 3. —Para la suplencia de los jueces federales y de territorios nacionales en los casos del art. 1º, serán llamados en este orden:

- 1º El fiscal letrado;
- 2º El defensor letrado de pobres, menores e incapaces, y
- 3º El conjuce correspondiente de la lista anual que forma la suprema corte para los jueces federales y para los territorios nacionales, el juez de sección o territorio más próximo, como lo prescribe el art. 1º, inciso 4º de la ley núm. 3575, de 8 de octubre de 1897.

ART. 4. — En las secciones que fueran servidas por más de un juez, éstos se reemplazarán recíprocamente y en su defecto, como lo determina el artículo anterior.

ART. 5. — En los casos del artículo 1º, el procurador general de la nación será substituido en primer término por el fiscal de la cámara federal de apelación de la capital.

ART. 6. — Los fiscales de las cámaras serán suplidos en los mismos casos:

- 1º Por el procurador fiscal de de la sección, donde funciona el tribunal.
- 2º Por el defensor letrado de menores e incapaces de la misma, y
- 3º Con los fiscales ad hoc, que serán nombrados de las listas a que se refiere el artículo 2º, incisos 3º y 4º de esta ley.

ART. 7. — Los fiscales y defensores letrados de menores, pobres e incapaces, se reemplazarán recíprocamente, reservándose para los casos de impedimento de los suplentes, la disig-



nación de funcionarios ad hoc, que se hará por los jueces federales de la lista prescripta por la ley núm. 935, de 24 de septiembre de 1878, y por los jueces de los territorios nacionales, en personas que tengan título de abogado, y en defecto de ellas, en personas que sean idóneas, salvo lo dispuesto en la ley núm. 3367, de 8 de julio de 1896.

ART. 8. — Los secretarios de las cámaras federales, mientras sea uno solo por cada tribunal, serán suplidos preferentemente por los secretarios de los juzgados federales del lugar donde funcione aquella.

En los juzgados de sección se substituirán entre sí los del mismo juzgado, y en caso de impedimento de ambos, el que se halle en turno de otro juzgado.

En la localidad donde no haya sino un juzgado con un solo secretario, éste será suplido por el pro-secretario, o por uno ad hoc designado por el mismo juez; no pudiendo, en ningún caso, gozar el suplente de mayor emolumento que correspondería al titular.

ART. 9. — Los funcionarios suplentes a que esta ley se refiere serán llamados por su orden o en el subsiguiente si se hallaren impedidos, y cuando fueran dos o más los indicados en la misma línea, la designación se hará por el turno que establezca la suprema corte.

ART. 10. — En los casos a que se refiere el art. 460 del código de procedimientos en lo criminal, los jueces federales de la capital de la república y de La Plata, pasarán el proceso al fiscal de la cámara respectiva, quien ejercerá las funciones que el mismo artículo atribuye al procurador general en la primera parte, y al fiscal especial en la última.

ART. 11. — Además de las atribuciones que le confiere la ley número 4055, las cámaras federales de apelación, tendrá las siguientes:

Nombrar y remover sus secretarios y demás empleados subalternos, y acordar o denegar a los mismos, licencia para ausentarse en los mismos casos y por el mismo término que establece el artículo 11, inciso 3º de la ley núm. 4055.

ART. 12. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

ART. 13. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Ley n.º 4578, sobre reforma a la ley núm. 4161, sobre elecciones, de fecha 28 de julio de 1905; sancionada el 24 de julio de 1905.

ART. 9. — Todos los juicios motivados por infracciones a la ley electoral y a la presente, serán substanciados ante los juzgados federales, con intervención del agente fiscal.

Cuando recaigan contra funcionarios que por la constitución nacional o por las constituciones provinciales gocen de inmunidades para estar en juicio, este no podrá llevarse adelante, sin que previamente se hayan levantado las inmunidades, por quien corresponda.

ART. 10. — Salvo las reglas prescriptas para algunos juicios especiales en la ley electoral, se observarán las siguientes:

- 1º Presentada la acusación, el tribunal citará a juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los diez días después de la citación.
- 2º Si resultase necesaria la prueba, se podrá fijar un término como base, de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias conducentes a producirla.
- 3º Los jueces, a petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda la remisión del documento que se denuncie como falsificado o adulterado, a los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento o documentos pedidos, se citarán inmediatamente a nueva audiencia, en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa y levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto a las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del comparendo, previa vista del agente fiscal.
- 4º El retardo de justicia en estos casos será penado con multa de 200 a 500 pesos.
- 5º El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista y la sentencia que se diese producirá ejecutoria, aunque se dicte en rebeldía del acusado.





ART. 11. — Toda sentencia definitiva será apelable:

- 1º Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de las juntas electorales de distrito.
- 2º Para ante las cámaras federales de apelación, de los fallos de los jueces de sección, salvo los recursos establecidos por el art. 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863.

Ley n.º 7029, de seguridad social, de fecha 30 de junio de 1910; sancionada el 28 de junio de 1910.

ART. 32. — Para la aplicación de las penas se procederá en juicios sumarios sirviendo de cabeza de proceso el informe policial, debiendo permanecer detenido el procesado mientras dure el juicio.

Son competentes para conocer y aplicar las penas que por esta ley se establecen, los jueces federales, no debiendo durar el proceso, que será verbal y actuado, más de diez días. (1).

Ley n.º 7055. — Tribunales de la capital, creación de nuevas cámaras, — de fecha 17 de agosto de 1910; sancionada el 16 de agosto de 1910.

ART. 1. — Habrá dos cámaras de apelaciones de la capital en lo civil, cada una con cinco miembros, un fiscal y demás personal que fija la ley de presupuesto. La cámara civil existente, se denominará primera, y la que se crea, segunda. Ambas conocerán en última instancia en los casos mencionados en el art. 80 de la ley número 1893 de organización de los tribunales de la capital y en los recursos contra las resoluciones arbitrales.

ART. 2. — La superintendencia general y demás funciones encomendadas por la ley número 1893, a la cámara de lo civil, serán ejercidas por las cámaras primera y segunda, conjuntamente, las que se reunirán a ese efecto, sin perjuicio de la superintendencia directa que cada cámara tendrá sobre sus empleados con facultad de nombrarlos, suspenderlos o exonerarlos y conceder licencia a sus vocales y personal. Cada cámara tendrá además las facultades disciplinarias de dictar apercibimientos o aplicar multas que no excedan de doscientos pesos a los jueces inferiores y demás funcionarios, por falta a su consideración o deco-

(1) La competencia corresponde a los jueces ordinarios, a pesar de lo que establece la ley. Véase, *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 1, nota 1.



ro o por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, comprobada en el expediente en que cada cámara conozca. Las tareas encomendadas a la cámara actual o a su presidente por las leyes núms. 44, 2860, 4161, y 5098 serán desempeñadas por ambas cámaras turnándose anualmente a este efecto en la forma en que ellas mismas los determinen y el trabajo se distribuirá por turnos mensuales. Los asuntos actualmente en apelación se repartirán entre las dos cámaras, debiendo esta repartición, así como la determinación de los turnos mensuales, ser resueltos en reunión conjunta de las dos cámaras.

En los asuntos que se encuentren en primera instancia y en los que se inicien con posterioridad a la constitución de la nueva cámara, aquella a la cual por el turno corresponde conocer en el primer recurso que se conceda, continuará conociendo en todos los recursos ulteriores.

ART. 3. — La actual cámara de apelaciones de la capital, en lo criminal, correccional y comercial queda convertida en cámara de apelaciones en lo criminal y correccional y se crea una cámara de cinco miembros para los asuntos comerciales. Cada una de estas cámaras tendrá un fiscal y demás personal que fija la ley de presupuesto. La cámara en lo criminal y correccional y la cámara en lo comercial, tendrán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, todas las atribuciones que hasta la sanción de la presente ley correspondían a la cámara en lo criminal, correccional y comercial.

ART. 4.—Desde la sanción de la presente ley, la cámara de apelaciones que funciona en la capital federal en virtud de la ley núm. 4055 se compondrá de cinco miembros y sus resoluciones causarán ejecutoria en materia criminal.

ART. 5.—En caso de impedimento o recusación de alguno de los miembros de una de las cámaras en lo civil, será reemplazado por uno de la otra cámara en lo civil; si todos los miembros de ésta estuvieran igualmente impedidos, su reemplazo se hará también por sorteo con los miembros de la cámara comercial y de lo criminal y correccional sucesivamente. En caso de impedimento o recusación de miembro de la cámara de lo comercial, serán reemplazados, siguiendo las mismas reglas, por miembros de las cámaras en lo civil y en lo criminal y correccional, sucesiva-



mente. Si el impedimento o recusación afectara a miembros de la cámara en lo criminal y correccional, el reemplazo se hará comenzando con los miembros de la cámara en lo comercial y siguiendo por los de las cámaras primera y segunda en lo civil.

ART. 6. — En caso de producirse contienda de competencia entre dos cámaras, el presidente de la que primero hubiese conocido, las reunirá en tribunal y la decidirán por mayoría de votos. Si hubiese empate se dará intervención a un miembro de las otras cámaras elegido a la suerte.

Igual procedimiento se observará en los casos en que al celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva, cualquiera de las cámaras entendiera que en cuanto al punto en debate, es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.

Las contiendas de competencia que se susciten entre los jueces de diversa jurisdicción, serán resueltas en última instancia por la cámara de que dependa el juez, que primero hubiere conocido. Si se tratara de jueces en lo civil entenderá la cámara a la que corresponda el turno mensual.

ART. 7. — En la primera instalación de las cámaras que se crean por esta ley, los nombrados prestarán juramento ante la suprema corte de justicia, de desempeñar sus funciones bien y fielmente y en conformidad a lo que prescriben la constitución y leyes de la nación. En lo sucesivo jurarán ante la cámara para que fuesen designados.

ART. 8. — En la capital habrá diez jueces en lo civil, cuatro en lo comercial, cuatro en lo criminal, cuatro en lo correccional y diez jueces de instrucción criminal. Los juzgados que se crean tendrán el personal y asignaciones que fija la ley de presupuesto para los demás juzgados existentes.

ART. 9. — Para ser jueces de primera instancia de la administración de justicia de la capital, se requieren las mismas condiciones establecidas para ser jueces de sección.

ART. 10. — Los actuales miembros de la cámara de lo criminal, correccional y comercial podrán optar entre continuar en la cámara de que forman parte o ingresar a la que se crea por la presente ley.



ART. 11. — Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y que no estuvieren incluidos en la de presupuesto se pagarán, durante el corriente año, de rentas generales con imputación a la presente..

ART. 12. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Ley n.º 8918, sobre reforma de constitución y organización de la excelentísima cámara de apelación en lo criminal, de fecha 12 de septiembre de 1912; sancionada el 3 de septiembre de 1912.

ART. 1. — La cámara de apelaciones en lo criminal y correccional, se compondrá de siete miembros.

ART. 2. — Actuará con todos sus miembros en las causas por delitos a que corresponda pena de muerte y con cinco miembros (el presidente y cuatro vocales, sorteados en cada caso de entre los que forman el tribunal), para la resolución de las causas por delitos a que corresponda pena de presidio o de penitenciaría.

Se dividirá en tres salas, (compuestas cada una del presidente y dos vocales) para la resolución de las demás causas.

ART. 3. — Las salas, que tendrán un presidente común, se turnarán en la forma que determine el reglamento del tribunal.

ART. 4. — Deróganse las disposiciones de la ley orgánica de los tribunales y las del código de procedimientos en lo criminal, en cuanto se opongan a la presente.

ART. 5. — El gasto que demande la ejecución de esta ley se hará de rentas generales, imputándose a la misma mientras no se incluya en la de presupuesto.

ART. 6. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Ley n.º 9658, sobre procedimiento para la aplicación de las multas establecidas por las leyes reglamentarias del trabajo, núms. 4661, 5291 y 8999, de fecha 28 de agosto de 1915; sancionada el 20 de agosto de 1915.

ART. 1. — Las multas establecidas por las leyes números 4661, 5291, y 8999, serán aplicadas por los jueces en lo correccional de la capital y letrados de los territorios nacionales, en la forma que determina los artículos siguientes:

ART. 2. — Cada vez que alguno de los empleados dependientes del departamento nacional del trabajo designados para con-



trolar el cumplimiento de las mencionadas leyes, compruebe alguna infracción punible, procederá a levantar acta relacionada.

ART. 3. — El acta referida servirá de base a un juicio especial, verbal y actuado en el que desempeñará papel de actor el departamento nacional de trabajo, representado por cualquiera de los funcionarios que el presidente designare al efecto.

ART. 4. — Presentada la denuncia, de la cual se dará copia al acusado, el juez decretará para dentro del tercer día una audiencia en la cual podrá el acusado deducir las excepciones pertinentes y la prueba de ellas que deberá ser recibida dentro de los tres días subsiguientes.

ART. 5. — Las únicas excepciones admisibles son:

- a) Falta de identidad del infractor.
- b) Falsedad del hecho imputado.
- c) Falta de autenticidad en la denuncia.

ART. 6. — La sentencia deberá ser pronunciada dentro de las veinticuatro horas siguientes de fenecido el término para presentar la prueba. El fallo será apelable por el acusado previo depósito de la multa a la cual hubiese sido condenado.

ART. 7. — La sentencia se hará efectiva dentro de las veinticuatro horas de ejecutoriada la resolución judicial. En caso contrario, el juez impartirá las órdenes pertinentes a la autoridad policial a los efectos de lo dispuesto en los artículos 49 y 79 del código penal, en los casos en que proceda el arresto.

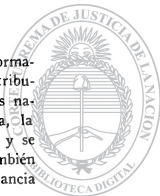
ART. 8. — Deróganse las disposiciones legales anteriormente mencionadas que se opongan a la presente.

ART. 9. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Ley n.º 10.903, sobre Patronato de menores, de fecha 21 de octubre de 1919; sancionada el 21 de septiembre de 1919.

... ..

ART. 14. — Los jueces de la jurisdicción criminal y correccional en la capital de la república y en las provincias y territorios nacionales, ante quienes comparezca un menor de diez y ocho años acusado de un delito o como víctima de un delito, podrán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente abandonado, o en peligro moral, entregándolo a una persona honesta, pariente o no, o a un estable-



cimiento de beneficencia privado o público o a un reformatorio público de menores. A ese efecto no regirán en los tribunales federales, ordinarios de la capital y de los territorios nacionales, las disposiciones legales sobre prisión preventiva, la que solo será decretada cuando el juez lo juzgue necesario y se cumplirá dónde y como él mismo lo indique. Podrán también dejarlos a sus padres, tutores o guardadores bajo la vigilancia del tribunal.

La resolución judicial será susceptible de los recursos de revocación y apelación en las mismas condiciones prescriptas en el artículo 19.

ART. 15. — Los mismos jueces, cuando sobresean provisoria o definitivamente respecto a un menor de 18 años, o cuando lo absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de 18 años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se hallare material o moralmente abandonado, o en peligro moral y en la misma forma establecida en el artículo anterior.

ART. 16. — Los jueces correccionales en la justicia nacional de la capital y en los territorios nacionales, entenderán en primera y única instancia, en todos los casos de faltas y contravenciones imputadas a menores de 18 años y aplicarán las disposiciones de los artículos anteriores.

ART. 17. — Todo menor de que hayan dispuesto los jueces indicados en los tres artículos anteriores, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria.

ART. 18. — Los mismos jueces en los procesos a que se refiere el artículo 14 podrán imponer en cada caso a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que no importen delitos del derecho penal, multas hasta la suma de 200 pesos o arresto hasta un mes, o ambas penas a la vez.

Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieran seguridades de reforma, quedando prescriptas en el plazo de dos años si no incurrieren en hechos de la misma naturaleza.



INDICE

PROLOGO

Antecedentes legislativos

1.º Decreto del P. E. encargando la redacción de un proyecto de código de procedimiento criminal.	9
2.º Ampliación del decreto anterior.	10
3.º Resolución comunicándolo al doctor Obarrio.	11
4.º Nota del doctor Obarrio elevando el proyecto.	11
5.º Decreto del P. E. relativo a la nota anterior.	12
6.º Nota del doctor Obarrio explicando las bases del proyecto.	12
7.º Resolución referente a la nota anterior.	40
8.º Decreto del P. E. nombrando una comisión encargada de revisar el proyecto de código.	40
9.º Nota elevada por la comisión anteriormente nombrada.	41
10. Decreto del P. E. ordenando elevar al congreso el proyecto de código revisado.	47
11. Nota elevando al congreso el proyecto de código revisado.	47
12. Proyecto de ley poniendo en vigor el proyecto de código.	49
13. Despacho de la comisión de códigos de la cámara de diputados.	49
14. Discusión en el congreso.	87
15. Ley núm. 2372 sancionando el código de procedimiento en lo criminal.	87
16. Decreto del P. E. sobre la edición oficial.	88



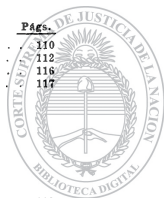
CODIGO DE PROCEDIMIENTO (1) EN MATERIA PENAL

LIBRO PRIMERO

Título I.	89
Cap. I. Disposiciones generales.	89
Cap. II. De las acciones que nacen de los delitos.	92
Título II. De la jurisdicción.	93
Título III. De las cuestiones de competencia.	99
Título IV. De las recusaciones.	103
Cap. I. Disposiciones generales.	103
Cap. II. De la recusación de los miembros de la Suprema Corte.	106
Cap. III. De la recusación de los miembros de las Cámaras de Apelaciones.	107
Cap. IV. De la recusación de los Jueces de Sección.	107
Cap. V. De la recusación de los Jueces del Crimen y demás inferiores de la Capital.	108
Cap. VI. De la recusación de los Secretarios y Ujieres.	110

(1)Procedimientos, dice con notoria impropiedad la edición oficial.

	Págs.
- Título V. Del Ministerio Fiscal.	110
- Título VI. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos.	112
- Título VII. De las costas procesales.	116
- Título VIII. De la rebeldía o contumacia del procesado.	117



LIBRO SEGUNDO

Del sumario

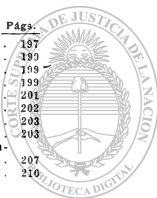
- Título I. De la denuncia y la querella.	119
- Cap. I. De la denuncia.	119
- Cap. II. De la querella.	122
- Título II. Objetos y carácter del sumario, autoridades que pueden instruirlo o prevenir su instrucción.	125
- Título III. De la instrucción.	130
- Título IV. Del cuerpo del delito.	132
- Título V. De la declaración indagatoria.	139
- Título VI. De la incomunicación de los procesados.	143
- Título VII. De las circunstancias personales del procesado.	144
- Título VIII. De la identidad del delincuente.	145
- Título IX. De los testigos.	147
- Cap. I. Reglas generales.	147
- Cap. II. Citación de los testigos.	151
- Cap. III. Del examen de los testigos.	152
- Título X. Del mérito de la prueba de testigos.	156
- Título XI. De los careos.	157
- Título XII. De la confesión.	158
- Título XIII. Del examen pericial.	161
- Título XIV. De la prueba instrumental.	166
- Título XV. De las presunciones o indicios.	167
- Título XVI. De la interceptación de la correspondencia.	169
- Título XVII. De la detención y de la prisión preventiva.	170
- Título XVIII. De la libertad bajo fianza.	173
- Título XIX. De las visitas domiciliarias o pesquisas en lugares cerrados.	178
- Título XX. De los embargos.	181
- Título XXI. De la responsabilidad de terceras personas.	183
- Título XXII. De la conclusión del sumario y del sobreseimiento.	184
- Cap. I. De la conclusión del sumario.	184
- Cap. II. Del sobreseimiento.	185
- Título XXIII. De los artículos de previo y especial pronunciamiento.	187

LIBRO TERCERO

Del plenario

- Título I. De la elevación de la causa a plenario, discusión y prueba.	190
- Cap. I. De la elevación de la causa a plenario y su discusión.	190
- Cap. II. De la prueba.	192
- Título II. De la ratificación de las declaraciones de los testigos del sumario.	195
- Título III. De las tachas.	196
- Título IV. De la conclusión de la causa para definitiva.	196

— Título V. De la sentencia	187
— Título VI. De los recursos en general	189
— Cap. I. Del recurso de reposición	189
— Cap. II. Del recurso de apelación	199
— Cap. III. Del recurso de nulidad	201
— Cap. IV. Del recurso de queja	202
— Título VII.	203
— Cap. I. Del modo de proceder en segunda instancia	203
— Cap. II. Recursos contra las providencias y fallos de la Corte Suprema y de la Cámara de Apelaciones	207
— Título VIII. De la ejecución de las sentencias	210



LIBRO CUARTO

De los juicios correccionales y sobre faltas y de algunos procedimientos especiales

SECCION PRIMERA

De los juicios correccionales y sobre faltas

— Título I. De los juicios correccionales	212
— Cap. I. Procedimiento en materia correccional	212
— Título II. Del procedimiento en los juicios sobre faltas	214

SECCION SEGUNDA

De los juicios especiales

— Título I. Procedimientos en los delitos de calumnia e injuria	215
— Título II. De la falsificación de documentos públicos y privados	216
— Título III. Del procedimiento en caso de fuga de presos	219
— Título IV. Del modo de proceder en los casos de detención, arresto o prisión ilegal de las personas	220
— Título V. Del procedimiento en los casos de extradición de criminales	228
— Cap. I. Del procedimiento para la extradición de criminales con países extranjeros	228
— Cap. II. De la extradición de los reos condenados o procesados por los Jueces de Sección o de los Tribunales de la Capital, asilados en otras Provincias	233
— Título VI. De las prisiones y de las visitas a los presos	234
— Título Final. Disposiciones complementarias	237

LEYES NUEVAS

SOBRE ORGANIZACION JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO PENAL

Ley N.° 935, sobre recusación o impedimento de los jueces federales de fecha 24 de septiembre de 1878; sancionada el 19 de septiembre de 1878.. . . .	241
Acuerdo y resolución de la suprema corte sobre registro de fianzas de excarcelación.. . . .	241
Ley N.° 3906, sobre organización del territorio nacional de los Andes, de fecha 13 de enero de 1900; sancionada el 9 de enero de 1900.. . . .	242
Ley N.° 4055, sobre reformas de la justicia federal y creación de cámaras de apelación, de fecha 11 de enero de 1902; sancionada el 8 de enero de 1902.. . . .	243
Ley N.° 4162, sobre integración de los tribunales federales, en los casos de recusación o impedimento de fecha 8 de enero de 1903; sancionada el 29 de diciembre de 1902.. . . .	250
Ley N.° 4578, sobre reforma a la ley núm. 4161, sobre elecciones, de fecha 28 de julio de 1905; sancionada el 24 de julio de 1905	253
Ley N.° 7029, de seguridad social, de fecha 30 de junio de 1910; sancionada el 28 de junio de 1910.. . . .	254
Ley N.° 7055. — Tribunales de la capital, creación de nuevas cámaras, — de fecha 17 de agosto de 1910; sancionada el 16 de agosto de 1910.. . . .	254
Ley N.° 8918, sobre reforma de constitución y organización de la excelentísima cámara de apelación en lo criminal, de fecha 12 de septiembre de 1912; sancionada el 3 de septiembre de 1912.. . . .	257
Ley N.° 9658, sobre procedimiento para la aplicación de las multas establecidas por las leyes reglamentarias del trabajo, números 4661, 5291 y 8999, de fecha 28 de agosto de 1915; sancionada el 20 de agosto de 1915.. . . .	257
Ley N.° 10.903, sobre Patronato de menores, de fecha 21 de octubre de 1919; sancionada el 21 de septiembre de 1919.. . . .	258

